CARLOS AGUIRRE

DONDE SE AMANSAN LOS GUAPOS

LAS CÁRCELES DE LIMA
1850-1935



FONDO EDITORIAL
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Para Regina, mi madre, por sus 90 años, con amor y gratitud.

Penitenciaría de Lima
de calicanto y ladrillo
donde se amansan los guapos
y lloran los afligidos.

Vals «Penitenciaría de Lima», de
autor desconocido.

Agradecimientos Varias instituciones respaldaron la investigación y el proceso de redacción que culminaron en este libro. El Programa MacArthur, el Departamento de Historia y la Escuela de Graduados de la Universidad de Minnesota; la Harry Frank Guggenheim Foundation; la American Philosophical Society; la John Simon Guggenheim Foundation; y el College of Arts and Sciences y el Departamento de Historia de la Universidad de Oregón. Vaya mi agradecimiento a todas ellas.

Mis investigaciones se vieron facilitadas por la capacidad y la diligencia del personal de las siguientes bibliotecas y archivos en Lima: Archivo General de la Nación; Biblioteca Nacional, Instituto Riva-Agüero; Biblioteca Benvenutto Murrieta; Archivo Histórico; Hemeroteca y Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos; Biblioteca del Congreso; y la Biblioteca Félix Denegri Luna. Quisiera agradecer, en particular, a Ada Arrieta, Yolanda Auqui, Ruth Borja, el recordado Félix Denegri Luna, Carlos Gálvez y Carmen Vivanco, por haber facilitado mi acceso a diversos materiales archivísticos y bibliográficos. Extiendo un agradecimiento especial a Luis Jochamowitz, quien me confirmó, en una conversación que él probablemente ha olvidado hace tiempo, que el archivo de la Dirección General de Prisiones, que yo había intentado infructuosamente localizar durante semanas, estaba efectivamente en el sótano del Archivo General de la Nación.

Numerosos amigos y colegas me ayudaron con este libro a lo largo de los años. En la Universidad de Minnesota, Stuart Schwartz, Allen Isaacman y Robert McCaa fueron excelentes mentores y amigos e hicieron que mi familia y yo nos sintiéramos como en casa en Minneapolis-St. Paul. Debo un agradecimiento especial a Stuart Schwartz, cuyo excepcional talento como historiador solamente es igualado por su enorme calor humano y generosidad. Él y Mari Jordan, su esposa, nos ofrecieron su amistad y ayuda en todo momento y nos invitaron a compartir las mejores cenas de Acción de Gracias que hemos tenido. Tuve la fortuna de compartir talleres, lecturas, discusiones y picnics con un grupo notable de estudiantes internacionales en el Programa MacArthur, en particular José Artiles, Arlindo Chilundo, Ana Margarita Gómez y Maanda Mulaudzi. Bob y Wanda McCaa, Luis González y Arlene Díaz, Kris y Pamela Lane, José y Teresa Cerna, Fernando y Ana María Méndez, Jessy y Sandra Lillygreen, Ed Letterman, David y Consuelo Romo, y Rafael Arias y Annie Achio merecen asimismo mi gratitud por su amistad y generosidad.

En Lima, muchos amigos y colegas me ayudaron durante años a llevar a cabo este proyecto. Deseo agradecer en especial a Cristóbal Aljovín, Gerardo Álvarez, Tito Bracamonte, Gustavo Buntinx, Carlos Contreras, Jesús Cosamalón, Marcos Cueto, Marisol de la Cadena, Javier Flores Espinoza, Pedro Guibovich, Iván Hinojosa, Walter Huamaní, Nils Jacobsen, Natalia Majluf, Carmen McEvoy, Zoila Mendoza, Fanni Muñoz, Aldo Panfichi, Scarlett O'Phelan, David Parker, Víctor Peralta, Felipe Portocarrero, Gabriel Ramón, Carlos Ramos, Tito Rodríguez Pastor, Augusto Ruiz Zevallos, Robert Sánchez, Carlos Villanueva, Charles Walker y muchos más, por su apoyo, críticas, conversaciones, referencias bibliográficas, fuentes de archivo, invitaciones a presentar trabajos y camaradería. Entre quienes ya no están entre nosotros, recuerdo con especial cariño a Maruja Martínez y a Franklin Pease.

En la Universidad de Oregón recibí el estímulo y el apoyo de mis colegas en el Departamento de Historia, en especial de Bob Haskett, Stephanie Wood, Jim Mohr, Jeff Hanes y Daniel Pope. Varios amigos y colegas comentaron versiones anteriores de este libro en diversas conferencias. Deseo agradecer particularmente a Ricardo Salvatore, Gil Joseph, Pablo Piccato y Robert Buffington, de quienes aprendí mucho más de lo que refleja esta modesta contribución. A Ricardo Salvatore, en particular, agradezco los muchos años de colaboración y amistad. Agradezco también a Valerie Millholland y a los anónimos evaluadores del manuscrito para Duke University Press, que publicó la versión en inglés de este libro. Un trío de amigos extraordinarios merece una mención especial: Ricardo Ramos Tremolada, Chuck Walker y Carlos Bustamante han sido una constante fuente de apoyo moral e intelectual, así como fieles compañeros en cacerías de libros viejos, discusiones de historia y política peruana e interminables reflexiones sobre música, fútbol, comida peruana y muchos otros temas.

Mi deuda más grande es con mi familia. Mi esposa Mirtha y nuestros hijos Carlos y Susana son una fuente constante de alegría, amor y fortaleza. A su paciencia y comprensión debo todo lo que he logrado en mi vida profesional. La familia Ávalos merece una mención especial por todo lo que han hecho por mí. Mis hermanas y sus familias han hecho que mi vida sea inmensamente más feliz y plena. Mis padres, Mario y Regina, me criaron con infinito amor, sacrificio y fe. Mi padre falleció justo antes de que la edición en inglés de este libro entrara a imprenta. Su amor por la historia y su inquebrantable sed de justicia social nutrieron mi formación y mi interés por reconstruir la historia de las cárceles.

Nota a la edición en español Este libro se publicó originalmente en inglés en 2005, pero el proyecto que le dio forma empezó a madurar hacia 1993, cuando cursaba estudios de doctorado en la

Universidad de Minnesota. Por lo tanto, se trata de un trabajo que ha visto correr mucha agua bajo los puentes y muchos cambios en la manera de pensar y escribir la historia de las prisiones. He resistido la tentación de actualizar argumentos, información y bibliografía, pues ello me hubiera obligado en la práctica a reescribir enteramente el libro. Por tanto, aquí lo presento tal cual, con sus defectos originales y las limitaciones derivadas del paso de los años. He aprovechado la oportunidad para corregir algunas erratas y omisiones bibliográficas que se filtraron en la edición original.

Desde la aparición en inglés de este libro, he publicado materiales diversos sobre la cárcel, el delito y el castigo, que amplían, complementan y en algunos casos matizan los argumentos aquí presentados. Invito a consultar esos trabajos a quienes quieran tener una visión más completa de mis aproximaciones a estos temas.

Releyendo la lista de personas a quienes expresé mi agradecimiento en la edición original, me doy cuenta de lo afortunado que he sido no solo por contar con su apoyo durante esos años de investigación y redacción sino también porque todas ellas siguen siendo parte de mi entorno académico y personal. Reitero aquí mi gratitud a todas y cada una de las personas allí mencionadas.

Solo me resta agradecer a Javier Flores Espinoza por su excelente traducción y su paciencia, a Jorge Cornejo por su cuidadosa corrección de estilo, y a Felipe Portocarrero, María Elena Romero y todo el equipo de producción del Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico por incorporar este libro a su sello editorial y supervisar su producción con solvencia y profesionalismo.

Eugene, enero de 2019.

Introducción Este libro estudia el desarrollo de las instituciones de confinamiento para delincuentes varones en Lima entre 1850 y 1935. En él se reconstruyen las influencias sociales, culturales y doctrinales que configuraron las formas en que se trataba a los malhechores, la implementación de los programas de reforma carcelaria y los modos en que los presos hicieron frente a la experiencia de la prisión. Intento demostrar que el funcionamiento

de las cárceles de Lima en este período revela la naturaleza contradictoria y excluyente del proceso de modernización por el que atravesó el Perú de esos años. La implementación de las reglas modernas de disciplina y del tratamiento rehabilitador dentro de las prisiones fue, en el mejor de los casos, ambigua, y muestra la falta de compromiso con los postulados de la reforma carcelaria por parte de los funcionarios estatales y las autoridades penales. En consecuencia, una combinación de brutalidad e indiferencia tendió a caracterizar la forma en que el sistema de justicia penal trataba a los delincuentes, y el funcionamiento de las cárceles pasó a depender de una serie de convenciones y arreglos consuetudinarios frágiles y de doble filo. Dentro de este «orden», la arbitrariedad y el abuso prevalecieron por encima del respeto por los derechos y el bienestar de los prisioneros. Las prisiones dejaron de ser instituciones para regenerar delincuentes y se convirtieron en bastiones del autoritarismo y la exclusión.

La reforma de las prisiones –es decir, su transformación en instituciones regimentadas que buscaban la rehabilitación de los prisioneros a través de una terapia estricta que consistía en el silencio obligatorio y la segregación, el trabajo forzado, el consejo religioso y una constante y total vigilancia– fue un movimiento político e ideológico iniciado en Europa y los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XVIII. Hacia 1820 este movimiento había consolidado una nueva estructura institucional –la penitenciaría– que combinaba en un único espacio todos los elementos que los reformadores penales consideraban necesarios para convertir a criminales díscolos en ciudadanos honestos, laboriosos y respetuosos de la ley. En el Perú, el proyecto inicial para la construcción de una penitenciaría fue formulado en 1853, y en 1862 se inauguró en Lima la primera y única penitenciaría del país. El ambicioso plan de reformar todo el sistema carcelario construyendo más penitenciarías no llegó a concretarse y ninguna de las otras prisiones experimentó un proceso de renovación o reforma. Además, la implementación misma de la nueva ciencia del castigo en la penitenciaría de Lima resultó algo problemática y definitivamente se alejó del plan original. Aunque ciertamente era una prisión más segura y ejercía un mayor control sobre la vida cotidiana de los prisioneros, jamás se alcanzaron los supuestos objetivos de disciplinar y rehabilitar a los delincuentes a través de un trato humanitario. Diversas circunstancias,

entre ellas la escasez de fondos, la falta de personal adecuado, los intereses particulares, las propias formas de enfrentamiento y resistencia de los presos y la matriz social y cultural de la sociedad peruana en su conjunto explican tanto el funcionamiento deficiente de la penitenciaría como la falta de preocupación por la situación en otras prisiones. Poco se logró, no obstante los esfuerzos realizados por un grupo de criminólogos en la década de 1920, cuando la penología científica inspiró una nueva ola de entusiasmo en torno a la reforma carcelaria. El reconocido penólogo español Luis Jiménez de Asúa ofreció una evaluación sumamente negativa de las cárceles en 1928, 75 años después de formulado el plan original de reforma penal: «En el Perú», escribió al director general de Prisiones Bernardino León y León, «*hay que comenzar por todo*, como lo dices tú muy bien, incluso porque los presos coman y se supriman las torturas. Después vendrán los refinamientos arquitectónicos y reglamentarios; pero de pronto *lo primero que hay que hacer es que el preso viva en condiciones de hombre y no de fiera*»[1].

En el caso peruano, el proyecto de la reforma o modernización de las prisiones se vio complicado por al menos tres elementos interconectados. En primer lugar, aunque el impulso hacia la reforma carcelaria fue fundamentalmente una iniciativa centrada en el Estado y en cuanto tal un reflejo de su creciente intervención en la reglamentación de las fronteras sociales y culturales, la implementación misma de este proyecto revela sus limitaciones en el momento de plasmar sus propias iniciativas. La falta de recursos económicos, aunque ciertamente importante, constituye apenas un aspecto del problema. De mayor importancia fueron los deficientes mecanismos de reclutamiento de personal, la ausencia de formas institucionales adecuadas de control sobre el personal penitenciario, la naturaleza patrimonial del Estado y la existencia de una amplia corrupción. Se dejó el funcionamiento mismo de las cárceles a la discreción y al poder de negociación mutua de dos grupos de actores: el personal penitenciario y los presos. Los empleados y autoridades de las prisiones se mostraron por lo general indiferentes hacia las cuestiones y objetivos principales de la reforma carcelaria. Ellos tuvieron que manejar sus instituciones basándose no solo en formas de «tratamiento» provenientes del sentido común, que incluían formas cotidianas de violencia, sino también en la creación y preservación de un orden consuetudinario que contradecía los fines declarados de la reforma.

En segundo lugar, los mismos presos fueron un factor fundamental en la falta de correspondencia entre los ideales de la reforma penal y el funcionamiento práctico de las cárceles. Sobre todo en la penitenciaría, cuyo diseño requería la imposición de reglas de silencio, disciplina y trabajo, los presos subvirtieron dichos objetivos participando en formas individuales y colectivas de negociación, ajuste a las circunstancias que enfrentaban y resistencia contra ellas. Los presos no fueron necesariamente víctimas dóciles de una estructura opresiva sino más bien –como veremos en la tercera parte de

este libro– actores decididos y creativos que ayudaron a configurar el mundo en que vivían.

Tercero, las limitaciones y ambigüedades de la reforma carcelaria en el Perú pueden atribuirse, en gran medida, a los valores, sensibilidades y cultura política predominantes en la sociedad en general. La implementación de un programa de reforma penal requería tanto de un cambio en la actitud hacia los delincuentes –y hacia las clases populares en general– como del reconocimiento de los derechos de ciudadanía para estos sectores; en el contexto de la sociedad peruana de entonces, ambos brillaban por su ausencia. Como muchos estudios han demostrado, la sociedad peruana experimentó un proceso de modernización que no alteró las estructuras de poder y exclusión existentes desde el nacimiento de la República. En lugar de una república de ciudadanos que gozaban de igualdad ante la ley, la sociedad peruana estaba estructurada por una serie de prácticas excluyentes basadas en criterios sociales, culturales, de género y raciales. Cualquier reclamo para transformar las prisiones en instituciones que mostraran actitudes humanitarias y respeto por los derechos de los prisioneros era una voz en el desierto, dado el carácter difundido y omnipresente de las prácticas sociales autoritarias y discriminadoras. La imitación de modelos occidentales que se hallaba detrás del proyecto de adopción de la penitenciaría formaba parte de un conjunto más amplio de actitudes y prácticas en las que el racismo y las prácticas excluyentes ocupaban un lugar central.

No obstante, si se le evalúa con base en el funcionamiento real de las instituciones de confinamiento, el Estado sí logró alcanzar una serie de objetivos: se implementaron mecanismos más centralizados, intervencionistas y eficaces de vigilancia, control y represión, en especial –aunque no exclusivamente– en la penitenciaría de Lima. Las prisiones se convirtieron en instituciones de confinamiento más seguras y se adoptaron métodos nuevos y más eficaces de identificación y clasificación. Sin embargo, se les usó principalmente no para combatir el crimen o «regenerar» a personas supuestamente anormales sino más bien para reproducir y preservar un ordenamiento social esencialmente injusto y excluyente.

———

Para la mayoría de los historiadores, el nacimiento del Perú moderno ocurrió luego de la desastrosa Guerra del Pacífico (1879-1883), en particular después de 1895, cuando el caudillo civil Nicolás de Piérola ganó la presidencia y dio inicio a un período de crecimiento económico y estabilidad política. Dicho proceso estuvo asociado con la creciente presencia del capital extranjero, la expansión lenta pero constante de las relaciones de producción capitalistas, la aceleración de la migración y la urbanización,

la importación de numerosas innovaciones tecnológicas modernas (ferrocarriles, tranvías, telégrafos y otros), la adopción de ideologías modernas como el positivismo, el anarquismo y el socialismo, y el surgimiento de la clase obrera organizada y de los partidos políticos de masas[2]. El nacimiento del Perú moderno coincidió con el surgimiento de lo que el historiador peruano Jorge Basadre llamó –en términos deliberadamente contradictorios– la «República Aristocrática» (1895-1919). Este fue un período de crecimiento económico y estabilidad política durante el cual la sociedad y la política peruanas fueron controladas por un pequeño número de familias cuyos intereses estaban asociados fundamentalmente con la agricultura de exportación costeña (algodón y azúcar) y que eran las beneficiarias de un sistema de participación política restringida, basado en la exclusión de la mayor parte de la población peruana[3]. La manifestación institucional de este sistema de dominación era lo que historiadores y sociólogos llaman el Estado oligárquico, una estructura que habría de perdurar, con cambios menores y desafíos ocasionales, hasta la década de 1960. Dicho Estado oligárquico se levantó sobre una serie de componentes: una alianza conflictiva pero a pesar de todo eficaz entre el capital extranjero, los hacendados de la costa y el gamonalismo[4] andino; la exclusión política de una gran parte de la población, en especial los segmentos indígenas y rurales; la preeminencia de las relaciones señoriales y patrimoniales entre Estado y sociedad; un desarrollo incipiente de la sociedad civil; la privatización parcial del poder y la violencia; y un acentuado centralismo político y económico[5].

El Perú inició así su período «moderno» consolidando un modelo de relaciones entre Estado y sociedad cuyo rasgo más persistente era la exclusión sistemática de las clases bajas, rurales y de color de la participación política y del ejercicio efectivo de sus derechos civiles. Por ejemplo, en términos electorales, el sufragio estaba limitado a una minoría conformada por los varones que poseían propiedades y sabían leer y escribir[6]. Estudios recientes han mostrado las múltiples formas en que distintos grupos subalternos –en particular los campesinos indígenas– participaron de manera activa y vigorosa en la negociación de los parámetros de interacción política y social y en el cuestionamiento de los proyectos hegemónicos. Sin embargo, el resultado abrumador fue la derrota de los proyectos políticos populares y la continua exclusión y represión de las clases bajas. El Estado y la nación peruanos fueron construidos sobre la base de prácticas excluyentes, políticas sustentadas en criterios raciales y modelos culturales e institucionales discriminadores[7]. En palabras de Florencia Mallon, «el Estado peruano, consolidado a través de la represión y fragmentación de las culturas políticas populares, no [tenía] capacidad de inclusión o hegemonía [...] el discurso político oficial limitó la comunidad política nacional al establecer criterios de membresía basados en la "calidad social" más que en la inclusión [...] Así, estructurado en torno a los principios neocoloniales de fragmentación étnica y espacial, el primer Estado peruano "moderno"

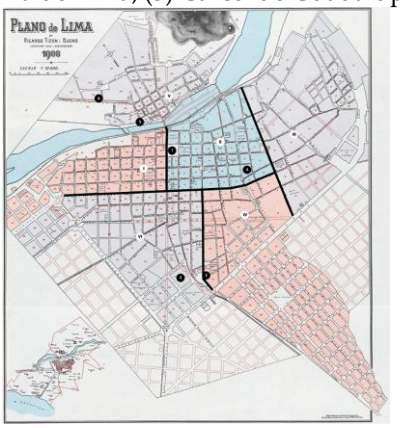
de la República Aristocrática echaría su larga sombra autoritaria y excluyente sobre todo el siglo XX»[8]. Augusto B. Leguía llegó al poder en 1919 a través de un golpe de Estado. Un político disidente y exitoso empresario estrechamente vinculado con intereses extranjeros y estadounidenses en particular, Leguía desafió las bases políticas de la República Aristocrática. Él llegó a representar un sector nuevo y dinámico dentro del bloque dominante, que estaba mucho más comprometido con el objetivo de modernizar la sociedad peruana siguiendo lineamientos capitalistas. Prometiendo la construcción de una *Patria Nueva*, coqueteando demagógicamente con la retórica populista e indigenista, abriendo la economía peruana a la inversión extranjera –sobre todo de los Estados Unidos– hasta un nivel sin precedentes y lanzando un ambicioso plan de modernización del Estado y la sociedad sobre la base de políticas estatales supuestamente racionales y científicas, Leguía logró quebrar la hegemonía política (pero solo en forma limitada la económica) de la oligarquía tradicional[9]. El proyecto leguiísta intentó con cierto éxito incorporar nuevos actores a la escena política, en especial las clases medias urbanas, algunos sectores de las élites de provincias y parte de la clase obrera, pero lo hizo dentro de un marco dominado por un estilo de liderazgo personalista, centralista y autoritario. Al fallar la cooptación, Leguía recurrió a la represión, el exilio y el encarcelamiento de opositores políticos y grupos subalternos rebeldes. Leguía modernizó el ejército y la policía y logró desmantelar parcialmente el poder de los señores de provincias[10]. El Estado leguiísta fue asimismo un instrumento de penetración capitalista, especialmente a través de la inversión extranjera, algo que habría de tener dramáticas implicaciones para las regiones afectadas[11]. Por último, su gobierno usó eficazmente las relaciones tradicionales entre patrones y clientes para asegurarse la lealtad de diversos segmentos de la población peruana. El *Oncenio*, como se denomina a los 11 años de gobierno de Leguía, llevó la naturaleza tradicionalmente personalista de la política peruana a un nuevo nivel y la adulación pasó a ser un prerrequisito de la inclusión en las redes del poder político y económico. Leguía fue llamado Wiracocha (el dios creador de los incas), el Presidente Júpiter, el Nuevo Mesías y el Gigante del Pacífico; se le comparó con Simón Bolívar y Napoleón; y el siglo XX fue llamado el «siglo de Leguía»[12].

Sin embargo, dicho Estado no era una máquina omnipotente que funcionaba sin obstáculos ni dificultades. El Estado no experimentó una mejora significativa en sus mecanismos de operación y control, ni siquiera durante el gobierno de Leguía, cuando se intentó racionalizarlo y modernizarlo. Su alcance se amplió, pero no pudo librarse de la marcada presencia en la administración pública de prácticas burocráticas tradicionales e incluso coloniales. La naturaleza patrimonial del Estado peruano, sus mecanismos clientelistas de reclutamiento y funcionamiento (el célebre «tarjetazo»), su centralismo y la extensa corrupción que fomentaba afectaron la implementación de las

iniciativas estatales y presentaron serios obstáculos a la consolidación de las estructuras modernas de las relaciones entre Estado y sociedad[13].

Sin embargo, a pesar de sus componentes tradicionales, la modernización de la sociedad peruana sí se produjo durante el largo período que se extiende de 1850 a 1935, y fue en Lima donde sus efectos fueron más visibles. La población de la capital creció de 95.000 habitantes en 1858 a más de 200.000 hacia finales de la década de 1920, en tanto que el porcentaje de personas originarias del interior del país subió del 37 por ciento en 1858 al 58,5 por ciento en 1908 y al 63,5 por ciento en 1920[14]. La migración de personas marchaba a la par que el crecimiento físico y el desarrollo urbano de la ciudad. El primer gran impulso hacia el cambio urbano tuvo lugar a finales de la década de 1860 y en el decenio siguiente, cuando las murallas coloniales fueron demolidas para permitir el crecimiento de la ciudad, y se erigieron nuevas avenidas, bulevares, parques y edificios públicos. Un segundo momento de notable desarrollo urbano ocurrió después de 1895. Se abrieron espaciosas avenidas y se instalaron servicios públicos como el agua potable y el alcantarillado. El tercer y más ambicioso plan de reforma urbana se dio durante el Oncenio. Lima fue transformada de múltiples maneras, siendo probablemente la más significativa el surgimiento gradual de distritos claramente diferenciados por clases sociales. Lima pasó a tener distritos obreros, de clase media y balnearios y áreas residenciales de clase alta. La proliferación de *boutiques* y tiendas de departamentos extranjeras, cafés, teatros, una activa vida cultural y otras amenidades cosmopolitas dieron a Lima un sabor de *belle époque* que parecía cumplir los sueños de una élite modernizante ansiosa de gozar de un estilo de vida de corte europeo[15]. El paisaje urbano y humano de Lima también fue alterado por el creciente número de fábricas industriales, que pasó de 69 en 1890 a 244 en 1920; algunas de ellas, como las fábricas textiles de Vitarte, empleaban a más de 400 trabajadores[16]. El número total de trabajadores industriales en Lima siguió siendo pequeño en comparación con el de artesanos o empleados comerciales[17], pero, ello no obstante, surgió una joven y combativa clase obrera bajo los auspicios organizativos e ideológicos del anarquismo y el socialismo. Este surgimiento tuvo un impacto que fue mucho más allá de las pequeñas dimensiones de la clase obrera. Las décadas de 1910 y 1920 fueron un período de intensa organización y movilización política de la clase trabajadora durante el cual se buscó crear una cultura obrera propia, en el interior de la cual se enfatizaba mucho el autodidactismo. En consecuencia, las clases trabajadoras de Lima hicieron sentir su presencia en la ciudad y configuraron decisivamente los contornos de su vida política y social[18].

Figura 1
Plano de Lima en 1908 que muestra la división de la ciudad en cuarteles (números romanos) y algunos lugares

destacados: (1) Plaza de Armas; (2) Penitenciaría de Lima; (3) Cárcel de Guadalupe; (4) Barrio chino; (5) Tajamar; (6) Malambo 

Adaptado por Randy Sullivan (Digital Production Manager, Digital Scholarship Services, Universidad de Oregón) del «Plano de Lima original de Ricardo Tizón y Bueno» (Librería e Imprenta Gil, 1909).

Alejadas de las partes vistosas de Lima y físicamente cercanas a –pero en cierto sentido separadas de– la naciente clase obrera, había un sector de la población que no parecía ser parte del proceso de modernización ni de los intentos de movilizarse políticamente arriba mencionados. Esta población de personas desempleadas, vagabundas y a menudo de mal vivir a la que se conocía como plebe urbana, sectores marginales, parásitos o simplemente delincuentes, era también un actor importante, aunque usualmente ignorado, de la vida urbana limeña. Estos grupos eran el blanco de las acciones policiales y conformaban una parte significativa de la población carcelaria. Habían sido dejados atrás por el esfuerzo modernizador o se rehusaban a formar parte de él. A ojos de autoridades y observadores, merecían ser castigados y controlados, cuando no exterminados. Se les culpaba por muchos de los defectos de la sociedad peruana, incluyendo la supuesta falta de civilización y progreso; lo cierto es que desarrollaron formas distintivas de socialización y cultura que generalmente chocaban con los valores de quienes los acosaban y castigaban. Estos grupos coexistían con otros sectores de los trabajadores pobres y compartían con ellos vivienda (en callejones y casas de vecindad), espacios públicos (cantinas, mercados) y prácticas de socialización (jaranas, culto a la valentía), pero sectores importantes de las clases trabajadoras los veían como indeseables e indignos. Ni eliminado ni integrado, este sector de la población representaba la otra Lima, no la de los cafés, *boutiques* y tertulias intelectuales, o la de fábricas, sindicatos y partidos políticos, sino la de los faites, los rateros y los vagabundos[19].

Los cambios numerosos y visibles que afectaron la sociedad limeña en este período no deberían ocultar las tenaces continuidades que también hay que tener en cuenta al explicar las actitudes hacia los delincuentes y los presos. Sostengo que estas actitudes reflejaban las continuidades que afectaron a la sociedad peruana durante el largo

período de modernización. El escenario social y cultural de Lima estuvo continuamente moldeado por un ingrediente central que sobrevivió al proceso de modernización: la naturaleza autoritaria y jerárquica de las relaciones sociales. Podemos remontar al período virreinal lo que se ha dado en llamar la «tradición autoritaria» de la sociedad peruana[20]. A lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, se mantuvo e incluso reforzó un sistema de valores que subrayaba la existencia de jerarquías raciales, sociales, generacionales y de género supuestamente naturales, de formas «apropiadas» de interacción entre superiores y subordinados, y de instrumentos legítimos para conseguir la conformidad y la obediencia, incluyendo los castigos corporales y otras formas de maltrato físico. Como ha observado el historiador Steve Stein, entre otros, Lima era una sociedad estratificada y fuertemente jerárquica. Las relaciones entre patrones y sirvientes, padres e hijos, profesores y alumnos, esposos y esposas, y empleadores y empleados, incluían diversos grados de despotismo y coerción. Según esta percepción, un símbolo apropiado de este conjunto de convenciones sociales sería la tradición de «come y calla», que subraya esencialmente la sumisión y la obediencia como actitudes necesarias, apropiadas y hasta virtuosas: se suponía que los subordinados no podían responder o comentar las órdenes de un superior. El uso generalizado de los castigos corporales era un aspecto central de esta cultura: los estudiantes eran azotados en el colegio y los sirvientes domésticos eran castigados físicamente por sus patronos; el látigo se usaba extensamente en los cuarteles de las fuerzas armadas y en las cárceles de la policía; en la esfera doméstica, el maltrato de niños y mujeres era algo común[21].

Dos aspectos de esta situación deben subrayarse. En primer lugar, la tradición autoritaria invadía todas las esferas de la sociedad, no solo las relaciones entre la élite y las clases bajas. Como enfatizó Alberto Flores Galindo, las mismas víctimas reproducían esa tradición en una cadena aparentemente interminable de comportamientos abusivos y despóticos. Segundo, y contrariamente a lo sugerido por Stein, el hecho de que esta tradición autoritaria estuviera ampliamente difundida no significa que no fuese cuestionada. Stein toma al pie de la letra lo que decían los manuales preceptivos y los observadores de la época. «La obediencia», nos dice, «fue la norma principal de "la sociedad"». Pero el hecho de que haya sido la norma no significa que siempre haya sido acatada. Stein va más allá al afirmar que «la conducta servil [fue] la fórmula favorita para la confrontación con personas a las que se consideraba portadoras de gran poder», puesto que las masas urbanas habían asimilado «un sistema de valores fundamentales que premiaban la adaptación pasiva y la dependencia personal». Según él, «la deferencia y [la] sumisión» habrían sido las características más visibles del comportamiento social y político de las clases populares[22].

Yo sostengo, por el contrario, que una respuesta autoritaria de parte del superior era necesaria precisamente porque las normas que buscaban proteger las jerarquías y conseguir la obediencia eran quebrantadas y desafiadas. En otras palabras, para que un padre o profesor castigara a un niño, este, por lo general, debía cometer una violación de los códigos de comportamiento apropiado; lo mismo valía para sirvientes, esposas, trabajadores y otros grupos subalternos. Si aceptamos el argumento de Stein, las numerosas expresiones cotidianas de resistencia y de un comportamiento díscolo, desde las huelgas de los obreros a los actos desafiantes de los sirvientes, resultan inexplicables. Un ejemplo relevante en este contexto es el de los delincuentes: ellos violaban los códigos y por lo tanto eran castigados. La forma en que esto se hacía refleja el predominio de ciertas nociones respecto al tipo de castigo «apropiado». Allí donde Stein ve conformismo, yo veo desobediencia y cuestionamiento de la norma. Lo que define una cultura autoritaria no es que no sea cuestionada sino el hecho de que los desafíos al poder son respondidos con despotismo y violencia.

— — — —

Las prisiones modernas han sido objeto de intensos estudios en las últimas décadas. Las interpretaciones sobre su lugar en el desarrollo y el funcionamiento de sus respectivas sociedades han variado enormemente. Diversos autores las han visto como instrumentos cruciales para el desarrollo del capitalismo y la formación de un proletariado industrial[23]; como instituciones que revelan las contradicciones intrínsecas e insolubles del liberalismo[24]; como manifestaciones de los cambios radicales en las sensibilidades culturales[25]; como espacios de producción del conocimiento y el poder coloniales[26]; como lugares de opresión racial y marginación[27]; y, la que probablemente es la postura más célebre, como símbolos y bastiones de la vigilancia y la normalización, dos características consideradas centrales de las sociedades modernas. Según Michel Foucault, el más importante defensor de esta postura, «la red carcelaria, bajo sus formas compactas o diseminadas, con sus sistemas de inserción, de distribución, de vigilancia, de observación, ha sido el gran soporte, en la sociedad moderna, del poder normalizador»[28].

Pero las prisiones han sido vistas también como lugares de resistencia donde se concibieron y promovieron proyectos sociales y políticos alternativos[29]. La versión foucaltiana, profundamente pesimista, que asume la existencia de un control total panóptico y por tanto dejaba poco o ningún espacio para la acción y la resistencia subalterna, ha sido cuestionada por estudios que enfatizan tanto el accionar de los prisioneros como los límites del despotismo estatal. Aunque los investigadores, comprensiblemente, tienden a concentrarse en los presos políticos como portadores de la resistencia contra la opresión, los estudios que tratan de los llamados delincuentes

comunes también demuestran que incluso los regímenes carcelarios más opresivos no pueden suprimir por completo la resistencia y determinación de los prisioneros.

El desarrollo de una red de instituciones de confinamiento en las sociedades modernas representa, entre otras cosas, una manifestación de la creciente intervención del Estado en la regulación de la vida de los ciudadanos y de su cada vez más restrictivo y privilegiado uso de la coerción y la violencia legítimas. El surgimiento y funcionamiento de instituciones tales como la policía, las prisiones, las penitenciarías y los reformatorios está íntimamente vinculado con el desarrollo de lo que el historiador británico V. A. C. Gatrell llamó «el Estado policial»[30]. Sin embargo, el papel de las prisiones dentro de la estructura global del Estado moderno depende tanto de la naturaleza de dicho Estado (liberal, autocrático, oligárquico, militar) como de la forma concreta en que actúan ciertos mecanismos y actores específicos. La correspondencia entre los modelos ideales de las instituciones estatales y su funcionamiento real se complica por el mismo proceso a través del cual ellas surgen. En consecuencia, dichas instituciones dependen menos de los grandes proyectos de los ideólogos estatales que de los actos y omisiones de aquellos funcionarios del Gobierno en cuyas manos se pone la tarea de implementarlos. El funcionamiento de las cárceles de Lima demuestra que, con frecuencia, existe un abismo entre los objetivos explícitos de las instituciones estatales y su implementación práctica.

Las instituciones del Estado, incluyendo las prisiones, no pueden ser disociadas del escenario más amplio en el cual operan. Los historiadores deben estar atentos a las influencias ejercidas por los contextos culturales y mentales prevalecientes. Como sostiene David Garland, las prisiones también son «artefactos culturales» que reflejan y contribuyen a configurar las mentalidades, valores y prácticas sociales[31]. Pensar la prisión como un espejo de la sociedad no es simplemente un truco retórico, pues esta refleja valores, creencias y prácticas sociales profundamente arraigadas, incluyendo de modo prominente las formas en que la autoridad y el poder son ejercidos en una sociedad. En palabras del historiador Dario Melossi, «el castigo está profundamente enraizado en la especificidad nacional/cultural del medio que lo produce»[32]. Más allá de las necesidades específicas que el castigo puede satisfacer –disuasión, regeneración, control del mercado laboral y otras–, o de las bases legales y doctrinarias sobre las cuales los ideólogos formulan sus propuestas –ley natural, humanitarismo, ciencia–, la forma final que el castigo asuma dependerá siempre, en esencia, de la influencia de las sensibilidades socialmente construidas[33]. En otras palabras, lo que se considera apropiado, justo, horrendo o bien merecido es definido no solo por la ley o las necesidades del Estado, sino –lo que es más importante– por los valores culturales dominantes (pero aun así cuestionados) de la sociedad en su conjunto.

El impacto de estos valores culturales sobre el funcionamiento de las cárceles está mediado crucialmente por la construcción de imágenes y representaciones de la población delincuente. Estos «espejos distorsionadores» incluyen, pero no se limitan a, las representaciones legales, populares y científicas de la población criminal, que también contribuyen a configurar las formas en que los presos son tratados dentro de las prisiones[34]. Por ejemplo, las percepciones sobre el delito como una cuestión social –ya sea que se le considere una gran amenaza o un problema menor, una patología social o el resultado de deficiencias específicas entre ciertos grupos– y el delincuente como persona –se le vea como una víctima o un monstruo, como un degenerado o un enfermo– configuran asimismo las formas específicas que el castigo adopta en distintas coyunturas[35].

Por último, el funcionamiento de las instituciones de confinamiento está mediado de manera crucial por las respuestas que ellas generan entre los mismos receptores de las diversas intervenciones diseñadas por los regímenes carcelarios, es decir, los propios reos. Las prisiones, al igual que otros espacios socioinstitucionales como las plantaciones y las fábricas, constituyen lugares donde se despliegan el poder y la dominación, pero también el cuestionamiento y la resistencia. A pesar de que, formalmente hablando, existe una enorme diferencia de poder entre una autoridad penal y un recluso, siempre hay espacio para que este último manipule, evada y redefina las reglas de juego. El éxito de dichas estrategias es siempre limitado y a menudo frágil y efímero, pero, pese a todo, ofrece una amplia demostración de que los prisioneros no sucumben íntegramente a la lógica opresiva que subyace a su encarcelamiento. Un estudio de la cárcel que ignorase la participación y el accionar de los presos y las realidades de la vida cotidiana dentro de ella sería incompleto. En palabras de la historiadora Michelle Perrot, «[e]s precisamente la vida real y cotidiana de este grupo –los presos– la que debemos intentar captar en su nivel más recóndito, aquel que yace detrás y más allá de las sosegadas afirmaciones y las convenciones del discurso penitenciario»[36].

El caso de las prisiones limeñas revela el profundo cisma existente entre las promesas de la República peruana –democracia, imperio de la ley y derechos de ciudadanía para todos los peruanos– y las realidades de un sistema político y social despótico y excluyente. A pesar de los recientes y valiosos estudios sobre el desarrollo de la sociedad civil y la participación política, que enfatizan la difusión de impulsos y prácticas democráticos entre la población peruana, las tradiciones autoritarias y las prácticas excluyentes aparecen en la literatura disponible como rasgos decisivos de la sociedad peruana[37]. Las prisiones reflejaron y reprodujeron, de numerosas maneras, las desigualdades de las estructuras social y política del Perú: en los patrones visiblemente discriminadores de la vigilancia policial y el encarcelamiento, en el castigo excesivo

infligido a poblaciones vulnerables, en el absoluto desdén por la vida y la dignidad humanas y en la negación del acceso a un juicio justo y una asesoría legal adecuada para los acusados. Aunque los presos, tal como lo enfatiza este libro, no fueron siempre víctimas pasivas o sumisas, por lo general sufrieron en carne propia la indiferencia y la maldad, cuando no la abierta brutalidad, del Estado y la sociedad. El hecho de que estas condiciones continúen presentes en el funcionamiento de las instituciones penales peruanas resulta revelador de la omnipresencia de las tradiciones excluyentes y antidemocráticas nacidas junto con la República peruana hace casi 200 años.

— — — —

Este libro se basa sobre todo, aunque no exclusivamente, en la rica y poco utilizada documentación de diversas instituciones de confinamiento y otras unidades administrativas vinculadas con el sistema penal peruano. Esos materiales fueron reunidos por la Dirección General de Prisiones (DGP) y archivados en el Ministerio de Justicia. Cuando este ministerio fue cerrado en la década de 1970, los papeles de la DGP fueron enviados al Archivo General de la Nación. No obstante la riqueza de esta documentación, sus lagunas y vacíos son numerosos. Como suele suceder, ciertos aspectos de la experiencia carcelaria están mejor representados que otros. Por ejemplo, encontré muy poca documentación sobre los presos políticos anterior a 1920 y sobre los empleados de las instituciones penales, sobre los cuales me hubiese gustado poder decir más. De mayor relevancia es el hecho de que la documentación sobre las presas y sus instituciones de confinamiento es sumamente escasa, por lo cual me vi obligado a restringir este estudio a la experiencia de los presos varones[38].

La primera parte, «Aprehendiendo al criminal», examina las formas en que el delito y los delincuentes fueron representados por diversos sectores de la opinión pública, así como el papel de la policía en la construcción de una clase criminal. El capítulo 1 examina la invención de la «cuestión criminal» y la intersección de los pareceres sobre el delito y los discursos acerca de la raza, la vida urbana y la moralidad de las clases bajas. El capítulo 2 esboza el desarrollo temprano de las teorías científicas sobre el delito, subrayando sus continuidades con discursos precientíficos anteriores. El capítulo 3 analiza las formas en que la policía, el brazo más visible e intervencionista del Estado, contribuyó a la construcción de las «clases criminales» al mostrar un patrón de abusos sumamente arbitrario y clasista contra ciertos segmentos de las clases bajas. La segunda parte, «Las cárceles y sus habitantes», describe las instituciones penales y los diversos grupos que ellas cobijaban. El capítulo 4 examina el desarrollo de instituciones de confinamiento tales como la penitenciaría de Lima, la cárcel de Guadalupe y la isla penal El Frontón, en tanto que el capítulo 5 examina detalladamente la población presidiaria, subrayando su diversidad así como las formas en que sus experiencias

conectaban la prisión con el mundo exterior. La tercera y última sección, titulada «El mundo que construyeron juntos», revisa con mayor detenimiento las formas en que las interacciones, negociaciones y formas de desafío cotidianas configuraron el mundo de la prisión. El capítulo 6 reconstruye lo que llamo el «orden consuetudinario» de la prisión, señalando las complejidades de la experiencia carcelaria y las múltiples formas de interacción –que iban desde los negocios informales y la complicidad hasta los abusos y la negligencia– entre los funcionarios penales y los presos y en el interior de la comunidad de reclusos. El capítulo 7 considera la formación de subculturas carcelarias y su impacto sobre la vida cotidiana en la prisión, mientras que el capítulo 8 revisa las diversas formas en que los presos desafiaron tanto el orden consuetudinario como el régimen penal y disciplinario que se les imponía. Las conclusiones sitúan los hallazgos de este libro dentro del contexto social, político y cultural de la sociedad limeña y ofrecen una interpretación sobre las vinculaciones entre castigo, modernización y tradiciones autoritarias en la sociedad peruana.

Primera parte

Aprehendiendo al criminal Capítulo 1

El surgimiento de la cuestión criminal (1850-1890) El 24 de agosto de 1861, *La Gaceta Judicial*, un periódico legal recientemente fundado, publicó un artículo titulado «Situación moral». Su autor, un abogado llamado Gabriel Gutiérrez, esbozó lo que él pensaba que eran las causas principales del «alarmante» incremento del delito en Lima[39]. **«¿Cómo podremos explicar la situación moral en que nos hallamos, por el aumento progresivo de los crímenes que se cometen?», se preguntaba Gutiérrez al inicio de su artículo. Su respuesta consistía en una larga lista de factores que según él contribuían al creciente nivel de delincuencia en Lima. Por ejemplo, la intermitente inestabilidad política y las guerras civiles «no ha[n] hecho sino corromper las costumbres, agotar la hacienda, destruir la agricultura, sistemar el militarismo, aniquilar el prestigio de los principios, dividir al pueblo en bandos encontrados [y] engendrar odios profundos», razón por la**

cual un número cada vez más grande de personas salía a las calles y caminos para cometer delitos. El creciente número de manos ociosas debido a la caída en la producción local, provocada a su vez por una «excesiva y desarreglada libertad de comercio», era visto como otra fuente del crimen. Como el trabajo representaba «un elemento esencialmente moralizador», su contraparte, el ocio, necesariamente conllevaba un comportamiento delictivo entre las clases bajas. El consumo de licor y el juego también fueron mencionados como factores importantes del aumento de la delincuencia. Gutiérrez rechazaba la práctica legal y tradicional de considerar la ebriedad como una circunstancia atenuante para los delincuentes; en su opinión, la actitud correcta era exactamente la inversa: «el interés social exige que se castigue con más severidad al que se ha colocado voluntariamente en aptitud de delinquir»[40].

También se culpó del crecimiento en las actividades criminales a una propensión psicológica algo compulsiva a procurarse riquezas y lujos. El autor consideraba que esta era una «especie de furor o enfermedad», «la carcoma de todas las clases de la sociedad» que, en el caso de los pobres y de las clases medias, requería que se cometieran delitos para mantenerse a la par con el costo de vivir esta vida artificial. La situación incluso había agregado efectos negativos a la sociedad peruana porque la mayoría de los bienes de lujo, si no todos, eran importados, lo que afectaba aún más la producción local. En opinión de Gutiérrez, las diversiones públicas sumaban más incentivos a la creciente tasa de criminalidad. La abundancia de festividades, según él, subrayaba las dimensiones de la ociosidad improductiva entre la población limeña y sus efectos corruptores sobre la actitud de la población con respecto al trabajo y la disciplina social. Es más, la falta de educación producía una ferocidad del carácter que hacía que las personas fueran aún más proclives al crimen y la violencia. Gutiérrez estimaba que tres cuartas partes de la población limeña eran analfabetas.

Para este autor, la reciente abolición de la esclavitud (1854) tuvo también un impacto sobre el nivel de delincuencia en la ciudad. Los exesclavos, «seres abyectos, de razón embrutecida, hombres agoviados [sic] bajo el látigo del caporal», eran incapaces de diferenciar «la materialidad de la carne, de la espiritualidad que la anima». Ellos no

tenían idea alguna sobre la organización de la sociedad, sus derechos o el respeto que merecían. Eran «una especie de tigres mal domesticados y retenidos entre cadenas» que al ser súbitamente incorporados a la sociedad, recibir derechos y ser elevados al mismo rango que los demás ciudadanos, abandonaron el hogar de sus amos y, carentes de «industria propia», «se lanzaron a los caminos y ciudades para vivir del robo y el puñal». Del mismo modo, la abolición de la pena de muerte en 1858 había sido interpretada por los criminales como una garantía de impunidad. Aquella «noble reforma» había sido «inoportuna» porque llegaba en un momento en que «nuestras costumbres han llegado a un estado de relajación alarmante, cuando la guerra civil ha corrompido nuestros hábitos y carácter, cuando no se ha radicado el sistema penitenciario [y] cuando es por demás viciosa nuestra legislación en materia penal». Al proteger la vida del delincuente, decía Gutiérrez, los legisladores automáticamente habían condenado a muerte a la sociedad. Por último, las deficiencias en la administración de justicia –en especial la lenidad motivada por la compasión hacia el criminal, y la tardía aplicación de la justicia–, así como un sistema policial ineficiente e irregular, estimulaban el crimen pues hacían que las cosas fueran mucho más fáciles para los delincuentes. Encarcelar a los criminales no representaba una solución pues en lugar de transformarlos o disuadirlos, las cárceles y prisiones corrompían aún más a los presos.

Gutiérrez no fue el único comentarista que consideraba el delito como un agudo problema social e incluso potencialmente peligroso para la estabilidad del país. Su artículo pertenece a un creciente tipo de opiniones que ofreció, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, una crítica de los defectos materiales y morales de la ciudad de Lima y sus habitantes, siendo la criminalidad una de sus más conspicuas manifestaciones. Las afirmaciones sobre el delito y temas similares provenían de una serie de observadores que incluían a autoridades estatales, médicos, abogados, higienistas, diseñadores de políticas, periodistas y viajeros. Aunque no siempre coincidían en todas sus opiniones, estos críticos compartían una preocupación con el desorden social y la moral plebeya. El delito en la ciudad de Lima era descrito como un fenómeno que iba más allá de la acumulación de incidentes aislados de violación de la ley hasta convertirse en una suerte de patología social debida a múltiples causas, una amenaza a la estabilidad de la sociedad peruana, una señal de descomposición social y, en consecuencia, una cuestión que exigía una respuesta pronta y enérgica de parte del Estado.

La lista de los factores que contribuían a la delincuencia que ofreció Gutiérrez incluía diversos tipos de fenómenos, que iban desde algunas políticas estatales inapropiadas o inoportunas (el comercio libre, la abolición de la esclavitud y de la pena de muerte), hasta las deficiencias crónicas del sistema social (instituciones judiciales y policiales

inadecuadas, falta de educación) y la persistencia de formas de socialización populares (consumo de licor, el juego, diversiones públicas). Gutiérrez combinó una crítica de la moral de los sectores pobres urbanos y su supuesta predisposición a observar una conducta disoluta, con una crítica conservadora de las políticas liberales en materia social y económica. Esta posición conservadora/autoritaria respecto a problemas sociales tales como la delincuencia parecía expresar las ansiedades de ciertos sectores de la población limeña con relación a los cambios sociales y políticos, y reiteraba la demanda de respuestas estatales más severas a lo que veían como la creciente amenaza del desorden de parte de las clases bajas. La delincuencia, la prostitución, el alcoholismo, la pobreza, el juego y otros «vicios» semejantes fueron condensados discursivamente y transformados en una única «cuestión social» que, en ocasiones, se consideraba que estaba alcanzando proporciones alarmantes. Esta operación semántica tendría importantes consecuencias, pues sirvió para justificar políticas excluyentes, ofrecía respuestas simplistas a problemas sumamente complejos y daba forma a políticas estatales represivas. Al vincular el delito con ciertas formas plebeyas de socialización y cultura o, como frecuentemente sucedía, al explicarlo como el resultado inevitable de dichas formas culturales, se lo construía además como un problema asociado únicamente con las clases bajas de la sociedad. Los delitos cometidos por los integrantes de los autoproclamados sectores decentes de la sociedad rara vez eran incluidos en estos comentarios. De este modo, la formulación de lo que vengo llamando *la cuestión criminal* también expresaba, y al mismo tiempo reforzaba, el sesgo de clase que daba forma a estos esfuerzos por «interpretar» ciertos fenómenos sociales.

Por cierto que la preocupación por la delincuencia en Lima no era una novedad de la década de 1850. Había habido períodos de notoria inestabilidad social, como las guerras de independencia y la violenta coyuntura de 1835, que provocaron comentarios alarmistas acerca de las actividades criminales de diversos grupos subalternos, entre ellos esclavos, plebeyos y bandidos. En efecto, los antecedentes de las formas en que se percibió la criminalidad durante el período aquí estudiado podrían ser rastreados por lo menos hasta las ambiciosas reformas del tardío período colonial. Pero la armazón intelectual que sustentó el surgimiento de la cuestión criminal, así como el contexto político y cultural en el cual ella apareció, resultaron sumamente singulares y novedosos. Sostengo que esta cuestión fue una construcción intelectual y política que cristalizó durante un período sumamente específico (aproximadamente entre 1855 y 1860) y no constituyó solo un ejercicio intelectual para intentar explicar la naturaleza del crimen y promover posibles soluciones, sino que en realidad formó parte de un esfuerzo mucho más ambicioso de interpretar la sociedad, las relaciones sociales y la naturaleza de la intervención estatal en la fijación de los límites de conducta socialmente aceptables. En otras palabras, al referirse al delito, sus causas y remedios, estos autores estaban además proponiendo un nuevo marco discursivo para interpretar

la sociedad peruana y sus problemas. La nueva actitud con respecto al delito, surgida en las décadas de 1850 y 1860, reflejaba una creciente preocupación con la moral urbana, la disciplina laboral y el control político en las ciudades, así como un reclamo de políticas estatales más intervencionistas y eficaces.

Construyendo la cuestión criminal

El retrato de la moral de Lima dibujado por Gutiérrez era, en realidad, una mezcla de viejos prejuicios, estereotipos, temores, reacciones e interpretaciones sobre ciertas transformaciones sociales y políticas bastante recientes. Durante los años entre 1854 y 1860 ocurrieron una serie de dramáticos episodios que generaron una mayor sensación de inseguridad entre diversos sectores de la población de la ciudad. La abolición de la esclavitud en 1854 y de la pena capital en 1856, junto con el motín de artesanos de diciembre de 1858 (para mencionar solo aquellos episodios más notorios), fueron percibidos por influyentes sectores de la opinión pública como graves amenazas al orden social limeño. La idea bastante aceptada de que la forma más eficaz de conseguir orden y obediencia era el recurso a castigos severos, se tradujo en paranoia una vez que se eliminaron formas severas de control social como la esclavitud y la pena de muerte (aun cuando en el caso de esta última se trató de una medida temporal).

La abolición de la esclavitud en diciembre de 1854 fue precedida y acompañada por una serie de escandalizadas advertencias sobre los peligros asociados con la manumisión de los esclavos[41]. Una vez que entró en efecto, los observadores atribuyeron los supuestos niveles cada vez más altos de criminalidad a la liberación de miles de esclavos que no tenían otra finalidad en la vida que involucrarse en el vicio y el crimen. La abolición había abierto un nuevo escenario social y político al alterar –al menos en el sentido estrictamente legal– la ya relativamente borrosa correspondencia entre color de piel y ciudadanía, así como las relaciones de dependencia entre los propietarios y sus súbditos. Los hacendados y otros integrantes de las clases altas expresaron sus temores de que los esclavos abandonasen masivamente las haciendas y casas para evitar trabajar y dedicarse a una vida criminal. Desde su punto de vista, sin la presencia de la esclavitud los negros no se sentirían obligados a trabajar. Esta actitud reflejaba los estereotipos raciales nutridos por siglos de esclavismo, pero también estaba relacionada con la lucha política de los expropietarios para asegurarse el acceso a la fuerza de trabajo de los negros libertos. Es virtualmente imposible establecer si los exesclavos se convirtieron en delincuentes o no. Santiago Távara, partidario de la abolición, no encontró evidencia de que así hubiera sido[42]. De otro lado, Manuel Atanasio Fuentes suministró evidencias estadísticas para respaldar los alegatos según los cuales la abolición había sido efectivamente un factor importante en el creciente nivel de criminalidad. Según Fuentes, en 1857 los negros representaban el 23,1 por ciento de los

presos en Carceletas, una proporción que más que duplicaba la proporción de la población negra de Lima, que por ese entonces era del 11,34 por ciento[43].

La imagen de los esclavos convertidos en delincuentes refleja la mentalidad de importantes sectores de la sociedad peruana luego de la abolición. Para muchos, los exesclavos no merecían la ciudadanía plena[44]. Dados sus defectos morales e intelectuales, pensaban, solamente el trabajo duro y el control social y político les impediría destruir la sociedad. El presidente Ramón Castilla, que había firmado el decreto abolicionista en medio de la guerra civil que libraba con el presidente vigente, el general Rufino Echenique, respondió a las presiones ejercidas por los hacendados implementando un decreto, poco después de su triunfo en enero de 1855, que obligaba a los exesclavos agrícolas a trabajar en sus antiguas haciendas por lo menos durante los siguientes tres meses; al mismo tiempo, se permitía a los antiguos propietarios deshacerse de los exesclavos viejos, enfermos y conflictivos. Aquellos que no regresaran a trabajar serían tratados como vagos y enviados a las islas guaneras[45]. Para contener la incidencia supuestamente creciente del crimen, además, Castilla restableció en junio de dicho año el Tribunal de la Acordada, una institución colonial a la que se consideraba un instrumento duro y eficaz para castigar y detener el crimen[46]. Aunque la asociación entre la abolición de la esclavitud y el incremento de la delincuencia dista mucho de estar probada, en la mentalidad de los observadores conservadores y en las medidas adoptadas por el Gobierno castillista ella aparecía como una relación de causa y efecto clara y transparente. Dicha imagen habría de persistir en los años siguientes, y autores como Gabriel Gutiérrez la tomarían como una verdad establecida, incorporándola a un esquema interpretativo más ambicioso.

Podemos encontrar otros antecedentes del surgimiento de la cuestión criminal en los debates en torno a la pena de muerte. La pena capital existió en el Perú durante todo el período colonial. Al igual que en otros lugares, las ejecuciones públicas fueron diseñadas como rituales punitivos para castigar al agresor y disuadir al resto de la sociedad de cometer actos ilegales[47]. Durante el temprano período postindependentista, las Constituciones peruanas retuvieron la pena de muerte pero tendieron a restringirla a aquellos casos de crímenes considerados atroces[48]. Durante estas décadas también fueron comunes las ejecuciones ilegales de salteadores de caminos y otros delincuentes[49]. Cierta oposición a la pena capital comenzó a aparecer en la década de 1830 bajo la influencia tanto del liberalismo como del catolicismo[50]. José Manuel Loza, por ejemplo, lanzó un ataque filosófico/religioso contra ella utilizando los escritos de filósofos cristianos y occidentales. Además de ser contraria a la ley de Dios, la pena era considerada «ineficaz para la represión, inútil para su escarmiento, injusta en su aplicación, destructora de la industria y de la raza más laboriosa y miserable». Loza prefería la penitenciaría como una forma de castigo más adecuada[51].

La pena de muerte fue abolida por la Constitución liberal de 1856, luego de una campaña encabezada por liberales tales como José Gálvez[52]. El artículo 16 de la Constitución fue sumamente claro: «La vida humana es inviolable: la ley no podrá imponer pena de muerte». Esta medida generó una serie de quejas alarmadas según las cuales la falta de respuestas «apropiadas» para combatir el delito haría que este proliferase. Para Fuentes, por ejemplo, «la abolición de la pena de muerte ha sido también la abolición del pequeño resto de seguridad pública que disfrutábamos [...] nunca se han cometido tantos crímenes como en el último año»[53]. El mensaje era inequívoco: la delincuencia estaba creciendo porque la sociedad no castigaba a los criminales con severidad. En 1858, el ministro de justicia opinó que «mientras una filantropía mal entendida ha declarado inviolable la vida del asesino alevoso, del incendiario y de otros criminales de este género, al ciudadano pacífico y laborioso lo deja abandonado al fiero puñal del bandido»[54]. La pena de muerte era considerada el único disuasivo contra los potenciales transgresores de la ley, en especial en un momento en el cual se decía que los exesclavos estaban incrementando sus actividades delictivas y la penitenciaría de Lima (concebida por muchos como la única esperanza de contener el crimen) seguía en construcción. Según esta visión apocalíptica, la sociedad limeña corría el riesgo de ser engullida por la incontrolable criminalidad y la violencia.

Hubo, ciertamente, ocasiones en que estos temores parecían materializarse. En diciembre de 1858, las ciudades de Lima y Callao vivieron tres días de violentas protestas de artesanos descontentos contra la creciente importación de bienes manufacturados. La protesta estuvo acompañada por un nivel desacostumbrado de violencia y destrucción. «Por primera vez las pacíficas poblaciones de Lima y Callao han sido teatro de luctuosas escenas, entremezcladas de sangre y exterminio», escribió José Silva Santisteban[55]. Según varios informes, la ocasión había sido aprovechada por vagos y delincuentes para dedicarse a la destrucción y el saqueo, actitudes que no tenían nada que ver con las justas protestas de los honestos artesanos. Los observadores, tanto conservadores como liberales, resaltaron el papel desempeñado por la plebe urbana en estos motines y llamaron la atención del Gobierno hacia el problema de la vagancia. Para algunos, la promoción de las industrias locales ayudaría a aliviar las necesidades de los grupos marginados, eliminando así su inclinación a la violencia; para otros, una represión más dura y un control policial más estricto eran las únicas formas de evitar la repetición de episodios amenazantes similares[56].

El Congreso volvió a discutir la pena de muerte en 1858, ratificando finalmente su abolición. Uno de los partidarios más conspicuos de la pena capital fue el clérigo conservador Bartolomé Herrera, para quien su eficacia se derivaba del hecho de que era «irreparable». La ejecución de criminales, decía, constituía un sublime acto de restablecimiento del orden social[57]. En 1860, el Congreso peruano redactó una nueva

constitución y la pena de muerte fue una vez más objeto de intensos debates. Silva Santisteban, entre otros, defendió apasionadamente su abolición. Estaba convencido de que el objetivo de toda pena debía ser la reforma moral del criminal y no su destrucción, y puesto que la mayoría de los crímenes tenían causas sociales tales como la pobreza y el desempleo, o eran producto de la pasión, la solución real era crear puestos de trabajo, no la ejecución del criminal[58]. Por el contrario, el congresista Antonio Arenas pedía la restauración de la pena capital citando el incremento «alarmante» del delito a consecuencia de la abolición de 1856[59]. La asamblea finalmente optó por restablecerla en la Constitución de 1860, aunque únicamente para casos de asesinato agravado[60].

Los debates en torno a la pena de muerte prosiguieron en los años siguientes. El abolicionista más conspicuo fue el clérigo y autor liberal Francisco de Paula González Vigil. En un folleto redactado en 1858 y publicado en 1862, González Vigil sostuvo que el fin último del castigo debía ser la reforma del criminal y no su exterminio y estaba convencido de que la penitenciaría era el mejor medio para castigar a los criminales[61]. El abogado Nicolás Tejerina sostuvo que la pena capital no tenía ningún efecto disuasorio sobre los delincuentes, y que las causas profundas de la delincuencia se hallaban en los «vicios en la organización social». Igual que González Vigil, Tejerina proponía el uso extendido de las cárceles como el mejor método punitivo. Compartía ciertamente la idea de que el crimen era un serio problema (demostrado por la «crónica diaria de la policía»), pero la usaba para cuestionar la eficacia disuasoria de la pena de muerte[62]. Quienes defendían la pena capital usaban el argumento del incremento de la delincuencia para demostrar lo opuesto. En 1861, Luis E. Albertini consideraba a la abolición como «una noble y generosa utopía» que no podría implementarse sin poner en peligro el ordenamiento social. Este autor subrayaba que la pena capital era necesaria en el Perú «como medio de represión y de *intimidación*» y como «único freno capaz en ciertos casos de encadenar [las malas pasiones]». Haciéndose eco de Fuentes y Gutiérrez, Albertini presentaba al delito como si hubiese alcanzado un nivel alarmante: «los horrendos sucesos de la vida práctica, y los irrecusables datos de la estadística del crimen, y el creciente desborde de las malas pasiones [...] nos convencieron de que la realización de ese principio –la abolición– era por ahora una imposible utopía». En sociedades en las cuales la ignorancia de las masas era profunda, sostenía además Albertini, y donde las «brutales pasiones mantienen sojuzgada la razón» el castigo era más eficaz cuando «hace del terror un medio de intimidación». Enfrentando los alegatos de que la pena de muerte no reformaba al criminal, Albertini respondía que su finalidad no era reformar al individuo sino a la sociedad en su conjunto, y que dicho objetivo solamente podía alcanzarse a través de la intimidación y el terror[63].

Es dentro de este contexto que debemos considerar el artículo de Gabriel Gutiérrez antes citado. El temor y la paranoia asociados con la abolición de la esclavitud y los intentos de abolir la pena de muerte, fueron cruciales para el surgimiento de una extendida preocupación en torno al desorden social y el delito. Más importante que el crecimiento estadístico, real o imaginado, de la delincuencia en la ciudad fue la forma en que los sectores de la sociedad limeña respetuosos de la ley reaccionaron frente a un cambiante clima social y político que, tal como ellos lo percibían, produjo un sistema judicial menos severo y menos efectivo y una estructura social y racial más fluida y potencialmente igualitaria, al menos en términos formales. Otro ingrediente en la creciente sensación de inseguridad experimentada por ciertos sectores de la población limeña fue la activa participación de las clases bajas en los debates políticos y los combates electorales. Tal como observó Martín Monsalve, tanto las elecciones presidenciales de 1850 como las parlamentarias de 1855 generaron una sensación de disgusto y paranoia porque se había producido una «toma de las calles» por parte de las clases populares, en tanto que la élite se retiraba de la participación política abiertamente pública. Monsalve cita a Fuentes quien, en su estilo típico, denigra la participación de las clases bajas y, en particular, de la población negra: «los ciudadanos negros son los más tristes ciudadanos capaces de desacreditar toda institución democrática, y de degradarla al punto que los blancos renuncien hasta el título de ciudadanos. ¿Por qué no hay en el Perú ningún hombre blanco ni aguador ni chocolatero? Hoy ningún blanco es tampoco elector porque ese es oficio de negros»[64]. El acto electoral, sugiere Monsalve, fue convertido en una especie de fiesta plebeya[65]. Huelga decir que para muchos integrantes de la sociedad respetable de Lima, dicha participación política era un delito en sí misma.

Todos estos eventos enmarcaron el surgimiento de la delincuencia como un problema social hacia 1860. La inseguridad asociada con los cambios políticos y sociales, junto con una serie de circunstancias que parecen haber afectado las tasas de criminalidad (las más importantes fueron la inflación, las epidemias y el desempleo), crearon un clima, tanto psicológico como político, conducente a una mayor preocupación con la moralidad urbana[66]. Aunque los observadores liberales como Mariátegui y Tejerina también contribuyeron a la construcción de la cuestión criminal, fueron comentaristas autoritarios y conservadores como Fuentes y Gutiérrez quienes más claramente le dieron forma. Mientras que los liberales veían el delito como un serio problema, estrechamente asociado con las imperfecciones del sistema social, los conservadores tendían a atribuirlo a la falta de castigos severos[67]. La preocupación con la delincuencia debe verse dentro de esta reacción conservadora más amplia en la escena política peruana durante la segunda mitad de la década de 1850. En aquellos años el presidente Castilla, por ejemplo, quien dirigiera la revolución liberal de 1854, viró hacia posiciones abiertamente conservadoras. En su mensaje al Congreso peruano del 28 de julio de

1860, Castilla sancionó oficialmente la idea de un creciente problema criminal: «Verdaderamente desconsolador es el cuadro que ofrece la estadística criminal de estos últimos tiempos, y en particular el alto número de crímenes atroces que tiene aterrorizada a la sociedad. Una plaga de malhechores, aumentado su número y audacia con refuerzos de bandidos extraños, infesta el país, y cada día se hace más imperiosa la necesidad de que se adopten medios eficaces y severas que arredren al malvado, y lo detengan en la carrera del crimen, en vez de alentarlo con la impunidad»[68].

Castilla exigió luego al Congreso que estudiara si el origen de dicha situación yacía en las imperfecciones de la ley o en «la moral de una parte corrompida y degradada del pueblo»[69]. Las afirmaciones hechas por el presidente resaltan dos de los aspectos más significativos de la construcción discursiva de la cuestión criminal. En primer lugar, Castilla respaldó sus afirmaciones, al igual que muchos otros observadores, refiriéndose al «cuadro que ofrece la estadística criminal de estos últimos tiempos». Segundo, Castilla sugirió que la ola delictiva podría no estar relacionada con desigualdades sociales sino con la «moralidad» de los sectores inferiores de la sociedad.

La construcción del delito como un problema social, tal como lo evidencian las afirmaciones de Castilla y las de observadores como Gutiérrez, Albertini, Fuentes y muchos otros, siempre estaba relacionada con afirmaciones sobre el creciente nivel de la criminalidad, demostrado por los datos estadísticos. Al citar las estadísticas de la criminalidad, intentaban dar un aura de credibilidad a sus aseveraciones, aunque por lo general no se molestaban en presentar dichas estadísticas a los lectores. Esta estrategia se veía facilitada por el hecho de que, hacia la segunda mitad del siglo XIX, en el Perú al igual que en muchos otros países, la estadística estaba consolidando su prestigio como una herramienta fundamental tanto para la producción de conocimiento como para las prácticas gubernamentales. «Sin Estadística no puede ser bien gobernado un Estado», escribió Juan Espinosa en su *Diccionario para el pueblo*[70]. De hecho, desde finales de la década de 1840 el Estado peruano había tomado importantes medidas para incorporar las estadísticas en la maquinaria gubernamental, y ya en dicho decenio y el anterior se produjeron importantes compilaciones de estos materiales[71]. Pero el inicio en el Perú de lo que podría llamarse la estadística moderna se debió a los esfuerzos individuales de Manuel Atanasio Fuentes, el más conspicuo cronista de la Lima decimonónica[72].

En 1858, Fuentes publicó su notable *Estadística general de Lima*, un volumen de 774 páginas que incluía información sobre la población, el empleo, la burocracia y la producción en Lima[73]. A pesar de su título, no se limitaba a las cifras y cuadros estadísticos, pues Fuentes ofrecía extensos comentarios sobre las muchas cuestiones que captaban su atención. Si bien el delito no era su principal interés, sí le dedicó varias páginas, presentándolo como un mal social que empeoraba debido a una defectuosa

organización policial, un sistema judicial ineficiente, la inoportuna abolición de la pena de muerte y la destrucción total de la vida social en el Perú postindependentista[74]. «Nadie negará», escribió, «por grande que sea su patriotismo, que Lima es una de las ciudades que abrigan mayor número de vagos y de hombres corrompidos»[75]. Para Fuentes, el crecimiento del crimen parecía estar relacionado con ciertas formas de sociabilidad y cultura populares. En extensos pasajes de su libro presentó el juego, la bebida («la beodez domina a la clase baja del pueblo») y la mendicidad («uno de los males de las más deplorables consecuencias») como serios problemas que amenazaban el ordenamiento social y exigió la creación de una «cárcel de policía correccional» para encerrar a quienes, no teniendo una «ocupación honesta», preferían vivir «corrompiendo la moralidad pública»[76]. Sugirió además la creación de «casas de corrección para desterrar los hábitos de ocio y refrenar los vicios que embrutecen y degradan al hombre»[77].

La imagen que emerge en ciertos pasajes del libro de Fuentes es la de una sociedad en riesgo de ser destruida por la delincuencia y la falta de moralidad de las clases bajas. Sus descripciones de las danzas y festividades populares son sumamente reveladoras: «odiosos y repugnantes espectáculos» (la danza de moros y cristianos); «movimientos obscenos acompañados de gesticulaciones salvajes [...] horrible cortejo» (la danza de diablos y gigantes); «cuanto tenga de odioso, cuanto de inmoral y de salvaje una diversión en la cual no se respeta ninguna de las consideraciones sociales, pueden decirlo los que alguna vez hayan visitado Lima en los tres días de carnestolendas» (el carnaval). Fuentes pedía que se las reprimiera en nombre de la civilización: «El pueblo no puede civilizarse ni moralizarse mientras se fomenten sus malos instintos, y se respeten costumbre nacidas en tiempos de la barbarie». Para combatir las tendencias volátiles de los grupos plebeyos –«tanto más perniciosas cuanto menor es el grado de civilización de la sociedad a que pertenece»– Fuentes exigía «medidas enérgicas y vigorosas». Solo entonces podrían ser contenidas «dentro de los límites del orden y de la moderación»[78].

Sin embargo, muchas de las afirmaciones hechas por Fuentes no parecen estar sustentadas por las evidencias estadísticas, en particular aquellas referidas a la creciente criminalidad de la ciudad. Fuentes mismo admitió que «la estadística del vicio» no era fácil de compilar, puesto que involucraba actos que la gente estaba interesada en esconder o que en la mayor parte de los casos eran pasados por alto[79]. Sí presentó cifras sobre personas arrestadas y detenidas en las cárceles de Lima, incluyendo su nacionalidad, raza, ocupación y otros detalles, junto con estimados del número de mendigos, tahúres y meretrices. Sin embargo, resulta sumamente difícil inferir a partir de dichas cifras las conclusiones presentadas en su narrativa. En un pasaje revelador, luego de afirmar que «nunca se han cometido tantos crímenes como en el último año»,

añadió que no pudo organizar una compilación estadística de la población en Carceletas (la cárcel local) porque los registros anteriores a 1856 habían sido sustraídos, por lo cual solo tuvo acceso a los de 1857: «pero por el estado que a su vez presentaremos, se verá el crecido número de enjuiciados. Robos y homicidios; he aquí en compendio el catálogo de crímenes cometidos en Lima; precisamente los más graves; precisamente aquellos que más pretenden reprimir todos los gobiernos»[80]. Fuentes usó este razonamiento algo confuso y arbitrario para intentar convencer a sus lectores de que el número de robos y homicidios era más alto nunca, cuando las cifras que realmente presentaba no justificaban semejante afirmación.

Gracias al prestigio que adquiriera con sus incansables esfuerzos por ofrecer un retrato de la historia y el presente de Lima, y a la impresionante cantidad de información reunida en su libro, Fuentes se convirtió en una referencia obligatoria para las autoridades y los observadores, con lo cual contribuyó decisivamente a configurar la forma en que se percibían el delito, el desorden social y la moral pública[81]. Las estadísticas, en el Perú como en otros lugares, no solo se habían convertido en un auxiliar administrativo sino también en una poderosa herramienta para construir la realidad misma[82]. Según historiadores como Simon Cole, hubo una estrecha relación entre el desarrollo de la estadística y el surgimiento de una imagen del delito «no tanto como una serie de actos aislados de voluntad individual [sino] como un fenómeno social organizado, una epidemia», descripción esta que es aplicable a la invención de la cuestión criminal en el Perú a mediados del siglo XIX[83]. Y aunque la manipulación científica de la estadística dejaba mucho que desear, hacia finales de la década de 1850 había ya pasado a ser una fuente de opiniones autorizadas: basarse en las estadísticas ofrecía una pátina de veracidad que era difícil cuestionar.

Las inflexiones y el particular estilo del retrato que Fuentes hiciera de la moralidad de la ciudad tuvieron un tremendo impacto sobre las representaciones posteriores de Lima y sus clases populares. El énfasis en los aspectos morales de la cultura popular, su imagen denigradora de las formas populares de socialización, la distancia que establecía entre las culturas letrada y plebeya y su abierta condena de la cultura popular urbana, que conllevaba el reclamo de su represión y control, fueron todos recibidos con aprobación por los sectores decentes de la población limeña, en especial por quienes eran partidarios de posiciones políticas conservadoras. Fuentes ofreció los medios, el lenguaje y las imágenes que habrían de dar forma al modo en que sucesivas generaciones de observadores interpretarían la sociedad limeña y a sus habitantes. A la luz de esto, no es exagerado decir que la pregunta retórica hecha por el presidente Castilla en 1860 (¿la moral pública explica el crimen?) ya había sido respondida por Fuentes: para él la moral, o mejor aún, la ausencia de ella entre las clases bajas, era mayormente responsable del aumento del nivel de delincuencia estadísticamente

demostrado. Esta formulación, no del todo original pero que ahora se presentaba como respaldada por el arduo trabajo estadístico de Fuentes, habría de persistir durante largo tiempo. Como afirmase el historiador Paul Gootenberg, Fuentes realmente fue, en este como en otros aspectos, el «constructor social de la realidad limeña»[84].

De este modo un nuevo tópico, al que llamo la cuestión criminal, ingresó a los debates intelectuales, políticos y jurídicos en Lima hacia 1860. Aunque los comentaristas no siempre coincidían en los aspectos particulares –en las causas y remedios, por ejemplo–, la mayoría de ellos, liberales y conservadores por igual, compartían una preocupación por las amenazas que el comportamiento ilegal planteaba al orden público, al estado de la civilización y a las perspectivas de modernización de la sociedad peruana. Esta sensación de ansiedad no hizo sino profundizarse en los años y décadas venideros, a medida que esta sociedad experimentaba una serie de calamidades sociales y políticas. Las explicaciones del comportamiento criminal basadas en los rasgos morales y culturales se consolidaron así aún más, pues estaban construidas, nada sorprendentemente, sobre una serie de discursos ampliamente recurrentes sobre las clases bajas y de color que usualmente cristalizaban en un postulado central: su supuesta degeneración moral. La falta de moralidad pasó a ser una condición asociada con las múltiples manifestaciones culturales de las clases populares, las cuales se explicaban por una combinación de factores, entre los cuales uno de los más influyentes era la falta de castigos severos. La degeneración moral era un fenómeno frecuentemente asociado con grupos raciales específicos (negros, indios, chinos), ciertas ocupaciones y grupos sociales (sirvientes domésticos, peones, vendedores ambulantes, la plebe urbana) y algunos espacios urbanos (ciertos barrios de Lima). ¿Qué conexiones había entre los discursos sobre el delito y aquellos sobre la raza, el trabajo y la higiene urbana?

«La podre de Lima»

Que las representaciones del crimen usualmente estén teñidas por imágenes raciales de la sociedad no sorprenderá a nadie. Aunque aún estaban lejos de las teorías del crimen y el comportamiento criminal basadas en los rasgos raciales y biológicos, las formas en que las autoridades, periodistas, diseñadores de políticas y otros comentaristas reflexionaban sobre la delincuencia estaban claramente configuradas por los supuestos, los prejuicios y los estereotipos raciales cuyo origen podríamos rastrear hasta el período colonial. La imagen hegemónica de los indios como seres naturalmente inferiores, reacios a trabajar, intelectualmente defectuosos, supersticiosos, brutalizados por el alcohol y la coca y enemigos del progreso y la civilización no fue un invento de las élites modernizadoras de la segunda mitad del siglo XIX. Desarrollando las teorías de las diferencias raciales que enfatizaban la limpieza de sangre, el lugar de nacimiento y la herencia cultural, los colonos hispanos hacía tiempo definían a los no blancos, y sobre

todo a los indígenas, como racialmente inferiores. Sea que los discursos coloniales los vieran como seres condenados biológicamente a la inferioridad o como humanos necesitados de protección, evangelización y educación, ellos sentaron las bases para la formación de una imagen de los indios como raza inferior. Y si bien había voces discrepantes que atribuían los defectos raciales no a la biología sino a la explotación y el abuso, existía un amplio consenso en torno a la naturaleza inherentemente inferior de las razas de color[85]. Los episodios masivos y violentos como la rebelión de Túpac Amaru de 1780 profundizaron los sentimientos de temor y aborrecimiento hacia los indios, que echarían una larga sombra durante y después de las guerras de independencia. Como varios historiadores han precisado, la independencia peruana no ofreció derechos ciudadanos plenos a grandes segmentos de su población, en particular a los grupos indígenas. El tortuoso proceso de formación del Estado-nación se vio plagado de violentas confrontaciones políticas, penurias económicas, profundas divisiones étnicas y sociales y cismas culturales entre distintos grupos. Los criterios raciales desempeñaron un papel crucial en estas confrontaciones[86]. El dilema fundamental de la nueva clase dominante criolla era cómo cumplir las promesas de derechos e igualdad ante la ley asociados con el liberalismo, en una sociedad en la cual la mayor parte de la población estaba conformada por personas a las que consideraban inferiores. En el Perú, en el período inmediatamente posterior a la independencia, los indios constituían alrededor del 60 por ciento de una población total de más de 1,5 millones de habitantes[87].

Aunque no estuvieron libres de luchas y desafíos, las primeras décadas posteriores a la independencia consolidaron finalmente la exclusión de indios y negros del proyecto nacional criollo hegemónico. En el caso de los primeros, se implantó una combinación de nuevos y viejos mecanismos de control social, político y laboral a fin de mantenerlos en su lugar. Las viejas imágenes de los indios como sujetos degenerados, renuentes al progreso e incapaces de desarrollar actitudes políticas se vieron reforzadas. Por lo general, en consecuencia, fueron excluidos de los debates sobre a quiénes debía concederse la ciudadanía en la nueva república[88]. Como escribió Cecilia Méndez respecto a la opinión que Simón Bolívar tenía de los indios, «culturalmente hablando, en su idea de nación no había lugar para los indios. Indio era un concepto incompatible con el de ciudadano»[89].

Los discursos racistas se fortalecieron en las décadas posteriores a la independencia. Los sentimientos antiindígenas configuraron las agendas y los discursos políticos tanto de los liberales como de los conservadores, pero, al igual que en el caso de las actitudes hacia el delito y el castigo, ellas tendieron a diferir en sus explicaciones y en los remedios propuestos, enfatizando algunas el determinismo biológico, subrayando otras el impacto del medio social e histórico. La mayoría de los ideólogos, comentaristas y funcionarios estatales criollos coincidían en que los indios constituían realmente una

raza degenerada. Esta retórica fue usada en los debates políticos, las construcciones literarias, los informes oficiales, los pedidos de inmigración europea, las explicaciones de los fracasos del país y las justificaciones doctrinales de la exclusión de los indios de la participación política. El discurso racista fue una poderosa herramienta de marginación. Nadie lo expresó con mayor claridad que Herrera, el ardoroso defensor de la pena de muerte, quien en un importante discurso ofrecido el 28 de julio de 1846 usó una justificación racial para descartar la doctrina de la soberanía popular como no apta para la República peruana. A los indios, sostuvo Herrera, se les debía prohibir votar porque su «incapacidad natural» para el razonamiento inteligente hacía que fueran incapaces de tener una ciudadanía plena[90].

Hacia mediados del siglo XIX, una nueva generación de intelectuales modernizantes también se ocuparon de las relaciones entre nación y raza. La mayoría de ellos repitieron las representaciones acostumbradas de indios y negros que tomaron prestadas de autores anteriores, pero algunos comenzaron a apartarse de las teorías sobre la inevitable inferioridad y exclusión de ciertos sectores. Uno de esos intelectuales era Manuel Atanasio Fuentes. Como hemos visto antes, repetidas veces mostró desprecio hacia indios, negros y chinos, a quienes consideraba bárbaros y no civilizados, pero no llegó a adoptar una teoría biológica de la degeneración, subrayando más bien la cultura y la moralidad y postulando que la educación podía convertir a los indios salvajes en ciudadanos modernos, una postura cuyos ecos resonarían en décadas subsiguientes[91]. Incluso parecía celebrar la diversidad racial: «Si la teoría del campo puede aplicarse a las poblaciones, la de Lima tiene por fuerza que ser agradable desde que toda ella no se compone de blancos y no es por lo mismo ni igual, ni monótona, ni *cansadora* de los sentidos»[92].

Otros observadores de este período fueron incluso más allá. Desarrollando ideas de los autores «protoindigenistas» del período colonial, presentaron un argumento que sería enunciado con mayor fuerza a comienzos del siglo XX: la postración de la raza indígena era el resultado del colonialismo y de los abusos cometidos por hacendados, jueces y sacerdotes. Este grupo incluía a autores como Narciso Aréstegui, autor de la novela proindia *El padre Horán* (1848); a empresarios modernizantes como Juan Bustamante, quien fundó en 1867 la Sociedad Amigos del Indio[93]; y a críticos sociales como Juan Espinosa, autor del *Diccionario para el pueblo*. Aunque todos ellos compartían con los observadores más conservadores la idea de que la raza india era débil y degenerada, diferían en que postulaban causas sociales para explicar dicha postración. Ellos por lo general adoptaban ideales republicanos y, como sostiene Carmen McEvoy, estaban convencidos de que la realización del proyecto republicano en el Perú «debía de pasar por la incorporación de los indios como ciudadanos»[94]. Bustamante consideraba «vergüenza de la república, de la civilización y del cristianismo» que los indios

siguieran siendo tratados como siervos feudales. «Ellos no tienen familia, no tienen propiedad, no tienen ni derecho a su persona. Se le obliga a que muera como animal de pelea; se le ultraja a su mujer, se vende a sus hijos, se tala su propiedad como si careciera de dueño»[95]. Espinosa afirmaba que «el indio de hoy no es el *justo* de antes; es humilde, servicial, amoroso, inteligente, cuando le enseñan; pero desconfiado; (y con razón) mezquino, y degradado cuando está en contacto con los pretendidos civilizados que le han usurpado sus naturales derechos». Espinoza culpaba explícitamente a los curas y a las autoridades locales (prefectos y subprefectos) por haber convertido al indio en un esclavo[96]. Francisco Laso sostenía que «la raza indígena [...] es una buena raza [...] Si a los indios se les hubiese considerado como a hombres y no como a bestias [...] habría[n] desplegado sus buenas cualidades, y se hubiera[n] nivelado con el hombre más civilizado»[97]. Con todo, estos «amigos de los indios» ayudaron, de manera bastante irónica, a perpetuar los estereotipos e imágenes negativas de los indígenas, puesto que su punto de partida común era un ideal de civilización que los indios no podían alcanzar aun si experimentasen un proceso civilizador profundo, doloroso y en última instancia fútil. Pero precisamente porque enfatizaban los rasgos culturales y sociales en sus explicaciones del supuesto estado de postración indígena, sus ideas sobre las razas encajaban bien con la forma en que la cuestión criminal había sido construida, esto es, como una cuestión esencialmente moral y cultural.

Las imágenes racializadas de los grupos subalternos no estaban limitadas a indios y negros. Desde finales de la década de 1840, miles de culíes chinos fueron llevados al Perú a trabajar en haciendas, proyectos ferroviarios y las islas guaneras. Sus condiciones de vida eran similares, y tal vez incluso peores, que aquellas padecidas por los esclavos negros. Los chinos se convirtieron en una fuente de creciente ansiedad en lo que respecta al futuro moral, racial y cultural de la población peruana. Aunque inicialmente fueron alabados por los hacendados debido a su supuesta disciplina, obediencia y falta de vicios[98], pasaron a ser luego el blanco de epítetos e insultos raciales, en especial cuando, una vez expirados sus contratos, se mudaron de las zonas rurales a Lima y a otras ciudades costeñas. Los promotores de la inmigración blanca europea los despreciaban porque supuestamente estaban frustrando la marcha del Perú hacia el progreso[99]. Las referencias a ellos usualmente combinaban rasgos físicos y morales, como si su supuesta fealdad reflejara su igualmente «evidente» defectuosa moralidad. En palabras del médico César Borja, los chinos eran imperfectos y débiles, y constituían una «raza caduca y decrépita, viciosa» que aceleraba la «degeneración» de la configuración racial peruana[100]. Al igual que ocurría con los indios, incluso quienes sentían cierto grado de conmiseración por los chinos empleaban argumentos raciales en defensa de ellos. En 1861, un peón chino llamado Achin asesinó al abusivo caporal de la hacienda donde trabajaba y fue sentenciado a 15 años en la penitenciaría. Quienes se oponían a la pena de muerte, como Ignacio Noboa, aplaudieron el hecho de que el juez

hubiese tenido en cuenta las circunstancias atenuantes, esto es, los abusos cometidos por el caporal. Noboa agregó lo siguiente: «un ser abyecto, como un chino, sin corazón, sin ideas, sin conocimiento de nuestras cosas, y acostumbrado a mirar con desprecio la vida de los demás y hasta la suya propia, no puede ser tan responsable de una acción criminal como el hombre ilustrado que todo lo pesa, lo conoce y cede no obstante a sus enconadas pasiones»[101].

Al igual que en el caso arriba citado, los discursos sobre la raza se entrecruzaban con las imágenes del delito y de los delincuentes, y de paso los moldeaban. Como los grupos racialmente inferiores eran retratados casi siempre como viciosos, ociosos e incapaces de efectuar un juicio moral, acusarlos de ser proclives a la delincuencia (cuando no de ser criminales por naturaleza) era una conclusión inevitable. Sebastián Lorente, un respetable educador liberal, presentaba al indio como un ratero compulsivo: «no puede acercársenos sin robar algo, una bagatela, un harapo, un utensilio de que ya no hacíamos aprecio»[102]. Como vimos, los negros también eran representados como proclives al bandidaje y al crimen: puesto que estaban acostumbrados a ser contenidos por sus amos y capataces, una vez terminada la esclavitud su destino era convertirse en delincuentes. En cuanto a los chinos, su estado de abyección y su propensión al vicio los convertía en criminales casi por definición. Fuentes nuevamente expresó estas ideas en forma rotundamente clara: según él, las «condiciones morales» de los chinos comprendían «la depravación de las costumbres, la holgazanería [y] las tendencias al suicidio y al robo»[103].

Sea que la inclinación hacia el crimen y el vicio de quienes no eran blancos se presentara como el resultado de defectos orgánicos o del medio social, lo cierto es que la relación entre los discursos en torno a la raza y al delito estaba mediada de manera central por una intensa preocupación por la disciplina laboral. Como cuestión pública, el delito estaba, en realidad, mucho más asociado a largo plazo con la vagancia y el ocio que con los estallidos de crímenes violentos o contra la propiedad. La falta de una disciplina laboral entre los pobres urbanos de Lima y su supuesta preferencia por el ocio y los vicios eran un tema recurrente en el discurso público[104]. En 1860, el ministro de Gobierno presentó la vagancia como la «lepra del cuerpo social» y la fuente de todo vicio y delito[105]. Las estadísticas fueron nuevamente invocadas para respaldar estas imágenes: según Fuentes, más del 50 por ciento de todos los hombres juzgados por conducta delictiva eran vagos[106]. Se fundaron periódicos como *El Hijo del Pueblo* y *El Trabajo* expresamente para educar a las masas en el trabajo útil y rentable y alejarlas de una vida viciosa y delictiva. *El Trabajo* fue sumamente explícito en lo que respecta a la necesidad de transformar a vagos/delincuentes en trabajadores y los medios para conseguir dicha transformación: «pidamos que se lleve a la escuela de grumetes o a la de cabos y sargentos, o a la escuela industrial, a esa muchedumbre de adolescentes de

varilla de mimbre y botín de hule, que pulula en los mostradores de hoteles y en los salones de billar, y que parecen no tener otra ocupación que seguir un curso de instrucción primaria en la vagancia y de instrucción media en el vicio, para graduarse más tarde en la facultad del crimen político y social»[107]. El jurista Isaac Alzamora consideraba que los vagos eran criminales incipientes a los que debía condenarse a trabajos forzados en lugar de levarlos forzosamente para el ejército (que no necesitaba ser contaminado con la «escoria» de la sociedad) o multarlos (lo que no podía modificar un estilo de vida que se había convertido en su «segunda naturaleza»)[108]. El problema, según muchos de estos autores, comenzaba a temprana edad, de modo que la solución debía ocuparse de la vagancia infantil. Hasta los adolescentes que ofrecían sus servicios «para ayudar a descargar personas y bultos» en distintos lugares de la ciudad eran considerados vagos, y «si no se les corrige, mañana serán criminales»[109]. También se pedía que se disuadiera a las instituciones religiosas de socorrer a mendigos y a los que no tenían casa porque, según estas opiniones, la caridad fomentaba los vicios y «contribu[ía] a la perversión de una parte del pueblo»[110].

Las autoridades estatales ya habían implementado políticas destinadas a cortar la vagancia en la época colonial[111]. Durante el temprano período postindependentista se tomaron distintas medidas para erradicarla, entre ellas el reclutamiento forzado en el ejército y el encarcelamiento de todos los plebeyos que no llevasen un *boleto* o certificado de empleo[112]. El *Reglamento de policía* de 1839 consideraba vagos no solo a mendigos, tahúres y desempleados, sino también a los ebrios y a los artesanos que mostraban una pobre disciplina laboral. En 1855 el boleto se hizo obligatorio para los jornaleros, artesanos y sirvientes domésticos[113], pero esa no fue la solución: *El Comercio* reportó que en las calles de Lima se vendían boletos falsificados[114]. El Código Penal de 1863 no consideraba la vagancia como un delito, pero sí castigaba a los propietarios de casas de juego y otros negocios que permitieran el ingreso de «personas notoriamente vagas»[115]. El *Reglamento de policía* de 1877, que incluía una sección entera sobre vagos y mendigos, estiró la definición para incluir a los artesanos que se ausentaran de su trabajo durante más de una semana. Debía castigarse a los vagos consignándolos al servicio militar en el ejército o en la marina o forzándolos a ejercer «algún trabajo útil para el que tuvieren aptitudes»[116].

Al fusionarse con las representaciones de las deficiencias culturales y la inferioridad racial de las clases bajas, estas ansiedades en torno a la disciplina laboral se cristalizaron en una imagen pesimista de la vida urbana en general, y de ciertas áreas de la ciudad en particular. Sin embargo, esta actitud no se generalizó hasta después de que las esperanzas y sueños de civilizar a la población urbana se desvanecieron. A partir de la década de 1850, la ciudad comenzó a abandonar gradualmente su impronta colonial. Se construyeron una nueva estación de ferrocarril, un mercado, un camal y un manicomio;

en 1856, se inició la construcción de la penitenciaría; en la década de 1860, se sumaron el edificio de la oficina central de correos, una fábrica de gas y un hospicio; y en la de 1870, una serie de edificios y monumentos aún más impresionantes contribuyeron a la modernización de la ciudad: el Palacio de la Exposición, el Hospital Dos de Mayo y la plaza del mismo nombre, entre otros[117]. Un importante paso simbólico en este proceso fue la demolición de la muralla colonial, ordenada en 1866 pero que no se ejecutó sino hasta comienzos de la década siguiente[118]. No resulta sorprendente constatar que los argumentos a favor y en contra de la demolición se concentraron en asuntos de ornato público pero también, de manera importante, en cuestiones de seguridad. Todavía en 1860 los funcionarios públicos consideraban que la muralla era un instrumento importante en el control del crimen[119]. Cecilia Méndez subraya el hecho de que la demolición de la muralla y la erección de la penitenciaría de Lima ocurrieron casi simultáneamente[120]. Aunque es posible que la población de la capital haya experimentado cierta sensación de liberación una vez demolida la muralla, resulta revelador que muchos se sintieron desprotegidos de los bandidos y los salteadores de caminos[121]. Al mismo tiempo, se construyeron paseos y bulevares, y los monumentos y esculturas públicas comenzaron a proliferar, reflejando, como sugiere Natalia Majluf, un esfuerzo consciente por inculcar un nuevo orden civilizador. Las nuevas calles y plazas fueron imaginadas como símbolos de estabilidad, orden y progreso[122]. Al igual que en otras ciudades de Latinoamérica, este impulso modernizador respondía a un deseo de transformar Lima según los paradigmas urbanos y culturales europeos. Nadie expresó esto con mayor claridad que el anónimo autor que celebró que el nuevo y presuntamente patriótico monumento en honor a los héroes del combate naval del 2 de mayo de 1866 hubiera sido hecho en un país extranjero: «Bronce y mármol teníamos con profusión en las minas de nuestros Andes y en las canteras de nuestros cerros; pero, ¿y el arte, el soplo vital, el alma? No existía entonces, no existe todavía entre nosotros, –privilegio es de otros pueblos–, don que nos será concedido después del trascurso de muchos años. Era necesario buscarlo muy lejos allá donde vive el calor del entusiasmo, de la educación, de las tradiciones, y transfigurado por la inspiración»[123].

Las grandes esperanzas que las élites modernizadoras tenían en estos proyectos civilizadores urbanos se vieron complicadas por diversos obstáculos. En primer lugar, las iniciativas públicas y privadas enfrentaron enormes problemas financieros al ingresar el Perú a la era posguano y pasar de la «prosperidad falaz» a la triste realidad de un tesoro vacío y una economía en ruinas[124]. Segundo, el mensaje supuestamente civilizador no fue generalmente percibido por los supuestos receptores. Los grupos plebeyos resultaron ser resistentes cuando se trataba de sus propias tradiciones culturales, erigiendo obstáculos bastante serios a los planes de la élite de convertir Lima en un remanso ordenado y pacífico. Y tercero, la modernización material de la ciudad no incluía esfuerzo alguno por mejorar las condiciones de vida de los pobres de Lima.

Grandes sectores de la población siguieron viviendo en condiciones sumamente precarias, ocupando las peores zonas residenciales de la capital.

Gradualmente, a medida que la sociedad peruana era azotada por una serie de calamidades sociales y políticas, la ciudad de Lima pasó a ser objeto de informes, descripciones y otros tipos de representaciones que enfatizaban sus males. Lima fue representada como un organismo enfermo, sus problemas sociales como patologías y la población desadaptada como células cancerosas que debían ser extirpadas. El asesinato del presidente José Balta y los subsiguientes motines urbanos de 1872, el asesinato del expresidente Manuel Pardo en 1876, la severa crisis económica que siguió a la era del guano y en especial los desastrosos efectos de la Guerra del Pacífico, todo ello incrementó la sensación de frustración y decadencia entre sectores importantes de la población de Lima, en especial de su élite social y económica. La ocupación chilena de la capital entre 1881 y 1883, precedida por violentos motines, dislocó aún más la sociedad limeña[125]. La sensación de ruina, decadencia e impotencia fue profunda antes, durante y después de la guerra. Los estereotipos raciales, en especial los referidos a indios y chinos, alimentaron la noción de que estos dos grupos tuvieron la culpa de la catastrófica derrota peruana ante Chile. Como subrayó Heraclio Bonilla, la guerra destruyó no solo la arquitectura física de la ciudad sino también, lo que era más importante, los medios institucionales y políticos de control que la oligarquía civilista había construido, forzando así un «reordenamiento institucional de la sociedad»[126].

Un ingrediente importante de esta serie de imágenes sumamente negativas de la ciudad fue la frustración producida por la creciente toma de conciencia de que la sociedad limeña no era lo suficientemente civilizada como para equipararse con sus idealizados modelos europeos. A pesar de que en 1867 Fuentes todavía podía presentar un cuadro optimista, aunque sesgado y racista, de la ciudad («La sociedad de Lima nada tiene que envidiar a la de la más adelantada capital»), unos cuantos años más tarde dicha sensación de optimismo desaparecería[127]. El «abatimiento moral» del país fue explicado recurriendo, entre otros factores, a las tendencias criminales y la conformación racial de las clases populares. El jurista Paulino Fuentes Castro exigió que se tomaran enérgicas medidas contra la vagancia como un medio para superar la postración moral[128]. Un artículo titulado «Causas que han traído la ruina al Perú» atribuía la decadencia del país no a la guerra extranjera o a la mutilación del territorio sino a la «bastardía étnica»[129]. Aunque los escritos de comienzos del siglo XX mostrarían una mayor preocupación con la higiene urbana (véase el capítulo 2), las representaciones de la ciudad anteriores a 1900 ya mostraban aquella combinación de voyerismo, repugnancia y conmiseración típica de los autores higienistas. Áreas específicas de la ciudad fueron descritas como espacios poblados por peligrosos grupos criminales y la imagen de «ciudades dentro de la ciudad» ganó preeminencia.

Dos artículos que un tal «Dr. Vidrieras» escribiera con el título común de «La podre de Lima» son un típico ejemplo del desprecio que la élite tenía por algunas áreas y grupos específicos de la ciudad. En uno de ellos, el autor describió su visita al barrio chino de Lima, un conglomerado de unidades residenciales, restaurantes, burdeles y fumaderos de opio que se convirtió en uno de los blancos favoritos de la denigración de las clases populares de Lima por parte de la clase alta. «¿Conoce alguien *la ciudad de los chinos*?», preguntaba el autor. Allí, «la higiene está proscrita, la moralidad anulada, y donde todos los vicios congregados mantienen a la bestia en el pleno desenfreno de sus impulsiones». Se había dirigido al barrio chino «lleno de asombro y de repugnancia», solo para toparse con «fisonomías anormales, que podrían enriquecer los archivos de Lombroso». Luego describió tanto el entorno físico («cada casa es una pocilga») como la población que lo habitaba: «agrupadas en largas tarimas hállanse las mujeres, desgreñadas, tiradas indolentemente en obscenas situaciones», «hombres de ojos extraviados o de extremada viveza, asimétricos, de raras orejas, nariz remangada y abierta, brazos desproporcionados»[130]. La moralidad de los chinos, según el autor, era congruente con sus imperfecciones físicas. Los pedidos de su reubicación forzosa fueron el corolario habitual de esas representaciones tan negativas. Años más tarde, en 1909, el callejón de Otaiza, una de las unidades residenciales más vilipendiadas del barrio chino, fue demolido por orden de la municipalidad de Lima[131].

Los barrios de clase baja habitados por negros y mestizos también fueron descritos, una y otra vez, como indicativos de un estilo de vida que escandalizaría a todo visitante extranjero (esto es, civilizado). Un artículo en *El Comercio* hizo una relación sórdida de las miserias de Lima: La entrada a Lima, que hasta 1840 se hacía por la hermosa portada del Callao, y que después hasta 1878 se hizo en ferrocarril, por los fabriles barrios de San Jacinto, se hace hoy día, en gran parte, por los sitios traseros de la ciudad; por la Lima de los muladares, de las curtiembres, de la feísima espalda del Camal; y después por las más horrorosas y viejísimas fachadas, de las construcciones urbanas que colindan con la vía férrea. Esto por el lado sur; por el lado norte, se tiene las colinas de basura, el barrio asqueroso y antipático del Tajamar, los restos de un puente cargado en sus estribos por toneladas de materia fecal humana, los escombros de unos baños, la fachada del más asqueroso y descuidado puente de piedra que existe en el mundo, y por último el cauce de un río sin canal, con aguas infectas estancadas, y que sirve de baño al pueblo menesteroso.

Los visitantes, añadía el reportero, se preguntaban con desdén: «¿Esto es Lima?»[132].

Lo que estaba ocurriendo aquí era la consolidación de un discurso que identificaba áreas específicas de la ciudad y, concomitantemente, grupos sociales y raciales específicos, que requerían vigilancia, higiene e incluso represión para alcanzar el

civilizado orden urbano con el cual muchos soñaban[133]. Esto a su vez impactó en la forma en que los criminólogos construyeron sus visiones de la delincuencia y los métodos punitivos que los funcionarios estatales habrían de proponer e implementar.

En su informe sobre la «ciudad de los chinos», el Dr. Vidrieras se refirió a los varones de este grupo como sujetos pertenecientes a «los archivos de Lombroso». Con ello quería sugerir que se trataba de seres degenerados, anormales, repulsivos y de naturaleza criminal. De hecho, la descripción que ofrece de sus rasgos físicos semeja estrechamente las representaciones cada vez más comunes de los delincuentes que incluían los tratados europeos contemporáneos sobre la criminalidad. Sin embargo, muy pocas personas en Lima debieron de haber entendido la metáfora, pues no eran muchos los que habían oído hablar del famoso médico italiano Cesare Lombroso. Apenas unos cuantos años después, este sería uno de los expertos más citados en los escritos y representaciones del delito y de las clases populares. Hacia comienzos de la década de 1890, la nueva ciencia del criminal importada de Europa comenzó a atraer la atención de médicos, abogados, higienistas y autoridades estatales. Con ella llegó la promesa de nuevas formas científicas de ver y explicar el delito, así como unas novedosas y más efectivas políticas de control de la criminalidad.

Capítulo 2

La ciencia del criminal (1890-1930) Hacia finales de la década de 1880, el lenguaje de los expertos que escribían sobre el delito en Lima comenzaba a cambiar. La transformación se inició en las aulas universitarias y en los grupos profesionales, en especial las asociaciones de abogados y médicos, pero poco después comenzó a influir en la forma en que los diseñadores de políticas, las autoridades, los periodistas y hasta la gente común hablaban sobre el delito y los criminales. Términos tales como *criminal nato*, *antropología criminal*, *peligrosidad* y otros más se hicieron de uso común. Los médicos y psiquiatras influenciados por la criminología positivista comenzaron a desempeñar un papel mucho más prominente en el análisis del delito y en la formulación de políticas penales. Las prisiones fueron visitadas por investigadores interesados no solo en evaluar la disciplina interna de ellas sino también, y cada vez más, en describir y analizar las características

físicas y clínicas de la población carcelaria. El análisis científico del delito prometía cambiar la forma en que se percibía y explicaba el crimen. Tal como sucediera en Europa, los autores peruanos se enfrascaron en discusiones sobre las causas del comportamiento delictivo. La importancia relativa que los factores biológicos y sociales tenían para explicar la predisposición al crimen fue objeto de intensos debates. En las contribuciones que hicieron a esta cuestión específica, así como a la formulación de interpretaciones más amplias de la conducta criminal, los criminólogos también presentaron argumentos que se ocupaban de la construcción política, cultural y racial de la comunidad nacional peruana. Estos discursos sobre la criminalidad abren una ventana para explorar no solo los diversos argumentos en torno al delito y la «anormalidad» social sino también, y de manera aún más importante, sobre su articulación con las teorías y doctrinas de la diferencia racial y la identidad nacional.

Este capítulo se enfoca en el estudio de la adopción y el temprano desarrollo de la criminología positivista en Perú. Los criminólogos peruanos rechazaron las versiones más radicales del determinismo biológico a favor de una interpretación «social» del delito que enfatizaba aquellos elementos sociales que estaban relacionados de modo más cercano con las características «morales» de los grupos populares y de color, reforzando así la imagen tradicional del delito como un fenómeno moral asociado con ciertos grupos raciales, sociales y ocupacionales (véase el capítulo 1). El corpus de conocimiento así producido generó imágenes específicas del crimen y los criminales que a su vez influirían tanto en las políticas de control de la delincuencia como en los enfoques de los regímenes penales, temas que se explorarán en capítulos posteriores. Al igual que sus homólogos en otras sociedades, los criminólogos peruanos se esforzaron por construir la noción de una clase criminal claramente identificable, separada de, y enfrentada a, la comunidad de ciudadanos respetuosos de la ley. Esta separación incluía una demarcación clara entre el mundo del delito y el del trabajo, lo cual tuvo como resultado la percepción común de que la cuestión criminal no era tan amenazante en el Perú como en otros países de Europa y Latinoamérica, donde esta se fusionó con otros problemas sociales (dando así nacimiento a la llamada *cuestión social*) y produjo una enorme ansiedad por una posible zozobra social. Esta construcción discursiva de un

problema criminal relativamente menor fue pese a todo configurada por (y contribuyó a reforzar) formas autoritarias de percibir a las clases populares que sirvieron para sustentar las políticas excluyentes que venían siendo implementadas por el Estado modernizador.

La adopción y el desarrollo inicial de la criminología en el Perú La criminología, la ciencia de lo criminal, surgió en Europa durante el último cuarto del siglo XIX. Según algunos autores, sus orígenes se hallan en los intentos efectuados a finales del siglo XVIII de identificar las causas del crimen, a partir de lo cual ella evolucionó gradualmente hasta cristalizarse finalmente, hacia finales de la década de 1870, en lo que se denominó «antropología criminal», tal como la formulase el médico italiano Cesare Lombroso[134]. **Otros investigadores no niegan la importancia de estos antecedentes, pero enfatizan las diferencias radicales en la naturaleza y objetivos de la criminología como un discurso científico y los enfoques previos, menos articulados, sobre el estudio del delito. David Garland sostiene, por ejemplo, que los intentos efectuados a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX por explicar el delito forman parte de una «genealogía de la criminología» pero que «no constituían» todavía una disciplina. Garland identifica a la criminología con un modelo específico de investigación acerca de los criminales cuyos cimientos se encuentran, por un lado, en la idea de que la ciencia puede brindar explicaciones racionales del comportamiento delictivo y, por otro, de que era posible separar –con fines cognitivos y políticos– a los criminales de quienes no lo eran. Según Garland, ambos supuestos estaban ausentes en los enfoques anteriores[135]. La criminología positivista –se la considere la primera ciencia de lo criminal o apenas una versión moderna de ella– se desarrolló con base en una serie de tradiciones intelectuales y científicas del siglo XIX como la frenología, la fisiognomía, la estadística, las teorías evolutivas de Charles Darwin y Herbert Spencer, la convicción positivista de que los fenómenos sociales podían ser explicados con leyes, y el desarrollo de registros estatales sobre delincuentes y prisiones. Su influencia se expandió rápidamente por todo el mundo, convirtiéndose, en menos de una década, en una de las construcciones intelectuales más atractivas del siglo XIX[136]. La criminología llegó a un público bastante más amplio que el pequeño círculo de especialistas, puesto que ella ofrecía no solo nuevas interpretaciones del delito y de los criminales sino además explicaciones científicas de diversas cuestiones sociales.**

El nacimiento de la criminología positivista está generalmente asociado con la publicación, en 1876, de *L'uomo delinquente*, de Cesare Lombroso[137]. Este se hizo famoso por formular dos argumentos muy claros: primero, que había seres humanos cuya predisposición al crimen era innata o heredada (la idea del criminal nato)[138]; y, segundo, que era posible identificar criminales reales o potenciales observando algunas de sus

características físicas (lo que Lombroso denominaba «estigmas» [*stigmata*]). Para él, se trataba de personas «atávicas» que representaban una regresión a otras etapas más imperfectas e incluso primitivas de la evolución humana, idea que lo llevó a establecer una asociación entre criminales, pueblos «primitivos» y grupos raciales no blancos[139]. De hecho, Lombroso relacionó explícitamente las características biológicas de los criminales con las de las «razas inferiores» de Bolivia y Perú e incluso con las de ciertos animales como simios, roedores y aves[140]. Aunque sus ideas eran más complejas y posteriormente matizó un poco sus afirmaciones –aceptando, por ejemplo, que los criminales congénitos solamente constituían una fracción de la población criminal–, su teoría del criminal nato se convirtió en el centro de uno de los debates más apasionados en la historia de las ciencias humanas. Sus libros y artículos –junto con los de sus discípulos, en especial Enrico Ferri y Raffaele Garofalo– circularon en todo el mundo y fueron ampliamente usados para generar conocimientos sobre los delincuentes en sociedades sumamente distintas. La criminología lombrosiana fue duramente criticada por un grupo de académicos franceses, particularmente Gabriel Tarde y Alexandre Lacassagne, quienes rechazaron la idea del criminal nato y enfatizaron la naturaleza social del crimen. «Las sociedades», decía Lacassagne, «tienen los criminales que se merecen»[141]. Ambas escuelas se enfrentaron en una serie de conferencias internacionales y estos debates llegaron a, y fueron reproducidos en, el resto del mundo[142]. En América Latina, las discusiones legales, sociales y médicas sobre el delito y los criminales comenzaron a incorporar las premisas de la criminología positivista desde finales de la década de 1880. Abogados y médicos, en particular, leían ávidamente los tratados criminológicos en lenguas extranjeras, diseminaban las nuevas ideas en artículos de periódicos y revistas, redactaban tesis universitarias y debatían vehementemente las ideas de Lombroso y sus seguidores. Las reacciones a la criminología lombrosiana variaron ampliamente, abarcando desde el respaldo acrítico hasta el rechazo furibundo. Aunque las investigaciones criminológicas mismas demoraron en materializarse, algunos autores, entre ellos Carlos Roumagnac y Julio Guerrero en México, Nina Rodrigues en Brasil, José Ingenieros en Argentina y Fernando Ortiz en Cuba, produjeron estudios cuyo valor e interés iba más allá del tema de la criminalidad y el comportamiento delictuoso y tocaban los problemas de la identidad nacional, la política y la raza. Aunque el impacto de la criminología positivista sobre la legislación penal y la reforma carcelaria no se sentiría sino hasta más tarde, los discursos públicos y oficiales sobre el delito, la raza, la sexualidad y cuestiones afines fueron enormemente influidos por las teorías criminológicas desde, al menos, comienzos de la década de 1890[143].

En el Perú, juristas y médicos reprodujeron estos debates[144]. Autores como el abogado Javier Prado sugirieron que el eje de la ciencia criminal debía desplazarse del crimen al delincuente, su constitución física y moral, y la influencia que la naturaleza y el medio social tenían sobre su personalidad. Prado consideraba asimismo que la herencia era un

factor importante en la configuración no solo de la constitución física y moral del sujeto sino también del perfil del carácter nacional[145]. Paulino Fuentes Castro, un abogado y director del periódico legal *El Diario Judicial*, fue probablemente el propagandista más entusiasta de las nuevas doctrinas. Fuentes Castro afirmó rotundamente que «el fenómeno de la criminalidad es un estado de guerra de cierta clase de hombres, que han quedado rezagados en la evolución de los sentimientos de humanidad y de probidad, contra el resto, que es la mayoría social [...] El delito no es un acto humano aislado, sino la revelación de una existencia inadaptable al medio social»[146]. El médico Abraham Rodríguez emprendió un proyecto de investigación típicamente lombrosiano: se dirigió a la penitenciaría de Lima para medir los atributos físicos de los convictos para así identificar los rasgos del criminal nato peruano. Rodríguez sostuvo que su estudio corroboraba las afirmaciones de Lombroso acerca del «índice cefálico» del hombre criminal, establecía una conexión entre los tipos de crimen y la «capacidad craneana» y establecía que los criminales natos de la penitenciaría de Lima comprendían alrededor del 10 por ciento de su población[147].

Más importante aún es el hecho de que estos tempranos criminólogos peruanos establecieron una clara asociación entre la noción lombrosiana del criminal nato y la población indígena peruana. Rodríguez concluyó que todos los criminales congénitos peruanos presentaban una «deformación plagiocefálica» a la que él identificaba como una señal de criminalidad congénita entre los indios. Fuentes Castro, en una serie de retratos de delincuentes célebres, incluyó los de asesinos indígenas como Manuel Peña Chacaliaza, quien fue presentado como «uno de los más perfectos tipos del delincuente nato», un «verdadero fenómeno moral, contrario a la ley de la especie» y como una persona cuya fisiognomía revelaba, entre otras anomalías, una «asimetría facial bien caracterizada»[148]. Pedro Laredo, un criminal indígena de los Andes centrales, fue descrito por el mismo autor en los siguientes términos: «Las demacraciones, resultado del uso consuetudinario del alcohol, presentan su fisonomía como la de un verdadero imbécil, muy cercano al idiotismo de los irresponsables [...] [sus rasgos] muestran evidentemente una enajenación mental que lo aproxima a la línea de los depravados ingénitos, o sea a los criminales de organización. Su inteligencia guarda armonía con su condición física». Su ocupación como arriero en la sierra andina, proseguía Fuentes Castro, donde Laredo solo tenía la compañía del cielo, las montañas, las frígidas alturas y unos cuantos animales salvajes, explicaba su falta de inteligencia y su «atroz salvajismo». Al estar en contacto tan estrecho con la naturaleza, los indios representaban así una regresión a formas de vida menos civilizadas. Y, como tales, eran una ilustración perfecta de lo que Lombroso había presentado como verdaderos tipos criminales[149].

Figura 2
Manuel Peña Chacaliaza



De Ismael Portal, *Del pasado limeño* (Lima: Librería e Imprenta Gil, 1932).

Pero el entusiasmo por las teorías del médico italiano se enfrió con bastante rapidez. Incluso Javier Prado se distanció del extremo sesgo biológico de la criminología lombrosiana y, citando a Tarde, pidió que se prestara más atención a los factores sociales de la delincuencia[150]. Numerosas voces escépticas rechazaron la idea del criminal nato y argumentaron en favor de un enfoque verdaderamente social de la criminalidad, aunque esto usualmente se hacía en forma abstracta y teórica. En algunos casos simplemente repetían lo que Tarde y otros habían escrito al desacreditar el extremismo biológico de la criminología lombrosiana[151]. Pero unos cuantos autores sí produjeron análisis relativamente valiosos, presentando elementos que sirvieron para reinterpretar el delito en el contexto de la sociedad peruana.

Plácido Jiménez, por ejemplo, un graduado de la Universidad de San Marcos, rechazó firmemente las teorías de Lombroso, aunque sí aceptaba que había seres humanos de «perversidad ingénita» a quienes no se podía reformar con un tratamiento penal[152]. Aun así consideraba, siguiendo a Tarde y Lacassagne, que «los factores sociales son los que más influyen en la producción de la delincuencia en general», un hallazgo que encontró «consolador» porque «el legislador puede mejorar las condiciones de la sociedad, introducir reformas saludables y disminuir así la fecundidad del crimen»[153]. Las causas sociales del delito a las que Jiménez se refería y cuya lista tomó prestada de un catedrático de derecho penal, incluían «el juego, el alcoholismo, la prostitución, la vagancia, el pauperismo, la impunidad de los crímenes de alto rango y la falta de

justicia y de respeto a la ley en las eminencias de los poderes públicos»[154]. Jiménez enfatizaba, como lo hicieran antes Fuentes y Gutiérrez, que la decadencia moral de las clases populares conducía a una vida criminal: «En las últimas capas de la sociedad, está muy embotado el sentido moral, el criterio de la justicia es ahí muy embrionario, y jamás se detienen a mirar el porvenir»[155]. En consecuencia, proponía una intervención estatal más decidida para así contener el desorden social y la desmoralización: la «prevención social» sería el único medio para acabar con el delito. De hecho, usando una metáfora que se iba haciendo cada vez más común, Jiménez creía que la prevención social era una cuestión de «higiene social», pues la delincuencia era comparable con una enfermedad contagiosa. La prevención, añadía, debía concentrarse especialmente en los niños y debía incluir la educación, la creación de agencias de caridad y asistencia, la promoción de los sentimientos religiosos, la eliminación de la impunidad, la búsqueda de la estabilidad política, la mejora de las leyes y la represión de la ebriedad y el juego[156].

En las décadas de 1910 y 1920, otros autores producirían retratos del crimen con bases empíricas que se alejaban de las teorías simplistas de la criminología biológica. Aunque los factores biológicos y hereditarios no fueron eliminados del todo, estos autores prestaron una atención más seria a otros que iban desde la desmoralización a la explotación, de la ignorancia a la imitación y de la prostitución al consumo de licor. José Antonio Encinas, por ejemplo, postuló vigorosamente que los indios peruanos no eran degenerados y que una gran parte de los delitos por ellos cometidos eran una respuesta a causas sociales, es decir, a la explotación[157]. El médico y psiquiatra Hermilio Valdizán, quien sostenía que el crimen debía ser tratado como un fenómeno biológico, admitió que los factores «exógenos» eran particularmente importantes en el caso de la criminalidad indígena[158]. El criminólogo Víctor Modesto Villavicencio sostuvo que todos los defectos atribuidos al indio –crueldad, ociosidad, ignorancia y falta del sentido del honor, la nacionalidad y la clase– se debían a un sistema feudal explotador: «Todas sus aptitudes y energías no las ha empleado para hacerse un tipo biológico de selección, sino para defenderse desesperadamente de la opresión económica, política y social que ha pasado sobre sus hombros»[159]. Pero si bien estos y otros autores cuestionaban las simplistas explicaciones biológico-raciales del comportamiento social y algunos de ellos rechazaban explícitamente la idea del indígena como un criminal nato, nadie cuestionaba las imágenes establecidas de los indios como seres degenerados proclives a cometer crímenes violentos y hasta salvajes[160]. Como veremos luego, sin embargo, estas imágenes estaban enmarcadas dentro de nociones sobre la raza que disminuían el énfasis en sus dimensiones biológicas.

La falta de entusiasmo por las explicaciones biológicas del delito respondía a múltiples causas. Para comenzar, el momento del arribo de la criminología al Perú ayuda a explicar dichas reacciones. Hacia finales de la década de 1880, las críticas a la escuela

lombrosiana ya tenían una fuerte presencia en círculos internacionales, de modo que cuando ella llegó a Latinoamérica tuvo que competir con las teorías del delito que enfatizaban el «medio social». El rechazo de la criminología biológica estuvo asimismo relacionado con el desarrollo de las ideas raciales entre las élites intelectuales peruanas. Como vimos en el capítulo 1, aunque las imágenes racistas marcaron profundamente los comentarios sobre el delito, la moral y el desorden social durante la mayor parte del siglo XIX, las formas biológicas de racismo no fueron dominantes. Los retratos de indios, negros y chinos como *biológicamente* inferiores no fueron muy comunes. *El porvenir de las razas en el Perú*, un escrito abiertamente racista de Clemente Palma, figura como una versión extrema pero aislada de las ideas racistas en el Perú[161]. Inspirado por las doctrinas de Gustave Le Bon y otros autores europeos, Palma suscribía la idea de que la humanidad estaba dividida en razas superiores e inferiores. Sostenía que todas las razas que habían llegado a conformar la población peruana eran defectuosas: indios, negros y chinos eran inferiores, en tanto que los españoles, que eran «sano[s] aparentemente», llevaban consigo los «vicios de raza que resultaron de su cruzamiento con la raza africana, que, por ocho siglos, vivió en España»[162]. Los mestizos, añadía, carecían de «esa fuerza de unidad que es necesaria para constituir el alma de una nacionalidad»[163]. Convencido de que «los elementos [raciales] inútiles deben desaparecer, y desaparecen»[164], Palma predecía que indios y negros se irían desvaneciendo debido al mestizaje («el empuje lento de la civilización irá exterminando, poco a poco, a esta raza infeliz [la india] inepta e incapaz del desarrollo de mentalidad y voluntad propios de las verdaderas naciones»), en tanto que la raza china habría de desaparecer debido a sus propias debilidades biológicas. Pero incluso Palma ofrecía una salida a esta supuesta deficiencia racial. Para él, la «raza criolla», un término que empleaba de modo algo confuso para referirse a los mestizos peruanos, era el único grupo racial que tenía futuro, pero a condición de que se fusionara con una raza que le ofreciera aquello de lo que carecía: personalidad[165]. El mestizaje con la «raza alemana» (una «raza viril») era la solución que proponía.

Sin embargo, la mayoría de los comentaristas peruanos sobre cuestiones raciales adoptaron otras posturas. Para ellos, indios y negros eran redimibles no necesariamente a través del mestizaje biológico (ciertamente una posibilidad deseable) sino sobre todo por la redención social y cultural. La educación pasó a ser la supuesta base de la regeneración del indio[166]. Para las décadas de 1880 y 1890, los intelectuales peruanos habían comenzado a repensar algunas de las típicas teorías raciales darwinistas, manifestando claramente su preferencia por «beneficiar y rescatar antes que suprimir y eliminar a los indios»[167]. Los argumentos que descartaban el racismo biológico ganaron preeminencia. Los debates políticos e ideológicos de comienzos del siglo XX en torno al destino de la nación peruana y el papel que los distintos grupos sociales y étnicos tendrían en su construcción, también comenzaron a reflejar esta influencia. La mayoría

de las intervenciones enfatizaban la contribución potencial de indios y mestizos –negros y chinos no eran de especial interés para estos autores– a la creación de la comunidad nacional. Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, para mencionar solo a los más prominentes, fueron más allá y presentaron el problema indio como la cuestión social central del Perú contemporáneo y a la población indígena como representativa de la «verdadera» nacionalidad peruana. La llamada «cuestión indígena», decían, no era un problema racial sino social, cuya solución exigía reformas sociales y políticas radicales[168]. Al igual que ocurrió en otros países latinoamericanos como México, Brasil y Cuba, el racismo biológico debía rechazarse para que hubiese alguna esperanza para el futuro de la nación peruana, no importa cuán inclusiva o excluyente fuera a definirse dicha entidad. Más allá de las esperanzas de una masiva inmigración europea y el concomitante «blanqueamiento» de la población, que jamás se plasmó, los ideólogos peruanos debían dar cuenta del hecho evidente de que el futuro del país habría de labrarse con aquellos grupos raciales que constituían la mayor parte de la población[169]. La baja reputación del racismo biológico radical ayudó así a desacreditar las explicaciones biológicas del delito. En palabras de Villavicencio, «dar como absolutas e irremediables las deficiencias del indio, sería renunciar al gran propósito de incorporarlo a la civilización. La ciencia ha realizado tantos prodigios, aun con los mismos anormales, que no hay que perder la esperanza de perfeccionarlo. De otro modo tendríamos que decidirnos por su exterminio. Y diezmar a la raza indígena sería desaparecer al Perú como organismo biológico»[170].

Como parte de la misma conciencia intelectual, pero conectado también a una tradición literaria anterior, el indigenismo ayudó a configurar las posturas que los criminólogos adoptaron con respecto a las explicaciones biológicas del delito, en especial en lo que se refiere a la delincuencia indígena. Los indigenistas subrayaban el legado pernicioso del colonialismo, la explotación de los indios a manos de los gamonales y las autoridades locales, y la miseria, el alcoholismo y el abuso de la coca como algunas de las causas más importantes de la degeneración o postración de la raza indígena[171]. Los ecos de estas afirmaciones aparecen en los escritos de criminólogos que enfatizaban tanto las deplorables condiciones de vida como la explotación que sufrían como factores por considerar al explicar la criminalidad indígena[172]. Aún más importante era el hecho de que el énfasis dado por los indigenistas a las posibilidades de redención de la raza indígena ayudó a desacreditar las afirmaciones de una proclividad biológica esencial e inmutable a la violencia y el crimen de parte de los indios. Si bien los indigenistas por lo general adoptaban posturas paternalistas, esencialistas y hasta racistas de los pueblos y las culturas indígenas, y aun cuando su enfoque tendía a homogenizar a los indios como si pertenecieran a una sola cultura uniforme, ayudaron pese a todo a contrarrestar las ideologías basadas en un racismo biológico extremo[173]. Para los indigenistas, al igual que para los neopositivistas de una generación anterior, el rescate de las razas

degeneradas no dependía del mestizaje biológico con las razas superiores sino de la educación y la reforma moral[174].

De este modo, la obliteración relativa del racismo biológico y el rechazo de las explicaciones biológicas del delito eran tendencias intelectuales que se reforzaban mutuamente, pero es igualmente importante el hecho de que ambas dejaban espacio para la prolongación de discursos racistas más sutiles o menos extremos, pero no menos efectivos. De hecho, era más frecuente que los criminólogos peruanos incorporasen la raza o los rasgos raciales a sus listas de los factores que contribuían a la criminalidad[175]. Los retratos de indios, negros y chinos presentados por los criminólogos influenciados por el indigenismo fueron siempre negativos y distantes. Por ejemplo, el indigenista Villavicencio hizo este retrato del indio contemporáneo: «El indio de hoy es el de tiempos de la Colonia. El proceso de su vida, no ha experimentado cambios sensibles. Vive animalizado por la rutina, sin aspiraciones de ninguna especie. Su ideal consiste en acumular unos cuantos centavos, que son el trasunto de un esfuerzo embrutecedor, para gastarlos en una borrachera dominguera. Si se eleva sobre sus semejantes, es para convertirse en verdugo»[176].

La mayoría de estos autores compartían la noción de que la raza era una amalgama de características biológicas, hereditarias y culturales tales como actitudes, normas, valores, costumbres, lenguaje y moralidad. Como observó Marisol de la Cadena, «[d]esde comienzos del siglo XX, los peruanos (intelectuales y no intelectuales) han tendido a definir la raza con alusiones a la cultura, el alma y el espíritu, que se creía eran más importantes que el color de la piel o cualquier otro atributo corporal para determinar el comportamiento de grupos de personas, esto es, su raza»[177]. Aunque este giro no implicaba la eliminación del racismo, sí quería decir, entre otras cosas, que los grupos raciales peruanos eran considerados capaces de mejorar, fundamentalmente a través de la educación obligatoria y la eliminación de algunos de los factores que estaban causando su degeneración. Dado que la élite peruana no podía presentarse a sí misma como parte de una raza blanca superior (después de todo, no habría calificado como tal en el canon racista europeo)[178], adaptó su lógica para construir una distancia entre ella y las poblaciones por la cuales, después de todo, sentía poca empatía. Lo que habría de establecer la diferencia eran la cultura, la moral, los modales y el gusto.

Al presentar a las clases populares como carentes de moral, hábitos de laboriosidad y educación, la élite peruana justificaba un enérgico control social y unas políticas excluyentes, transformando así la guerra contra el delito en una campaña a favor de una reforma moral autoritaria, prolongando un viejo discurso prepositivista. En otras palabras, las llamadas «causas sociales» del delito fueron construidas de modo tal que los delincuentes fueron nuevamente culpados por los delitos que cometían. De hecho, la

línea separadora entre las condiciones sociales de existencia y la moral interna de las clases populares siguió siendo muy tenue. Una ilustración de dicho estado difuso lo ofrece la forma en que los expertos trataron la higiene y el consumo de alcohol y los vincularon con el mundo del delito.

La higiene, el delito y los pobres de la urbe

El tema de la higiene social ciertamente no era nuevo. La preocupación de la élite por las condiciones de vida y la salud de la población, y sobre todo por los efectos que ellas tenían sobre el ordenamiento social, contaba con una larga historia. En las últimas décadas del siglo XIX y sobre todo después de 1895, como ha reconstruido David Parker, los higienistas se asignaron a sí mismos la tarea de diagnosticar y proponer soluciones a los problemas asociados con la vivienda, la salud pública y las condiciones de vida de la población urbana, en especial de sus sectores más pobres. Una combinación de buenas intenciones y actitudes racistas y autoritarias caracterizaron esas iniciativas[179]. La falta de higiene fue vinculada discursivamente con la degeneración de ciertas razas, la propagación de enfermedades epidémicas, la desmoralización de grupos sociales específicos y, nada sorprendentemente, con la propagación de tendencias criminales entre los sectores pobres urbanos[180]. Se consideró, por ejemplo, que los patrones de vivienda de la clase baja configuraban la moral de la población y fomentaban sus impulsos criminales. La mayoría de los criminólogos aceptaban la noción de que ciertos barrios de clase baja, sobre todo los callejones, eran semilleros del comportamiento criminal. Óscar Miró Quesada sostuvo que las viviendas pobres eran una causa probada de mortandad, lo que a su vez «debe influir, indudablemente, en la degeneración bio-psíquica de la raza, y por lo tanto, en su criminalidad». En las casas que no tenían una adecuada iluminación o ventilación, añadía, «se forman individualidades raquíticas y anormales»[181]. Para el bachiller en medicina Juan Antonio Portella, se trataba de «verdaderas pocilgas» en las cuales «las escenas de inmoralidad y de crimen» ocurrían diariamente[182]. Villavicencio detectó una conexión mucho más directa entre el delito y las condiciones de vida en los callejones de Lima: «El callejón, en Lima, es la mejor escuela del vicio y del delito. Junto a las gentes honestas, viven individuos viciosos, explotadores de mujeres, malvivientes de toda especie. Las escenas inmorales o sangrientas son frecuentes [...] Callejón y delito son dos términos que marchan unidos. Examinemos a cualquier reincidente, a cualquier delincuente habitual y contestaremos que sus vicios e ideas criminosas se gestaron originariamente en el callejón»[183]. Al informar sobre las casas de vecindad, *El Comercio* combinó características sociales, raciales y legales en un intento por transmitir la idea de que constituían un «gran peligro» para la ciudad: «parece que hay muchos desocupados y gente sospechosa. Allí se alojan muchos serranos. Es una especie de tambo»[184].

La conexión entre malas condiciones de vida y el mundo del delito estaba asimismo mediatizada por las imágenes de incontrolables olas de consumo de licor y de enfermedades epidémicas entre las clases bajas de Lima que, en opinión de los higienistas, estaban inextricablemente vinculadas. Las apariciones de epidemias eran ocasiones para la circulación de imágenes «criminalizadas» de los pobres urbanos. Como Marcos Cueto sostuvo convincentemente, los representantes del Estado enfrentaban este asunto con una mezcla de fanatismo médico y una actitud racista/autoritaria[185]. Se culpaba a las víctimas de su desventura. Sus costumbres de vida eran vistas como una consecuencia de su degeneración, no de desventajas sociales o económicas. En su estudio de la tuberculosis en Lima, Rómulo Eyzaguirre describió al barrio chino, las afueras de Lima, los cuarteles del ejército, las prisiones y los hospitales como lugares de contagio. Haciéndose eco de las representaciones criminológicas de las causas del delito, Eyzaguirre enumeraba como «cómplices» de la tuberculosis a «la miseria social, los excesivos impuestos y la falta de trabajo, la falta de hábitos de economía, la vagancia, el alcoholismo, la mala higiene de las poblaciones [y] la insalubridad de las habitaciones de la gente pobre»[186].

Si bien el consumo de licor no era un tema novedoso en los debates públicos en torno a la conducta criminal, sí recibió bastante atención de parte de criminólogos, médicos, higienistas y diseñadores de políticas a finales del siglo XIX y comienzos del XX[187]. La mayoría de los autores se referían a él como una gran fuente de criminalidad. Pocos vicios, escribía Jiménez, se adquirían con tanta facilidad como el alcoholismo. Este era particularmente pernicioso entre aquellos que «ocultan el instinto criminal», pues el alcohol «lo hace estallar poniendo de relieve esa predisposición fatal que sin su auxilio habría quedado solo latente»[188]. Con evidente hipérbole, Jiménez atribuía al alcoholismo el «embrutecimiento» de los 2 millones de indios que habitaban la sierra, la «desmoralización» que devoraba a la sociedad peruana y el debilitamiento del «carácter nacional»[189]. En 1887 tuvo lugar un encendido debate en el Parlamento peruano en torno a un proyecto para incrementar los impuestos a la venta de licor. Aunque la mayoría de los congresistas coincidían en que los efectos que el alcoholismo tenía sobre la población, y sobre los indios en particular, eran perniciosos, lo que debatían era si un impuesto al licor ayudaría a disminuir su consumo. Según el congresista Francisco García Calderón, la embriaguez era el único medio con que la raza indígena contaba para «disipar el recuerdo de esa cadena de males que no saben cuándo concluirá» y que incluía «trescientos años de miseria y envilecimiento». De igual modo, el senador Manuel Candamo, futuro presidente del Perú, sostuvo que el indio se refugiaba en el alcohol porque «ajeno casi por completo a las ventajas de la civilización, sujeto a tan pocas necesidades y animado de tan escasas aspiraciones, la mejor distracción, el principal goce y la mejor recompensa de su faena diaria, se los proporciona la bebida»[190]. Un artículo publicado en *El Comercio* resumía el parecer dominante sobre el alcoholismo

en Lima hacia comienzos del siglo XX. «Alcoholismo, plaga social» era el título de un extenso reportaje en el cual las clases trabajadoras de Lima eran presentadas como las víctimas de una enfermedad que era «más mortífera que el cólera, el vómito negro, o la peste bubónica» y producía «la degeneración visible e inmediata de la raza». Además, se decía que «desde el punto de vista del derecho penal, el alcoholismo aumenta prodigiosamente la criminalidad»[191].

Se fundaron varias ligas antialcohólicas en Lima y Callao entre 1895 y 1899, a las que siguieron la Liga de Propaganda Antialcohólica (1903) y la Sociedad Nacional de Temperancia (1912)[192]. En enero de 1903, el Gobierno organizó una conferencia antialcohólica. Las propuestas presentadas para combatir el consumo de alcohol incluían el incremento en el impuesto a la producción y venta de licor, la compilación y distribución de los nombres de los bebedores habituales para que los tenderos pudieran rehusarse a venderles licor y el encarcelamiento de todos los borrachos encontrados en las calles[193]. Los debates identificaron el vínculo convencional entre alcoholismo y criminalidad, un argumento que estaba supuestamente respaldado por las estadísticas de la delincuencia. Para Francisco Graña, «el alcoholismo significa el crimen, la miseria, la deshonra y la muerte»[194]. Esta expresión del sentido común fue subrayada por el ministro de Fomento en su discurso inaugural: la sociedad, dijo, «tiene derecho de rechazarlo [al alcohólico] como rechaza al criminal». Más que un problema individual, el alcoholismo, sostenía, era una cuestión social puesto que sus efectos más negativos debían sufrirlos los hijos del alcohólico: este vicio producía «niños degenerados, imbéciles, débiles de espíritu, epilépticos, impulsivos (lo que forma sin duda criminales), amorales y pervertidos»; en otras palabras, «son los malhechores, los incendiarios, los suicidas y los criminales natos de Lombroso»[195]. En 1916 la educación antialcohólica se hizo obligatoria en todas las escuelas primarias y secundarias[196].

Las conexiones discursivas entre las condiciones de las viviendas, enfermedades epidémicas, consumo de licor, desmoralización y delincuencia eran claramente abrumadoras. Como usualmente sucede con estos tipos de construcciones, se repitieron una y otra vez, convirtiéndolas así en verdades sancionadas por los expertos que no requerían de mayor discusión. El creciente prestigio de médicos, higienistas y criminólogos, así como su aura científica, permitieron que estas ideas se convirtieran en «hechos» ampliamente establecidos y aceptados. En términos más concretos, los «expertos» promovieron una interpretación del delito que no solamente incluía la cultura y la moral (o la falta de ella), sino que, de modo más importante, también contribuyó a la construcción de una clase delictiva identificable cuyos patrones de vivienda y hábitos de higiene la separaban del resto de la sociedad.

La criminología científica y su impacto

Entre 1890 y 1930 la criminología positivista se fue convirtiendo gradualmente en el paradigma dominante en el interior de los discursos especializados acerca del delito en el Perú. Su impacto se sintió primero en los círculos académicos, luego en los debates públicos acerca de los problemas sociales y, finalmente, en la legislación penal. El Código Penal de 1924 reflejó dicha influencia al incorporar muchos de los principios penales propuestos por los criminólogos positivistas en otros países: la sentencia indeterminada, la idea de la no responsabilidad criminal de los «inimputables peligrosos», la adecuación de la pena al grado de peligrosidad de cada persona y la libertad condicional[197]. Siguiendo la posición dominante entre los criminólogos y juristas peruanos de la época, el Código Penal de 1924 también abolió la pena de muerte[198]. La doctrina de la «defensa social» sirvió como marco doctrinario del código[199]. Desarrollada en Europa a comienzos del siglo XX, esta doctrina debía su formulación a una construcción previa sumamente exitosa, la de la persona peligrosa, aparecida inicialmente en el campo de la psiquiatría[200]. La doctrina de la defensa social postulaba que cada sociedad tiene derecho a protegerse de las personas peligrosas, incluyendo aquellas que son un peligro potencial[201]. La peligrosidad era a su vez entendida como el estado o condición de una persona que a juicio de expertos tales como médicos, criminólogos, psiquiatras y otros, constituía una amenaza para otras personas o para la sociedad en su conjunto. Para Garofalo, uno de los principales promotores del concepto, la peligrosidad era «la perversidad constante y activa del delincuente y la cantidad del mal previsto que hay que temer por parte del mismo»[202]. Dado que las fuentes de tal estado peligroso eran variadas e iban desde las características raciales y la herencia hasta las influencias sociales y las condiciones médicas, establecer el grado de peligrosidad debía incluir un examen de los antepasados de la persona, su educación, historial clínico, rasgos antropológicos, antecedentes penales y otros factores. El corolario más importante de la noción de peligrosidad era que la pena por aplicarse a cualquier delincuente debía tener en cuenta cuán peligrosa era semejante persona para la comunidad. En otras palabras, lo que debía evaluarse no era solo el delito mismo sino también la peligrosidad de la persona que lo cometía; de este modo, el castigo iba a ser decidido no únicamente por el juez o el jurado sino también, y de manera decisiva, por los expertos que evaluaban la peligrosidad de la persona.

El Código Penal de 1924 ordenaba a los jueces que evaluaran «la culpabilidad y el peligro del agente» para así establecer la pena. La evaluación debía tener en cuenta una serie de factores, entre ellos la naturaleza del delito, la edad del delincuente, su vida personal y familiar y las emociones particulares que pudieran haber afectado su conducta[203]. Los criterios sobre exactamente qué venía a ser un estado de peligrosidad variaban. Mientras que Leonidas Avendaño veía la reincidencia como la señal máxima de peligrosidad[204]. La criminóloga Susana Solano, que escribió en la década de 1930, subrayó la necesidad de evaluar las llamadas formas no delictivas de peligrosidad,

entre ellas la prostitución, el juego, la homosexualidad y la adicción al alcohol[205]. Según Solano, ciertas condiciones sociales hacían que las personas fueran peligrosas incluso si aún no habían cometido un delito: de este modo se consideraba peligrosos y necesitados de vigilancia y tratamiento a los indios que vivían en condiciones de aislamiento y pobreza, eran víctimas del abuso del alcohol y la coca o estaban sujetos a la explotación de los gamonales[206]. Para otros, las condiciones médicas creaban señales de peligrosidad que podían no manifestarse ni siquiera al cometerse delitos, pero que deberían ser cuidadosamente evaluadas[207]. En su análisis del asesinato del periodista Edwin Elmore a manos del célebre poeta José Santos Chocano, el criminólogo español Luis Jiménez de Asúa presentó al acusado como una persona en «estado peligroso», lo que era demostrado por «toda su vida anterior, aventurera y ansiosa de placeres, su conducta poco pulcra, su megalomanía incurable y hasta la afección hepática que se ha querido utilizar en búsqueda de una irresponsabilidad moral para su delito»[208]. Los problemas existentes para ofrecer una definición precisa de este concepto fueron subrayados sarcásticamente por el criminólogo español Manuel López-Rey, quien pensaba que se usaba la noción de *peligrosidad* como una suerte de «sulfanilamida penal», ya que se la aplicaba a casi toda situación[209].

Una de las innovaciones del Código Penal de 1924 fue el tratamiento que daba a la población indígena. Se exigía que los tribunales tomaran en consideración toda circunstancia atenuante de la comisión de delitos que pudieran deberse al hecho de que sus perpetradores fueran indios «salvajes» –las tribus nativas de la región amazónica– o «semicivilizados» o «degradados por la servidumbre y el alcoholismo» –los habitantes de la región andina–[210]. Según el Código Penal, estos dos grupos, cada uno de los cuales era tratado como si constituyera una colectividad homogénea, carecía del conocimiento, la sensibilidad y la moral de la parte civilizada de la población peruana, es decir, los sectores no indios urbanos y educados, y en consecuencia debía considerárseles relativamente no imputables[211]. Para Víctor Maúrtua, el autor del proyecto que se plasmó en el Código Penal, este enfoque se correspondía con la naturaleza supuestamente benigna de los indios peruanos: «La mayor parte del pueblo es indígena. Su carácter es dulce, su constitución moral no exige represiones severas y prolongadas. Entre los delincuentes no domina la nota de la depravación ni la del peligro permanente de los agentes refractarios»[212]. El objetivo último de tal legislación era posibilitar la completa readaptación del criminal indígena hacia una vida «libre y honesta», lo que se habría de lograr en colonias penales agrícolas en las cuales los indios «salvajes» o «semicivilizados» habrían de recibir un tratamiento que los readaptaría «al medio jurídico del país»[213]. Según la antropóloga Deborah Poole, el objetivo era transformar al indio en un «correcto sujeto jurídico» que sería incorporado a la comunidad nacional a través de una educación compulsiva, un castigo rehabilitador y la transformación de sus normas culturales[214]. Lo que en realidad yacía detrás de la

protección que el Estado concedería a la población indígena mediante una legislación tutelar era una actitud neocolonial[215].

La orientación doctrinal del Código Penal reflejaba y a la vez reforzaba la creciente prominencia que iban alcanzando en el Perú las interpretaciones médicas del delito, lo que reflejaba el prestigio que los médicos habían adquirido en las esferas profesional y política[216]. Desde mediados de la década de 1850, los médicos habían contribuido a la formulación y el estudio de los problemas sociales y, en particular, del delito. Revistas especializadas como la *Gaceta Médica de Lima* prestaban atención a una serie de temas, entre ellos las enfermedades epidémicas, el delito y el alcoholismo, y también acogían debates sobre cuestiones jurídicas tales como el estatus legal de los delitos cometidos por los alcohólicos o las personas insanas. Se consultaba a los médicos cuando se pensaba que su opinión era crucial para elucidar cuestiones referidas al delito, el perpetrador o la víctima y, según José Casimiro Ulloa, «la competencia del médico para el esclarecimiento de ciertos hechos criminales» era «un hecho generalmente reconocido»[217]. El lenguaje médico atravesaba todas las discusiones sobre el delito, en especial en el período posterior a 1880[218]. Para la mayoría de los juristas esto resultaba aceptable, pero los expertos legales rechazaban la idea de los criminólogos positivistas según la cual los delitos eran causados por una disfunción orgánica y, por lo tanto, era obligación del médico evaluar a los delincuentes y sugerir una sentencia. Uno de los oponentes más viscerales de este parecer fue José Viterbo Arias, autor de un tratado de 1900 sobre el Código Penal de 1863: «no se debe extrañar que no miremos en los delitos simples desgracias; que no pidamos hospitales, en vez de cárceles, ni médicos en lugar de alcaides, ni antropologistas [sic] y psicólogos para sustituir a los magistrados y jueces»[219].

Las visiones legal y médica sobre el delito y el castigo chocaron repetidas veces, tanto en debates doctrinarios como en litigios judiciales. Uno de los casos más prominentes fue el de Lorenzo Machiavello, un inmigrante ítalo-argentino que en julio de 1885 asesinó a tres de sus compañeros de trabajo (dos chinos y un italiano) en una hacienda en las afueras de Lima. Su juicio generó un apasionado intercambio de opiniones entre los expertos. La cuestión clave era dilucidar si Machiavello había cometido los asesinatos debido a una «enajenación mental» y, de ser así, si dicha condición debía usarse como una circunstancia atenuante. El fiscal objetó cuando la defensa solicitó exámenes médicos, negando el derecho de los galenos a calificar el delito y sugerir la pena. José Casimiro Ulloa, uno de los médicos consultados, respondió que la ciencia había producido nuevas ideas acerca de la responsabilidad criminal que eventualmente cerrarían las puertas de las prisiones y abrirían las de los manicomios. Luego de extensas maniobras legales, un equipo de tres médicos, entre ellos Ulloa, concluyó que Machiavello no estaba mentalmente insano pero que sí era plausible que se hallara bajo

la influencia de una «locura impulsiva hereditaria» que ellos pensaban debía ser considerada como circunstancia atenuante. El fiscal Manuel Atanasio Fuentes postuló que la locura impulsiva era simplemente una excusa usada por los criminales para librarse de sus delitos y solicitó la pena de muerte para Machiavello[220]. En otro célebre caso, Javier Prado defendió a Enrique Rojas y Cañas, acusado de haber asesinado a su amante en 1893. Según Prado, su cliente era «un degenerado en el que se encuentran las señales del raquitismo: es linfático, débil, delgado, alto, escrofuloso [...] se nota en él una gran anemia [...] ha padecido toda clase de enfermedades que han agotado más aún una naturaleza minada por la sensualidad y el alcoholismo»[221]. Sin embargo, no logró convencer al juez, la corte superior o la corte suprema, pues las tres instancias confirmaron la pena de muerte para Rojas y Cañas. Según el fiscal, se trató de un «homicidio simple, un asesinato repugnante y vulgar cometido por un joven vicioso contra una infeliz mujer»[222]. Para el criminólogo Paulino Fuentes Castro, la sentencia «no deja satisfecho el criterio positivista que desearía ver en cada fallo judicial la correspondiente relación entre el examen del sujeto delincuente y la pena impuesta»[223]. Rojas y Cañas falleció en prisión antes de que la sentencia pudiera ser ejecutada.

Como estos y otros casos lo demuestran, para médicos y criminólogos no era fácil convencer a juristas y abogados de que las condiciones médicas podían explicar por lo menos ciertos tipos de delitos y que, en consecuencia, los delincuentes no eran responsables por sus actos[224]. Pero las explicaciones médicas del delito comenzaron a gozar de cierta popularidad dentro de la comunidad criminológica. Hermilio Valdizán y Carlos Bambarén, entre otros, presionaron a favor de la medicalización del crimen e intentaron relacionar, tanto en la teoría como en la práctica, el comportamiento criminal con enfermedades tales como la locura, la epilepsia y el alcoholismo. En un estudio criminológico-médico del perpetrador de un crimen atroz en el pueblo de Pativilca, Valdizán concluyó que el perpetrador era un «frenasténico biopático con insuficiencia mental de alto grado (imbécil)» y, por tanto, «irresponsable de las acciones delictuosas que haya cometido y pueda cometer en lo sucesivo»[225]. A finales de la década de 1920, Bambarén emprendió una serie de estudios de criminales sobre quienes concluyó que eran víctimas de patologías que escapaban a su control[226]. En la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, donde enseñaba, Bambarén formó a numerosos médicos que posteriormente harían sus propias contribuciones al estudio clínico del delito[227].

La tendencia hacia la medicalización del delito comprendió la adopción, por parte de algunos criminólogos, de los postulados de la ciencia del mejoramiento de las razas o eugenesia, que tuvo cierto impacto en el Perú en la segunda década del siglo XX. Al igual que la criminología positivista, ella fue adoptada inicialmente en los círculos académicos, en especial en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, de la mano de Carlos Enrique Paz Soldán, a quien se atribuye la introducción de las

ideas eugenésicas. Bambarén también promovió su enseñanza entre los adolescentes. El Congreso peruano debatió por lo menos en dos ocasiones, en 1916 y 1923, propuestas para promulgar leyes que exigían un certificado prenupcial para garantizar que ninguna persona con taras procreara hijos, iniciativa influida por las ideas eugenésicas[228]. Sin embargo, al igual que en otras partes de Latinoamérica, en el Perú sería más adecuado llamarla «eugenesia social», para usar el idóneo concepto de Nancy Stepan[229]. Los autores peruanos sí adoptaron la noción de que el control científico de los patrones matrimoniales y la reproducción permitiría a cualquier comunidad racial o nacional mejorar su calidad eliminando a las personas que tuvieran alguna incapacidad. Pero los eugenésicos peruanos no vieron estas intervenciones como algo puramente biológico y, con frecuencia, la eugenesia simplemente significaba mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población. Por ejemplo, Augusto Peñaloza, autor de una tesis sobre la eugenesia y la prevención del crimen, se consideraba a sí mismo un seguidor de lo que él llamaba la eugenesia adaptativa, a la que él contraponía a la eugenesia selectiva «galtoniana» (por Francis Galton, el científico inglés), entendida como un proceso estrictamente biológico. Peñaloza propuso una serie de medidas para resolver el «escabroso» problema del delito, que incluían la mejora de las condiciones de vida de la clase obrera, la educación de sus espíritus y la apertura de teatros, bibliotecas y salas de conferencias[230]. Otros autores sí acogieron la esterilización como la única solución a la reproducción de «individuos indeseables y peligrosos». La vasectomía recuperaría miles de personas útiles para la nación, escribió Rafael Fosalba, autor de una tesis de 577 páginas sobre la herencia. Esta era, según él, la única forma de prevenir el crimen y otras patologías[231]. Pero el enfoque dominante era asimilar la eugenesia con lo que Paz Soldán y otros llamaban la medicina social[232]. En la Primera Conferencia Panamericana de Eugenesia y Homicultura celebrada en La Habana en 1928, Paz Soldán fue uno de los críticos más severos de la propuesta de adoptar un Código de Eugenesia que incorporara nociones racistas tales como la superioridad de la raza blanca y la necesidad de desalentar el mestizaje racial[233].

De este modo, hacia finales de la década de 1920, las tendencias divergentes en el pensamiento criminológico contribuyeron a los debates en torno al delito y a las políticas de control de la delincuencia en Perú. Ellas iban desde posturas médico-biológicas como la de Bambarén hasta otras más claramente sociológicas como las de Villavicencio y Encinas. Otros participantes en estos debates favorecían un enfoque psicológico para explicar la conducta criminal[234]. Sin embargo, en la mayoría de los casos el pensamiento criminológico reflejó dos características: por un lado, una postura relativamente ecléctica en la cual se invocaban diversos factores, entre ellos la raza, la cultura, la moral, la biología y las condiciones sociales, como explicaciones del comportamiento delictivo, y, por otro, una falta de compromiso con la investigación rigurosa y original.

La ausencia de un programa de investigación criminológica serio entre los criminólogos peruanos revela la medida en que en el Perú el positivismo «valoró la ciencia como una fuente de progreso y conocimiento práctico [pero] predicó una retórica en favor de la investigación que fue sólo discurso, y que pocas veces se materializó en un esfuerzo persistente» de investigación[235]. A diferencia de los trabajos efectuados en México, Argentina y Brasil, en el Perú la criminología positivista no produjo un corpus sustancial de estudios empíricos que mostraran interpretaciones originales de la realidad local del delito. Era una apropiación sumamente retórica de un conjunto de principios, hipótesis y metáforas con las que se buscaba explicar el delito y los delincuentes. Las investigaciones guiadas por la criminología positivista por lo general consistían en una lectura de tratados extranjeros a los que se resumía y aderezaba con unas cuantas referencias a las realidades locales. La criminología peruana a duras penas se puede considerar una disciplina científica. El psiquiatra Honorio Delgado hizo una dura crítica de esos esfuerzos: «un diletantismo sesquipedal sustituye a la ciencia, y una propaganda de fanáticos ocupa el lugar del ejercicio de la razón [...] Es difícil encontrar en ninguna suerte de escritos mayor abuso de la terminología "científica" y del énfasis dramático, que en los conatos frustráneos (sic) de estudio del delincuente»[236].

A pesar de los distintos pareceres entre sus practicantes y las opiniones contrapuestas en una serie de temas, hacia finales de la década de 1920 la criminología positivista había logrado la hegemonía en el discurso de los expertos peruanos sobre el delito. El creciente prestigio de los criminólogos y su estrecha relación con el régimen leguiísta se vieron reforzados con la creación y el fortalecimiento de la Dirección General de Prisiones (DGP, véase el capítulo 4) y la publicación, a partir de 1927, del *Boletín de Criminología*, su órgano oficial[237]. El *Boletín* contribuyó a la legitimación de la profesión criminológica y al establecimiento de una vigorosa conexión entre esta disciplina y la formulación e implementación de políticas sociales. En él se publicaban tratados doctrinales sobre las teorías criminológicas, traducciones de materiales extranjeros, estudios de diversos aspectos de la criminalidad peruana y diversos tipos de normas legales sobre las políticas penales y el manejo de las prisiones. El *Boletín* es la evidencia más reveladora de la madurez que la criminología había alcanzado en el Perú hacia finales de la década de 1920: no solo producía conocimientos sobre un problema (a saber, la conducta criminal) sino que además participaba en la formulación e implementación de soluciones prácticas. Aunque la disciplina criminológica demostró un débil compromiso con la investigación científica, sí mantuvo una fuerte inclinación hacia el intervencionismo. En la década de 1920, como nunca antes en el Perú, los reformadores penales intentaron promover cambios guiados por los principios de la criminología positivista. De hecho, estos reformadores eran usualmente reclutados entre las filas de los criminólogos. Pero la traducción de los principios supuestamente científicos de esta disciplina en políticas prácticas referidas al trato de los prisioneros

fue, como veremos luego, algo problemática, en parte debido a la mediación crítica de otros agentes estatales como la policía (véase el capítulo 3), y en parte como resultado de las formas en que se concebía el crimen, sus causas y sus agentes. De especial importancia fue la forma en que los expertos y los diseñadores de políticas construyeron las vinculaciones entre trabajadores y delincuentes en la Lima de comienzos del siglo XX.

El mundo del crimen y el mundo de los trabajadores

En sus esfuerzos por formular interpretaciones sobre los grupos populares, los criminólogos peruanos usualmente adoptaban una postura que asumía una separación entre las llamadas clases criminales y las clases trabajadoras. En muy contadas ocasiones se presentó a estos dos grupos discursivamente construidos, como fenómenos que se fusionaban y se convertían en un único problema social. El peligro de una confluencia de trabajadores descontentos y grupos delictivos volátiles estuvo mayormente ausente de la percepción de los comentaristas sociales. Para muchos, el problema de la indigencia, por ejemplo, que en Europa y en otros países latinoamericanos como Argentina se veía en la raíz de la cuestión social, no existía en el Perú o era cuando mucho un problema menor. Esta creencia era tan solo ocasionalmente cuestionada por las protestas y la violencia de las multitudes[238]. Para autores como Felipe Barreda la indigencia, definida como la combinación del desempleo, los bajos salarios y la alta densidad poblacional, no existía en el Perú. Las huelgas se debían, sugería él, a la «prosperidad» de que gozaba la clase obrera, e insistía en que la vagancia y la mendicidad debían ser perseguidas como delitos[239]. Alejandro Revoredo, que escribió poco después de los masivos motines de subsistencias de mayo de 1919, sostuvo tajantemente que en el Perú no había una cuestión social, fundamentalmente porque el capitalismo aún no existía allí[240]. José B. Gandolfo pensaba que la indigencia era una amenaza potencial a naciones jóvenes como el Perú, pero sostenía que en este caso, a diferencia de Europa, se debía no a la falta de oportunidades sino a la ausencia de buenas costumbres laborales: no era la indigencia (desempleo, bajos salarios) lo que producía la vagancia, sino esta última la que generaba aquella. Por tanto, el Estado debía ayudar a los pobres pero no a los vagos, que merecían ser juzgados y castigados. Para ilustrar aún más esta distinción implícita entre las clases criminales/vagas y los trabajadores pobres, Gandolfo citaba a Gonzalo Tirado, el jefe de policía de Lima, quien informaba que los vagos habían cometido el 85 por ciento de los delitos contra la propiedad en Lima[241]. El argumento resultante era que en esta ciudad el delito era el producto no de la injusticia social o de la explotación de los trabajadores pobres, sino de los hábitos viciosos de un sector específico de la población, fundamentalmente vagos y rateros. En general, se consideraba que la denominada *cuestión social* –la combinación explosiva de pobreza, desempleo, salarios bajos,

delincuencia, huelgas y agitación de la clase obrera– no tenía las mismas dimensiones en el Perú que en Europa u otros países latinoamericanos.

Como sostuvo Victor Bailey para la Inglaterra victoriana, la categoría general de *clases peligrosas* –«una amenazante amalgama de pobreza, vagancia y delincuencia»– fue reduciéndose gradualmente «a la noción más reducida de "clases delincuentes", disociadas ya de la subversión política y la ruptura social»[242]. Bailey vincula esta distinción discursiva y política con el proyecto de establecer fronteras morales dentro de distintos segmentos de las clases populares. El delito era considerado «un problema no tanto de una ruptura social colectiva como de unos deficientes frenos morales». Esto permitió a las autoridades desasociarlo del sistema general de explotación económica y atribuir más bien la perpetración de los delitos a la «dislocación urbana y la indisciplina moral»[243]. Esta construcción de mundos separados en la Inglaterra victoriana tiene ciertas similitudes con el caso de Lima a comienzos del siglo XX. Mientras que en el siglo XIX la asociación entre trabajadores, delincuentes, vagos y gente viciosa en general figuraba de modo prominente en la retórica de los comentaristas sociales, esta conexión se diluyó posteriormente. A ojos de los expertos, el mundo de los trabajadores y el de la delincuencia se convirtieron en territorios discretos, cada uno de ellos con sus propios problemas y su relación peculiar con el ordenamiento social. Sostengo, sin embargo, que esta no fue únicamente una estratégica construcción político-discursiva desde arriba, como sostiene Bailey para el caso inglés, sino también resultado de la evolución en las propias formas obreras de identidad y conciencia social. Los trabajadores comenzaron a distanciarse de los delincuentes y en cierto sentido internalizaron el discurso sobre la honestidad y los hábitos laborales propagado por el Estado, la escuela, la Iglesia e incluso el sindicato.

Hacia mediados del siglo XIX, los trabajadores pobres urbanos de Lima seguían conformando una masa altamente indiferenciada, que se parecía bastante a la plebe colonial urbana. Artesanos, vendedores ambulantes, vagos, sirvientes domésticos y muchos otros grupos sociales y ocupacionales compartían una cultura plebeya, diferente de aquella de la sociedad respetable, aunque algunos sostendrían que también tomaba prestados elementos de ella. A medida que el trabajo industrial y la sindicalización de los trabajadores se expandían gradualmente hacia finales del siglo XIX, segmentos importantes de los pobres urbanos, en especial artesanos y trabajadores fabriles, comenzaron a transformarse a sí mismos en la clase obrera, con sus formas específicas de organización, tradiciones culturales y formas de comportamiento social[244]. Debido a diversas influencias materiales, ideológicas y culturales, estos segmentos comenzaron a separarse de aquellos valores y actitudes que eran considerados más característicos de los sectores marginales y delincuenciales[245]. Esto respondía en parte a la propagación –de parte del Estado, la Iglesia y, lo que era más importante, los

sindicatos y dirigentes anarquistas y socialistas– de nociones de honestidad, laboriosidad y autoestima. La ideología anarquista, por ejemplo, siempre insistía bastante en animar a los trabajadores a que se comportaran de forma ética, demostrando no solo su combatividad sino también su diligencia, autodisciplina e integridad[246]. Como sugiere Parker, «[a]l adoptar la autosuperación y la abstinencia como medios para alcanzar una vida mejor, los trabajadores organizados no podían hacer otra cosa que aceptar el abismo que les separaba de los millares de otros peruanos pobres que bebían, jugaban y no compartían sus ideales»[247].

Como varios historiadores han enfatizado, en una sociedad estamental como Lima, ciertas formas de identificación cultural y autorrepresentación, como la decencia por ejemplo, fueron asociadas mayormente con las clases altas. Como una estrategia consciente para librarse (por lo menos en apariencia) de la indignidad asociada con el estatus de clase baja y el trabajo manual, algunos sectores de las clases trabajadoras, entre ellos los empleados, artesanos y obreros, desarrollaron su propio sentido de decencia, imitando pero al mismo tiempo subvirtiendo los códigos culturales de la élite europeizada. Ser pobre pero decente pasó a constituir una parte importante de la mentalidad de ciertos segmentos de los trabajadores. Para que dicha aspiración a la decencia fuera plausible, necesitaban establecer una separación clara con aquellos hábitos identificados con las clases criminales. Para comenzar, los trabajadores decentes debían vestirse bien. Como subrayó Parker, los trabajadores en huelga usaban traje y sombrero incluso cuando protestaban en las calles, para así transmitir la idea de que eran «hombres dignos de respeto»[248]. Aldo Panfichi ha enfatizado que un componente importante de la cultura criolla de los pobres urbanos era el comportarse como caballeros, con honor y decencia[249]. La aversión al bajo mundo criminal comprendía también una perspectiva política: en un contexto de creciente confrontación entre la clase obrera organizada y el Estado, la identificación, real e imaginaria, de criminales y soplones reforzó aún más el desdén que los trabajadores tenían por los delincuentes[250]. Ser decente no impedía a los trabajadores participar en manifestaciones, huelgas y motines, pero sí los obligaba a cumplir con sus obligaciones como trabajadores, padres y ciudadanos. Esta idea fue expresada claramente por el candidato presidencial Guillermo Billinghurst al dirigirse a la multitud de trabajadores que acababan de cumplir dos días de motines en respaldo a su candidatura: «Vosotros motoristas y conductores, dirigíos a restablecer el tráfico; vosotros panaderos y carniceros id a trabajar para que ni un instante falte pan y carne en los hogares que os han acompañado en estas horas de privación abnegada; vosotros jornaleros y obreros, trabajadores todos, estudiantes y profesionales, id a vuestros hogares a llevar la ventura de vuestras familias y a devolver la tranquilidad que les habéis robado en obsequio de la democracia y de la patria»[251].

Por cierto que esto no significa que los trabajadores no hayan cometido delitos, o que ellos y los delincuentes vivieran en mundos absolutamente separados. De hecho, vivían en los mismos callejones y barrios, compartiendo en cierta medida la cultura popular urbana de la cual las jaranas y el consumo de licor eran componentes centrales. La población del barrio de Malambo, por ejemplo, incluía tanto a trabajadores sumamente activos en la autoformación cultural de la clase obrera y el activismo sindical, como a delincuentes identificados como faites y rateros[252]. Sin embargo, a pesar de su proximidad física, los trabajadores tendían a percibirse a sí mismos como personas honestas y decentes, cualitativamente diferentes de los delincuentes, una etiqueta aplicada por lo general a la población de vagos, borrachos y rateros que llenaban las cárceles y prisiones de Lima. Acusar a un trabajador o artesano de ser un ratero era un insulto mayúsculo.

En lugar de una división maniquea entre las clases decentes y las clases populares, hubo divisiones más sutiles, reales e imaginarias, entre estos dos grandes conglomerados. De suma importancia era la separación entre lo que podría llamarse los pobres honrados y aquellos considerados «parásitos» o criminales. Las fronteras entre estas categorías eran borrosas, ciertamente, pero a ojos de la gente había divisorias morales, culturales y sociales entre ellas: la élite se veía a sí misma como diferente de la población trabajadora y los trabajadores se veían a sí mismos como distintos y superiores en relación con los considerados delincuentes.

Esta divergencia entre el mundo trabajador y el mundo criminal tuvo efectos importantes sobre la definición y la implementación de políticas estatales de control social y político. Si la delincuencia como problema social no estaba ligada a la agitación de la clase trabajadora u otras formas de amenaza política, entonces no había ninguna necesidad real de instituir costosos sistemas de control penal a fin de mantener el orden social. Si existía poca o ninguna solidaridad entre los «parásitos» y los trabajadores, había pocas posibilidades de que la forma en que el Estado trataba a los delincuentes en las estaciones de policía y en las cárceles enfureciera también a las clases trabajadoras organizadas. Las condiciones en las prisiones, que examinaremos posteriormente, son en parte el resultado de esta percepción de los problemas sociales. Las cárceles ya no eran imaginadas como lugares para la fabricación o redención de los trabajadores, sino de castigo para los moralmente degenerados e irredimibles: los parásitos, los pobres indignos, la escoria de la sociedad. A diferencia de otros países como Argentina, por ejemplo, donde la cuestión social –debida a la masiva inmigración europea y a la agitación de la clase obrera– promovió la reforma carcelaria, en el Perú no hubo vínculo alguno entre los temores de una conmoción social y las campañas, auspiciadas por el Estado, de reforma en las prisiones[253].

Capítulo 3

Policía, vigilancia y la formación de una clase criminal Antes de ingresar a una institución de confinamiento, los acusados de perpetrar delitos debían enfrentarse a otra rama del aparato institucional estatal de vigilancia y control social: la policía. El arresto y encarcelamiento de personas a quienes la policía, de manera selectiva y por lo general arbitraria, ponía en la mira como enemigos de la ley y el orden, representaban otra forma, mucho más tangible, de «aprehender al criminal». Un estudio del comportamiento policial –sus motivaciones, prácticas y efectos– arroja luz sobre las fricciones entre el Estado y las clases bajas (o entre la ley y quienes parecían hallarse al margen de ella) en una de sus formas más crudas. Habiendo revisado las formas en que el delincuente era aprehendido en los discursos intelectuales, legales y académicos (capítulos 1 y 2), resulta pertinente que, antes de pasar a reconstruir su vida dentro de la prisión (capítulos 6 y 7) se examinen con cierto detenimiento las formas en que se daba el encuentro entre la policía y los sectores populares y delincuenciales.

Las prácticas de vigilancia, monitoreo y arresto no eran simplemente esfuerzos de control del delito, sino instancias cruciales en la construcción cultural, legal y política de las clases criminales. Ellas constituían formas efectivas, aunque ambiguas, de marginación social, pues se dirigían a segmentos sociales, raciales y ocupacionales específicos de la población. Los estigmas sociales asociados con ciertas formas de identidad, cultura y socialización eran reforzados por el comportamiento cotidiano de las fuerzas policiales. Por tanto, más que una simple respuesta al delito, la acción policial era un mecanismo social que cumplía varios objetivos simultáneamente, aun cuando no todos ellos estaban diseñados expresamente o eran ejecutados de modo consistente: la criminalización de grupos específicos de la población, la protección del orden y la propiedad, el establecimiento y el mantenimiento de fronteras sociales y culturales, la reproducción de formas específicas de jerarquías raciales, de clase y género, y la ampliación de la intervención estatal en la vida de los ciudadanos ordinarios.

Gendarmes y cachacos: el desarrollo de las instituciones policiales de Lima No es una tarea fácil reconstruir la evolución institucional de las fuerzas policiales en Lima durante el siglo XIX y comienzos del XX. Numerosas reformas y reorganizaciones, cambios en los regímenes políticos y la discrepancia acostumbrada entre las normas y su implementación contribuyen, todas ellas, a complicar esta tarea. Más allá de estas limitaciones, la reconstrucción que he intentado ofrece la imagen de una institución policial que pasa de estar formada por un grupo algo desorganizado, ineficaz y nada profesional de unidades sueltas a ser, hacia la década de 1920, una fuerza centralizada, semiprofesional y ciertamente mucho más represiva y cuasimilitarizada.

Durante las primeras décadas del siglo XIX la preservación del orden público estuvo en manos de unidades policiales pertenecientes al ejército, que también era un conglomerado de fuerzas irregulares sujeto a constantes cambios debido a la inestabilidad política[254]. Las obligaciones adicionales de vigilancia policial eran desempeñadas por los serenos, unos personajes que, desde tiempos coloniales, monitoreaban el comportamiento de la población y notificaban a las autoridades en caso de alguna infracción[255]. Según los reglamentos implementados en 1834, los serenos cumplían tareas tales como anunciar la hora, acompañar a los vecinos que tuvieran que salir a la calle pasadas las 11 de la noche, controlar el movimiento de animales, revisar el alumbrado público y asegurarse de que no se celebrara ninguna fiesta después de las 10 de la noche[256]. La presencia de los serenos se fue haciendo cada vez más anticuada y superflua a medida que la ciudad comenzó a crecer y modernizarse y el Estado pasó a asumir la mayor parte de las obligaciones asociadas con el orden público. Hacia mediados del siglo XIX, la figura del sereno era ya una suerte de residuo colonial y no mucho después desaparecería de las calles de Lima.

Durante las primeras décadas después de la independencia, el destino de las fuerzas policiales quedó ligado a la recurrente inestabilidad política resultante de las luchas caudillistas[257]. Dichas fuerzas fueron continuamente formadas, reformadas y disueltas. Los sucesivos intentos de organizar una Guardia Nacional eficaz (por parte de los presidentes Luis José de Orbegoso en 1834, Agustín Gamarra en 1840 y Ramón Castilla en 1845 y 1855, por ejemplo) produjeron magros resultados. Aunque el reclutamiento fue declarado obligatorio y universal (concediéndose las acostumbradas excepciones a profesionales, sacerdotes y empleados públicos), todas las fuentes indican el uso continuo de la coerción contra las personas de clase baja para surtir de personal a las unidades policiales. Con bastante frecuencia, quienes llenaban las filas de la Guardia Nacional eran bandidos y miembros licenciados del ejército. Según un historiador de la policía, «una verdadera y eficiente policía» no existió en el Perú antes de 1852[258]. El ministro de Gobierno fue más enfático en 1867: «Hablando propiamente, puede decirse, señores, que jamás ha existido policía en la República»[259].

Entre comienzos de la década de 1850 y comienzos de la de 1890, una serie de cambios institucionales afectaron la naturaleza y el funcionamiento de las fuerzas policiales. La creación de distintos cuerpos y jurisdicciones, así como la implementación de diversos reglamentos, buscaban organizar una fuerza policial nacional eficaz. Los cambios más notables fueron aquellos efectuados por Manuel Pardo, el primer presidente civil de la república peruana. En noviembre de 1872, Pardo, en un nuevo intento por establecer una fuerza policial civil a nivel nacional, ordenó la organización de la Guardia Nacional. Como sugiere Carmen McEvoy, esta medida buscaba «neutralizar el poder que el militarismo había desarrollado a lo largo de varias décadas»[260]. Un año más tarde, en diciembre de 1873, el Gobierno de Pardo emitió varios reglamentos que buscaban promover una acción policial eficaz incorporando activamente a la población civil[261]. La Policía de Seguridad, por ejemplo, fue dividida en tres ramas (art. 1). En primer lugar estaban las organizaciones vecinales «para resistir los ataques de los malhechores» y que con el tiempo se convertirían en la Guardia Urbana bajo el mando de un alcalde de barrio elegido por los ciudadanos propietarios. En segundo lugar, unas unidades especiales de la policía, organizadas por la municipalidad, brindarían sus servicios en lugares específicos como teatros, paseos, rastros y áreas rurales. Tercero, «una fuerza pública permanente» para la conservación del orden, la prevención del delito y el arresto de delincuentes comprendería a la Guardia Civil y a la Gendarmería. Una de las principales obligaciones de la primera era garantizar «el tranquilo ejercicio de los derechos de los ciudadanos». Los guardias civiles, rezaba el reglamento, «son custodios del orden público, encargados de la seguridad de los ciudadanos, como los guardianes más inmediatos de sus garantías» (art. 47). Debían tener entre 25 y 50 años y una «complexión robusta sin vicio alguno orgánico» (art. 19). La Gendarmería, encargada de mantener el orden y la seguridad, habría de tener «la misma organización de los cuerpos del ejército» (art. 40) y debía reclutar de preferencia a exmiembros del ejército.

En 1877 se implementaron importantes leyes policiales durante el gobierno del presidente Mariano I. Prado, entre ellas un «Reglamento de Moralidad Pública y Policía Correccional» para el departamento de Lima, y un «Reglamento de Policía Rural», este último redactado en consulta con los hacendados de Lima[262]. El primero imponía diversas penas, incluyendo multas, arrestos y la clausura de negocios privados, por infracciones tales como conducta indecente, obscenidades, ebriedad y juegos de azar. Dicho reglamento autorizaba no solo a los oficiales de policía, sino en realidad a cualquier persona, a aprehender y mantener en custodia a delincuentes y malhechores, dando así estatus legal a diversas prácticas de persecución y vigilancia privadas que eran comunes, sobre todo en las áreas rurales[263]. La leva forzada parece haberse intensificado durante la dictadura de Prado. El diario *La Patria* reportó el caso de un muchacho de 14 años que fue levado, torturado y posteriormente liberado[264]. La Guerra del Pacífico y la ocupación chilena de Lima dislocaron a las fuerzas policiales en la

mayor parte del territorio. El viajero alemán Ernst Middendorf reportó que «el tiempo más peligroso en Lima fue el primer año de la ocupación chilena, pues entonces los ladrones eran los policías»[265]. En 1883, una vez terminada la ocupación, el presidente Miguel Iglesias reorganizó las fuerzas policiales una vez más. En 1884 el Gobierno creó estaciones de policía rurales en los valles del *hinterland* limeño y en 1887 se creó una Policía Rural[266]. Esta se encontraba bajo el mando de comisarios rurales no asalariados, seleccionados por el Gobierno entre las filas de la clase propietaria rural. Su personal estaba conformado por gendarmes, pero las frecuentes quejas revelan que su número era insuficiente y carecían de disciplina y motivación, en parte porque rara vez recibían su salario[267]. Los hacendados habían aceptado pagar por el mantenimiento de dichas estaciones de policía rural, pero no siempre cumplían con su obligación. Varias de ellas eran clausuradas de tiempo en tiempo por falta de fondos[268].

En julio de 1886 el presidente Andrés A. Cáceres emitió un decreto que volvía a reorganizar las fuerzas policiales[269], y el Parlamento aprobó una nueva ley para la Guardia Nacional en octubre de 1887[270]. La ley convertía a esta en una fuerza de reserva para el ejército. El artículo 10 estipulaba que «la Guardia Nacional activa es la fuerza que inmediatamente debe auxiliar al ejército permanente, y el Poder Ejecutivo la organizará de modo que en todo caso pueda atender a las exigencias de la defensa de la Nación y del orden público». Cáceres intentaba evidentemente fortalecer a las fuerzas armadas, pues le preocupaba el estallido de revueltas militares contra su todavía frágil autoridad. En agosto de 1889, un nuevo reglamento de la Guardia Civil de Lima dividió sus fuerzas y jurisdicciones en cinco distritos, cada uno de los cuales se hallaba bajo el mando de un comisario urbano que reportaba directamente al subprefecto de Lima[271].

Tabla 3.1
Arrestos policiales en Lima, 1890-1927
(promedios mensuales)

Período	Arrestos por mes	Población total	%
Oct. 1890 – junio 1891[a]	412	107,114[b]	0,38
Julio-diciembre 1891[c]	519		0,48
Enero-mayo 1892[d]	**1.072**		1

Julio 1892 – junio 1893[c]	**1.223**		1,14
Julio 1894 – junio 1895[f]	855[g]		0,8
Enero 1892 – junio 1895[h]	**1.033**		0,99
Junio 1905[i]	**1.506**		
Enero-junio 1915[j]	923		
Abril, junio 1921[k]	**1.804**	176.000[l]	1,025
Julio 1926 – diciembre 1927[m]	**1.629**	200.000[n]	0,81

[a] Memoria, Subprefecto, 1891.

[b] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Legajo 16.6, 8 de agosto de 1891; 16.5, 22 de julio de 1891. Capelo, *Sociología de Lima*, 120, calculó que la población de Lima en 1895 era de 100.000 habitantes.

[c] Memoria, Prefecto, 1892.

[d] Memoria, Prefecto, 1892.

[e] Memoria, Prefecto, 1893

[f] Memoria, Subprefecto, 1895

[g] El descenso en el número de arrrestos en 1894-1895 se debió casi con seguridad a la «distracción» de las fuerzas policiales durante la guerra civil entre Cáceres y Piérola.

[h] Jiménez, «La sociedad y el delito», 256.

[i] *El Comercio*, 20 de julio de 1905.

[j] Boletín Municipal, 783, 1915.

[k] AGN, Ministerio del Interior, Prefecturas, Paquete 219.

[l] Alexander, *Los problemas urbanos*, 12-13.

[m] Memoria, Guardia Civil, 1928.

[n] Alexander, *Los problemas urbanos*, 12-13.

Poco después, las fuerzas policiales de la capital pasaron por un período de cambios impulsados por Pedro E. Muñiz, un funcionario sumamente ambicioso y enérgico que fue nombrado subprefecto de Lima e intendente de policía en 1890, y prefecto en 1893. Muñiz mostró una inusual energía en su intento por convertir a la policía en una institución más eficiente. El número de arrestos se incrementó dramáticamente después de que él asumiera su mando (tabla 3.1). Entre 1890 y 1893, el promedio mensual de arrestos casi se triplicó, de 412 a 1.223. Sin embargo, su objetivo iba más allá que el simple incremento de los arrestos policiales. Muñiz había pasado algún tiempo en Europa, había leído y adoptado las nuevas doctrinas criminológicas, penales y policiales de moda a finales del siglo XIX y estaba particularmente interesado en las técnicas de acopio de información, en especial la estadística, pues «su necesidad para el hombre de Estado, el moralista, el historiador, el criminalista, *etc.* es de innegable y decisiva importancia». Muñiz se esforzó por reunir «los datos más minuciosos sobre la criminalidad en esta provincia»[272]. En 1891 organizó un censo de la población de Lima, usando las estaciones de policía para reunir la información[273]. En 1892 creó la Sección de Identificación y Estadística (SIE) de la Intendencia de Lima, bajo el mando del médico Leonidas Avendaño[274]. Muñiz pensaba que unas técnicas de identificación eficaces eran los elementos cruciales de una fuerza policial eficiente, y las consideraba aún más necesarias en Lima debido a los frecuentes cambios de autoridades y personal. Según él, estos cambios no afectarían la eficacia de los esfuerzos disciplinarios de las autoridades si es que el SIE contase con bases de datos antropométricos confiables. En consecuencia, este organismo adoptó el sistema Bertillon de identificación criminal –un sistema que combinaba datos fotográficos y antropométricos y que por entonces era el más aceptado en los círculos policiales a nivel mundial–, instaló equipos antropométricos y, según el propio Muñiz, se midió, fotografió y registró un total de 1.680 personas en sus tres primeros años de funcionamiento[275]. De hecho, ser «medido» en la intendencia pasó a ser una suerte de estigma, puesto que tal procedimiento estaba claramente identificado, tanto en la mente de los policías como en la del público, como evidencia de un pasado criminal. En cierto momento la policía comenzó a emitir certificados de que el portador no había sido medido o fotografiado; estos documentos era empleados por quienes deseaban ingresar a las fuerzas policiales[276]. En 1892 también se emitió un «Manual de policía» y se crearon academias para que el personal policial pudiera reunirse y estudiarlo[277]. Se empezó a reunir estadísticas de los arrestos policiales en forma mucho más consistente que antes y se crearon otros mecanismos de identificación y vigilancia. En julio de 1892, por ejemplo, el «Reglamento del servicio de domésticos de la Provincia de Lima» impuso la formación de un registro de estos sirvientes en la intendencia[278].

El paso de Muñiz como intendente de policía, que reflejaba una tendencia más amplia hacia la modernización, así como los crecientes esfuerzos estatales por mejorar la vigilancia y el monitoreo de la población, dejó una huella notable. Para las víctimas de la creciente capacidad de vigilancia de las fuerzas policiales de Muñiz, estos esfuerzos modernizadores constituían un mayor abuso e intromisión: a pesar de todos los cambios (y en realidad debido a ellos), la arbitrariedad y el acoso de la policía hacia ciertos segmentos de la población se incrementó, como se verá luego. De otro lado, las fuerzas policiales continuaron enfrentándose al endémico problema de indisciplina entre su personal. De hecho, el deterioro del autocontrol afectaba no solo a la tropa sino también a los rangos superiores. El consumo de licor por parte de los oficiales de la policía era una fuente constante de escándalos, abusos y otros incidentes embarazosos[279]. La deserción era común, en particular entre los policías asignados a las áreas rurales[280]. Numerosos informes de las comisarías en dichas zonas solicitaban que se reemplazara a su personal porque este se había familiarizado demasiado con la población local, había cometido actos no profesionales y había perdido así el respeto necesario para ejercer su autoridad[281]. En julio de 1894, el comisario del valle de Surco Bajo reportó que de los cuatro hombres asignados a su unidad solamente uno estaba disponible; de los restantes tres, uno yacía herido en el hospital, el segundo había huido luego de herir al primero, y el tercero estaba preso en la cárcel de Guadalupe[282]. Un comisario informó que las tropas policiales eran tan incontrolables que «hay que cuidarlos más que a los caminos»[283]. Sin embargo, los policías indisciplinados expulsados de una unidad podían fácilmente enrolarse en otra, puesto que no había mecanismos eficaces para cotejar sus antecedentes[284].

Los actos corruptos y los desórdenes tendían a incrementarse durante los períodos de inestabilidad política, como la guerra civil de 1894-1895 entre Nicolás de Piérola y Andrés A. Cáceres. Los archivos de la Prefectura contienen abundantes quejas acerca de deserciones, escándalos, abusos y la falta de autocontrol de la policía en ese período. En mayo de 1895, por ejemplo, los propietarios de fondas acusaron a policías y soldados de cometer «escándalos y abusos de confianza» pues repetidas veces comían y bebían sin pagar[285]. *La Opinión Nacional* denunció en julio de 1894 a los oficiales de policía que pedían a los habitantes de varios callejones que pagaran «cupos» de 20 centavos cada uno[286]. El comandante de guardias del tercer cuartel fue acusado de usar a los policías como domésticos en su casa, de cobrar dinero a las personas arrestadas para liberarlas y de imponer pagos ilegales a los burdeles[287]. Naturalmente, los miembros de la policía eran a menudo el blanco de la furia popular. Un tumulto estalló en febrero de 1895 en la calle Torrecilla cuando un policía intentaba arrestar a un tal Pedro Medina y la turba lo impidió. Otro individuo, llamado Aniceto Gregorio, que estaba siendo arrestado por ebriedad, incitó a la multitud a que apedreara a los guardias que lo estaban conduciendo a la estación de policía, gracias a lo cual se le liberó (aunque fue

recapturado nueve días más tarde)[288]. Policías y soldados se enfrentaron en varias ocasiones. En junio de 1895, por ejemplo, un soldado del regimiento Húsares de Junín fue acusado de haber intentado violar a una menor de edad, y cuando un policía intentó llevarlo en custodia, otros soldados salieron en su defensa. El escándalo estalló. La ventaja numérica favorecía a los soldados y la policía tuvo que desistir del arresto. De hecho, según el informe, varios incidentes similares habían tenido lugar casi simultáneamente. El intendente acusó al personal militar de que su «indisciplina viene minando en el pueblo el principio de autoridad por los continuos avances y vejaciones de que pretende hacer víctimas a los representantes de la institución encargada de velar por el orden público». Los soldados, decía, eran «déspotas que no tienen más ley que su capricho, gente ignorante [a la] que no le importan las vallas que la sociedad reconoce y acata»[289].

Tras asumir la presidencia en 1895, Piérola intentó efectuar una nueva reorganización de las instituciones policiales. Entre otras medidas, incrementó el número de las tropas y aumentó sus salarios, pero aún más importante fue el hecho de que estableciera reglas para el ascenso del personal policial con base en el mérito: esta era la primera ocasión en que se implantaba ese sistema[290]. Según el historiador de la policía Víctor Zapata Cesti, este fue el inicio de una fuerza policial realmente profesional. Más adelante, en 1900, el intendente sugirió que se creara una academia de policía en cada estación, para que los agentes pudieran adquirir técnicas profesionales[291]. El ministro de Gobierno se hizo eco de esto en 1907: debido a los bajos salarios, dijo, en lugar de elementos «aprovechables», las filas de la policía se llenaban de aquellos que «solo buscan el medio de vivir sin soportar los esfuerzos que demandan las labores industriales»[292]. La situación fue considerada aún más crítica entre los gendarmes que servían en las áreas rurales, donde no había ningún ambiente que favoreciera la disciplina. En 1905, el ministro de Gobierno citó la necesidad de establecer guarniciones en cada valle para aislar a las fuerzas policiales tanto de los hacendados como de sus peones, cuya proximidad, según él, solo generaba corrupción. Asimismo, exigió que los licenciados del ejército fueran obligados a servir como gendarmes por un tiempo mínimo de dos años después de completado su servicio, pues podían servir de «ejemplo y estímulo a los que no han sido soldados»[293]. Para acometer el persistente problema de la disciplina, las instituciones policiales introdujeron en 1907 un formulario que los postulantes a ese cuerpo debían llenar para que sus nombres pudieran ser contrastados con los registros criminales archivados en las estaciones de policía y en la intendencia, incluyendo la oficina antropométrica[294]. Las técnicas de documentación diseñadas para ayudar a la policía a combatir el crimen se convirtieron en herramientas útiles para escrutar a los postulantes al cuerpo de policía.

Dadas las frecuentes deserciones, los licenciamientos por indisciplina, la falta de un salario adecuado y el crecimiento de la ciudad y su población, los comisarios de la policía rural y urbana percibían con frecuencia que sus fuerzas eran insuficientes para hacer frente a una delincuencia supuestamente creciente. Particularmente críticas eran las áreas que las autoridades policiales consideraban infestadas de malhechores: por ejemplo, el Tajamar («donde tienen sus guaridas innumerables vagos y rateros»), los valles de Piedra Liza y Bocanegra y los distritos del Cercado y La Victoria, que comprendían numerosas fábricas y negocios[295]. Lizardo Revollé, comisario del segundo cuartel, solicitó en 1908 que el número de inspectores fuera elevado de 134 a por lo menos 180, aunque añadía que el número ideal era 210. Después de dar las quejas acostumbradas con respecto a la indisciplina y el magro salario policiales, Revollé presentó una propuesta innovadora: una academia de policía bajo la dirección de una misión europea, la única forma, según él, de garantizar una fuerza policial profesional[296]. Tomaría algún tiempo para que esta idea germinase, pero, como se verá más adelante, ella fue finalmente adoptada por las autoridades estatales.

A pesar de sus defectos institucionales, la policía se convirtió gradualmente en una suerte de maquinaria de vigilancia. Todas las imperfecciones de un aparato burocrático en el cual el clientelismo, la corrupción y la frecuente falta de respeto a las normas escritas eran recurrentes, no impidieron que las instituciones policiales reunieran, organizaran y emplearan todo tipo de información, no solo acerca de los criminales sino de la población en general. Este período marca el inicio de la acción policial como una forma más intervencionista de control social y que, entre otras cosas, empleaba métodos para generar y manipular información que prometían, por lo menos en teoría, monitorear y examinar una amplia gama de actividades entre las clases bajas de la sociedad. En julio de 1895 el intendente sostuvo que para asegurar una vigilancia efectiva se debían anotar en los registros policiales «las observaciones diarias y constantes de los usos y costumbres del vecindario», los cuales debían registrarse con «esmerada exactitud»[297]. Siguiendo su sugerencia, la policía abrió una serie de registros en los cuales se ingresaban varios tipos de información: no solo una lista de domicilios, sino también directorios de vendedores ambulantes, sirvientes domésticos, presos fugitivos, huéspedes alojados en hoteles, expresidiarios y muchos otros, entre ellos una lista de «sospechosos en lo criminal» a los cuales la policía intentaba mantener vigilados[298].

Además, ya a comienzos de la década de 1910 se comenzaron a usar huellas digitales para identificar delincuentes. Una Oficina de Identificación que empleaba el sistema Vucetich fue creada en la estación de policía del Callao en junio de 1912[299]. A finales del siglo XIX, Juan Vucetich, un inmigrante croata que residía en Argentina, había inventado un nuevo sistema de identificación basado en una serie de patrones de

huellas digitales. Se cree que fue el primer investigador del mundo en usar la dactiloscopía para resolver un crimen, en 1892. Las mejoras subsiguientes en su técnica le dieron una reputación internacional, aunque muchos siguieron considerando que el sistema de Bertillon era superior[300]. En 1915 el Gobierno creó una Oficina de Investigación Dactiloscópica (OID) en la Intendencia de Lima, bajo el mando de Luis Vargas Prada. Según Zapata Cesti, la OID tomó las huellas digitales a 4.235 personas en apenas seis semanas, lo que permitió la formación de «un magnífico registro dactiloscópico»[301]. Al igual que en otros países, las técnicas de investigación criminal fueron ampliadas para monitorear a la población general. En 1916 la OID comenzó a emitir tarjetas de identidad que incluían fotografía y datos dactiloscópicos a todo aquel que lo solicitase[302]. Según Elías Lozada Benavente, para septiembre de 1920 se habían registrado 10.527 identificaciones, 4.266 de las cuales eran de delincuentes[303]. En octubre de 1915 se creó una nueva oficina encargada de llevar una estadística de la reincidencia[304]. En enero de 1913 se creó una Sección Obrera en las subprefecturas de Lima y Callao: «la última agitación obrera y consideraciones de interés público y social, han evidenciado, una vez más, la necesidad de reunir, metódicamente, todas las informaciones auténticas que se refieran a la constitución de las industrias locales, en orden a la condición moral y material de las clases asalariadas»[305]. Poco después, un aviso en un diario limeño invitaba a los trabajadores a registrarse en la recién creada sección[306]. El formulario que la policía preparó para registrar los datos de los obreros era similar a una ficha de identificación criminal. Se incluían descripciones de rasgos antropométricos: nariz, boca, labios, cabello y otros. La identificación y la vigilancia también fueron extendidas al mismísimo personal policial. En 1916 se dio un nuevo reglamento de admisión a las fuerzas policiales. Todos los postulantes debían presentar el nombre de dos vecinos respetables de la localidad como garantes del equipo que el desertor potencial podía llevarse consigo[307]. En 1920 Vargas Prada, el director de la OID, para quien las huellas digitales constituían «el nombre antropológico» de cada persona, propuso un ambicioso plan para hacer que la identificación fuera aún más funcional. Además de recomendar su uso con fines electorales (una propuesta que, efectivamente, fue adoptada posteriormente), propuso que la intendencia reuniera datos dactiloscópicos de todos los delincuentes del país. Le preocupaba que los exconvictos del interior que se dirigieran a Lima en busca de trabajo pudieran terminar enrolados en las fuerzas policiales. Pensaba, además, que como la mayoría de los sirvientes domésticos provenían del interior, este registro permitiría a los patrones conocer los antecedentes de las personas a las que iban a contratar. La ausencia de métodos para comprobar la identidad de las personas tenía como resultado, según él, los numerosos delitos perpetrados por los sirvientes domésticos de Lima. Más aún, el sistema de identificación permitiría el intercambio de registros criminales entre distintos países[308].

Como parte de su objetivo de modernizar el Estado peruano, el Gobierno de Leguía dio inicio en 1920 a una reforma global de las instituciones policiales bajo el liderazgo del ministro de Gobierno y Policía Germán Leguía y Martínez. De especial interés fue la creación de la Guardia Republicana, una rama de las fuerzas policiales que entre otras obligaciones tenía a su cargo la seguridad externa e interna de las prisiones[309]. La medida más ambiciosa tomada por el Gobierno de Leguía fue el nombramiento de una misión española para que asesorara al Estado peruano en la formación de una fuerza policial profesional[310]. Cuatro oficiales de policía españoles arribaron en noviembre de 1921, en medio de grandes expectativas. Sus obligaciones incluían la evaluación y la reestructuración de las fuerzas policiales ya existentes. Durante los siguientes dos años se crearon una serie de nuevas unidades policiales, convirtiendo efectivamente a la policía en una institución mucho más regimentada, centralizada y profesional. Por ejemplo, en octubre de 1922 se creó la Brigada de Investigación y Vigilancia, una unidad especial para combatir tanto el delito como la oposición política[311]. El 1 de noviembre de 1922 se inauguró con gran pompa una nueva Escuela de Policía[312]. Ubicada en el renovado edificio del antiguo asilo mental, que había sido convertido en el cuartel general de la Guardia Civil, dicha escuela comenzó a ofrecer entrenamiento policial a exgendarmes y licenciados del ejército[313]. Toda la estructura policial volvió a ser reorganizada el 12 de abril de 1923. Ahora pasó a estar conformada por tres unidades: la Guardia Civil, el Cuerpo de Seguridad y el Cuerpo de Investigaciones, este último a cargo de investigar los delitos e identificar a los criminales[314]. De otro lado, la policía rural siguió de cierto modo evadiendo los intentos estatales de centralización y modernización hasta bien entrada la década de 1920. Las estaciones de policía en los valles rurales de Lima siguieron operando en instalaciones privadas (en haciendas, por ejemplo) y los comisarios eran escogidos entre los propietarios rurales. Parte de su personal lo pagaban los hacendados, y los caballos de la policía eran alimentados en haciendas privadas. Aunque ya en 1916 el ministro de Gobierno había advertido que ellas «ofrecen el peligro de que los que las desempeñan se dejen dominar por un espíritu de parcialidad en favor de particulares de quienes reciben remuneración»[315], hacia 1923 aún había 13 estaciones rurales de policía en Lima que dependían de recursos privados[316].

El fortalecimiento de la vigilancia política durante el gobierno de Leguía adquirió gran importancia. Experimentó una serie de encarnaciones, pero su presencia se hizo sentir fuertemente durante el Oncenio y se fue haciendo cada vez más sofisticada y rigurosa. Ya antes habían existido unidades de policía política, pero durante este gobierno se convirtieron en un instrumento eficaz y ampliamente usado de intimidación y acoso. De hecho, poco antes del golpe de Leguía, el 7 de junio de 1919, se organizó una nueva fuerza secreta de policía política. Se la denominó la Sección de Vigilancia y su primer jefe fue Damián Müstiga, quien se haría célebre en la década de 1930 como un temible

jefe de la represión estatal[317]. Rufino Martínez, otro célebre torturador, tuvo a su cargo la organización de la policía política de Leguía, para lo cual empleó fundamentalmente a criminales y exprisioneros[318]. Las unidades política y de investigación fueron fortalecidas aún más bajo la dirección del general Pedro Pablo Martínez. Se abrieron comisarías especiales con miras a «investigar y descubrir todo acto delictivo y todo acontecimiento político que fuera en perjuicio de la labor gubernativa y en contra del Gobierno»[319]. La policía secreta pasó a formar parte del Cuerpo de Investigaciones luego de las reformas policiales de 1923. Posteriormente, en 1928, se agregó una unidad especial, la Brigada de Asuntos Especiales, que estaba a cargo de la vigilancia de trabajadores y dirigentes sindicales[320]. Abelardo Solís, un duro crítico del Oncenio, describió a la policía como el instrumento principal de la represión leguiísta y a la ciudad de Lima como una suerte de jaula opresiva. Los agentes de «la secreta» incursionaban en cafés, tabernas, clubes, iglesias, cuarteles militares y colegios, infundiendo el temor en la población. Abundaban los soplones: damas en los salones aristocráticos, placeras en los mercados, sirvientas en las casas y hasta alcahuetes en los burdeles trabajaban para la policía política. La reforma policial, concluyó Solís, había sido en realidad usada como un instrumento para fortalecer la naturaleza dictatorial del régimen leguiísta[321].

Los efectos de la reforma policial de Leguía fueron considerables. Algunos ven este período como una suerte de etapa fundacional de las fuerzas policiales profesionales y modernas del Perú. No es difícil entender por qué: la policía se convirtió en una institución mucho más intervencionista y represiva, y de hecho mucho más poderosa. Los viejos y cansados gendarmes y los humildes cachacos fueron reemplazados con policías preparados que tal vez no eran respetuosos cumplidores de la ley, pero que ciertamente sí estaban mucho mejor equipados y eran más visibles y agresivos que antes. En Lima, la presencia policial se sintió cada vez más y de muchos modos: los agentes policiales controlaban el tráfico, arrestaban a los vagos, monitoreaban las actividades de los opositores políticos y cada día arrestaban a docenas de personas por conducta disoluta. La acción policial se había convertido efectivamente en un instrumento eficaz de los esfuerzos estatales por monitorear y controlar a sectores específicos de la población.

Del arresto al encarcelamiento

La mayoría de las personas arrestadas eran llevadas primero a una comisaría (la cárcel distrital) o a la intendencia de policía (el cuartel general de la policía de la ciudad). Habían cometido un delito, habían sido acusadas de haber cometido uno, se comportaban –a ojos del oficial de policía– como si llevaran una vida delictiva o simplemente (como sucedía con bastante frecuencia) estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Poco después de su arresto (aunque en algunos casos esto

podía tomar días y hasta meses), el intendente evaluaba la situación legal del detenido (un procedimiento conocido como «calificación de presos») y luego establecía si se le debía liberar, se le detenía en la comisaría por un tiempo mientras se llevaban a cabo más investigaciones o se le transfería a prisión mientras esperaba ser juzgado. El proceso de evaluación fue durante muchas décadas un evento público. *El Comercio* sarcásticamente invitaba a asistir cada mañana a la intendencia a presenciar la evaluación de los prisioneros y divertirse: «Aquello es cosa más para vista que para contada. Hay caras que parecen máscaras y vestidos que parecen hilas. Luego, se oyen allí historias divertidísimas, y de los dichos que se pronuncian se podría formar una colección que alcanzaría precio subido»[322]. Los parientes y transeúntes se reunían en la intendencia para presenciar la evaluación de los que habían sido arrestados por la policía y tal vez intentar influir sobre ella. En enero de 1908, el subprefecto criticó la calificación como un procedimiento contraproducente porque permitía a los detenidos comunicarse entre sí e incluso con el público que asistía al evento. Su naturaleza pública, pensaba, era inconveniente en tanto que violaba la «reserva absoluta» que debía caracterizar todo procedimiento policial. Por tanto, suspendió la evaluación pública, y la calificación pasó a ser un acto privado[323].

Pero antes de que su destino fuera decidido con la calificación, los sospechosos ya habían sido sometidos al comportamiento usualmente arbitrario de los oficiales de policía. El maltrato, cuando no una brutal tortura, era algo rutinario. De hecho, la arbitrariedad policial podía comenzar con el arresto mismo, pues a veces se detenía a personas sin ninguna razón aparente. En 1875, *La Gaceta Judicial* denunció que en ocasiones las personas eran arrestadas por actos que no constituían una violación de la ley[324]. El arresto era a veces violento y hasta trágico. Un hombre chino, por ejemplo, fue muerto por un oficial de policía mientras intentaba arrestarlo. Según los agentes, la víctima se encontraba «en gran estado de excitación» y «convertido en una fiera», por lo que no tuvieron otra opción que golpearlo brutalmente. Durante el juicio se reveló que uno de los policías estaba borracho y que en realidad había arrestado al chino solo porque alguien lo había señalado como ladrón. Uno de los oficiales fue absuelto argumentando defensa propia, en tanto que el otro fue condenado a un año de prisión[325]. El arresto de sospechosos ebrios era particularmente difícil, pero las autoridades idearon una solución práctica: los agentes comenzaron a usar unas carretillas en las cuales ataban al sujeto, llevándolo prestamente a la estación policial más cercana[326]. Una vez allí, los detenidos usualmente debían soportar pésimas condiciones. Las estaciones de policía estaban generalmente sucias y congestionadas, las celdas húmedas y asquerosas, y los detenidos debían dormir en el suelo o incluso en corrales de caballos[327]. Igualmente comunes eran formas de maltrato como la tortura y las golpizas. El caso de Isidoro Torres, por ejemplo, no fue excepcional: acusado de robo, fue llevado a la comisaría y colocado en la barra, el instrumento de tortura de uso más común en las

prisiones y cárceles de Lima. Se trataba de un aparato que mantenía al prisionero boca abajo y atado por los pies a una barra, a alturas variables y por lapsos que duraban varias horas, días y hasta semanas[328]. Aunque luego no se pudo probar la culpabilidad de Isidoro en el juicio y posteriormente fue liberado y absuelto de todos los cargos, su inocencia no impidió que se le torturara[329]. Las cosas fueron aún peores para el tipógrafo Marcos Cobián. Se le acusó de robo, se le condujo a la intendencia y se le transfirió luego a una estación militar, donde se le puso en el cepo volador por dos horas y en la barra durante toda la noche. El cepo volador consistía en esposar al prisionero con las manos a la espalda, golpeándolo, empujándolo y derribándolo al piso para luego hacerlo rodar mientras los torturadores lo pateaban repetidas veces[330]. Al día siguiente Cobián fue obligado a fregar el local y luego se le torturó nuevamente. *El Comercio* lo llamó un ladrón profesional, algo que él negaba vehementemente; en realidad había estado detenido anteriormente, pero fue absuelto. Cobián finalmente falleció durante el juicio por causas no reveladas[331]. Los casos como este eran bastante comunes. En 1912, un hombre llamado Carlos Duarte huyó de la prisión de Guadalupe y fue recapturado alrededor de un mes más tarde. De vuelta en la intendencia fue puesto en la barra. Posteriormente, en un momento de desesperación, según la versión oficial del caso, tomó el rifle de un guardia distraído y se mató[332]. Un día de 1916, en la cárcel del distrito de La Legua, Juan Osorio fue arrestado y torturado en la barra, mientras su esposa, Angelina Espinoza, era violada[333]. Las cosas no mejoraron en la década de 1920, no obstante los esfuerzos realizados para profesionalizar las fuerzas policiales. Según una carta colectiva firmada por los presos de la penitenciaría de Lima en 1930, la intendencia era un «cementerio de los vivos» en el que las autoridades acostumbraban masacrar a inocentes[334].

La brutalidad policial no era un asunto que generara extensas discusiones entre la opinión pública de Lima, pero ocasionalmente escandalizaba a algunos observadores. Un artículo publicado en *El Diario Judicial* en mayo de 1890 denunciaba el uso frecuente de la tortura para obligar al detenido a declarar «lo que no ha visto o ignora absolutamente», y comparaba el uso del látigo por parte de la policía con tormentos tan degradantes de la era colonial como las mutilaciones y el herrado. También subrayaba que la tortura se usaba en varias dependencias del Estado (cárceles, cuarteles militares, la intendencia) debido a la difundida creencia de que «la autoridad es más respetada cuando es más temida, y que por lo mismo conviene emplear el palo y el látigo para amedrentar a los malos y hacer fácil el trabajo de la policía»[335]. En 1890, *El Comercio* publicó un editorial acerca de los abusos policiales, como reacción a las denuncias que sostenían que los presos políticos y militares eran torturados en los cuarteles de policía: «La policía, es por desgracia cierto, suele dar, entre nosotros, muestras de poca cultura y de no tener una idea precisa del respeto debido al hombre por su carácter de tal. Este modo de proceder desprestigia grandemente a nuestra sociedad, minando también y

haciendo odioso el principio de autoridad en su revelación más práctica». Todos creían en las denuncias de abusos policiales, proseguía el diario, «porque todos más o menos tienen noticia de hechos iguales, realizados en casos semejantes»[336]. En abril de 1896, el director de *La Opinión Nacional* fue arrestado luego de que el periódico denunciara abusos, torturas y hasta ejecuciones[337]. El crítico más enfático y feroz del comportamiento de la policía de Lima fue el escritor anarquista Manuel González Prada: «¿Qué no se hace con los infelices para obligarles a confesar un delito real o atribuirse uno imaginario? Se les aglomera en habitaciones sin aire ni luz, húmedas y pestilentes; a media noche se les arranca del sueño para lanzarles cubos de agua fría [...] se les remacha grillos, se les pone en cepo volador [...] se les cuelga de los pulgares o de los testículos»[338]. Quejas de este tipo también llegaron al Congreso Nacional, donde en 1915 un parlamentario condenó a la policía de Lima pues, «con pretextos moralizadores, viene realizando la odiosa e injustificable labor de atentar contra el decoro y la respetabilidad del sexo femenino perteneciente a las modestas clases sociales»[339].

Aunque el poder discrecional de que la policía gozaba era usado ampliamente para perjudicar a ciertas personas, también podía usarse para beneficiar a otras, por lo general aquellas «personas decentes» que a ojos de los oficiales no merecían semejante tratamiento o que contaban con suficiente influencia como para evitar ser encarceladas o procesadas. Que este poder discrecional era empleado en forma abierta y consistente lo revela el siguiente caso, basado en el informe de las propias autoridades. En enero de 1895, un comisario informó que más de 20 personas habían sido arrestadas por conducta disoluta, entre ellas algunas «al parecer decente[s]». Una vez en la intendencia, aquellas «de mejor aspecto» fueron puestas en un compartimiento especial, «muy lejos de ser un inmundo calabozo». A la mañana siguiente, una vez que las autoridades confirmaron que entre los arrestados se encontraban «tres caballeros conocidos», se ordenó la liberación de todo el grupo porque en su opinión, «siendo idéntica la causa de su detención, no podía hacer preferencias tratándose de administrar justicia». Luego recriminó a los oficiales «a fin de que sepan distinguir las personas, evitando así quejas desagradables»[340]. *El Comercio* informó en marzo de 1902 que los beodos eran aprehendidos y enviados a la cárcel en las carretillas de la policía cuando parecían pertenecer a las clases bajas, pero que se les conducía a su domicilio «con los honores debidos» cuando eran «*caballeros decentes*, como se dice en el diccionario técnico de comisaría»[341]. González Prada acusó al cachaco de ser «todo humildad ante la gran dama y el gran señor, todo soberbia ante la tímida chola, el pobre negro y el infeliz chino»[342]. En enero de 1916, tres hombres ebrios causaron un escándalo al protestar por el arresto del cochero que los conducía. El comisario ordenó que se les detuviera, pero luego cayó en la cuenta de que eran nada menos que Leonidas Yerovi, el célebre escritor, y dos periodistas de *La Prensa* y *La Crónica*. Por tanto, «dada la condición social

de los detenidos» y «después de hacerles ver la gravedad de la falta por ellos cometida, y las responsabilidades que pudieran derivarse de ella, no tuv[e] inconveniente en ponerles en libertad»[343].

No habrá de sorprender la constatación de que la inmensa mayoría de arrestos efectuados en Lima eran de personas pertenecientes a las clases bajas. Entre el 56,6 y el 75,6 por ciento de los detenidos pertenecían a ellas, en tanto que del 16,6 al 35,2 por ciento eran registrados como personas desempleadas, vagabundas o marginales (tabla 3.2). En total, más del 90 por ciento de todos los detenidos pertenecían a las clases bajas. La acción policial se concentraba abrumadoramente en la persecución de personas pertenecientes a los sectores menos favorecidos de la población limeña. Dentro de este grupo los hombres conformaban la mayoría, y comprendían alrededor del 85 por ciento de todos aquellos detenidos por la policía.

Tabla 3.2
Arrestos en Lima por ocupaciones, 1892-1921

	1892-1893				1896				1921 (Junio)			
	Hombres	Mujeres	Total	%	Hombres	Mujeres	Total	%	Hombres	Mujeres	Total	%
CLASES TRABAJADORAS												
Industriales	**1.343**	173	**1.516**		**2.152**	506	**2.658**		42		42	
Artesanos	**4.208**	97	**4.305**		**3.011**	66	**3.077**		207	57	264	
Jornaleros	**2.883**	**1.131**	**4.014**		**3.039**	560	**3.599**		423		423	
Agricultores	492	42	534		385	23	408		44		44	
Domésticos	536	186	722		357	140	497		146	48	194	
Choferes									57		57	

Subtotal			**11.091**	75,6			**10.239**	77,4			**1.024**	56,6
CLASES MEDIAS Y ALTAS												
Empleados	473	37	510		371	60	431		67		67	
Comerciantes	536	31	567		308	23	331		14		14	
Profesionales	77		77		115		115		9		7	
Rentistas	1		1		12		12					
Subtotal			**1.155**	7,9			889	6,7			88	4,9
PERSONAL MILITAR												
Militares	387		387		222		222		16		16	
Marinos	48		48		52		52		5		5	
Subtotal			435	3,0			274	2,1			21	1,2
DESEMPLEADOS Y OTROS GRUPOS MARGINALES												
Sin ocupación	611	393	**1.004**		560	331	891		217		217	
Sin profesión	547	369	916		382	311	693		142	56	198	
Rateros									66		66	

Rufianes y meretrices									63	93	156	
Subtotal			**1.920**	16,6			**1.584**	12,0			637	35,2
OTROS												
Colegiales					147	2	149	1,1	38		38	2,1
DESCONOCIDOS	52	25	77	0,5	57	33	90	0,7				
TOTAL	**12.194**	**2.484**	**14.678**		**11.170**	**2.055**	**13.225**		**1.556**	254	**1.808**	

Fuente: Memorias, Subprefecto de Lima.

Las transgresiones del orden público constituían aproximadamente la mitad de todas las ofensas cometidas (tabla 3.3). Entre ellas figuraban la vagancia, la ebriedad y otras ofensas menores que, al no requerir encarcelamiento, permitían a los perpetradores salir libres luego de pasar un breve tiempo en la comisaría. Entre la quinta y la cuarta parte de las ofensas eran delitos contra la propiedad, entre ellos algunas raterías, en tanto que los crímenes contra la persona, como heridas, asaltos, secuestros y otros, ocupaban el tercer lugar. Resulta claro que la mayor parte de las energías de la policía se encaminaban a aprehender y castigar a las personas que aparentemente cometían ofensas menores contra el orden público, o en intentar prevenir que se cometieran. En Lima la delincuencia, tal como la retratan las estadísticas disponibles, no reflejaba una ola de delitos violentos o contra la propiedad, sino, principalmente, la participación de las clases bajas en ciertas formas de comportamiento social que chocaban con las reglas del decoro, la sobriedad y el respeto a la autoridad que el Estado y los sectores decentes de la sociedad intentaban imponer. Este patrón de detenciones muestra una notable consistencia en el período que va de la década de 1890 a la de 1920. Lo mismo ocurre con la proporción de arrestos por número de habitantes. Después de 1892, esta se mantuvo bastante estable en alrededor del 1 por ciento (véase la tabla 3.1).

Tabla 3.3
Arrestos en Lima por tipo de ofensas, 1892-1927
(Porcentajes)

	1892-1908	1896	1905	1921	1926-1927
Contra las personas	19,49	13,06	15,11	11,47	16,07
Contra la propiedad	24,42	9,21	21,59	21,68	21,59
Contra el honor	3,57	1,26	4,52	2,53	0,88
Contra las garantías individuales	0,93		0,49	0,31	
Contra el orden público	51,59	49,87	45,24	50,98	49,89
Delitos de empleados públicos		7,28		6,21	
Otros		21,74	13,05	6,78	

Fuentes:

1892-1898: Valdizán, «La delincuencia en el Perú».

1921: AGN, MI, Pref, Paq. 219.

1896: Memoria, Subprefectura.

1905: *El Comercio*, 20 de julio de 1905.

1926-1927: Memoria, Guardia Civil.

Un arresto podía tener consecuencias mayores para una persona si era objeto de un parte policial adverso, independientemente de su culpabilidad. Este informe de los hechos y circunstancias que llevaron al arresto, redactado por un oficial de policía, podía convertirse en una evidencia crucial en el juicio al que podía someterse al acusado. Era muy probable que las personas pobres o desempleadas, los borrachos consuetudinarios y otros individuos de bajo estatus social recibieran un parte policial desfavorable que luego sería usado en su contra por las autoridades judiciales. Un caso típico fue el de José Fernández, conocido como «Chuzaso». Se le acusó de haber robado unos cuantos objetos de la casa y restaurante de José Calderón. La policía lo detuvo y envió al juez con un parte policial que lo describía como un «ratero conocido», capturado mientras intentaba retirar una máquina de coser de un corral. Durante el juicio, el magistrado solicitó a los funcionarios de la cárcel de Guadalupe que enviaran el informe de antecedentes penales de Fernández, el cual mostraba que había sido

detenido en cuatro oportunidades, todas ellas por robo, pero que jamás había sido hallado culpable. Sin embargo, en su sentencia el juez sostuvo que la culpabilidad de Fernández había sido *demostrada* tanto por el parte policial como por su historial de ingresos previos a Guadalupe y lo sentenció a cuatro años en prisión. En su apelación, el abogado defensor sostuvo correctamente que el parte policial no podía ser considerado prueba de culpabilidad: simplemente «es la narración del hecho sujeto a comprobación por la autoridad judicial [...] El parte de policía *da meras referencias* al dicho de personas que tienen que declarar ante la autoridad judicial, no tiene valor propio» (énfasis original). Aun así, la sentencia de Chuzaso fue confirmada tanto por la Corte Superior como por la Corte Suprema. En este caso, al igual que en muchos otros similares, la combinación de un parte policial adverso y un historial previo (aunque no del todo concluyente) de encarcelamiento fue decisiva en la decisión de considerar culpable al detenido[344]. Ni siquiera los muertos estaban a salvo de ser objeto de un parte negativo: cuando la policía identificó un cadáver hallado en el río Rímac como perteneciente a Manuel Rojas, rápidamente agregaron en el parte que se trababa de un «vago, ratero y ebrio consuetudinario, y de depravados instintos, y conocido por la policía,

con el apodo de "Quita-calzón"», de modo que «su trágico fin no era de extrañar dado el modo de vivir del occiso, de suyo licencioso e inmoral»[345].

Sin embargo, a pesar de la arbitrariedad del parte policial, el número de personas que realmente fue a prisión después de la evaluación inicial efectuada por la policía constituía una pequeña fracción del número total de arrestos. Apenas entre el 4 y el 8 por ciento de estos detenidos fueron enviados a prisión, en tanto que más del 90 por ciento fueron liberados sin cargo alguno (tabla 3.4). Un pequeño porcentaje de los arrestados fueron consignados al asilo mental o el ejército y, cuando fallecían durante su detención en la estación de policía, eran remitidos al cementerio. La mayoría de quienes evitaban las acusaciones criminales eran liberados de inmediato, pero otros, en especial aquellos que habían cometido infracciones menores como ebriedad o peleas, para las cuales no había pena de prisión, podían pasar unas cuantas horas o incluso días en la intendencia, donde se les asignaba algún trabajo manual como fregar los pisos y hacer limpieza. Un motivo de constantes críticas y exasperación entre autoridades y periodistas era precisamente el hecho de que los vagos, rateros y otros individuos indeseables que eran llevados a la estación de policía permanecían retenidos por un breve lapso (días y a veces solo horas) y luego se los liberaba por falta de evidencias, espacio, mandato legal o interés de formular cargos contra ellos. En 1901 *El Comercio* se quejó de que «con toda frecuencia recogen las cinco comisarías de Lima [...] una legión no pequeña de vagabundos, a los cuales devuelven otra vez, en el mismo estado, a ese medio social que no puede expulsarlos de su seno»[346]. Semejante exasperación parece

haber sido el origen de muchas campañas para erradicar el delito en Lima que utilizaban el argumento de que este estaba aumentando en proporciones sin precedentes.

Tabla 3.4
Destino final de las personas arrestadas, 1877-1921

Año		Total de arrestos	Enviados a prisión	%	Liberados	%	Otros	%
1877	Hombres	**14.804**	**1.250**	8,4	**13.527**	91,3	30	0,2
	Mujeres	**2.717**	125	4,6	**2.587**	95,2	5	0,2
	Total	**17.521**	**1.375**	7,8	**16.114**	91,9	35	0,2
1892-1893	Hombres	**12.194**	515	4,2	**11.231**	92,1	448	3,7
	Mujeres	**2.484**	62	2,5	**2.376**	95,6	46	1,9
	Total	**14.678**	577	3,9	**13.607**	92,7	494	3,4
1921 (abril-junio)	Total	**3.608**	217	6,0	**3.271**	90,6	120	3,3

Fuentes:

1877: Fuentes, *Estadística de la penitenciaría*.

1892-1893: Memoria, Subprefectura, 1893.

1921: AGN, Prefecturas, Lima.

Para el pequeño porcentaje de personas arrestadas y sospechosas de alguna felonía, su siguiente destino era la cárcel –Guadalupe, El Frontón o más tarde la Cárcel Central de Varones–, donde habrían de esperar el juicio correspondiente. De ser condenadas, permanecerían allí o bien serían transferidas a otra institución como la penitenciaría, dependiendo de la pena recibida. Los presos que pasaban tiempo en prisión, sea como

enjuiciados (es decir, acusados que esperaban el comienzo del juicio o que estaban siendo procesados) o como sentenciados, eran el destilado de la acción policial y del sistema de justicia criminal; en términos más que estrictamente legales, ellos constituían la población criminal de Lima.

Segunda parte

Las cárceles y sus habitantes Capítulo 4

El archipiélago penal limeño Hacia mediados del siglo XIX, el encarcelamiento había pasado a ser la forma más común de castigo judicial en el Perú. La mayoría de los delitos eran castigados con pena de cárcel, al tiempo que la pena de muerte y otros tipos de castigo eran cada vez menos usados. Las formas más infames, como la marca de hierro, habían sido ya legalmente abolidas. Al mismo tiempo, sin embargo, las prisiones peruanas carecían de una infraestructura adecuada, y una mezcla de ineficiencia y despotismo caracterizaba el modo en que se las administraba. Algunos observadores comenzaron a ver esta situación como un obstáculo para el objetivo estatal de alcanzar un sistema judicial efectivo y centralizado, pero también como un vergonzoso recordatorio de la época colonial. Hacia 1850 empezaron a surgir, entre ciertos sectores de la élite política e intelectual peruana, nuevas preocupaciones en torno al trato dado a los delincuentes y a la naturaleza del encarcelamiento como castigo. Las percepciones respecto de un «alarmante» incremento en la tasa de criminalidad y, en cierta medida, la compasión humanitaria por las condiciones de los presos, alimentaron el reclamo de una reforma carcelaria. Las doctrinas penales desarrolladas en Europa y los Estados Unidos comenzaron a influir en el discurso de las autoridades estatales, los diseñadores de políticas y otros expertos. Las prisiones, se decía ahora, debían usarse no solo para castigar a los delincuentes sino

también, y sobre todo, para redimirlos y reincorporarlos a la sociedad. La consolidación del Estado peruano de la mano de grupos liberales generó tanto la motivación política como la capacidad administrativa para intentar una transformación seria del sistema penal. La penitenciaría de Lima, inaugurada en 1862, fue la pieza central de la nueva y supuestamente moderna estrategia punitiva. Ella prometía reemplazar las actitudes tradicionales de aborrecimiento y rechazo hacia los delincuentes con una nueva postura que enfatizaba el trato humano. Se pensaba que el humanitarismo llegaría a ser el mejor instrumento para corregir y readaptar a los delincuentes y reinsertarlos en el cuerpo social.

El tortuoso proceso de la reforma carcelaria en Lima entre comienzos de la década de 1850 e inicios de la de 1930 revela las tensiones existentes entre dos construcciones doctrinales y culturales del castigo: para algunos se trataba de un instrumento de retribución y disuasión mientras que para otros era un medio para reformar y redimir al delincuente. En ningún momento a lo largo de este período se puede identificar un único paradigma consensual pues siempre hubo tensiones, ya fueran abiertas o veladas, entre ambos enfoques. Sostengo, sin embargo, que por lo general prevaleció una visión despótica del castigo que enfatizaba la venganza y la disuasión antes que la rehabilitación y la reforma, tal vez no siempre en el discurso oficial pero sí en la percepción y el comportamiento de los expertos penales y las autoridades del Estado.

Los ambiciosos objetivos de erigir un moderno sistema carcelario en el Perú tropezaban con la inercia política, los obstáculos logísticos y, de manera especial, con la persistencia de políticas excluyentes y una actitud deshumanizadora del Estado hacia los sectores ciudadanos subordinados, incluyendo a los presos. Un elemento importante en esta historia es la presencia dominante de una cultura política autoritaria y la ausencia de sentimientos favorables a los presos entre la población en general. Los esfuerzos intermitentes y aislados por generar interés por este tema fueron recibidos por el público con apatía e indiferencia. En una sociedad en la cual el racismo y el autoritarismo predominaban mucho más que la defensa de la igualdad y los derechos democráticos, era inevitable que la forma en que se trataba a los presos no fuera motivo de una amplia preocupación. La ausencia de voces disidentes hizo que fuera más fácil para los sucesivos Gobiernos perpetuar el *statu quo*. Y si bien hubo importantes cambios en la forma en que se administraban las prisiones y aunque posteriormente se emplearon métodos supuestamente científicos en la implementación del castigo, estos

cambios fueron superados por las fuertes continuidades en la implementación de las penas y el trato dado a los presos.

Las cárceles de Lima, c. 1850

En 1853, Mariano Felipe Paz Soldán, un joven abogado y futuro historiador y estadista, escribió un devastador informe acerca de las condiciones imperantes en las prisiones y cárceles de todo el país[347]. Paz Soldán había sido juez de paz en la ciudad norteña de Cajamarca y se interesó por este tema luego de ver las atroces condiciones existentes en la cárcel de esa ciudad, cuya demolición posteriormente ordenaría. El informe, que representa una perturbadora denuncia del sistema de justicia penal del país, resaltaba la necesidad apremiante de tratar un problema que hasta ese entonces no había captado seriamente la atención del público.

Las cárceles y prisiones de Lima compartían muchas de las deficiencias que Paz Soldán encontró en los centros de detención del país. La cárcel local, comúnmente conocida como Carceletas, estaba ubicada en el mismo edificio que había albergado a la cárcel de la Inquisición en la época colonial. Se suponía que solo debía albergar a los acusados que esperaban juicio (*detenidos*), pero la población carcelaria incluía a personas que estaban siendo juzgadas (*enjuiciados*) así como a delincuentes ya sentenciados a prisión (*rematados*)[348]. Según los observadores, Carceletas albergaba una «abominable confusión» de delincuentes de poca monta u ocasionales, reincidentes pertinaces y personas inocentes. El edificio era sumamente inadecuado para ser usado como cárcel y la vigilancia y la seguridad eran pésimas. Según Paz Soldán, sus calabozos eran verdaderos «sepulcros de vivos». Los presos eran tratados, de acuerdo con Manuel Atanasio Fuentes, como «bestias feroces», ocupaban habitaciones pequeñas, sucias y sobrepobladas, vestían harapos en lugar de ropa y usaban «destrozadas esteras» como camas[349]. Varios comentaristas subrayaron la falta de todo principio de organización dentro de la cárcel. Por ejemplo, era casi imposible saber cuántos presos había en un momento dado, qué clase de delitos habían sido acusados de cometer, cuál era su sentencia (si la había) o si merecían siquiera estar encarcelados o no. Simplemente no existía registro alguno.

Otra cárcel local estaba situada en el edificio de la Intendencia de Policía. Conocida como la cárcel de policía, se la usaba para detener a delincuentes de poca monta que debían estar bajo custodia, así como aquellos que esperaban la decisión de un juez sobre si debía juzgárselos o no. Cuando el juez así lo decidía, eran transferidos a Carceletas. Los abusos eran moneda corriente en la cárcel de policía. Como vimos en el capítulo anterior, los azotes y otras formas de tormento físico eran algo común una vez que una persona detenida cruzaba la portada de la intendencia[350]. Igualmente siniestra era

Casasmatas, una cárcel que funcionaba dentro de la fortaleza del Real Felipe, en el Callao, que albergaba delincuentes sentenciados a penas de cárcel. Casasmatas alojaba hasta 200 prisioneros en dos pequeñas habitaciones de menos de 250 metros cuadrados cada una. La falta de ventilación, la mala iluminación e higiene, la mezcla de distintos tipos de presos y la falta de principios de disciplina y trabajo también caracterizaban a estas instalaciones. Las mujeres ocupaban una habitación separada y más pequeña, no muy lejos de las habitaciones de los guardias. El consumo de licor y el juego de azar eran cosa cotidiana y la comunicación entre los presos y la gente de afuera, algo común. Los guardias, se decía, facilitaban las fugas de presos. Los reos eran empleados en obras públicas como el corte de piedra en la isla San Lorenzo, a menos de 4 kilómetros al oeste del Callao, donde se encontraba otra cárcel igualmente sórdida[351].

Estas instalaciones, que a duras penas podrían ser consideradas prisiones en el sentido moderno del término, coexistían con una extensa red de formas privadas, informales e ilegales de castigo. Las panaderías, por ejemplo, usadas como centros de reclusión durante el período colonial, siguieron albergando hasta 1854 a esclavos indisciplinados enviados por sus amos y, una vez abolida la esclavitud, a trabajadores negros y chinos colocados allí por sus patrones como una forma de castigo[352]. Las haciendas del *hinterland* rural limeño tenían a menudo sus propias cárceles donde se castigaba a los peones díscolos. Las autoridades estatales también empleaban otras formas ilegales de castigo, entre ellas la ejecución extrajudicial de bandidos y salteadores[353]. En este contexto, el encarcelamiento era simplemente visto como un elemento más de un conglomerado socialmente aceptado de formas de castigo autoritarias, arbitrarias y usualmente ilegales.

Paz Soldán se esforzó por cambiar esta situación. Combinando sentimientos humanitarios con la búsqueda de la eficacia en el control del delito, y siguiendo las nuevas corrientes en la doctrina penal en Europa y los Estados Unidos, comenzó a proponer la reforma de las prisiones y la adopción de la penitenciaría en el Perú. Un nuevo tipo de prisión con un régimen disciplinario interno que buscaba imponer el silencio, el arrepentimiento y los hábitos laborales: esa era la idea de la penitenciaría, concebida en Inglaterra a finales del siglo XVIII. La ley original que la creó fue aprobada en 1779 y varias prisiones pequeñas fueron construidas en Inglaterra siguiendo el nuevo modelo. En 1787, el filósofo utilitarista Jeremy Bentham diseñó un modelo arquitectónico –el panóptico– que ofrecía satisfacer la necesidad de vigilancia y control en hospitales, fábricas, escuelas y prisiones. Aunque el proyecto de Bentham llegó eventualmente a ser empleado en la construcción de penitenciarías, lo cierto es que tardó en ser aceptado por los reformadores ingleses[354]. La idea de la penitenciaría cruzó el Atlántico y fue adoptada en los Estados Unidos, donde varios estados levantaron nuevas prisiones en las décadas de 1790 y 1800. De hecho, fue en los Estados Unidos

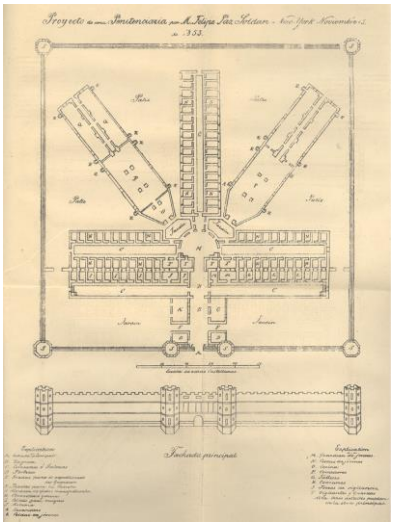
que el modelo penitenciario adquirió su definitiva consolidación institucional en la década de 1820[355]. Dos modelos arquitectónicos y penitenciarios se disputaban la preferencia de los reformadores penales de todo el mundo: los que correspondían a las penitenciarías de Auburn, en el estado de Nueva York, y Filadelfia, en el estado de Pennsylvania. El modelo de Auburn o «congregado» enfatizaba vigorosamente el trabajo productivo, con miras a transformar las prisiones en verdaderas fábricas. Los presos trabajaban juntos durante el día, pero se los separaba en celdas individuales por la noche. Por el contrario, el régimen de Filadelfia o «celular» se basaba en el aislamiento total y continuo de los presos. Ellos debían trabajar, comer y dormir dentro de la celda, segregados no solo del mundo externo sino también de cualquier otra persona dentro de la prisión. Los presos debían llevar una máscara cada vez que salían de su celda. Sin embargo, ambos sistemas establecían estrictas reglas de silencio y buscaban segregar a los prisioneros, de modo tal que en última instancia las diferencias entre ellos, no obstante la polémica involucrada, era más de forma que de fondo[356].

El presidente Echenique encargó a Paz Soldán que visitara los Estados Unidos con el objetivo explícito de examinar ambos modelos y recomendar cuál de ellos sería más apropiado para el Perú. Paz Soldán escogió el de Auburn para la penitenciaría de Lima. El de Filadelfia, pensaba, era demasiado costoso, no traía beneficio alguno y no se podía conseguir un aislamiento total. Paz Soldán desconfiaba del poder reformador del aislamiento, pues la rehabilitación del delincuente sería más fácil «en compañía de sus semejantes [y] movido de los buenos» (107). Los criterios raciales también influyeron en su elección, pues Paz Soldán creía que los indios –que se suponía conformarían la mayor parte de la población penal– más bien disfrutarían del aislamiento y la soledad pues «se considera[n] feli[ces] en un desierto cuidando su rebaño» (110). Su inferencia fue que el régimen celular de Filadelfia no tendría ningún efecto punitivo sobre ellos y que, además, dada su indolencia y pereza innatas, se beneficiarían más trabajando en congregación que en soledad.

El proyecto de Paz Soldán incorporaba los principios fundamentales de la reforma penitenciaria. La construcción debía hallarse en una buena ubicación y ofrecer seguridad y ventilación, en tanto que la fachada debía ser severa y sombría. Daba un fuerte énfasis a la disciplina, el trabajo obligatorio y la instrucción religiosa como medios para transformar a los criminales en trabajadores industriosos y confiables. Se debía prohibir a los prisioneros hablar entre ellos, el silencio debía regir todas las actividades de la prisión, se esperaba una obediencia total de parte de los presos y se diseñó un rígido sistema de vigilancia para ejercer un control total sobre ellos[357]. Imitando el modelo de las penitenciarías de los EE. UU., varios talleres debían instalarse dentro de la penitenciaría con la finalidad explícita de impartir técnicas laborales y disciplina a los reos. El trabajo dentro del penal debía complementar la «domesticación»

del presidiario, a quien no solo debía convencerse con la prédica religiosa de que el trabajo era necesario y virtuoso, sino además adiestrarlo en su práctica mediante el régimen cotidiano en los talleres de la prisión. Se pensaba que los delincuentes provenían de una población que siempre había tenido aversión al trabajo, de modo tal que la única forma de convertirlos en sujetos útiles y retirarlos del mundo del vicio y la delincuencia era enseñándoles un oficio y capacitándolos con un trabajo constante y productivo[358]. Este enfoque del castigo se vinculaba además con la percepción tradicional de indios, negros y otros grupos no blancos como seres naturalmente reacios al trabajo y estrechamente asociados con el mundo de la delincuencia. Así, el trabajo en los penales era concebido como un paso necesario en la regeneración moral de las clases bajas peruanas y en la marcha hacia el progreso material de la sociedad.

Figura 3



Proyecto de plano para la penitenciaría de Lima, dibujado por Mariano Felipe Paz Soldán en 1853

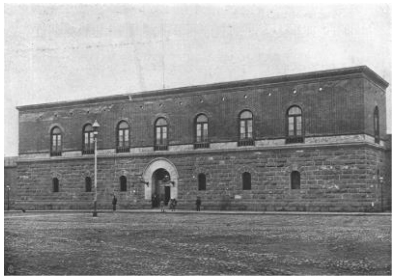
De Mariano Felipe Paz Soldán, *Examen de las penitenciarías de los Estados Unidos* (Nueva York: Imprenta de S. W. Benedict, 1853).

La penitenciaría en funcionamiento

Tomó casi seis años construir la penitenciaría de Lima bajo la dirección de Paz Soldán y fue inaugurada el 23 de julio de 1862[359]. Situada en las afueras de la ciudad, sus impresionantes murallas enmarcaban una extensión total de más de 40.000 varas cuadradas. Su masiva estructura de piedra se convirtió tanto en un símbolo de modernidad para la élite peruana como una fuente de admiración (o temor) para los

visitantes y transeúntes. La penitenciaría fue el edificio más visible y monumental de Lima durante varias décadas[360]. De hecho, se trataba del primer edificio moderno de Lima, como observó Alberto Flores Galindo[361]. Aunque no fue completamente fiel al modelo arquitectónico original de Bentham, a la penitenciaría de Lima se la llamó popularmente «el panóptico». Al centro de la fachada se alzaba un sobrio edificio de dos pisos que albergaba las oficinas administrativas. Este se hallaba unido a una rotonda al centro de la construcción, desde la cual se proyectaban las cinco ramas del edificio penitenciario «como radios de un centro común». Tres de los cinco pabellones contenían departamentos de celdas para albergar a presos varones, mujeres y juveniles, en tanto que los otros dos estaban destinados al departamento del director, las oficinas administrativas y otras instalaciones como la enfermería y la capilla. Las celdas de los presos ocupaban el primer y segundo piso de cada departamento; el castigo de los prisioneros díscolos ocurría en los lóbregos calabozos del sótano. La penitenciaría, que recibía reos de todo el país, podía albergar hasta 315 detenidos, cada uno de los cuales ocuparía una celda individual de unos 9,75 metros cúbicos, ventilada a través de un tragaluz en la pared posterior y provista de una cama retráctil, un clavo en la pared para colgar ropa, una pequeña repisa para objetos personales y un crucifijo. Los presos debían seguir un rígido cronograma diario de trabajo, oración y sueño, pero lo más importante era que se esperaba que aprendieran y practicaran las reglas de la obediencia, el silencio y la laboriosidad.

Figura 4



Fachada de la penitenciaría de Lima

Del *Álbum de Lima y sus alrededores* (Lima: Librería e Imprenta Gil, s. f.).

La penitenciaría introdujo lo que no existía en las otras prisiones peruanas: un horario diario preestablecido de actividades tanto para los empleados como para los presos. Esto por sí solo tenía importantes efectos en la vida de los prisioneros y daba a la administración un mayor control sobre ellos. Al multiplicar las reglas que los presos debían seguir –puntualidad en el vestido, aseo y comidas, trabajo constante y silencio,

entre otras–, las autoridades de la prisión lograban limitar sus movimientos y mejorar los mecanismos de vigilancia. La «rehabituación» de los presos, para usar el término de Adam Hirsch, se iniciaba familiarizándolos con las rutinas y la obediencia a las órdenes[362]. Otros elementos más visibles, como el uso de uniformes rayados y números en lugar de sus nombres, se sumaban a la naturaleza regimentada de la prisión para revelar la intención de privar a los reos de todo sentido de individualidad[363].

Según el Código Penal de 1863, el encarcelamiento en la penitenciaría era el castigo más severo después de la pena capital. Una larga lista de delitos, que incluía a la mayoría de los tipos de homicidio así como asalto, violación, duelos, incendios premeditados, piratería y falsificación, conllevaban sentencias de 4 a 15 años en la penitenciaría[364]. Este último término identificaba no solo al edificio, sino también a la pena (como en «pena de penitenciaría»), lo que subraya la singularidad de este tipo de corrección a ojos de los autores del Código Penal: las reglas que imponían disciplina, trabajo obligatorio y todos los demás elementos fueron vistos como algo intrínseco al castigo que el recluso debía soportar. Aunque el reglamento establecía la separación de los prisioneros en distintos departamentos según la duración de su sentencia, esta directiva no fue implementada[365]. En lugar de ello, los prisioneros eran segregados según su grado de peligrosidad, según la estimaran los empleados de la prisión: el primer piso era para aquellos considerados «verdaderamente peligrosos» y el segundo para los de menor riesgo[366]. Los expertos penales y las autoridades siempre recomendaban una mayor separación según la personalidad del prisionero o la naturaleza del delito, pero en la penitenciaría de Lima no fue posible imponer semejante clasificación[367]. Sin importar la duración de las sentencias, el tipo de delito o los antecedentes criminales, los prisioneros vivían y trabajaban juntos dentro de los departamentos, talleres y patios de la penitenciaría[368].

Un grupo de guardias, funcionarios y empleados cuyo número variaba constantemente estaba a cargo de mantener la disciplina interna, reglamentar el trabajo de los prisioneros y atender los servicios de la penitenciaría. Para las autoridades, encontrar personal idóneo para la nueva prisión resultaría ser un problema endémico. La mayoría de los empleados no tenían experiencia en la administración de penales (y mucho menos un compromiso con los ideales de la reforma carcelaria) y debían su empleo a redes de patronazgo personal y político. De hecho, no era raro que personas con antecedentes criminales fuesen contratadas como trabajadores o guardias. Varios empleados penitenciarios eran «meritorios», esto es, personas que trabajaban como aprendices no asalariados con miras a un futuro nombramiento. Usualmente recibían una suerte de compensación no oficial en forma de comida u otros beneficios para ellos y su familia. Predominaba la idea de que los oficiales militares eran idóneos para el manejo de la penitenciaría y que los licenciados del ejército serían excelentes guardias, lo que trajo como resultado el frecuente nombramiento de militares para que ocuparan

cargos en la penitenciaría. En 1906 el director Demetrio Saco encontró que los licenciados del ejército eran «muy apropiados» para trabajar como guardias de la prisión porque estaban «acostumbrados a la disciplina militar, que es bastante rigurosa, y que hasta cierto punto se adopta aquí para el servicio interno del establecimiento»[369]. Entre 1862 y 1920, por lo menos ocho directores de la penitenciaría de Lima fueron oficiales militares y sirvieron en ese puesto durante un total de 17 años. El coronel Manuel Panizo y Zárate, por ejemplo, fue quien ocupó la dirección por más tiempo, de abril de 1897 a agosto de 1905.

Uno de los principales obstáculos para el funcionamiento de la penitenciaría era su crónico déficit financiero. La crítica situación económica que el Perú experimentó durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XIX significó que el Estado no podía financiarla adecuadamente. La penitenciaría fue proyectada y construida durante la era del guano, cuando los recursos fiscales parecían ser inagotables, pero su funcionamiento se vio complicado por la escasez de fondos, ya que las finanzas estatales jamás volvieron a ser tan boyantes como lo habían sido en la década de 1850[370]. Muchas autoridades de la prisión atribuían los defectos de la penitenciaría a la falta de recursos financieros. Y sin embargo, muchas de las inconsistencias del régimen penal tenían su origen en decisiones y omisiones que no necesariamente estaban relacionadas con la situación financiera de la institución. Debido a la continua falta de fondos hubo una mayor presión para, en primer lugar, transformar la penitenciaría en una institución productiva que pudiera sostenerse a sí misma con base en el trabajo de los presos, y segundo, para animar a estos últimos a que aprovecharan las oportunidades ofrecidas por contratistas privados para ganar dinero con el cual conseguir los bienes y servicios que el magro presupuesto de la administración penal no podía darles. Como veremos en el capítulo 6, el trabajo en la prisión, un componente central de la rehabilitación,

pasó a ser objeto de una serie de negociaciones entre administradores, autoridades, contratistas privados y presos.

Entre 1870 y 1890 la penitenciaría experimentó una serie de cambios y reformas. En respuesta a un informe crítico presentado por una «Junta Inspectora» en 1873[371], el presidente Pardo implementó una serie de ordenanzas para mejorar su funcionamiento. Pardo ordenó que el reglamento se cumpliera al pie de la letra, estableció inspecciones mensuales, nombró nuevo personal, incrementó el presupuesto de la prisión y solicitó una rigurosa rendición de cuentas a los administradores[372]. Sus iniciativas no duraron mucho: pocos años más tarde el Perú fue devastado por la Guerra del Pacífico y la concomitante crisis financiera del Estado. Los recursos de la prisión se hicieron aún más escasos. Hacia 1881 la penitenciaría estaba «en el más lamentable estado de

desorganización». Según el director, los prisioneros gozaban de «indebidas consideraciones» y «habían entronizado la soberbia, la insubordinación y la inmoralidad», lo que tenía como resultado «diarios motines»[373]. Rosendo Samanez, otro director, renunció en 1887 cuando sus reiteradas solicitudes de fondos recibieron como respuesta la «ridícula» suma de 20 soles. Los prisioneros, decía, no tenían ropa, camas, jabón o utensilios de cocina, una situación que, alegaba, afectaba enormemente al «primer monumento de la República»[374]. Después de su renuncia, la Junta Inspectora fue restablecida y en 1890 presentó otro informe igualmente devastador. «Valdría más cerrar las puertas de esa casa de corrección y de reforma», concluía este, «preferible sería quizá volver al antiguo y odioso régimen carcelario, que tolerar el desorden en un establecimiento que fue el único de su género en la América del Sur, y es hoy la única cárcel que merece llevar este nombre en el vasto territorio del Perú»[375]. Esta sensación de fracaso era compartida por muchos expertos, diseñadores de política y criminólogos, y en cierto modo era comparable con la frustración que sentían con la vida urbana en Lima después de la década de 1870, como vimos en el capítulo 1. La situación era bastante menos clara desde el punto de vista de los presos: si bien es cierto que por lo general carecían de servicios elementales y bienes materiales, también lo es que ellos se aprovechaban de la situación de indisciplina generalizada que las autoridades denunciaban repetidamente, y de hecho contribuían a ella, como veremos en el capítulo 6.

La penitenciaría de Lima en la era de la penología científica Hacia finales del siglo XIX se escuchaban repetidas demandas para endurecer el régimen penitenciario. Se asociaba el fracaso del panóptico con la falta de recursos y de personal adecuado, pero aún más con la indisciplina y la desmoralización de los presos y con la corrupción del estricto régimen reglamentario que la penitenciaría supuestamente debía imponer. Esta percepción dio paso al corolario, bastante aceptado, de que lo que se necesitaba para alcanzar la disciplina en la prisión era no solo la estricta observancia de las reglas sino además la implementación de un régimen más riguroso. Paul Pradier-Foderé, un influyente jurista francés que pasó varios años en el Perú, consideró que el régimen de la penitenciaría era «muy dulce», en parte debido a la falta de intimidación ejercida sobre los prisioneros[376]**. Los juristas Manuel Atanasio Fuentes y Miguel A. de la Lama manifestaron su preferencia por el régimen de Filadelfia porque «hace fáciles el orden y la disciplina y prepara aún al preso a la enmienda moral»[377]. Numerosas tesis presentadas en la Universidad de San Marcos postulaban la idea de que el sistema celular era el único régimen carcelario «eficaz, intimidativo y represivo»[378]. Una posición más radical fue la de algunos observadores para quienes la reforma del delincuente, que había pasado evidentemente a ser un objetivo secundario del programa punitivo, se conseguiría no con un trato humanitario o con actitudes contemplativas, sino con la severidad e incluso la crueldad, pues «el sufrimiento es**

indispensable para que el delincuente se regenere»[379]. Luego de examinar la amplia producción sobre este tema, se puede concluir que la mayoría de los penólogos consideraban que en el Perú un régimen más riguroso era la única solución al problema endémico del delito y la disciplina carcelaria. El tono de los debates reflejaba y reforzaba el clima político y social de este período de modernización autoritaria.

Figura 5



Interior de la penitenciaría de Lima

Del *Álbum de Lima y sus alrededores* (Lima: Librería e Imprenta Gil, s. f.).

En 1901 se emitió un nuevo reglamento para la penitenciaría[380]. Redactado por el jurista Juan José Calle, conocido por su enfoque conservador en cuestiones legales, este reglamento en realidad sancionó el *statu quo*, lo que decepcionó a la mayoría de los expertos penales que exigían un régimen más duro. Para otros se trataba de una oportunidad perdida, pues no se adoptaron las ideas y prácticas más novedosas en el trato de los prisioneros. Gracias a la creciente difusión de innovaciones internacionales en criminología y penología (parte de lo que Felix Driver ha llamado «el tráfico internacional en modelos de política social»)[381], los expertos peruanos comenzaron a considerar otras alternativas. Algunos presentaban al sistema progresivo o de «marcas» como la mejor alternativa al régimen inapropiado de las prisiones peruanas. Este sistema fue desarrollado originalmente por Alexander Maconochie en Nueva Gales del Sur (Australia) y posteriormente fue puesto en práctica por Sir Walter Crofton en

Irlanda (de ahí el nombre que también se le diera de sistema Crofton o irlandés)[382]. A diferencia del sistema tradicional de penas, en el cual un convicto recibía una sentencia fija sobre la base del delito cometido, el sistema progresivo involucraba un régimen disciplinario a la medida de cada preso y sujeto a cambios según su comportamiento en la prisión. Mediante el trabajo constante, los buenos hábitos y la asistencia al colegio, los prisioneros podían ganar «marcas» o puntos que les permitían mejorar su situación dentro del sistema y obtener cada vez mayores recompensas[383]. Para Enoch Wines, un prominente reformador penal estadounidense, el sistema Crofton era «un magnífico triunfo de la razón y el humanitarismo sobre la coerción y la fuerza bruta»[384]. El modelo obtuvo una gran reputación internacional y su adopción universal fue recomendada por la reunión de la Asociación Nacional de Prisiones en Cincinnati en 1870, cuya Declaración de Principios final enunciaba como un objetivo principal de la reforma que «el destino del preso sea puesto, de una manera mesurable, en sus propias manos»[385]. Bajo la dirección de Zebulon Brockway, el Reformatorio de Elmira, creado por la legislatura de Nueva York en 1869, se convirtió en la encarnación institucional del sistema progresivo.

Los penólogos peruanos debatieron este sistema hacia el cambio de siglo[386]. Aunque algunos lo presentaban como un sistema que estimulaba el engaño y la hipocresía entre los presos, otros, como Óscar Miró Quesada, manifestaron su admiración por el Reformatorio de Elmira, enfatizando el hecho de que los objetivos de la reforma de los presos no se podían alcanzar sin la cooperación de ellos mismos. Elías Lozada Benavente, cuya área de interés era el tratamiento de la delincuencia juvenil, concluyó que el Reformatorio de Elmira era «la primera institución del mundo»[387]. La fascinación de la élite intelectual con los modelos sociales e institucionales extranjeros nuevamente desempeñaba un papel fundamental en la formulación de propuestas de reforma penal, aunque enfrentarían muchos obstáculos para convencer a los diseñadores de políticas de que las adoptasen.

El ascenso al poder de Augusto B. Leguía en 1919, cuyo Gobierno estaba decidido a mejorar la eficiencia del Estado a través de la modernización institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de control social, dio un impulso a un renovado interés por el tema de la administración y la disciplina en las prisiones. La prensa diaria informaba con creciente frecuencia sobre las condiciones de las cárceles y se hacía eco de la amenaza que ellas supuestamente representaban para la estabilidad del país. La publicación en 1920 de otro informe negativo sobre la penitenciaría de Lima, redactado en 1915 por una comisión encabezada por Calle, también parece haber afectado la decisión de buscar cambios en el panóptico y otras instituciones carcelarias[388]. El sistema judicial en general, y las deficiencias de la legislación criminal en particular, recibieron más atención del régimen de Leguía que de ningún otro Gobierno previo desde

mediados del siglo XIX. Varios juristas prominentes, entre ellos Plácido Jiménez, Óscar C. Barrós, Abraham Rodríguez Dulanto y Germán Leguía y Martínez, influidos de un modo u otro por las doctrinas penales positivistas, pasaron a formar parte del Gobierno de Leguía y contribuyeron a la formulación de las políticas estatales. Uno de los lineamientos principales de este Gobierno fue la idea de que los problemas de la sociedad podían corregirse con la aplicación de métodos administrativos científicos y racionales[389]. De este modo, la pregunta de qué hacer con las prisiones y cómo mejorar su administración fue insertada dentro de este proyecto más amplio de modernización de la sociedad peruana. La cooperación mutuamente beneficiosa entre una administración agresiva y autoritaria y un grupo de expertos ansiosos por aplicar soluciones científicas y alcanzar una legitimidad individual y colectiva, tuvo como resultado la formulación de un ambicioso, aunque no menos ambiguo e inconsistente, programa de reforma carcelaria.

El primer paso fue bastante enérgico. En 1921 Leguía creó la Inspección General de Prisiones –luego pasó a llamarse Dirección General de Prisiones (DGP)–, una instancia centralizada para administrar el sistema penal de todo el país. Se esperaba que la DGP supervisara todas las instalaciones penales a nivel nacional, mantuviera registros estadísticos de su funcionamiento, supervisara el funcionamiento de talleres y escuelas dentro de las prisiones y organizara un registro central de datos antropométricos para la identificación de delincuentes[390]. Tomaría unos cuantos años para que esta entidad efectivamente controlara la red nacional de prisiones e instituciones similares, que hasta ese entonces habían estado dispersas bajo diversos planes administrativos, pero la importancia de su fundación no puede exagerarse.

El siguiente paso fue la creación de un nuevo marco legal que entró en vigor con la implementación del Código Penal de 1924, que reemplazó al de 1863. La adopción de los principios de defensa social y peligrosidad, analizados en el capítulo 2, trajo consigo algunos cambios en los tipos de penas y en el manejo de las instituciones penales. Por ejemplo, el código incluía la nueva pena de *internamiento*, que enviaría a los convictos a la penitenciaría por un mínimo de 25 años, luego de lo cual la pena de prisión por cumplir bajo dicha clasificación sería indeterminada. Durante el primer año de confinamiento los prisioneros estarían sujetos a encierro solitario y trabajos forzados. La pena de *penitenciaría* implicaba entre 1 y 20 años en este tipo de prisión, una penitenciaría agrícola (que aún no existía) o una colonia penal. La pena de *prisión* podía durar de 2 días a 20 años y debía cumplirse en las cárceles locales. Por último, el Código Penal contemplaba penas de cárcel para los «delincuentes político-sociales», para quienes había que construir instalaciones separadas[391]. De impacto mucho más inmediato fueron la libertad condicional, otorgada a los prisioneros que mostrasen buena conducta y hubiesen cumplido las dos terceras partes de su condena, y la prisión

condicional, esto es, una suspensión temporal del cumplimiento de la condena. Lo que algunos penólogos echaban de menos en el nuevo Código Penal era un régimen más explícitamente progresivo, con un sistema de marcas o puntos que permitiera a los presos llevar la cuenta de su rendimiento en la prisión. De este modo, la libertad condicional dependía íntegramente de la evaluación que los administradores y médicos del penal hacían del comportamiento de los presos, y estos podían influir muy poco sobre la decisión. Aun así, esta reforma introdujo un nuevo campo de disputa entre funcionarios penales y presos, y que habría de tener efectos importantes sobre la negociación de las condiciones carcelarias, como se verá más adelante.

Tal vez la empresa más ambiciosa de los criminólogos era la transformación de las instituciones penales en laboratorios para la producción de conocimientos sobre los delincuentes y, en realidad, sobre las clases bajas de la sociedad. En países como Italia, Francia y Argentina se desarrollaron sólidas tradiciones de investigación criminológica, fundamentalmente debido a la puesta en marcha de proyectos de investigación que usaban a las poblaciones carcelarias para proponer y evaluar las teorías sobre los delincuentes. Entre 1890 y 1920, los investigadores que pasaron por la penitenciaría de Lima utilizaron a los presos como sujetos de estudio sobre temas tales como el comportamiento sexual, las enfermedades y los tatuajes. La transformación de la penitenciaría en un centro de investigaciones fue un objetivo que el Código Penal de 1924 intentó implementar, estableciendo la formación de un *Instituto de Criminología* que tenía como modelo una institución similar creada en la penitenciaría de Buenos Aires en 1907 por el prominente criminólogo José Ingenieros. En manos de Ingenieros, el instituto se convirtió en un gran centro de estudios que reunió enormes cantidades de datos, emprendió numerosos proyectos de investigación y formuló audaces hipótesis sobre el crimen y sus conexiones con la biología, la psicología, la higiene y la política[392]. No fue sino hasta 1929 que lo estipulado por el Código Penal se hizo realidad en el Perú, y se creó un Instituto de Criminología en la penitenciaría de Lima bajo el manto académico de la facultad de derecho de la Universidad de San Marcos[393]. El médico Cárlos Bambarén, su primer director, había propuesto años atrás, en 1919, la idea de que el establecimiento de «laboratorios de antropología penitenciaria» donde estudiar a la población delincuente revelaría «la personalidad íntima del detenido» y facilitaría la implementación de estrategias punitivas apropiadas e individualizadas[394].

Entre las tareas iniciales del nuevo instituto se encontraban la introducción de un sistema de fichas criminológicas para reunir tanta información sobre cada prisionero como fuera posible[395]. *La cartilla criminológica* comprendía 15 categorías, incluyendo la genealogía del prisionero, sus datos antropométricos, huellas digitales, historial médico y vida sexual. En octubre de 1930 se estableció que tanto la cartilla como un cuestionario para evaluar el «estado peligroso» del reo fueran obligatorios en todas las instituciones

penales del país[396]. La determinación del «estado peligroso» de los presos, siguiendo un modelo desarrollado por el penólogo español Luis Jiménez de Asúa, incluía cinco clases principales de datos: la personalidad del preso (antropológica, psicológica, conductual y moral), sus antecedentes personales, el delito y sus motivos, su comportamiento en prisión y una apreciación criminológico-médica de su grado de peligrosidad[397]. Aunque el instituto esperaba llevar a cabo estudios criminológicos de los presos para así hacer efectiva la individualización de la pena, esto jamás se materializó[398]. Hacia 1933, el instituto ya no contaba con fondos y se vio así condenado a languidecer hasta caer en la total inactividad[399]. A mediados de la década de 1940, Bambarén todavía intentaba reactivarlo.

Más fácil fue alcanzar objetivos menos ambiciosos. En 1929 se formó un Tribunal de Conducta para evaluar el comportamiento de los presos y tomar decisiones referidas a los pedidos de libertad condicional o de indulto[400]. En su primera reunión el tribunal evaluó 119 expedientes de presos considerados para ser indultados. En la sesión de junio de 1930 el tribunal discutió una serie de quejas disciplinarias para decidir qué sanciones debían aplicarse. En los meses siguientes el tribunal se reunió con regularidad para evaluar grupos numerosos de presos. Por ejemplo, en su sesión de diciembre de 1931 evaluó a 187 de ellos, encontrando que 98 habían mostrado una conducta «buena o muy buena»; 4, «óptima»; y 84, «regular y mala»[401]. Los 98 presos con buen comportamiento fueron recompensados: se les permitió escuchar la radio, tener luz eléctrica en su celda, visitar la biblioteca e incluso vestir su propia ropa en lugar del uniforme de la prisión. Las evaluaciones del tribunal también se utilizaron posteriormente para clasificar a los reos con base en su conducta. El Código Penal de 1924 había estipulado que los presos fueran clasificados en cada centro de internamiento «según las condiciones físicas y psíquicas análogas de estos y en relación con su vida precedente y sus aptitudes de trabajo»[402]. En 1931 se ordenó que los reos de conducta mala y regular fueran separados de los que mostraban un buen comportamiento[403].

Como era de esperar, algunas de las evaluaciones del tribunal fueron cuestionadas por los presos y en algunos casos efectivamente se revisaron, pero obviamente siempre era el tribunal el que tenía la última palabra. La forma en que este llevaba a cabo sus evaluaciones distaba mucho de ser rigurosa. Cada uno de sus integrantes asignaba una «nota» mensual al reo por su comportamiento durante su tiempo libre y otra, a los que trabajaban, por su rendimiento en el taller. Ambas calificaciones eran registradas junto con una evaluación pretenciosamente denominada «Apreciación criminológica» que no comprendía ninguna evaluación sistemática y que no era otra cosa que una etiqueta arbitraria impuesta a cada reo. Las categorías eran normal, peligroso, semipeligroso, mínimamente peligroso y no peligroso, sin ninguna explicación de lo que significaban

exactamente estos términos. Por ejemplo, el 10 de julio de 1935 se evaluaron 437 presos. Cuarenta y siete de ellos fueron encontrados normales; 5, peligrosos; 4, semipeligrosos; 3, mínimamente peligrosos; y los restantes 378, no peligrosos[404].

Las obligaciones del Instituto de Criminología y del Tribunal de Conducta se superponían en la medida en que el primero casi no hacía otra cosa que evaluar a la población criminal. Hasta donde he podido establecer, en el instituto no se llevó a cabo ningún programa sistemático orientado a la investigación, de modo que sus tareas se limitaron prácticamente a reunir datos sobre la población presidiaria. En junio de 1927 se organizó una división de estadísticas penitenciarias en la DGP para registrar la población de los penales, sus sentencias, fugas, reincidencia, mortandad, el producto de su trabajo en la prisión, la asistencia a los colegios del penal y la infraestructura y el presupuesto de las prisiones[405]. Se esperaba que con ello se facilitara la tarea de identificar delincuentes, monitorear la reincidencia e individualizar el trato que se daba a los prisioneros[406]. Casi al mismo tiempo se creó una oficina de identificación dactiloscópica en la penitenciaría[407]. Durante los siguientes dos años se identificó a unos 1.500 presos mediante «cartillas biográficas» que incluían datos dactiloscópicos y morfológicos, además de un retrato de cada preso con su número. Este sistema, como mínimo, ayudó a las autoridades a establecer registros de incidencias tales como enfermedades, intentos de fuga, violaciones a la disciplina y otras. También se creó un *Libro de conducta* para anotar el comportamiento de los presos dentro del penal, al cual se acudía para evaluar la posible concesión de libertad condicional.

Aunque la implementación de comités evaluadores, instalaciones de investigación y grandes bases de datos resultó ser más complicada de lo que los penólogos esperaban, los pocos pasos que efectivamente se dieron resultaron ser realmente importantes. La más trascendente de estas reformas fue, de lejos, la adopción de la libertad condicional y con ella el uso del Tribunal de Conducta para evaluar a los presos que la solicitaban. A decir verdad, esto no era lo que los defensores del sistema progresivo deseaban, pero aun así tuvo sus efectos. La posibilidad de obtener la libertad condicional era un poderoso incentivo para que los prisioneros observaran un buen comportamiento, pero también pasó a ser un elemento importante en la negociación cotidiana que se daba en la penitenciaría entre presos y autoridades. Aunque aquellos recurrían a diversas estrategias para aprovechar la posibilidad de ganarse la libertad condicional –escribir cartas, simular un buen comportamiento o participar en negociaciones con los guardias y autoridades de la prisión (temas que analizo en la tercera parte de este libro)–, la decisión final siguió estando en manos de los expertos. Por lo tanto, su autoridad y la del cada vez más ubicuo Estado leguiísta fueron reforzadas.

De Guadalupe a la Cárcel Central de Varones

A un par de cuadras de la penitenciaría y ocupando el local donde había funcionado un convento del mismo nombre, se hallaba la infame cárcel de Guadalupe, donde la mayoría de los presos de Lima cumplían su condena. En su punto más alto cobijó más de 700 presos, aunque su capacidad real era probablemente de solo 200. La traza física de Guadalupe comprendía dos patios rodeados por diversos compartimientos. El primero y más pequeño estaba rodeado por las oficinas administrativas y las habitaciones de los prisioneros «de alguna consideración». Al segundo patio lo rodeaban las habitaciones de los presos. Estos pasaban la mayor parte del día en dicho patio jugando cartas, comprando y vendiendo artículos o simplemente deambulando; de hecho, el patio de la cárcel parecía una suerte de mercado o feria ambulante pues los reos habían levantado una serie de quioscos para vender abarrotes, ropa, artículos personales y hasta coca[408]. La cárcel tenía varios talleres o, con más precisión, meras habitaciones donde los presos trabajaban voluntariamente, por lo general sin la intervención de las autoridades y a menudo para contratistas privados externos.

Guadalupe abrió por vez primera en 1821, inmediatamente después de la Independencia. Funcionó irregularmente durante las siguientes décadas, y a finales de la de 1850 fue reabierta y se mantuvo en funcionamiento hasta 1928[409]. Aunque fue la principal institución de confinamiento en Lima antes de la inauguración de la penitenciaría, su primer reglamento no fue emitido sino hasta 1879. Redactado por un equipo de cinco miembros que incluía a los prominentes juristas José Silva Santisteban y Manuel Atanasio Fuentes, el reglamento establecía la separación de los reos por género y estatus legal, la creación de talleres para los prisioneros y la censura de sus comunicaciones, así como un régimen de recompensas y castigos «para fomentar la contracción al trabajo y la moral». Se prohibía el uso del látigo y el palo pero sí se permitía el «cepo de pies». También se prohibían las cantinas dentro de la prisión. La autoridad la tenía el alcaide, quien se suponía debía vivir dentro de la prisión y de la que no podía salir «sino momentáneamente por asuntos graves del servicio». El reglamento contemplaba también el empleo de tantos caporales como fuera necesario «para el buen servicio» y que el director debía elegir entre los prisioneros de mejor conducta. Estos aseguraban todas las cerraduras internas, barrotes de las celdas y puertas, supervisaban el orden en cada departamento, monitoreaban las celdas de aislamiento para impedir que otros presos se acercaran a los que estaban siendo castigados, y controlaban el contrabando. De hecho, en virtud de la falta de personal de la prisión (el reglamento solo contemplaba al alcaide, el subalcaide, un capellán, un doctor, un interno y los porteros), todo el sistema interno de disciplina y seguridad estaba en manos de los caporales[410]. La seguridad externa la brindaba una estación militar adyacente.

Desde el día mismo de su apertura Guadalupe fue un compendio de todo aquello que avergonzaba a los reformadores. Las descripciones de la prisión fueron consistentemente negativas a lo largo del tiempo. En 1890 el Dr. Vidrieras la describió en estos términos: Allá por los suburbios, tropecé con una casa, ¡y qué casa! –sucia y sombría como una prisión del pasado siglo [...] no es un canchón, ni una cuadra, nada de esto; es un inmundo terreno cercado por cuatro paredes [...] un montón de hombres tendidos yacían allí, como las encarnaciones del ocio brutal [...] grandes salas, húmedas y mal ventiladas sirven de dormitorios; la cama es común a 40 o 50 presos; largas tarimas hacen el oficio de catre y de colchón; ¿abrigo? [...] cada uno busca quien lo envuelva [...] ¡Valiente cárcel! [...] Parece increíble, en esta Villa, tan preciada de sus brillos, una cárcel así.[411]

Para algunos observadores, las condiciones en Guadalupe eran tan malas que se había convertido en un peligro para la estabilidad de la sociedad peruana[412]. *La Gaceta Judicial* advirtió del peligro de que sus 600 internos abrieran fácilmente sus puertas y se abalanzaran «sobre la sociedad como un tigre sobre su presa»[413]. Las comunicaciones oficiales entre autoridades judiciales constantemente señalaban que Guadalupe se encontraba en un estado desastroso y necesitaba de urgentes reformas, pero jamás se tomó una sola acción significativa[414]. La mezcla de distintos tipos de reos, el relajamiento de la disciplina, la falta de un reglamento interno para los presos y el extendido recurso a prácticas ilegales fueron mencionados una y otra vez como evidencia de que Guadalupe era una cárcel urgentemente necesitada de reformas radicales. Pero esta representación casi unánime como una cárcel en ruinas plantea algunas interrogantes. No cabe duda de que las condiciones allí eran deficientes, por decir lo menos. No solo los testimonios citados sino también las cartas de los prisioneros y otras fuentes coinciden en describir el lugar en los peores términos posibles[415]. Sin embargo, es igualmente importante tomar nota de la exasperación que las autoridades y observadores manifestaban por lo que ellos interpretaban como lenidad hacia los presos. Les escandalizaba la «libertad» de que los presos «disfrutaban» dentro de Guadalupe y la ausencia de un régimen disciplinario más riguroso. Las imágenes de presos que se desplazaban libremente, jugaban cartas, participaban en actividades recreativas e intercambiaban todo tipo de bienes y servicios, molestaban a los comentaristas de la élite, pues en su opinión debían estar sufriendo las consecuencias de sus delitos. Es cierto que algunos observadores también señalaron la condición indigente de por lo menos algunos de los presos, pero la impresión abrumadora es que era la falta de disciplina la que promovía esa condena casi unánime de Guadalupe.

Mientras Lima iba cambiando rápidamente y adquiría un aspecto cosmopolita, Guadalupe, su cárcel más importante, permanecía virtualmente inalterable. A lo largo de los años se formularon varios proyectos para reemplazarla. En 1873 el Gobierno

ordenó la construcción de una nueva prisión, pero obstáculos tanto financieros como políticos impidieron la realización del proyecto. En 1893 una nueva comisión estudió la factibilidad de este y recomendó la construcción de una nueva cárcel con capacidad para 500 presos, pero no se tomó ninguna medida[416]. Años más tarde, en 1905, el proyecto fue retomado por el ministro de Justicia, solo para ser abandonado nuevamente poco después[417]. En 1928, finalmente, el Gobierno de Leguía cerró Guadalupe y trasladó su población a la Cárcel Central de Varones (CCV), que había sido apresuradamente acondicionada en dos departamentos de la penitenciaría de Lima[418]. No sorprenderá el hecho de que las condiciones allí no eran mejores que las de Guadalupe o del panóptico. Según el director, en 1931 alrededor del 50 por ciento de la población presidiaria era «casi estable» y estaba conformada por reincidentes pertinaces[419]. Las malas condiciones eran atribuidas a deficiencias materiales, entre ellas la sobrepoblación y el hecho de que allí se congregara a distintos tipos de prisioneros[420]. Las descripciones de la prisión coinciden en retratar unas condiciones carcelarias atroces: la ausencia de servicios sanitarios adecuados obligaba a los presos a usar sus celdas como retretes; los reos comían con las manos por la falta de cubiertos y dormían en el piso por no tener colchones; la mayoría se hallaban ociosos y sin ocupación alguna; más de la mitad permanecían allí un año o más sin asistir a una sola audiencia judicial y por lo tanto no sabían cuál era su estatus legal real[421]. Las autoridades de la prisión admitieron explícitamente las deficiencias en sus condiciones: en octubre de 1931, el director pidió al ministro de Justicia que acelerara los juicios de los presos de la CCV, pues su continuo encarcelamiento permitía que «aprendan en la prisión vicios y malas costumbres diferentes de los que tenían a su ingreso». Según su propio director, la CCV no era otra cosa que una escuela del vicio[422].

El Frontón

A finales de la década de 1910, una colonia penal comenzó a funcionar en la isla El Frontón, a unos cuantos kilómetros de la costa del Callao[423]. Fue usada por el Gobierno de Leguía como destino para diversos tipos de detenidos, entre ellos opositores políticos, huelguistas, vagabundos, presos recalcitrantes de otras prisiones y penitenciados para quienes no había espacio en la penitenciaría. Esta colonia penal comprendía una serie de construcciones de piedra que albergaban las oficinas administrativas, un pequeño regimiento de gendarmes, las celdas y habitaciones de los presos, una capilla, cafetería y talleres. Hacia comienzos de la década de 1920 había por lo menos tres departamentos para los reos. Los prisioneros usualmente pasaban el día trabajando o, cuando las autoridades se lo permitían, caminando por la isla, mientras que de noche se los encerraba dentro de los pabellones. Su ocupación principal –y la fuente primordial de ingresos para las arcas del penal– era el corte de piedras con las que se hacían adoquines, cuya demanda se había incrementado en virtud de la rápida

urbanización de Lima. Hacia 1922, por ejemplo, la prisión producía más de 34.000 adoquines al mes[424]. Los prisioneros además trabajaban como carpinteros, zapateros, panaderos y herreros[425]. Según el director, en 1922 la colonia penal era económicamente rentable e incluso estimaba que para 1924 el Gobierno central no tendría que destinarle fondos para mantenerla, pues ella podía balancear su presupuesto «con sus propias entradas»[426].

Para que esta economía siguiera siendo rentable se necesitaba un flujo continuo de presos para mantener la población mínima necesaria de 250 personas[427]. Para 1922 el director, Hermilio Higueras, consideraba que una disminución en el número de presos era «una amenaza para el progreso de todo orden de la prisión», pues eso significaba menos trabajadores disponibles[428]. La solución sería trasladar internos de Guadalupe, «donde son gravosos para el Estado», a El Frontón, donde en cambio se convertirían en presos-trabajadores productivos. Otro estímulo a la productividad de la prisión llegó durante el apogeo de la ley de vagancia de 1925-1928, cuando cientos de vagabundos fueron enviados a la isla, garantizando así mano de obra suficiente como para mantener su nivel de producción constante (véase el capítulo 5).

A pesar de los esfuerzos de las autoridades para presentar El Frontón como un lugar beneficioso para los prisioneros –en especial, decían, porque podían trabajar al aire libre y gozar del aire puro–, los visitantes, tanto oficiales como privados, dejaron testimonio de los horrores padecidos por la mayoría de los reos[429]. En una de sus visitas a la isla en 1927, la activista por los derechos de los presos y periodista Ángela Ramos se topó con presos que sangraban mientras trabajan en las canteras de piedra, otros que semejaban «cadáveres vagabundos», otros más que no sabían siquiera por qué estaban detenidos y niños que vivían con sus padres. Ramos anotó cuan irónico era que los presos estuvieran haciendo zapatos para la marina y para contratistas privados y, al mismo tiempo, tuvieran que ir descalzos por no haber recibido los zapatos que la administración supuestamente debía entregarles[430]. Una delegación oficial de la Dirección General de Salubridad Pública del Ministerio de Fomento que visitó el lugar en septiembre de 1932 encontró edificios en ruinas, sobrepoblación, abundancia de roedores y otras desgracias[431]. El ciudadano chileno René Mendoza, encarcelado en El Frontón en 1921 por espionaje, dejó un horrendo testimonio: la isla, escribió, era peor que «las más inmundas prisiones rusas»[432].

El Frontón era administrado como una cuasiplantación esclavista[433]. Incluso tenía un cementerio clandestino donde enterrar a los reos que fallecían en la prisión[434]. Durante la administración de Higueras, exdirector de la penitenciaría y quien rigió los destinos de El Frontón entre 1921 y 1925, imperó un auténtico reino de terror[435]. Por ejemplo, en junio de 1924, cuando los presos amenazaron con entrar en huelga si no se les pagaban

sus jornales, Higueras envió un mensaje al inspector de El Frontón: [E]spero que si esta información es cierta, se haya realizado su propósito, y que Ud. como lo tiene bien sabido (asumiendo yo la responsabilidad) haya procedido en tal forma: que si ellos hubieran pretendido hacer algo, les habrá sentado la mano y si ha sido necesario habrá Ud. fusilado de orden mía y bajo mi firma. Hágales Ud. presente si cree necesario a los rateros, que deben ser los promotores de esto, que como haya algo yo iré inmediatamente a quitarles la lisura, y que les sentaré la mano para que no vuelvan a pretender tal cosa, que ahora por lo mismo no pago hasta que a mí no me dé la gana y tienen que trabajar mientras estén ahí aun a costa de su vida.

Higueras ordenó además al teniente a cargo del puesto militar que de ser necesario disparara contra algunos de los prisioneros, «de preferencia a los rateros que no están amparados por nadie»[436]. Semejante lenguaje no muestra la actitud de una autoridad concienzuda y respetuosa de la ley (y mucho menos de un compasivo protector de los derechos de los prisioneros) y se parece mucho al despotismo de los propietarios de esclavos o los gamonales andinos, que se consideraban a sí mismos casi omnipotentes y trataban impunemente a sus súbditos como les viniera en gana.

Los tormentos y la tortura eran algo cotidiano en El Frontón y lo eran en un grado difícil de encontrar en las demás prisiones. Uno de los más infames lugares de tormento era la *lobera*, una cueva natural fétida y oscura en la cual el reo estaba permanentemente expuesto a las aguas del mar. Uno de los presos la describió así en 1936: «Esta lobera es un socavón hecho por el mar en un acantilado del Frontón. En su fondo están las celdas de castigo. A las horas de creciente el mar chicotea las rocas, llegando hasta los presos. El ruido del mar reconcentrándose bajo esa bóveda ensordece y en las noches los murciélagos y el mugido de los lobos, alejan toda posibilidad de sueño»[437]. Muchos dejaban la lobera con enfermedades tales como tuberculosis y algunos morían posteriormente debido a ella. *La parada*, otro lugar de torturas, era, según el testimonio del escritor aprista Julio Garrido Malaver, «una especie de ataúd vertical clavado contra el pétreo muro de la isla»[438]. Cuando se les colocaba dentro de ella, los prisioneros estaban forzados a permanecer de pie. Después de un rato, sus pies comenzaban a hincharse y a sangrar. En invierno era fría y húmeda y en verano, extremadamente caliente. Cuando el castigo terminaba y los guardias abrían la puerta, el prisionero caía al piso al no poder mantenerse de pie. Según Garrido Malaver, un preso político que se rehusó a ingerir la asquerosa comida que se le dio fue enviado a la parada, donde falleció[439]. Un lugar similar era denominado *la sepultura*[440]. Aparte existían las habituales celdas de confinamiento solitario, y los castigos corporales eran cosa de todos los días. Víctor M. Villavicencio describe un castigo llamado *carreras de vaqueta*, en el cual los reos desnudos eran arrojados al agua; al sacarlos, se les obligaba a correr entre dos columnas de guardias, quienes los golpeaban en el cuerpo con palos pero cuidándose

de evitar la cabeza, presumiblemente para evitar heridas que pudieran poner en riesgo su vida[441].

— — — —

Guadalupe, la Cárcel Central de Varones, El Frontón e incluso la penitenciaría de Lima ofrecen evidencias convincentes de que, casi 80 años después de que Paz Soldán lanzara su programa de reforma carcelaria, las instituciones penales seguían siendo lugares donde los presos sufrían los efectos conjuntos del despotismo, el descuido, la corrupción y la indiferencia. El paisaje arquitectónico y urbano de Lima se había transformado íntegramente a lo largo de los años, sobre todo durante el Oncenio, pero sus prisiones habían sido dejadas mayormente intactas por los impulsos modernizadores. Como Ángela Ramos dijera con respecto a Guadalupe en 1927, «qué importa que haya avenidas, paseos, hoteles, estatuas, monumentos, casas para delegaciones, que son verdaderos palacios; qué importa todo esto, cuando en el corazón de la ciudad se retuercen trescientos o más desgraciados para los que todavía no se ha inventado la palabra "PIEDAD" en esta piadosa Lima»[442]. Los maltratos, los castigos corporales, la falta de servicios elementales y la negación de los derechos elementales de los presos caracterizaban el funcionamiento de estas instituciones.

Durante la década de 1920 hubo intentos de suavizar las condiciones de vida en algunas de estas cárceles, pero poco fue lo que cambió más allá de medidas administrativas menores relacionadas con la comida, el trabajo, la vigilancia, la infraestructura y las escuelas de los penales. Todavía en 1929, el propio presidente Leguía admitió que la mayoría de las prisiones peruanas seguían siendo «centros de inútil sufrimiento y de propagación del delito». Leguía imaginó un plan para construir una nueva penitenciaría, una nueva cárcel de mujeres, un nuevo reformatorio agrícola e industrial y muchas otras prisiones. El problema de los penales iba a ser aparentemente resuelto con la construcción masiva de nuevos centros de confinamiento. Como era típico del régimen de Leguía, los problemas sociales y políticos iban a resolverse con soluciones técnicas y de estrecha mira. Sin embargo, en este caso, ni siquiera la alternativa propuesta se llegó a plasmar, pues ninguno de los planes de Leguía de construir nuevas prisiones se pudo concretar[443].

Las ambigüedades de la reforma carcelaria durante el Oncenio quedan ejemplificadas aún más con un episodio poco conocido. En un momento en que los criminólogos y los expertos intentaban ansiosamente construir un complejo carcelario en el cual tanto el castigo científico como la investigación criminológica darían pistas para resolver los problemas de la criminalidad y el desorden social, los funcionarios del Estado peruano tomaban medidas para conseguir una orden religiosa europea que administrara el

Reformatorio de Menores de Surco y con el tiempo también la penitenciaría de Lima y la isla penal El Frontón. Parecería que ciertos sectores del Gobierno finalmente se habían dado por vencidos: el Estado necesitaba librarse de esa «papa caliente» que eran las prisiones[444]. En 1928, se hicieron solicitudes formales ante el Vaticano para que se permitiera que los Padres de la Providencia, o cualquier otra orden de religiosos con experiencia en la administración de prisiones, enviara una misión al Perú. El embajador peruano estableció contactos con varias órdenes italianas, belgas y alemanas, pero los resultados fueron desalentadores. Un representante de los Hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia llegó a ir a Lima con la expectativa de que se hicieran cargo del reformatorio de menores, el panóptico y El Frontón, pero recibió una impresión negativa de la situación de las cárceles peruanas. La hermandad decidió no aceptar la invitación y no volvió a hacerse ningún otro intento en este sentido[445].

En el imaginario de la mayoría de los residentes de Lima, las condiciones en el panóptico, Guadalupe y El Frontón evocaban visiones de horror, sufrimiento y desesperación. Aunque estas representaciones de las cárceles de la capital son casi unánimes, las percepciones sobre sus habitantes fueron mucho más variadas: para algunos, los reclusos constituían la hez de la sociedad y merecían los sufrimientos que soportaban; para otros, eran víctimas de la injusticia y la opresión y merecían compasión y piedad. Pero ninguna de estas imágenes sobre las cárceles y los presos podía hacer justicia a las complejas realidades de la vida en la prisión o a las ambiguas relaciones que los presos establecían con la institución y sus múltiples niveles de autoridad. El horror y el sufrimiento que esos nombres evocaban iban siempre acompañados por otros tipos de interacciones que hacían que la existencia en la prisión fuera, en ocasiones, algo más tolerable, como veremos en el capítulo 7. Y, por otro lado, imaginar a los ocupantes de esos lugares de detención como si fueran parte de una clase criminal homogénea y única oscurecería la diversidad de los antecedentes y la complejidad de las jerarquías que dieron forma a su vida detrás de las rejas.

Capítulo 5
Faites, rateros y «caballeros en desgracia»

Encerrar personas tiene como uno de sus objetivos aislarlas de las comunidades que las consideran peligrosas, despreciables o simplemente indeseables. Extirpándolas de su medio ambiente, se piensa, se logrará que se desconecten de las incidencias, hábitos y otros rasgos abyectos de su vida cotidiana. En la imaginación de los reformadores penales, los presos tendrían que abandonar su bagaje cultural y social desde el momento mismo en que ponen pie en la prisión, o por lo menos poco tiempo después de ello, luego de ser expuestos a una terapia rehabilitadora o como efecto de su

exposición a distintas normas y rutinas. Sin embargo, esto jamás sucede en la realidad. De hecho, los prisioneros llevan consigo el mundo externo a la prisión y viceversa. Se enfrentan a los desafíos de la vida carcelaria con los recursos y las desventajas que traen de afuera y, al mismo tiempo, aprenden dentro de la cárcel mecanismos para hacer frente y sobrevivir a su condición que, una vez cumplida su condena, moldearán su readaptación a la vida en libertad.

El mundo en el cual vivían los presos de Lima estaba configurado menos por los reglamentos o por los manifiestos doctrinales de criminólogos y expertos penales que por la multitud de interacciones que tenían lugar entre ellos y las autoridades de la prisión, los guardias y los empleados. Sin embargo, estas agrupaciones humanas, en especial la comunidad de presos, no conformaban entidades homogéneas, pues estaban permanentemente divididas por múltiples fisuras (de clase, raza, origen regional, estatus legal, edad, cultura y otras) que efectivamente hicieron que la comunidad de personas a quienes llamamos presos fuera un grupo sumamente heterogéneo y fragmentado.

Los diversos segmentos que conformaban la población masculina de las prisiones de Lima contenían distintos orígenes, roles y jerarquías, además de las peculiaridades propias de su colectividad. Mientras que los faites, por ejemplo, eran temidos y admirados y se esforzaban por defender su concepción del honor, la respetabilidad y la masculinidad, los rateros eran considerados personajes miserables, patéticos y hasta afeminados del bajo mundo limeño. Ello no obstante, estos no eran los únicos tipos criminales y es muy probable que no representen toda la gama de personalidades que conformaban las poblaciones carcelarias. Trabajadores y padres de familia, los llamados vagos, asesinos en serie y hasta miembros de las clases «decentes» también formaban parte de este variopinto conglomerado de presos. El grupo más sui géneris era el de los presos políticos, que compartían las mismas instalaciones con los delincuentes comunes pero no las mismas condiciones o espacio físico. En conjunto, el examen de las comunidades de presos en las cárceles de varones nos ofrece la oportunidad de resaltar su diversidad y las formas potenciales de solidaridad y tensión existentes entre ellos.

Al explorar las comunidades de reos en las prisiones limeñas comenzaremos también a descifrar algunas de las formas en que estas funcionaban como «cajas de resonancia» de la sociedad en la cual existían: las jerarquías, valores y tensiones existentes en el mundo exterior reverberaban también en el interior de las prisiones. Como veremos, las cárceles de Lima figuraban entre las pocas instituciones realmente *nacionales*, en el sentido de que reflejaban la diversidad regional, étnica, social y cultural de la población peruana en mucha mayor medida que ambientes institucionales como colegios, universidades, la burocracia estatal o el clero. Fue a través de su relación con el Estado

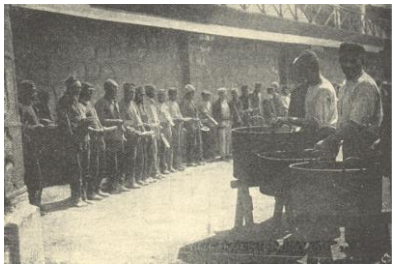
(en este caso el sistema de justicia criminal) que miles de personas, mayormente de clase baja, entraron en estrecho contacto con otros integrantes de la comunidad nacional de peruanos. Este capítulo reconstruye la multiplicidad de los mundos que cristalizaron en el espacio de la prisión.

Comunidades de presos: cifras y tendencias

En el período 1850-1935, los delincuentes de Lima fueron encarcelados principalmente en tres instituciones: la penitenciaría, la cárcel de Guadalupe y la isla penal El Frontón. Dada la diversidad de estatus legales y de penas que cumplían los reos en estas prisiones, cada una de ellas acogía una variada gama de detenidos. Los *enjuiciados*, aquellos que estaban siendo procesados, eran por lo general enviados a Guadalupe; los *rematados* eran los que habían sido sentenciados a diversas penas de prisión y las purgaban en El Frontón o Guadalupe; los *penitenciados* habían sido condenados a la llamada pena de la penitenciaría y, al igual que los presos políticos, podían ser enviados a cualquiera de las tres cárceles. La mayoría de los «vagos» eran remitidos a El Frontón a partir del momento en que este establecimiento penal empezó a funcionar. De este modo, cada prisión albergaba una gama de presos que difería ampliamente en términos de su estatus legal.

Entre 1862 y 1908, la penitenciaría de Lima alojó un máximo de 315 detenidos, cada uno de los cuales ocupaba una celda individual. Como el número de delincuentes sentenciados a esta institución siempre superaba su capacidad, las autoridades enviaban el sobrante a otras prisiones como Guadalupe, Casasmatas y posteriormente la isla penal El Frontón, ninguna de las cuales contaba con una infraestructura que permitiera siquiera intentar imponer la estricta regimentación y el proceso de aprendizaje de obediencia a las normas que debía conllevar la pena de penitenciaría[446]. Hubo un momento en el que hasta 274 criminales sentenciados al panóptico estaban cumpliendo su pena en Guadalupe. En 1908, la capacidad de la penitenciaría fue incrementada a 411 reos, y en 1920, a 515[447]. En 1928, cuando toda una sección de la penitenciaría fue convertida en la Cárcel Central de Varones, el número promedio de presos en aquella disminuyó hasta alrededor de 250 personas.

Figura 6
Presos de El Frontón esperando el rancho



De Colonia Penal «El Frontón», *Memoria presentada por el director Sr. Manuel Hermilio Higueras al Ministro de Justicia, Instrucción y Culto. 1922* (Lima: Litografía e Imprenta T. Scheuch, 1923).

La población de Guadalupe fue mucho más mixta y heterogénea que la de la penitenciaría. Ella albergaba acusados que esperaban sentencia, criminales ya condenados a diversas penas de cárcel, penitenciados condenados por distintos juzgados de todo el país, reos enviados desde las vecinas provincias de Canta y Huarochirí, y presos políticos y convictos sentenciados por tribunales militares tales como desertores, soldados indisciplinados y militares culpables de otros delitos. Guadalupe siempre aparecía en las descripciones y denuncias como una cárcel terriblemente sobrepoblada. Diversas estadísticas parecen confirmar esta imagen: en cierto momento cobijó hasta 728 presos. Según las cifras reunidas por los médicos Francisco Graña y Hermilio Valdizán, un total de 26.431 reos ingresaron a Guadalupe en el período 1870-1915, esto es, un promedio de 573 ingresos al año (tabla 5.1)[448]. Las fluctuaciones en el número de delincuentes que ingresaban cada año son atribuibles a múltiples factores, entre ellos las variaciones en los niveles reales de la criminalidad y en las tasas de arresto y condena. Resulta imposible evaluar la importancia relativa de estos elementos. Especialmente notorio es el bajo número de delincuentes que ingresaron a Guadalupe en el período posterior a la ocupación de Lima por las fuerzas chilenas, lo cual podría estar relacionado no con una caída en los índices de delincuencia sino con el estado de desorganización de las fuerzas policiales[449]. De otro lado, cientos de reos eran liberados cada año luego de ser absueltos. En 1874, por ejemplo, 563 internos de Guadalupe fueron liberados, 472 de los cuales habían sido absueltos de todos los cargos. El inspector de prisiones Tomás Caivano señaló el evidente dilema: «o se está deteniendo inocentes o se está absolviendo culpables»[450]. La consecuencia práctica de esta situación era la presencia constante de una población flotante de personas que reiteradamente pasaban breves períodos en Guadalupe. Según las autoridades, dicha población incluía un núcleo de delincuentes que ingresaban a prisión solo para ser liberados luego de un breve lapso. Estas constantes entradas y salidas de Guadalupe permitieron que los internos mantuvieran una fuerte conexión con el mundo externo, un «privilegio» que los presos de la penitenciaría, por ejemplo, no tenían. Algunas autoridades sugerían que para los delincuentes Guadalupe era más

una suerte de «estación de verano» que un lugar de sufrimiento y penitencia[451]. Los que ya habían sido condenados pasaban períodos que iban de unos cuantos meses a 15 o 20 años (en el caso de los penitenciados)[452].

Tabla 5.1
Número de presos ingresados anualmente a la cárcel de Guadalupe, 1870-1889

Año	Número	Año	Número
1870	662	1896	454
1871	849	1897	459
1872	470	1898	399
1873	827	1899	541
1874	964	1900	562
1875	810	1901	594
1876	606	1902	528
1877	604	1903	485
1878	565	1904	685
1879	488	1905	806
1880	542	1906	717
1881	258	1907	680
1882	302	1908	918
1883	309	1909	935
1884	236	1910	919
1885	229	1911	767
1886	408	1912	677

1887	366	1913	825
1888	330	1914	862
1889	360	1915	824
		Total	**26.340**

Fuente: Miró Quesada, *Breves apuntes de mesología criminal*, 35-36.

La mezcla de diversos tipos de presos fue también una característica de la población de la isla penal El Frontón, que incluía a rematados, penitenciados, vagos y presos políticos. Las estadísticas sobre la población de esta colonia son sumamente escasas. La cifra más alta que encontré es de 387 presos en diciembre de 1929, incluyendo 156 presos políticos, 186 delincuentes comunes y 45 militares[453]. Una lista de 1922 incluyó 182 rematados y 121 penitenciados[454].

El perfil estadístico de la población carcelaria de las instituciones penales de Lima se asemeja a los patrones bastante conocidos de la población presidiaria de todo el mundo. La mayoría de los detenidos pertenecían a las clases pobres y trabajadoras de la población, eran relativamente jóvenes y de grupos étnicos no blancos (tablas de la 5.2 a la 5.8). Había más diferencias en los tipos de delitos por los cuales estos reos habían sido acusados o sentenciados. La mayoría de los internos de la penitenciaría (el 82 por ciento en 1927, por ejemplo) cumplían extensas condenas por diversos tipos de homicidio (tabla 5.9), en tanto que los de Guadalupe habían sido acusados o condenados por diversos delitos. En 1877, por ejemplo, apenas una tercera parte de los reos de Guadalupe habían sido acusados de haber cometido crímenes violentos, entre ellos el asesinato, en tanto que otra tercera parte habían cometido delitos contra la propiedad[455]. En El Frontón, en 1922, el 40,1 por ciento de los rematados habían sido sentenciados por robo y el 34,1 por ciento por homicidio (tabla 5.10). El origen regional de estos presos es asimismo revelador del universo del cual provenían. La proporción de presos en la penitenciaría sentenciados por los juzgados de Lima declinó a lo largo del tiempo (del 53,3 por ciento en 1877 al 18,3 por ciento en 1926) en tanto que la presencia de sentenciados en otras jurisdicciones, sobre todo Piura, Puno y Cajamarca, se incrementó (tabla 5.11). Esto es, muy probablemente, un reflejo de la expansión gradual de la policía y del sistema de justicia criminal, en particular durante el gobierno de Leguía, hacia zonas del país en las cuales su presencia no había sido particularmente visible anteriormente[456]. En consecuencia, un número creciente de malhechores eran condenados por los juzgados de provincias y enviados a la penitenciaría de Lima. En Guadalupe, el 56,8 por ciento de todos los presos entre 1870 y 1915 eran provincianos y

apenas el 25,3 por ciento eran nativos de Lima. En 1930, solo 22 de 92 prisioneros de El Frontón provenían de Lima y Callao y 5 eran extranjeros. Los restantes 65 provenían del interior, en especial de las provincias norteñas de Cajamarca, La Libertad y Piura[457]. Estas cifras reflejan claramente una creciente migración del interior a Lima, así como la difícil adaptación de muchos de estos migrantes a la capital.

Tabla 5.2
Presos en la penitenciaría de Lima
Distribución racial

Año	Total	Blancos	%	Negros	%	Indígenas	%	Chinos	%	Mestizos	%
1877	386	55	14,2	33	8,5	187	48,4			111	28,8
1891	313	36	11,5	15	4,8	175	55,9	19	6,1	68	21,7
1900	315	24	7,6	14	4,4	168	53,3	16	5,1	93	29,5
1901	315	18	5,7	11	3,5	189	60,0	16	5,1	81	25,7
1903	315	14	4,4	13	4,1	178	56,5	14	4,4	96	30,5
1904	315	14	4,4	15	4,8	171	54,3	14	4,4	101	32,1
1905	311	24	7,7	14	4,5	155	49,8	13	4,2	105	33,8
1906	359	21	5,8	17	4,7	158	44,0	7	1,9	156	43,5
1907	411	44	10,7	17	4,1	340	82,7	10	2,4		
1908	411	32	7,8	11	2,7	359	87,3	9	2,2		
1909	411	35	8,5	15	3,6	351	85,4	10	2,4		
1910	410	39	9,5	22	5,4	337	82,2	12	2,9		
1925	354	47	13,3	7	2,0	89	25,1	3	0,8	208	58,8

1926	291	36	12,4	5	1,7	152	52,2	3	1,0	95	32,6
1928	234	17	7,3	7	3,0	114	48,7	3	1,3	93	39,7

Fuente: Memorias, Penitenciaría de Lima.

Tabla 5.3
Presos en la penitenciaría de Lima
Distribución racial (porcentajes)

	1870-1916	1917-1927
Blancos	17,4	15,8
Indígenas	36,1	52,2
Negros	13,3	1,7
Chinos	6,2	1,0
Mestizos	27,0	29,2

Fuente: Fosalba, «La herencia como principal factor».

Tabla 5.4
Presos en la cárcel de Guadalupe, 1870-1915
Composición racial

	Número	%
Indígenas	**9.516**	36,1
Mestizos	**7.102**	27,0
Blancos	**4.584**	17,4
Negros	**3.509**	13,3

Asiáticos	**1.630**	6,2
Total	**26.341**	

Fuente: Miró Quesada, *Breves apuntes de mesología criminal*, gráfica 5.

Tabla 5.5
Presos en la penitenciaría de Lima
Ocupaciones

	1877	%	1892	%	1906	%	1925	%
Artesanos	141	38,7	109	36,1	253	71,1	110	37,5
Zapateros	[67]		[46]		[122]		[43]	
Agricultores	122	33,5	127	42,1	59	16,6	168	57,3
Militares	46	12,6	19	6,3	10	2,8		
Servicios	36	9,9	35	11,6	31	8,7	10	3,4
Sin profesión	9	2,5						
Mineros	5	1,4			3	0,8	4	1,4
Sirvientes	3	0,8	9	3,0				
Maestros	1	0,3						
Ingenieros	1	0,3						
Veterinario							1	0,3

Ganaderos			3	0,99				
Total	364		302		356		293	

Fuentes: Memorias, Penitenciaría.

Tabla 5.6
Presos en la cárcel de Guadalupe, 1870-1915
Ocupaciones

	Número	%
Artesanos	**9.692**	36,8
Obreros	**4.963**	18,8
Labriegos	**4.200**	15,9
Comerciantes e industriales	**2.677**	10,2
Empleados	**1.440**	5,5
Militares	**1.424**	5,4
Domésticos	**1.109**	4,2
Marineros	326	1,2
Profesionales	217	0,8
Estudiantes	164	0,6
Artistas	76	0,3

Proprietarios	53	0,2

Fuente: Miró Quesada, *Breves apuntes de mesología criminal*, 45.

Tabla 5.7
Presos en la penitenciaría de Lima
Edades

	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Total
Año									
1900	6	76	114	59	50	10	0	0	315
1901	7	88	111	58	44	7	0	0	315
1903	10	114	133	30	18	9	1	0	315
1904	13	120	128	28	18	7	1	0	315
1905	3	59	89	78	45	28	8	1	311
1908	9	105	148	86	42	17	4	0	411
1910	2	107	163	81	30	22	5	0	410
1911	3	102	141	84	37	34	5	0	406
1925	0	88	128	82	33	16	5	2	354
1927	0	95	109	59	16	7	4	1	291
1928	3	96	72	54		9	(*)		234
Promedio	5,09	95,45	121,45	63,55	30,27	15,09	3,00	0,36	334,27
%	1,5	28,6	36,3	19,0	9,1	4,5	0,9	0,1	100,0
(*) 60+									

Fuente: Memorias, Penitenciaría de Lima.

Tabla 5.8
Presos en la cárcel de Guadalupe, 1870-1915
Edades

Grupos de edad (*)	N	%
10-20	**3.198**	12,1
20-30	**11.322**	43,0
30-40	**6.893**	26,2
40-50	**3.190**	12,1
50-60	**1.215**	4,6
60-70	409	1,6
70-80	103	0,4
80-90	11	0,0
Total	**26.341**	

(*) Tal como aparecen en la tabla original.

Fuente: Miró Quesada, *Breves apuntes de mesología criminal*.

Tabla 5.9
Presos en la penitenciaría de Lima, 1862-1890
Delitos

HOMICIDIOS Y SIMILARES	Número	%
Homicidio	**1.018**	

Homicidio múltiple	35	
Homicidio frustrado	31	
Homicidio y otro	49	
Parricidio	8	
Filicidio	3	
Uxoricidio	16	
Infanticidio	3	
Fratricidio	4	
Fusilamiento	5	
Uxoricidio y otros	2	
Intento de uxoricidio	1	
Subtotal	**1.175**	74,4
LESIONES Y VIOLENCIA		
Lesiones	30	
Lesiones y asalto	4	
Incendio	4	
Incendio y otro	2	

Asalto	48	
Subtotal	88	5,6
DELITOS ECONÓMICOS		
Robo	134	
Robo y otro	39	
Hurto	21	
Abigeato	17	
Salteadores	10	
Falsificación	25	
Subtotal	246	15,6
DELITOS SEXUALES		
Estupro	20	
Violación	6	
Pederastia	4	
Sodomía	1	
Castración	1	
Estupro y lesiones	1	

Subtotal	33	2,1
DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO		
Sublevación	13	
Motín militar	14	
Insubordinación	1	
Rebelión	6	
Reos prófugos	3	
Subtotal	37	2,3
OTROS	1	
TOTAL	**1.580**	

Fuente: Jiménez, «La sociedad y el delito», 145-146.

Tabla 5.10
Presos en la isla penal El Frontón, 1922
Delitos

	Número	%
Robo	73	40,1
Homicidio	62	34,1
Desconocido	18	9,9
Asalto y robo	8	4,4
Hurto	6	3,3

Lesiones	5	2,7
Violación	4	2,2
Estupro	3	1,6
Pederastia	1	0,5
Rapto de menor	1	0,5
Abigeato	1	0,5
Total	182	

Fuente: Memoria, El Frontón, 1922.

Tabla 5.11
Presos en la penitenciaría de Lima
Origen regional (según el lugar de la sentencia)

	1877		1900		1910		1921		1925	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Áncash	19	5,1					39	7,7	27	7,6
Arequipa	18	4,9	17	5,7	31	7,8	18	3,6	14	4,0
Ayacucho	12	3,2	7	2,4	30	7,5	35	6,9	15	4,2
Cajamarca	28	7,6	26	8,8	41	10,3	44	8,7	42	11,9
Cusco					43	10,8	54	10,7	26	7,3
Huaraz			7	2,4	18	4,5				
Iquitos					4	1,0	18	3,6	8	2,3

Junín	8	2,2							16	4,5
Lambayeque									28	7,9
La Libertad	61	16,4	51	17,2	49	12,3	46	9,1	21	5,9
Lima	198	53,4	131	44,1	118	29,6	113	22,4	65	18,4
Piura	4	1,1	31	10,4	35	8,8	76	15,1	43	12,2
Puno	8	2,2	27	9,1	30	7,5	62	12,3	49	13,8
Tacna	15	4,0								
	371		297		381		505		354	

Fuente: Memorias, Penitenciaría de Lima.

¿Cuáles eran los antecedentes de estos presos? ¿Eran delincuentes de extenso prontuario? ¿Era su encarcelamiento la culminación de una vida viciosa y delictiva, tal como usualmente se los presentaba? Para los reos de la penitenciaría, que supuestamente habían cometido los crímenes más atroces, las evidencias fragmentarias indican que, a diferencia de lo que el sentido común parecía sugerir, la mayoría de ellos eran delincuentes primarios. En su estudio de 1917 sobre los presos tatuados del panóptico, Marino Alegre y Pacheco ofreció detallados esbozos biográficos de 27 detenidos. Diecisiete de ellos (el 63 por ciento) fueron presentados como de vida «regular», sin antecedentes penales, y si bien es cierto que a 8 los describió como de «vida irregular», apenas 2 fueron asociados explícitamente con una carrera delictiva[458]. Los breves esbozos ofrecidos por el autor, que combinaban los autorretratos de los reos con las frecuentes observaciones de Alegre y Pacheco, nos dan ciertos detalles sobre su pasado. El preso n.º 294, por ejemplo (Alegre y Pacheco no los identifica por su nombre), sabía leer y escribir, vivía una vida «regular» y sus padres fueron descritos como «trabajadores y honrados»[459]. El preso n.º 175, un indígena de 32 años que sabía leer y escribir, jamás había tenido un mal comportamiento y, por el contrario, era sumamente estimado por sus superiores en el ejército, donde había servido[460]. El preso n.º 319, un mestizo de 22 años, jamás había estado involucrado en actividades delictivas, había sido un trabajador diligente y su entorno familiar fue descrito como «bueno»[461]. Las evidencias sobre la reincidencia entre los presos de la penitenciaría tienden a confirmar este patrón. En 1909, apenas 10 de 411 reos (el 2,3 por ciento) aparecen como

reincidentes[462]. Los delincuentes ocasionales y primerizos parecen haber abundado en la población de la penitenciaría, y un buen número de ellos sostenían además haber sido enviados a prisión como resultado de injusticias, errores y venganzas.

Estas evidencias tienden a arrojar dudas sobre la asociación bastante corriente entre el panóptico y una población de temibles asesinos, creada por algunos observadores, expertos penales y la gente común. Estas representaciones de los presos del panóptico se vieron reforzadas por los casos, reportados de manera amplia y sensacionalista, de unos cuantos asesinos, entrevistados en los diarios y cuidadosamente estudiados por los criminólogos, que evocaban imágenes de personas realmente inhumanas. Asesinos tales como Manuel Peña Chacaliaza, Lorenzo Machiavello, Enrique Rojas y Cañas, Alejandrino Montes y Emilio «Carita» Willman, para mencionar solo a unos cuantos, constituían las celebridades del bajo mundo criminal cuyas trayectorias parecían reflejar los rasgos más temibles de los criminales de Lima. Chacaliaza, un asesino indígena, se hizo célebre y, según varios informes, ampliamente temido tras llevar a cabo una de las fugas más publicitadas de la penitenciaría[463]. Machiavello, un triple homicida, fue objeto de extensas y a veces sumamente encendidas discusiones entre los expertos que buscaban determinar su estatus legal y mental[464]. Rojas y Cañas, quien asesinó a su amante sin ninguna razón aparente, recibió también la atención de criminólogos y periodistas[465]. Montes, un sirviente doméstico indígena que asesinó a sus patrones en 1916, fue objeto del estudio criminológico más detallado jamás realizado sobre un solo criminal y recibió una abundante cobertura en la prensa diaria[466]. Willman, como luego veremos, fue una de las auténticas celebridades criminales de su tiempo, y llegó incluso a adquirir estatus literario.

Pero lo usual era que los homicidas fueran personas bastante comunes y que llevaban una vida ordinaria, no el tipo de monstruos que la prensa sensacionalista y unos cuantos criminólogos deseaban proyectar. La mayoría de los internos del panóptico pertenecían a las clases trabajadoras y compartían muchos de los espacios culturales y físicos, esbozados en el capítulo 2, que eran comunes entre los sectores populares de Lima. Muchos de ellos vivían en callejones, frecuentaban cantinas, asistían a jaranas y peleaban por razones en apariencia triviales. Muchos asesinatos fueron el resultado de disputas personales que usualmente giraban en torno a las minucias de la vida cotidiana; el consumo de licor desempeñó un papel importante en ellos, aunque sus efectos fueron probablemente exagerados por los perpetradores en un intento por disminuir su culpa. Algunas de las situaciones que llevaban al homicidio reflejan patrones de socialización basados en ideas profundamente jerárquicas y machistas sobre cómo deberían ser las relaciones interpersonales. No era raro que se produjeran asesinatos debidos a un sistemático abuso conyugal o al tratamiento despótico de personas subordinadas (sirvientes domésticos, peones y otros). Las formas horizontales

de violencia también yacían en la base de muchos episodios trágicos que terminaron en la comisión de homicidios. Después de todo, como sostengo en la introducción de este libro, la violencia era un componente central en las relaciones sociales de la Lima decimonónica y de comienzos del siglo XX. Los violentos episodios que llevaban a la comisión de homicidios y terminaban en condenas en la penitenciaría no eran usualmente premeditados, pero tampoco carecían de motivación. Ellos eran el resultado de patrones de comportamiento y de mentalidades que configuraron la vida de un gran número de peruanos. Unos cuantos ejemplos extraídos de los centenares de casos criminales ilustrarán estos patrones.

Tómese, por ejemplo, el caso de Pablo Bambarén, un policía mestizo de 29 años que vivía con su conviviente Victoria Macedo en un callejón de la Plazuela de Santo Tomás. Según su testimonio, Victoria desarrolló una afición tan fuerte por el alcohol que él la dejó y se mudó del callejón. Un día de 1911, luego de pasar unas cuantas horas bebiendo en una taberna con un inspector de policía, Pablo fue a la estación, cogió su arma y salió de guardia. Pasó por el callejón donde aún vivía Victoria y la vio bebiendo en compañía de otras personas. Se le invitó a quedarse y así lo hizo. Poco después estalló una discusión entre ambos que terminó con dos disparos contra ella. Victoria falleció y Pablo fue sentenciado a 13 años en la penitenciaría[467]. Melchor Bustamante, un músico zambo nacido en Lima, tenía 54 años en 1896. Vivía con una mujer llamada Faustina, a la que también se conocía como Cascabel; según algunos testimonios, Melchor regentaba con ella un burdel en la ciudad sureña de Chincha. Debido al comportamiento abusivo que él tenía, Faustina decidió dejarlo y retornar a Lima. Bustamante aparentemente fue detrás de ella, la encontró y le dio muerte al rehusarse a regresar con él. Melchor logró escapar y se mantuvo como fugitivo durante dos años. Descrito por la policía como un «sujeto de carácter díscolo y pendenciero», fue capturado en Guayaquil en 1898 y extraditado al Perú. Se le sentenció a 15 años en la penitenciaría. Esta era, en realidad, su segunda condena: ya había pasado 12 años en el panóptico[468]. El caso de Ambrosio Flores, un agricultor de 55 años y portero del callejón de Camarones, muestra un lado distinto de la violencia interpersonal entre las clases bajas de Lima. Flores intervino en una acalorada discusión entre dos residentes que terminó, según los testigos, cuando aquel apuñaló a uno de ellos. Ambrosio y su abogado defensor insistieron en que la víctima era un exconvicto «de muy malos antecedentes»; que la testigo estaba predispuesta en su contra porque, como portero, Ambrosio no permitía que su marido llevase ron al callejón; y, por último, que la muerte se debió a una provocación de la víctima. Ello no obstante, Ambrosio fue condenado a 12 años en la penitenciaría, que posteriormente fueron reducidos a 11 por la Corte Suprema[469]. El siguiente caso tuvo lugar en un entorno más cercano al bajo mundo criminal. Acam era un chino de 48 años, empleado en un garito en el Callao. Una noche de octubre de 1900 un tal Manuel Guerrero llegó al local para apostar y

parecía tener muy buena suerte pues llegó a ganar hasta 14 soles. Acam le pidió que le prestase un sol, a lo que Guerrero respondió con un puñetazo en la cara. Enfurecido, Acam fue a la cocina y cogió un puñal con el que mató a su contrincante. Acam fue condenado a la pena capital a pesar de que su defensa sostuvo que no se le podía considerar una persona «ecuánime». La sentencia fue posteriormente reducida a 15 años de penitenciaría[470].

Varios presos de la penitenciaría eran trabajadores agrícolas en las chacras y haciendas de los valles que rodeaban Lima. No obstante su relativa distancia de la ciudad, estos habitantes rurales no estaban necesariamente disociados de la población del medio urbano. Conformaban un conglomerado multiétnico de peones y empleados regulares e irregulares, muchos de los cuales vivían en las rancherías de estas propiedades agrícolas. Muchos, asimismo, vivían por cuenta propia como leñateros, comerciantes y trabajadores itinerantes. En septiembre de 1869, Pedro Reyes, un peón y leñatero de la hacienda Carabayllo, de 58 años de edad, fue acusado de haber asesinado a su compañero, el peón negro Manuel Cárdenas. Reyes alegó no recordar lo sucedido porque había estado borracho ese día, pero sí admitió que el cuchillo usado para cometer el crimen le pertenecía. Resultó entonces que la causa aparente del crimen fue una disputa por dos reales. El juez aceptó que el acusado había estado borracho y también tuvo en cuenta que siempre había sido un «hombre formal». Aun así, Pedro fue sentenciado a 11 años en la penitenciaría[471]. Ese mismo año, pero en otra hacienda de Lima, Pedro Pablo García, un joven peón negro, dio muerte a Cipriano Tenorio, un anciano compañero de trabajo. Habían estado bebiendo bastante un domingo, luego de terminar de cortar madera. Al regresar a la hacienda comenzaron a bromear y Cipriano, según varios testigos, arrojó un puñado de arena en los ojos de García. Este sacó un cuchillo y lo mató. Según su abogado defensor, García estaba «en estado casi de locura por la excesiva borrachera en que se encontraba». También fue sentenciado a 11 años en la penitenciaría[472]. Otro caso involucró a Pablo Alemán, un ladrillero de 43 años que administraba un tambo en la hacienda de Huachipa, a unos kilómetros de Lima, donde vendía licor y comida. Una noche el capataz de la hacienda, un capitán del ejército de nombre Ismael del Campo, fue a beber en el tambo con el comisario de la localidad. Cuando estaban por irse estalló una discusión entre Alemán y Del Campo. El primero sacó un cuchillo, apuñaló a Del Campo y huyó. Posteriormente fue aprehendido. Según el comisario, Alemán tenía una vieja rencilla con el difunto, quien al parecer alguna vez lo había humillado, una historia posteriormente confirmada por el hacendado. Para demostrar la naturaleza del asesino, el comisario observó que Alemán ya antes había sido condenado a 11 años de prisión por homicidio. Ahora se le encontró culpable y se le sentenció a quince años en la penitenciaría[473].

Los esbozos biográficos de presos procedentes del interior del país presentan tendencias similares. Ricardo Carmona vivía en Huambocancha, una hacienda en el departamento norteño de Cajamarca. Un día de 1904, según él, fue violentamente atacado por unas cuantas personas «de malos antecedentes» mientras bebía licor tras haber terminado sus tareas diarias. Al intentar defenderse cometió un asesinato por el cual fue condenado a nueve años en la penitenciaría[474]. En 1900 Aurelio Cueto era un soldado del regimiento de los Húsares de Junín de Trujillo. Un cabo le robó dinero, pero no se tomó ninguna medida por ello. El cabo siguió acosándolo y un día incluso lo atacó con un cuchillo: Cueto terminó asesinándolo como resultado de su «tremenda ofuscación». Fue sentenciado a 20 años en la penitenciaría[475]. Saturnino Fuertes era de Canta, una provincia vecina de Lima, y pasaba cierto tiempo lejos de casa pastando su ganado en la hacienda Huampaní, junto con su esposa y tres hijos. Un día de 1898 fue invitado a tomar unos cuantos tragos y al regresar a casa su esposa lo recibió con insultos y otros actos hostiles. Sumamente «ofuscado», Fuertes le dio muerte, por lo cual fue sentenciado a 15 años en la penitenciaría[476].

Estas historias y las estadísticas arriba presentadas muestran que la penitenciaría de Lima era usada en primer lugar para castigar a un segmento de la población que había cometido crímenes que no solo la ley sino también la religión y el sentido común definían como serios, cuando no horrendos y moralmente espantosos. Sin embargo, estos presos no eran monstruos o seres inhumanos; a decir verdad, eran demasiado humanos. Venían a ser el destilado, por así decirlo, de ciertos patrones de interacción cultural bastante difundidos y persistentes. Su comportamiento no necesariamente era aberrante en el sentido de excepcional. Después de todo, el comportamiento abusivo y violento también caracterizaba a las mismas instituciones estatales que, como la policía, el ejército y la escuela, debían supuestamente inculcar valores civilizados entre la población. La mayoría de los presos provenían de las clases bajas y trabajadoras, pero la penitenciaría no podría ser vista como una institución penal que buscaba convertir en ciudadanos industriosos a aquellas personas ociosas e indolentes dedicadas a librar una guerra contra la propiedad. En lugar de ello buscaba segregar y castigar a las personas que expiaban crímenes «atroces» y que eran consideradas «peligrosas» para la sociedad.

Rateros y faites

Aunque los asesinos eran el centro de los reportes más sensacionales sobre la criminalidad limeña, y a pesar de que comprensiblemente despertaban temor y revulsión entre distintos sectores de la población de la capital, no constituían el tipo de personas que los comentaristas usualmente tenían en mente cuando discutían la cuestión criminal. Por el contrario, otros dos tipos conspicuos de delincuentes eran los que sobresalían dentro de la comunidad de delincuentes y presos y llegaron a

representar la «típica» comunidad de malhechores de Lima: los rateros y los faites. Los primeros fueron casi unánimemente representados como personajes de bajo estatus, mientras que los segundos adquirieron una sólida, aunque ambigua, reputación en el bajo mundo criminal por su supuesta valentía y hombría.

Los pobladores de Lima, incluyendo policías, periodistas, criminólogos y otros observadores, veían al ratero como una suerte de ladronzuelo de poca monta, repugnante, ubicuo, oportunista y reincidente, al que jamás se castigaba lo suficiente y que era en esencia irreformable. No cometía delitos por necesidad sino por su aversión al trabajo honrado y estable. Desde esta perspectiva, era un producto no de la injusticia, la pobreza o el hambre sino de la falta de autoridad y disciplina en la escuela, el hogar y la sociedad en general. El ratero, además, debía su profesión a una extendida tolerancia de parte de autoridades negligentes. En octubre de 1892, *La Gaceta Judicial* publicó un editorial sobre los rateros: «En pocas ciudades abunda este género de delincuentes como en esta capital; y esto debido no sólo a la deficiencia de la policía, sino, y en primer término, a la impunidad en que quedan después de perpetrar sus fechorías». El intendente, explicaba la *Gaceta*, enviaba rateros al juez, quien como regla general rechazaba los cargos por la escasa importancia de los delitos y luego enviaba el expediente al juez de paz local, quien a su vez los dejaba libres sin cargos[477]. La imagen del ratero como un delincuente oportunista y semicobarde también coloreaba la opinión de activistas defensores de la reforma carcelaria como Ángela Ramos, quien los describía como figuras patéticas a pesar de la simpatía que ella sentía por los presos: «Nuestros rateros criollos apenas si se dedican a contar el cuento del tío, a robar gallinas, a comer y no pagar y –los más audaces– a carteristas. Muy de tarde en tarde se da cuenta de un robo de relativas proporciones a alguna casa de comercio. Es por esto que nuestros infelices ladrones constituyen una legión de harapientos en las cárceles cuyo solo espectáculo oprime el corazón más duro. [...] Nuestro ratero es un vulgar ratero [sic] que se lleva lo que encuentra mal parado y se acabó»[478]. En su visión sumamente romántica de las tradiciones de Lima, el poeta y cronista José Gálvez añadía una dimensión de género al desprecio con que usualmente se pintaba a los rateros: Los verdaderos bandidos pertenecen a la historia antigua; hoy apenas quedan rateros, muchas veces ridículos y hasta afeminados. El bandolero de antaño tuvo colorido y fuerza. Era audaz y astuto. No rehusaba un combate, robaba en grande, era capaz de asaltar una casa y de salvar una vida y muchas veces moría, con la cara frente a la muerte, de un balazo en el corazón, convencido de que había cumplido una vida hermosa y fieramente masculina. El ladrón degeneró al ínfimo género de robar gallinas. Apareció entonces la nube de rateros [...] los grandes ladrones desaparecieron con el aumento de la policía y el progreso general.[479]

La impresión generalizada de que los rateros gozaban de impunidad y eran tolerados por la policía y los jueces reflejaba, hasta cierto punto, las bajas tasas de condena a las que aludí anteriormente. Sin embargo, esto no se explica por la simpatía que policías y jueces podrían haber tenido hacia los rateros; lo cierto es que no contaban con los medios de asegurar que cada persona acusada de raterías fuera condenada y enviada a prisión. De hecho, los agentes de policía hacían todo lo posible por asegurar la condena. Como vimos en el capítulo 3, el parte policial, en particular, reflejaba los esfuerzos de la policía por convencer a otras autoridades de la culpabilidad de las personas arrestadas. Al etiquetar a alguien como un ratero «conocido», «recalcitrante» o «profesional», la policía justificaba su propia conducta –que, como vimos, usualmente incluía grandes dosis de abuso y arbitrariedad– y al mismo tiempo intentaba influir en el resultado de un posible juicio. Esto ciertamente no garantizaba una condena, pero en numerosos casos sí ayudó a conseguirlo.

Rómulo Calonge, por ejemplo, conocido como Marcolfa, fue arrestado en julio de 1897 por intentar robar en una casa en el callejón en que vivía, en la calle Maravillas. El parte policial afirmaba que Calonge era «demasiado conocido por el sinnúmero de veces que ha sido remitido por igual motivo a esa intendencia». Aunque este negó la acusación, había una testigo, una lavandera que vivía en el mismo callejón, quien sostuvo haberlo visto abandonando la escena del delito. Su testimonio y el parte policial convencieron al juez de la culpabilidad de Rómulo y se le sentenció a cuatro años en prisión[480]. Aurelio Pinto, un panadero chileno, fue detenido dentro de una casa en el puerto del Callao robando algo de ropa y otros artículos. El parte policial se refirió a él como un «ratero consuetudinario» a quien era necesario enviar a un «lugar seguro». Se le sentenció a cuatro años de prisión[481]. Julián La Rosa fue liberado de la cárcel el 16 de enero de 1899 luego de cumplir una condena de cinco años. Al día siguiente se dirigió a la chacra Mirones, entró a la habitación de un peón y supuestamente robó un poncho y un traje. Fue aprehendido por el dueño de la chacra. Según el parte policial, el infractor era «un delincuente incorregible que se halla archivado en la sección antropométrica [...] y su tarjeta acusa múltiples reincidencias». En realidad, este era su cuarto ingreso en prisión. La Rosa, un peón negro nacido en la provincia sureña de Ica, sostuvo que ese día en realidad estuvo celebrando su salida de prisión y que se hallaba completamente ebrio, de modo que no podía recordar cómo ni por qué terminó en la chacra. Es probable que La Rosa formara parte de la población flotante de peones que solían ir de chacra en chacra en busca de trabajo temporal. Sin embargo, desde el punto de vista de las autoridades y los propietarios rurales, había poca o ninguna diferencia entre ellos y ciertos grupos de delincuentes que plagaban la zona. Si la acusación era real o se debía a la paranoia del dueño es algo que no puede establecerse. La Rosa regresó a prisión por otros 52 meses[482].

Andrés Farfán, un zapatero de 48 años nacido en Piura, entró un día de 1902 a una tienda de empeños para recuperar algunos artículos. Al salir notó que dos oficiales de policía lo habían estado observando y, según el parte, arrojó un paquete al río. Esto bastó para que la policía aprehendiera a Farfán, un «conocido ladrón» y revisara su casa, donde encontraron varios artículos y recibos de tiendas de empeño. Debido a sus «pésimos antecedentes» la policía concluyó que eran todos robados, pues era inconcebible que pudiera poseer legalmente joyas o artículos de oro. La policía trató de hacer más verosímil la acusación señalando en el parte que Farfán ya había sido «medido y retratado» en la intendencia y que se trataba de un reincidente. Él admitió haber estado cuatro veces en prisión, aunque solo en dos ocasiones como sentenciado. Se le condenó a 40 meses en la cárcel[483]. Un último ejemplo es el de Pedro Aguirre Villar, quien fue arrestado por hurto en marzo de 1915. En el parte, el oficial de policía sostuvo que «el detenido es el famoso e incorregible ratero apodado Chivatito, con quien ya no hay que hacer, pues ingresa diariamente a esta Intendencia y a las comisarías por hechos análogos». El abogado de Aguirre sostuvo que no había ninguna prueba contra su cliente. Se solicitó un informe a Guadalupe y resultó que había estado detenido allí cinco veces, pero que en todas ellas había sido liberado sin ningún cargo. Esta vez también fue absuelto, pero la Corte Superior cambió la sentencia y lo condenó a un año de prisión[484]. Nuevamente fueron los antecedentes del defendido y no las evidencias de su culpabilidad los que en última instancia decidieron el resultado del juicio.

Los rateros se convirtieron en los personajes más representativos del mundo criminal limeño. Cuando las autoridades o los observadores se referían al delito en la ciudad, la mayoría de ellos tenían en mente la imagen de una multitud de rateros huyendo con sus objetos robados. El Código Penal de 1863 establecía un castigo de «arresto mayor en cuarto grado» por la comisión de robos cuyos montos fueran menores de 100 soles, lo que significaba pasar entre 130 días y 5 meses en la cárcel en el caso de aquellos efectivamente sentenciados[485]. Muchos otros considerados y detenidos como «rateros» ni siquiera veían sus acusaciones llegar a los despachos judiciales. Dado que los rateros no podían ser detenidos por períodos más extensos, las autoridades y los observadores manifestaban su exasperación por lo que veían como una puerta giratoria que les permitía salirse con la suya. Las representaciones negativas de Guadalupe y el profundo desdén que estos comentaristas expresaban por quienes estaban allí detenidos se debía, en parte, a la percepción de que el sistema no funcionaba puesto que los rateros tenían vía libre para cometer delitos que quedaban virtualmente impunes. Según un reportero, había presos que habían sido encarcelados hasta 18 veces en Guadalupe, de modo que, al ser liberados, «y porque saben que tienen que regresar», simplemente decían «hasta luego» y dejaban encargadas sus posesiones y hasta «su sitio» con otro reo, de modo tal que pudieran recuperarlos al regresar. «Se diría que es

el único derecho que esta gente adquiere: el derecho inapelable de la propiedad». La mayoría de los presos, agregó, habían estado en Guadalupe seis o más veces[486].

La presencia de los rateros en esta cárcel, con su alta tasa de reincidencia y su familiaridad con la prisión y sus reglas escritas y no escritas, servía además como correa de transmisión entre el mundo externo y el interno. Era gracias a este constante paso de los rateros por los patios y departamentos de Guadalupe que los componentes claves de la cultura y de las formas de socialización de ciertos sectores de los pobres urbanos de Lima (jaranas, bebida, juego, jerga) se reproducían en su interior, en tanto que la subcultura de la prisión también reverberaba fuera de ella. Buena parte del tráfico (en términos comerciales y culturales) hacia y desde la prisión era llevado a cabo por estos huéspedes temporales de Guadalupe. De ahí que la imagen de esta cárcel –con sus propios callejones, tiendas, tabernas y garitos– como una extensión de ciertos ambientes de Lima no resulte tan disparatada.

Guadalupe era también célebre por ser el hogar más o menos temporal de otra variedad particular del bajo mundo criminal de Lima: el faite, también conocido por el menos original apelativo de «matón». Usualmente también un ladrón, el faite era sobre todo un peleador intrépido, violento y bien entrenado («faite» deriva de *fighter*) que vivía una vida semilegal próxima al bajo mundo de la prostitución, el licor, el juego y otros tipos de actividades ilegales. Muchos faites trabajaban estrechamente con la policía como *soplones* o agentes de la policía secreta, y a menudo eran reclutados para ser parte de turbas que asaltaban centros de votación o atacaban manifestaciones políticas rivales. En la versión de Gálvez, el faite era un delincuente «degenerado y vulgar» y que «cada día ha ido decayendo en su personal, en sus costumbres, en sus formas sucesivamente inferiores y denigradas». Era una degeneración del palomilla tradicional, ese adolescente o adulto joven decente de clase media que traviesamente participaba, por lo general como parte de un grupo mayor, en ofensas menores tales como arrojar piedras, robos de cosas sin valor para divertirse o peleas sumamente ritualizadas entre pandillas rivales. Para Gálvez resultaba difícil distinguir al faite del guardaespaldas, el torturador o el soplón, y «vivían malamente, alternando los corredores sombríos de la Intendencia con los canchones siniestros de la Cárcel»[487]. El novelista José Diez Canseco describió el mundo de los faites en sus relatos: «Andrades, Rubios, Espinozas, toda la turba zafia de truhanes, matones y jaranistas. Señores de la chaveta y los cabezazos. Pícaros y rufianes de las camorras cotidianas. Puntos de la guitarra y fletes para las mujeres. Timbas escondidas en los solares ruinosos y mugrientos. Burdeles del Chivato. Fondas de Tintoreros. Idilios de los Descalzos. Tajamar, Palenque de los líos. ¡Guapos de Abajo'el Puente!»[488]. Carlos Miró Quesada fue aún más detallado, situando a los faites en el barrio tradicionalmente negro de Malambo: «El hombre de Malambo fue especialista en riñas, jugaba a los gallos, tocaba la guitarra y echaba al viento unas canciones chabacanas y a

la vez melodiosas. Se ejercitó en el empleo de una cuchilla muy filuda llamada chaveta, trompeaba bien y echaba intencionados requiebros a las mozas que se cruzaban en el camino. Malambo era y sigue siendo la expresión del "faite" que burla a la policía, comete un atraco en la vía pública y toma el aguardiente ante el mugriento mostrador de un bebedero barato [...] La crónica de policía de los diarios viene a ser para ellos la rutinaria página social del vecindario»[489].

Aunque por lo general eran detestados, los faites también podían despertar admiración por su coraje y bravura[490]. De hecho, para algunos –y no solo para quienes pertenecían al mundo criminal– eran sinónimo de hombría y hasta de honor, como luego veremos.

En las primeras décadas del siglo XX, la condición de faite estuvo siempre asociada con los negros y sus barrios, Malambo en particular, convirtiéndose así en un indicador de identidad racial, además de legal y social[491]. Malambo, cuya historia reconstruyó Luis Tejada, fue durante el período colonial temprano una suerte de depósito para los esclavos recién llegados, y de manera gradual se convirtió en un barrio pobre y predominantemente negro. Se ganó la reputación de ser un semillero de criminales, jaraneros y otros personajes del bajo mundo limeño. Posteriormente también se convirtió en un barrio de clase trabajadora y desarrolló su propia cultura de organizaciones y protestas obreras. Aunque su reputación como un barrio infestado de delincuentes era evidentemente una exageración creada por comentaristas procedentes de la sociedad decente de Lima, por lo menos algunos de sus habitantes sí encajaban con esa descripción y muchos más buscaban sacar ventajas de esa fama. No resulta exagerado sugerir que ser un faite de Malambo era una ventaja que ayudó a ciertos individuos a convertirse en personajes poderosos de la comunidad criminal[492]. Los faites y quienes escribían sobre ellos construyeron su imagen con base en los estereotipos culturales que atribuían a los negros en general, y a los habitantes de ciertos barrios en particular, tanto una inclinación hacia el delito como una habilidad innata para pelear. Desde cierta perspectiva, esta construcción del faite refleja prejuicios y estereotipos profundamente arraigados, pero se debe también considerar el grado en que ella fue asimismo alimentada por los mismos faites: dentro del submundo criminal, ser considerado un auténtico faite significaba poseer ciertas cualidades que lo hacían respetable. Aunque esto es imposible de documentar, no resulta difícil imaginar a faites que se vanagloriaban de su habilidad con el cuchillo o se jactaban de pertenecer a un barrio específico (Malambo), dos características que se consideraban importantes indicadores de su reputación como audaces delincuentes.

Los faites destacaban dentro de la prisión y se convirtieron en habitantes respetados y hasta temidos. El faite era, en efecto, tanto un producto del bajo mundo criminal externo como de la cárcel[493]. Constituían una fuente permanente de peleas y violencia pero, como

veremos en el capítulo 6, eran además elementos importantes dentro del orden consuetudinario de la prisión. En efecto, algunos pasaron a ser caporales, adquiriendo así niveles de autoridad importantes en relación tanto con los presos como con los funcionarios de la cárcel. Se convirtieron en actores importantes en el manejo de la prisión, precisamente por su capacidad para sobresalir entre la población presidiaria. Para las autoridades, los faites eran intermediarios ideales y, en consecuencia, se les otorgaron privilegios y cuotas de poder dentro de la población carcelaria; a cambio, pasaron a ser aliados de la administración en el mantenimiento del orden interno.

Ningún faite de este período tuvo mayor prestigio que Emilio «Carita» Willman y Cipriano «Tirifilo» Moreno, los protagonistas de uno de los sucesos más renombrados del bajo mundo criminal de Lima a comienzos del siglo XX: el duelo a cuchillo que tuvieron en mayo de 1915 y que culminó con la muerte de Tirifilo. El encuentro fue llamado casi de inmediato «duelo de caballeros» y posteriormente adquirió forma literaria en un relato breve del mismo nombre escrito por el novelista peruano Ciro Alegría, quien conoció a Carita en la penitenciaría en 1932, mientras Alegría estaba detenido como preso político[494]. Tanto Carita como Tirifilo eran vecinos negros de Malambo. Según *El Comercio*, este último era «amo de todas las calles de abajo el puente, en las que campeaba como único en su calidad de matón y miembro de la policía secreta»[495]. Participaba desde por lo menos 1911 en la represión de manifestaciones políticas como soplón de la policía secreta y, según algunos reportes, era un célebre torturador en las cárceles de Lima. Durante la campaña electoral de 1912 estuvo a punto de ser linchado por una turba que respaldaba la candidatura de Guillermo Billinghurst. Tirifilo fue descrito como «un veterano de la profesión, un hombre terrible [...] sin conciencia, seguro siempre de imponerse a todos, autoridades inclusive, con sus fechorías de hombre guapo»[496]. Tenía un «trato brutal» y «bajos instintos», motivo por el cual contaba con muchos enemigos, uno de los cuales era Willman. Carita, de otro lado, era mucho más joven y menos experimentado que Tirifilo, aunque el reportero de *El Comercio* apuntó que «su alma se halla bien templada para la riña y el escándalo». El simple hecho de haber desafiado a Tirifilo inevitablemente debió elevar su estatus y hasta despertar admiración.

Hay distintas versiones sobre qué fue exactamente lo que provocó la disputa. Según *El Comercio*, la enemistad entre los dos hombres se debió a una pelea en un burdel por los favores de una mujer. Luego de una discusión que aparentemente no tuvo ninguna consecuencia, Tirifilo usó sus conexiones con la policía para enviar a Carita a prisión, algo que este no olvidaría fácilmente. Algún tiempo después, Carita lo desafió a duelo en la zona del Tajamar. Confiado en su habilidad con el cuchillo, Tirifilo respondió: «Bueno, que la cosa sea pronta, me necesito en otra parte»[497]. El relato de Alegría, basado en su recuerdo de la conversación con Carita, fue muy diferente. Tirifilo habría ido a

casa de Carita para intentar convencerlo de que colaborara con él en «un robo de importancia». Su madre le dijo que no se encontraba en casa, a lo que Tirifilo habría respondido con insultos dirigidos a Carita y a su madre. Al enterarse de esto, Carita enfureció y fue a casa de Tirifilo para desafiarlo a duelo esa misma noche. La respuesta fue: «Ahí estaré»[498].

La pelea comenzó con Tirifilo en control de la situación, lo que no sorprende dada su experiencia, pero Carita logró aprovechar sus brazos más largos y la mala fortuna de Tirifilo: después de varios minutos de sangrienta lucha Tirifilo resbaló y cayó al suelo, oportunidad que Carita rápidamente aprovechó para apuñalarlo. Tirifilo intentó caminar, dio unos cuantos pasos y luego se desplomó muerto. Su deceso se convirtió en una noticia sensacional en toda Lima. Una muchedumbre de unas 200 personas incrédulas se reunieron en los exteriores de la morgue «anhelosas de comprobar con los ojos» que Tirifilo estaba efectivamente muerto[499]. «Un nuevo héroe popular había surgido», escribió Alegría. Carita no solo había desafiado y derrotado al temible Tirifilo: lo había hecho en defensa de su honor y el de su madre y en la forma en que los caballeros acostumbraban hacerlo, es decir, en un duelo. «El alma del pueblo vibró», anotó Alegría, y agregó: «Valses criollos y marineras cantaron la hazaña»[500]. Efectivamente, Carita, pero también Tirifilo, se convirtieron en tema de versos populares y canciones que los retrataban simultáneamente como hombres valerosos y crueles[501]. Carita fue posteriormente arrestado por la policía y llevado al hospital y después a la cárcel. En el hospital fue entrevistado por el joven periodista José Carlos Mariátegui. Willman se definió a sí mismo como «un hombre formal» que no deseaba ser tomado por un vago o un «mal hombre», pero también dejó en claro que no era un cobarde y que había estado preparado para morir en el duelo[502]. Willman fue enviado a Guadalupe antes de ser transferido a la penitenciaría. Fue sorpresivamente indultado en diciembre de 1918[503].

Estos dos «héroes de la chaveta», como los llamó Mariátegui, eran el epítome de los faites y satisfacían las expectativas de coraje y valentía adscritas a dicha condición. También ejemplifican formas de entender el honor entre las clases bajas de Lima, que incluían la observancia de reglas sobre el comportamiento adecuado y las leyes no escritas de la respetabilidad en el bajo mundo criminal. El honor ciertamente se hallaba en el meollo de su disputa y comprendía la lealtad a ciertos principios. Carita sabía que podía morir, pero a pesar de ello siguió con el desafío en defensa de su honor. Tirifilo podría haber rechazado el reto, pero ello habría sido un acto de cobardía. Su combate semeja la lógica que yacía detrás de los duelos de la élite, cuyo principal fundamento era siempre la defensa que uno hacía de su reputación y la disposición a morir en el intento. Según Alegría, incluso los jueces consideraron «la reyerta entre un negro y un mulato de Malambo como una clara cuestión de honor, un duelo de caballeros»[504]. La

rivalidad y la venganza también fueron elementos cruciales en este episodio: en última instancia se trataba de una disputa por el poder, por el lugar del faite más temido.

Este episodio resulta revelador de algunas de las formas en que la masculinidad era construida entre los distintos sectores de la población pobre urbana. La hombría estaba asociada con todas las cualidades de un buen faite. Si bien Carita dijo a Mariátegui que él era un hombre formal, o sea de principios, recto y de honor, Tirifilo podría haber dicho que él murió como un hombre de verdad. No solo la valentía sino también el respeto a ciertas reglas estaban en la base de esta forma de comprender la virilidad, la cual compartía ciertos elementos con las definiciones que la élite daba del honor y la masculinidad. El hecho de que algunos faites eran admirados por los integrantes de las clases letradas resalta aún más estas percepciones compartidas sobre cómo debía comportarse un varón. Al igual que en otros ámbitos sociales, las nociones aceptables sobre la masculinidad eran un fundamento importante para generar y ejercer el poder en el mundo de los delincuentes. Como veremos en el capítulo 7, las jerarquías del poder y el prestigio se construyeron sobre la base de dicotomías raciales y de género como la del viril faite negro versus el ratero afeminado y escurridizo.

Los vagos de Lima: ¿delincuentes o esclavos?

Como señalé en el capítulo 1, la vagancia siempre fue considerada un serio problema social, y los intentos para contenerla por lo general tuvieron magros resultados. Los vagos eran los residentes acostumbrados de las cárceles de Lima, pero pasaban más tiempo deambulando por las calles de la ciudad, salvo por las pocas horas o días que pasaban encerrados. En ocasiones, el ejército y la marina fueron el destino de docenas, y tal vez cientos, de vagos, una estrategia gubernamental que fue objeto de críticas porque supuestamente llevaba la «escoria» de la sociedad a las instituciones que se suponía debían proteger los sagrados intereses de la patria. De lejos, la medida más rigurosa y ambiciosa fue la ley de vagancia emitida el 18 de enero de 1924 por el Gobierno de Leguía[505]. En ella se definía al vago como una persona que «careciendo de bienes y rentas, no ejerce profesión, arte ni oficio; no tiene empleo, destino, industria, ocupación lícita, ni otro medio legítimo ni conocido de subsistencia; o fingiendo tenerlos, carece de habitación; o, teniendo por suya la perteneciente a distinta persona, vive de la tolerancia, complacencia, sugestión, sujeción, tiranización o explotación de esta última» (art. 1). Otras categorías comprendidas eran las personas con libertad condicional que no se reportaban a las autoridades, los tahúres y borrachos habituales y las prostitutas no registradas. Los vagos debían ser castigados con pena de prisión y trabajos forzados por lapsos que iban de 30 días a 5 años, dependiendo de las circunstancias y de su grado de reincidencia. Los expresidiarios que no lograsen conseguir un empleo en los seis meses posteriores a su liberación también estaban

sujetos a la pena de un año de trabajos forzados. Aunque la ley no era explícita sobre dónde debía encarcelarse a estos vagos, El Frontón se convirtió en el destino preferido para ellos. Cientos de los llamados vagos eran enviados allí cada año.

Los sospechosos eran primero evaluados por una Junta Calificadora que operaba en la Intendencia de Policía; si ella encontraba que merecían ser castigados enviaba los casos al prefecto, la autoridad política. Este entonces ordenaba la encarcelación de los vagos en El Frontón o en alguna otra cárcel local. Los procedimientos para evaluar a los sospechosos de vagancia fueron posteriormente cambiados gracias a la campaña emprendida por Ángela Ramos contra los métodos sumamente abusivos empleados por las autoridades policiales. El 6 de marzo de 1928, el Gobierno convirtió la calificación en un evento público y trasladó la jurisdicción de manos del prefecto a las de un jurado. Además, se otorgó a los sospechosos el derecho a contar con un abogado defensor, aun cuando Ramos observó que los defensores públicos asignados a estos casos tendían más bien a actuar como «otro acusador»[506]. A los vagos no se les permitía recurrir al *habeas corpus* para apelar su arresto o la pena que les fuera impuesta, lo que constituía una clara violación de sus derechos constitucionales. Las prerrogativas judiciales otorgadas *de facto* a la policía, aunque criticadas por Ramos y Mariátegui, eran consideradas necesarias por las autoridades policiales «por razón de que dichas autoridades viven –podemos decir así– más cerca de los individuos sospechosos de vagancia [y] son los que pueden estar al tanto de sus maniobras, seguirlas, y formarse, mediante esta continua observación, concepto preciso de la temibilidad del supuesto vago»[507].

El resultado de esta campaña contra la vagancia fue un experimento con el trabajo forzado a gran escala y sumamente explotador. El vigoroso programa de obras públicas de Leguía –pavimentación de calles, edificios públicos, viviendas para familias de clase obrera y otros proyectos– necesitaba una mano de obra abundante. Una forma de conseguirla era condenando a los vagos a trabajar en obras públicas o, en el caso de aquellos enviados a El Frontón, en las canteras preparando adoquines de piedra. En Lima, los vagos fueron puestos a trabajar en proyectos tales como la construcción de carreteras y mercados y la limpieza de calles y acequias. Ramos denunció que «conforme crecen las necesidades de ornato e higiene de Lima, aumenta el número de vagos»[508]. Cientos de los llamados vagos fueron asimismo enviados a la región amazónica, a una suerte de colonia penal cerca del río Perené, donde construyeron carreteras bajo condiciones horrendas[509].

La ley de vagancia ha sido correctamente considerada como una norma que promovía una esclavitud *de facto*[510]. Se la puede comparar con la infame Ley de Conscripción Vial, también implementada por Leguía, que obligaba a todos los ciudadanos varones entre los 18 y los 60 años a trabajar entre 6 y 12 días al año en la construcción o reparación de

carreteras, dependiendo de la edad de la persona. Esta ley se convirtió en una fuente de explotación y abuso fundamentalmente de la población indígena y reforzó las jerarquías sociales y raciales existentes: por ejemplo, se exceptuaba de ella a los hombres que estaban dispuestos a pagar una «redención» monetaria o que podían enviar a alguien en su reemplazo, usualmente un peón o algún otro subalterno[511]. Tanto la ley de vagancia como la de conscripción vial subrayan la naturaleza excluyente y sumamente explotadora del proceso de modernización emprendido por el Gobierno de Leguía. Los llamados vagos y los indígenas reclutados forzosamente para trabajar construyendo carreteras estaban prácticamente privados de poder ejercer sus derechos ante la ley. Las arbitrariedades y los abusos alcanzaron una dimensión comparable con aquellos de la esclavitud negra, la servidumbre china y la explotación de los indios bajo el gamonalismo.

Durante los primeros seis meses después de aprobada la ley de vagancia fueron investigadas 286 personas, 218 de las cuales fueron condenadas como vagos[512]. La información sobre la población de vagos enviada a El Frontón entre el 14 de abril de 1926 y el 31 de julio de 1927 revela que un total de 119 condenados por vagancia fueron consignados a la isla por períodos de 18 meses a 2 años[513]. Más de la mitad (68) fueron condenados a 1 año; alrededor del 25 por ciento (38), a 6 meses; y el resto a períodos diversos. De los 119 sentenciados, 30 habían sido remitidos por la Prefectura de Lima y 89 por la del Callao. Se les acusaba de diversos delitos además del de vagancia; sin embargo, como resulta evidente, no habían sido juzgados y los cargos eran por lo general sumamente imprecisos (15 eran «maleantes», otros 15 tenían «pésimas costumbres» y 3 eran «extranjeros perniciosos»). Aunque estaban condenados por vagancia, declaraban contar con una ocupación: 23 eran jornaleros; 20, artesanos; 18, vaporinos; 16, trabajadores portuarios; y 12, pescadores; 26 no declararon ocupación[514]. La mayor parte de las ocupaciones citadas eran de naturaleza estacional o temporal, lo que podría indicar que en lugar de vagos estas personas, o por lo menos algunas de ellas, eran trabajadores obligados a estar temporalmente desocupados por las fluctuaciones del mercado laboral. Ramos, entre otros opositores, denunció el elevado número de vagos en Lima, afirmando que eran el resultado del interés oficial por fabricarlos: los cazadores de vagos cobraban por su captura, de modo tal que salían a las calles, arrestaban a tantas personas como les fuera posible, «los inventa[n] cuando no los hay», y hasta destruían sus certificados de trabajo para así acusarlos de no tener ninguna prueba de estar empleados[515]. Las personas que supuestamente tenían antecedentes penales fueron el principal blanco de esta campaña.

Una de las víctimas fue Enrique Ortiz, un expresidiario de Guadalupe que comenzó a trabajar como zapatero en el Callao luego de cumplir una sentencia de 30 meses de prisión. Tenía su propia tienda y contrató a tres trabajadores, entre ellos Félix Zamudio,

un preso salido de la penitenciaría. El 15 de febrero de 1928, los cuatro fueron arrestados por la policía en su centro de trabajo y enviados a la cárcel, acusados de vagancia. Se los puso a trabajar en la construcción de nuevas viviendas en Malambo[516]. Otro caso fue el de Juan Zapata, un zapatero de Camaná de 34 años, quien admitió que no siempre lograba ganar lo suficiente para vivir. Zapata alegó que, al quedarse sin dinero, sobrevivió empeñando unos cuantos efectos personales. Se le detuvo en el transcurso de un motín popular contra la policía y, dados sus antecedentes, se le calificó como vago. Según la autoridad a cargo, se le debía poner «en un lugar en donde se lleven a cabo trabajos públicos, como medio de procurar su regeneración moral y hábitos de trabajo». Fue condenado a 12 meses en El Frontón[517].

Los registros de la DGP incluyen numerosas órdenes de arresto de vagos enviados a El Frontón. La información que contienen es lamentablemente parca, al estar limitada a los nombres de los arrestados y sus alias. La inclusión de estos últimos revela un esfuerzo consciente de parte de la policía para transmitir la noción de que en realidad eran delincuentes, o por lo menos, como se acostumbraba decir, personas de dudosos antecedentes.

Aunque los vagos eran meros residentes temporales de las instituciones de confinamiento de Lima, su caso es importante puesto que revela los usos explícitamente utilitarios del castigo y la implementación completamente arbitraria de los mandatos legales de un Gobierno que, en teoría, se esforzaba por modernizar la sociedad peruana. Los llamados vagos pertenecían a los sectores más vulnerables de la población limeña, precisamente aquellos segmentos que habían sido convertidos en delincuentes no solamente en el discurso legal y político sino también por la acción cotidiana de la policía. Se les privó de sus derechos fundamentales y se les obligó a efectuar duros trabajos para realizar los sueños de la élite modernizadora. A pesar de los esfuerzos de defensores como Ramos y Mariátegui, los abusos cometidos contra los vagos persistieron durante el resto del Gobierno de Leguía y aún muchos años después.

«Caballeros en desgracia»: los presos políticos

Una última categoría de reclusos, y a decir verdad la más sui géneris, es la de los presos políticos. Ellos no pertenecían al mundo criminal pero sí al de la prisión. La categoría de preso político era en sí misma sumamente imprecisa. En el período examinado en este libro comprendía una variedad de reos, entre ellos participantes en insurrecciones militares, miembros de los partidos de oposición, trabajadores involucrados en huelgas y representantes de regímenes recientemente derrocados. Algunos fueron encarcelados por breves períodos en tanto que otros recibieron extensas sentencias o sobrellevaron un largo e ilegal encarcelamiento. Los códigos penales de 1863 y 1924 establecieron una

serie de delitos políticos, entre ellos la rebelión, la conspiración, el amotinamiento, los tumultos, la desobediencia a la autoridad y los delitos contra la constitución y contra el derecho al sufragio. Los castigos para sus perpetradores incluían condenas en prisión de diversa duración, la expatriación y, en el caso de los empleados estatales, el despido de sus cargos. La mayoría de los presos políticos no fueron juzgados. Dependiendo de diversas circunstancias –su influencia o posición política, su estatus social, sus conexiones personales con funcionarios del Gobierno y el número de presos políticos existentes– fueron enviados a la penitenciaría, a la isla penal El Frontón, a la isla San Lorenzo, a la cárcel de Casasmatas, a la Intendencia de Lima o, posteriormente, a la CCV y El Sexto. Otras estaciones policiales y militares fueron asimismo usadas ocasionalmente para detener presos políticos. Resulta imposible siquiera ofrecer cifras aproximadas sobre las dimensiones de este fenómeno pues los registros son sumamente parcos, fundamentalmente debido a la naturaleza extrajudicial de la mayor parte de estas detenciones. Aunque algunos fueron condenados en un juicio, la mayoría fueron detenidos y encarcelados ilegalmente.

Como han mostrado estudios recientes, aunque el poder político estaba controlado por coaliciones formadas por miembros de la clase alta, entre ellos gamonales, comerciantes, hacendados costeños, profesionales urbanos y oficiales militares, los grupos subalternos no estuvieron ausentes de las luchas políticas. Ellos participaron en tumultos, motines y montoneras, así como en los numerosos ejércitos informales que compitieron por el poder en las distintas guerras civiles que estallaron a lo largo del siglo XIX[518]. En consecuencia, las filas de los presos políticos estaban repletas de personas de muy diversas procedencias sociales, orígenes regionales y afiliaciones políticas y cuyo estatus legal y trato recibido era asimismo variado. Aunque en la documentación hay listas aleatorias de estos presos, son muy pocos los detalles con que contamos de su destino en la prisión, su relación con otros prisioneros o el tratamiento recibido. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando la prensa reportaba sobre ellos, lo usual era que solo se incluyera a los participantes en las conspiraciones fallidas o a miembros de los Gobiernos salientes que pertenecían a las clases altas[519]. La documentación sobre estos detenidos es, previsiblemente, mucho más rica para el período posterior a 1919; a partir de entonces, la represión política no solo se incrementó sino que, además, la toma de datos se hizo más consistente. La represión política, además, había comenzado a golpear con fuerza no solo a los miembros de los partidos opositores sino también a dirigentes obreros y trabajadores anarquistas. El movimiento laboral se iba convirtiendo en un importante actor político, y las formas de protesta y confrontación de los trabajadores fueron respondidas con represión y encarcelamiento[520].

Numerosos integrantes del Gobierno depuesto fueron apresados luego del golpe que llevó a Leguía al poder, entre ellos el mismísimo presidente Pardo, quien fue confinado en el panóptico. Entre 1919 y 1921, el Gobierno leguiísta envió a numerosos periodistas y opositores políticos a prisión en diversas ocasiones, acusándolos de conspiración[521]. La represión se intensificó después de 1923. En diferentes momentos, docenas y tal vez centenares de activistas laborales y miembros de los partidos y grupos opositores fueron apresados[522]. Algunos de ellos pasaron unos pocos días en confinamiento, y otros, varios años.

La isla San Lorenzo, a unos cuantos kilómetros del Callao, pasó a ser uno de los principales destinos de los presos políticos. Según el historiador Jorge Basadre, fue Germán Leguía y Martínez, ministro de Gobierno y primo del presidente, quien ordenó la apertura de San Lorenzo en 1921 para acoger a este tipo de presos[523]. Las habitaciones construidas allí para poner en cuarentena a los pasajeros que arribaban al puerto del Callao comenzaron a usarse para acoger a los detenidos políticos. Según el ensayista y estudioso del problema agrario en el Perú Abelardo Solís, San Lorenzo se convirtió en «una hacienda, un gran negocio» y los presos en «algo así como cabezas de ganado cuyo número era preciso aumentar con mayores detenciones y conservar de cualquier suerte»[524]. Además de San Lorenzo, el Gobierno también usó la penitenciaría, Guadalupe, la CCV, El Frontón y, después de 1928, la todavía inconclusa prisión de El Sexto para recluir presos políticos. Trabajadores y activistas de distintas partes del país fueron también enviados a la isla de Taquile, en el departamento andino de Puno.

En palabras de Basadre, pasaron por las prisiones de Leguía «tanto grandes señores de la más alta aristocracia económica como jóvenes estudiantes y humildes trabajadores»[525]. Dirigentes obreros, estudiantes universitarios y activistas anarquistas y socialistas fueron también víctimas de la represión. Docenas de ellos fueron enviados al exilio. Víctor Raúl Haya de la Torre, presidente de la federación de estudiantes y futuro jefe del APRA, fue encarcelado y enviado a San Lorenzo en octubre de 1923, luego de las protestas que tuvieron lugar en mayo de dicho año contra la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús[526]. Fue también en octubre de 1923 que Leguía y Martínez y numerosos miembros de su camarilla fueron detenidos en San Lorenzo[527]. Entre los casos más notorios de represión política estuvo el de la supuesta «conspiración comunista» en la que se vieron involucrados Mariátegui y su círculo más íntimo de amigos y colaboradores. Hasta 40 de ellos fueron enviados a San Lorenzo en junio de 1927, incluyendo al joven Basadre. En noviembre de 1929, otra ola represiva contra los intelectuales y activistas radicales colocó a Mariátegui bajo arresto domiciliario y envió hasta 180 personas a prisión[528].

La escena política quedó aún más convulsionada luego de la caída de Leguía, en 1930. El Partido Aprista perdió la elección de 1931 ante Luis M. Sánchez Cerro y, acusándolo de fraude, intensificó su oposición y recurrió a veces a la violencia, en tanto que el Gobierno incrementaba la represión. En marzo de 1932 el presidente Sánchez Cerro sobrevivió a un intento de asesinato perpetrado por José Melgar, un joven militante aprista, a raíz del cual este y Juan Seoane, abogado aprista y propietario de la pistola usada en el atentado, fueron apresados, juzgados y condenados a muerte. La sentencia fue posteriormente conmutada por 25 años en el panóptico[529]. En mayo del mismo año, Haya de la Torre fue detenido en la misma prisión, donde se le tuvo en confinamiento durante 15 meses. En julio de 1932, una insurrección aprista en Trujillo dejó cientos de apristas muertos o encarcelados y numerosos oficiales del ejército asesinados. Una ola de represión antiaprista asoló el país. En abril de 1933 un joven militante aprista asesinó a Sánchez Cerro, con lo cual la división entre el APRA y el ejército se hizo aún más intensa. El encarcelamiento político alcanzó mayores dimensiones, y sus blancos fueron fundamentalmente miembros de las clases media, profesional y trabajadora, muchos de los cuales tenían origen provinciano. Aunque la mayoría de ellos eran apristas, la represión también golpeó a militantes comunistas y activistas obreros.

Presos políticos, no delincuentes

Salvo por la ley de represión implementada en noviembre de 1889, que estipulaba que los crímenes políticos debían ser tratados y castigados de igual forma que cualquier otro delito –un enfoque legal que no duró mucho–, los presos políticos siempre fueron tratados por los códigos penales, los juzgados y las autoridades de prisiones como parte

de una comunidad de transgresores que eran fundamentalmente diferentes de los delincuentes comunes[530]. Una ley de 1859 establecía que en defensa de «el decoro de la Nación y la honra de los ciudadanos», la «costumbre vejatoria» de encerrar a estos presos junto con los delincuentes comunes debía terminar[531]. En consecuencia, debían ser retenidos en edificios distintos, una prescripción que no podía cumplirse porque no había edificaciones especiales para ser usadas con ese propósito[532]. La solución fue alojarlos en distintos pisos, habitaciones y pabellones de las cárceles a las cuales se les enviaba para así mantenerlos separados físicamente de los delincuentes comunes. En la penitenciaría, por ejemplo, el departamento de presos políticos en 1914 era un área de 48 metros cuadrados, con poca ventilación e iluminación y situada cerca de la entrada al penal[533]. Años más tarde, otras áreas de la penitenciaría como las oficinas administrativas y las aulas serían usadas para alojar a este tipo de presos. En El Frontón los presos políticos ocupaban un edificio separado. En Guadalupe se les retenía en una habitación especial. La racionalidad detrás de estas regulaciones y prácticas era la noción de que había diferencias sociales y culturales, no solamente legales, que distinguían a estos reclusos de los delincuentes comunes, una percepción que era casi universalmente aceptada. *Variedades* resumió este parecer: «Un revolucionario, un faccioso nunca puede ser equiparado a un criminal vulgar, ni por el gobierno mismo, y es por eso que, mal que bien, se les guarda consideraciones; aún condenados al grillete por una sentencia los presos políticos no serían en el concepto público "un número" sino unos caballeros en desgracia»[534].

Los presos políticos, incluso aquellos que pertenecían a partidos radicales o izquierdistas, sentían que tenían poco en común con la mayoría de los demás reos. Aquellos pertenecían a mundos sociales distintos, incluso en el caso de los presos políticos provenientes de la clase obrera. Debido en parte a los prejuicios sociales y culturales y en parte a su deseo de recibir el reconocimiento y el trato que creían merecer, los presos políticos casi siempre exigían ser mantenidos físicamente alejados del resto de los detenidos. Si bien hubo oportunidades para la aparición de relaciones individuales de amistad y camaradería (no desprovistas de tonos jerárquicos), los presos políticos casi siempre intentaban deliberadamente mantener una estricta separación. La mayoría de las veces sentían repulsa por los hábitos, el lenguaje y hasta el aspecto físico de los presos comunes. Los veían con una mezcla de aborrecimiento, distancia y piedad, y no podían evitar revelar estereotipos raciales profundamente arraigados que, en ciertos casos, demostraban su familiaridad con la idea de que las deformidades orgánicas y la carencia de higiene personal eran elementos indicativos de una naturaleza criminal o cuasicriminal. El abogado y escritor aprista Juan Seoane, por ejemplo, hizo numerosas descripciones físicas de presos comunes en su novela-testimonio *Hombres y rejas*, incluyendo este retrato colectivo de los presos de la penitenciaría que se asemeja bastante a un retrato fisionómico de personalidades

lombrosianas: Indios herméticos, chinos impenetrables, ojos de mirar resignado, criollos vocingleros, expresiones de angustia, miradas firmes, gestos torvos, caras sumidas de dolor, prógnatas de asesinos, zambos procaces, hombres severos, un negro venerable. Huellas de vicios: narices sifilíticas, ojos sangrientos, pupilas de epilépticos, caras comidas por la uta, amarillez de paludismo, contracciones de locos, demacración tuberculosa, pústulas ganglionares, asimetrías, ansiedades en los gestos de buitre, perfil violento de un hipersexual, nervaturas de fierro, cabezas desgreñadas, caras tétricas [...] Vicio, dolor, indiferencia, maldad y perversión, rencor y odio y amargura y tristeza.[535]

Sería difícil exagerar el fuerte contraste que la vida en la prisión debió representar para la mayoría de los presos políticos en comparación con sus hogares, hábitos y entornos usuales. Seoane describió cómo «mis hábitos de clase media educado en colegio "decente", pulido y limpio como hijo de pequeño burgués» chocaban con las realidades de la prisión[536]. Sobre la base de la percepción casi universal de su estatus como personas no criminales pertenecientes a la sociedad decente –y, en cuanto tales, merecedoras de un trato diferente–, y gracias a sus conexiones personales con autoridades estatales, los presos políticos con frecuencia –aunque no siempre– recibían un mejor trato que los delincuentes comunes. Algunos de estos privilegios, como un alojamiento relativamente cómodo, el derecho a recibir visitas y comida decente, estaban en realidad estipulados por la ley para todos los presos, pero, dadas las condiciones imperantes en las prisiones peruanas, terminaron reflejando una consideración especial. El trato especial brindado a los presos políticos era visible incluso en la forma en que se dirigían a ellos. Guardias, empleados, presos comunes, autoridades de la prisión y también la prensa se referían a ellos como don, doctor o señor, las señales de respeto usuales asignadas en Lima a los miembros de los grupos sociales superiores[537]. En la República Aristocrática, a los presos de clase alta se les permitía recibir visitas y gozaban de un nivel de comodidad considerable[538]. Hubo por lo menos una ocasión en que se efectuó una manifestación política dentro del panóptico[539]. Un reportero de *Variedades* visitó a un grupo de presos políticos encarcelados después de la conspiración liberal de mayo de 1908 contra el presidente Leguía e informó a sus lectores que «los señores presos gozan de libertad y holgura»[540]. Luego mencionó con evidente sarcasmo a todas las celebridades que había visto: «Don Carlos de Piérola asoma un minuto con aire pensativo. El coronel Tirado [...] atraviesa fugazmente tras la verja. Don José Carlos Bernales bosteza en un banco con un libro cerrado entre las manos; revela aires de indignación [...] Don Pedro de Osma taconea gallardamente dirigiéndose al salón de espera. El honorable del Valle, el honorable Cornejo con una selva de barbas, el coronel Lanfranco, salpicada la cabellera de mechones blancos. Isaías de Piérola sereno e irónico, vigoroso y engordando [...] Los he visto a todos»[541]. Varias fotografías grupales de presos políticos los muestran muy bien vestidos, limpios, afeitados y asumiendo la misma postura que habrían tenido si el retrato hubiese sido tomado en su casa o estudio[542].

Durante el Oncenio, las consideraciones especiales para los presos políticos, aunque evidentemente restringidas, aparecen ocasionalmente en los testimonios y documentos de archivo. A finales de la década de 1920, por ejemplo, la intendencia pagó a un proveedor privado (el Hotel Comercio) para que llevara alimentos a los presos políticos detenidos en la penitenciaría y en la propia cárcel de la intendencia[543]. Mientras se hallaba recluido en El Frontón, el historiador Jorge Basadre logró, a través de sus conexiones personales, hacer que su familia le enviara alimentos y libros, lo que hizo que sus días fueran «más cortos e interesantes». Posteriormente fue transferido, nuevamente gracias a sus contactos personales, a una habitación unipersonal «de primera», mucho más cómoda y en un pabellón especial donde se unió a, entre otros, el autor indigenista Hildebrando Castro Pozo. Su habitación era aseada por el personal de la prisión y se le servía desayuno, almuerzo y cena. Aunque estar en prisión ciertamente era un tormento –especialmente de noche, dice Basadre, cuando las luces del Callao se encendían y «aparecían como el símbolo de la vida, de la libertad»–, su situación era obviamente mucho más cómoda que la de la mayoría de los presos comunes[544].

Los presos políticos aparecen como privilegiados cuando se los compara con los presos comunes, pero aun así enfrentaban un medio hostil. En innumerables ocasiones fueron sometidos a tormentos psicológicos y torturas físicas, aunque el grado en que se los maltrataba varió enormemente con el tiempo y de un caso a otro. El trato que recibieron empeoró visiblemente durante el Oncenio y se hizo aún más duro en la década de 1930, cuando los miembros de los partidos políticos radicales, los sindicatos obreros y las organizaciones izquierdistas colmaron las prisiones, víctimas de la represión por parte de regímenes dictatoriales.

Una de las formas de castigo más humillantes que los presos políticos tuvieron que soportar era precisamente ser obligados a compartir el mismo espacio físico con los delincuentes comunes. Según un informe redactado en 1934 por el abogado Carlos Alberto Izaguirre, cuando las autoridades de El Sexto deseaban castigar a los presos políticos, los obligaban a compartir la celda con los vagos y eran efectivamente tratados como tales. Don Samuel González Montero, por ejemplo, un trabajador acusado de agitador social, fue posteriormente calificado de vago por las autoridades de la prisión. Otros presos políticos, reportó Izaguirre, eran retenidos en los calabozos de la intendencia, donde compartían el espacio con rateros y vagos y eran sometidos a un trato humillante que incluía frecuentes aniegos, lo que obligaba a los presos a dormir sobre un suelo mojado. La mala comida, los frecuentes insultos y otros aspectos degradantes de la detención causaron indignación al autor del informe[545]. Luis Felipe de las Casas, dirigente aprista encarcelado en 1934 después de una fallida conspiración contra el Gobierno, fue llevado a la intendencia y encerrado en uno de los calabozos junto con una multitud de delincuentes comunes. De las Casas y los demás presos

políticos protestaron e iniciaron una huelga de hambre exigiendo que se los transfiriera a la zona donde estaban alojados sus compañeros. Para ellos resultaba ofensivo que se los agrupara junto con «dos tipos de roedores [esto es, las ratas y los rateros, CA], cuáles más repugnantes», una situación que De las Casas consideraba degradante dada «nuestra condición de gente decente y de ser detenidos por motivos políticos»[546].

Otra forma común de castigo era el confinamiento solitario. Los presos eran obligados a permanecer en sus celdas por extensos períodos sin permitírseles ver la luz natural o tomar aire fresco. Seoane y Melgar, los dos apristas acusados del intento de asesinato contra Sánchez Cerro, permanecieron aislados durante todo un año[547]. En la penitenciaría se usaba una celda denominada *la aislada* para incomunicar a los presos por días, semanas y hasta meses. Haya de la Torre pasó más de ocho meses de confinamiento solitario en su celda en el panóptico sin poder siquiera conversar con sus abogados[548]. Posteriormente comentó las condiciones de su encarcelamiento: «hasta el león del zoológico se halla en mejores condiciones de encierro. Tiene aire, sol y su leona»[549]. Ya hemos visto que en El Frontón la lobera y la parada eran ampliamente usadas. Jorge García Mendizábal, un preso político que intentó fugar de la penitenciaría en mayo de 1936, fue aprehendido por los guardias y colocado en la aislada por dos semanas, luego de lo cual se le mantuvo en confinamiento solitario durante un mes. Posteriormente fue transferido a El Frontón, donde se le envió de inmediato a la parada, de donde «no se le sacó hasta que la hinchazón consiguiente le había llegado a las ingles imposibilitándole casi de andar». Luego fue encerrado en la lobera por varios meses sin cama, luz o cigarrillos[550]. Instrumentos de tortura como la barra y el cepo volador, usados para maltratar a los delincuentes comunes, también fueron empleados con los presos políticos.

La presencia de los presos políticos en las cárceles limeñas habría de tener un efecto importante sobre el orden interno en dichas instituciones, sobre la relación entre las autoridades y los delincuentes comunes y sobre el desarrollo de ciertas formas de colaboración entre estos últimos y los presos políticos. Ello incrementó la complejidad y diversidad de la comunidad de seres humanos que ocupaban las celdas y compartimientos de las prisiones de Lima. Como vimos, la categoría de presidiario comprendía a personas de antecedentes sociales, raciales, regionales, legales y políticos sumamente diversos y, en consecuencia, todos ellos tuvieron que aprender no solo a hacer frente al ambiente de la prisión y a sus reglas escritas y tácitas sino también a forjar relaciones humanas con otros detenidos. La necesidad de hacer esos ajustes y adaptaciones puso en juego interacciones, tensiones y formas de negociación y adaptación sumamente complejas que exploraremos en los próximos capítulos.

Tercera parte

El mundo que construyeron juntos Capítulo 6

El orden consuetudinario Según el historiador Alexander Pisciotta, los presos en el famoso Reformatorio Elmira de Nueva York «tenían una clara elección: sumisión total o un severo castigo corporal»[551]**. De ser correcta esta imagen (y no estoy seguro de que lo sea), los presos de Elmira se habían convertido en víctimas de un régimen despótico que no les dejaba otra alternativa que la obediencia y sumisión totales. Obedecer las reglas habría sido el único medio con que habrían contado para hacer frente a sus condiciones de confinamiento y así evitar las formas más extremas de brutalidad. Pero el dilema radical que los presos de Elmira aparentemente enfrentaban no parece ser lo que la mayoría de los prisioneros en otras partes y períodos del mundo y de la historia han tenido que enfrentar. En efecto, hay una extensa bibliografía que muestra cómo, incluso bajo regímenes carcelarios sumamente severos, los prisioneros siempre han logrado desafiar la imposición de un rígido orden penal, con distintos grados de éxito; lo hacen ya sea manipulando las inevitables debilidades de la administración de las prisiones o creando sus propias formas proactivas de resistencia y acomodamiento**[552]**. Como veremos en este capítulo, el caso de las prisiones de Lima confirma este patrón. Lo que se desprende de mi examen de la vida cotidiana dentro de estas instituciones penales es un escenario rico y complejo en el cual los presos emplearon diversas estrategias en un intento de hacer frente a las realidades del encarcelamiento. Al hacerlo, evitaron algunos**

de los aspectos más inhumanos de la vida en la prisión y ayudaron decisivamente a configurar el mundo de las cárceles.

Aparte de las raras ocasiones en que los presos desafiaban abiertamente el orden penal –en la forma de fugas y motines, por ejemplo–, la mayor parte de sus esfuerzos reflejan una estrategia de acomodamiento antes que de confrontación abierta, con la cual aprovechaban al máximo los defectos de la administración de la prisión. Los prisioneros participaban en distintos tipos de relaciones que contribuyeron a la construcción de un orden distinto, no el que estaba prescrito en el reglamento de la cárcel sino otro, distinto, que fue el resultado de una serie de negociaciones, transacciones y acomodamientos mutuos entre ellos y con los funcionarios y guardias del penal. A este tejido alternativo de interacciones lo denomino el «orden consuetudinario» de la prisión. En las cárceles de Lima, el orden, entendido como su funcionamiento continuo con el mínimo número posible de perturbaciones, era por lo general mantenido no tanto a través de la coerción o el despotismo absoluto por parte de los funcionarios penales, sino mediante una mezcla de control y tolerancia, abusos y negociaciones, sufrimiento y concesiones. El funcionamiento de este régimen incluía, como un componente central, el establecimiento de unas extensas relaciones ilegales e informales entre los presos y el personal de la prisión. Vale la pena enfatizar que este orden no hacía que los severos mecanismos de coerción y control, que constreñían enormemente la vida de los prisioneros, resultaran inoperantes. Toda mejora que los presos conseguían en sus condiciones de vida o su poder de negociación era siempre frágil y provisional, lo que revela la vulnerabilidad intrínseca de su condición.

Aunque el principio general arriba esbozado parece haber funcionado en las tres prisiones aquí examinadas –la penitenciaría, Guadalupe y El Frontón–, su observancia en cada una de ellas se dio en grados diversos. En esta última, que tenía un régimen semejante al de una plantación y una estructura laboral mucho más explotadora, tanto la amenaza de la coerción y la brutalidad como la necesidad de emplearlas estuvieron siempre presentes, de modo tal que el espacio para la negociación era mucho menor que en las otras prisiones. En Guadalupe, la extracción de trabajo de los presos jamás fue una cuestión apremiante y las autoridades, enfrentadas a la sobrepoblación y la falta de una infraestructura adecuada con la cual imponer un régimen más despótico, se dieron cuenta de que las tensiones se relajarían si mostraban permisividad y tolerancia con el manejo que los presos hacían de su tiempo, dinero y relaciones personales. La permisividad iba usualmente acompañada de una política de hacerse de la vista gorda: cuanto mayor era el grado de autonomía permitida a los prisioneros, menos obligadas se sentían las autoridades a satisfacer sus necesidades materiales. En Guadalupe, la intervención en la vida de los presos no era tan opresiva como en las otras dos

prisiones. En la penitenciaría, de otro lado, había niveles mucho más altos de reglamentación; allí los presos gozaban de menos autonomía que en el caso anterior pero no sufrían el nivel de despotismo arbitrario que existía en El Frontón. Por cierto que estas variantes no siempre son evidentes o significativas: de hecho, muy poca diferencia debía de existir entre estar encerrado en un calabozo o ser torturado en cualquiera de las tres prisiones. Pero el castigo excesivo era la excepción y no la regla, pues los presos buscaban más la acomodación que la confrontación.

La construcción del orden consuetudinario

El régimen disciplinario que las autoridades de las prisiones y los penólogos intentaron imponer en las cárceles de Lima, y sobre todo en la penitenciaría, fueron siempre subvertidos por las distintas y bastante difundidas formas de asociación y complicidad entre los presos y el personal de las prisiones, incluyendo empleados civiles, guardias e incluso sus más altas autoridades. Este orden consuetudinario comprendía diversas formas de violación de las normas escritas. Algunas de esas infracciones casi nunca fueron cuestionadas, en tanto que otras eran más volátiles y dependían de personas o circunstancias específicas. El interés económico mutuo era la base y dominaba las formas y el alcance de esa complicidad, pero los beneficios económicos necesariamente conducían a, y estaban íntimamente ligados con, la negociación de las fronteras de poder dentro de la prisión. Los empleados de los penales, mal pagados, inadecuadamente preparados y no del todo comprometidos con la causa de la reforma del preso, encontraban en estos arreglos ilegales alguna compensación a su nada gratificante trabajo. Según diversos testimonios, estos empleados eran frecuentemente reclutados al interior de una población de dudosos antecedentes, y en ocasiones provenían directamente del bajo mundo criminal[553]. Los limitados recursos financieros forzaban a las autoridades de los penales a usar una práctica común en el reclutamiento de empleados para el Gobierno, es decir, la contratación de meritorios[554]. Como no figuraban en la planilla regular y enfrentaban una situación económica inestable, los meritorios intentaban obtener los más altos beneficios de su relación con los presos. En octubre de 1901, por ejemplo, la presencia de meritorios fue denunciada como «motivo de constante perturbación del régimen penitenciario», puesto que usualmente eran «lisonjeados por las dádivas» de los presos, quienes podían así conseguir de ellos «servicios prohibidos»[555]. Estas relaciones daban a los prisioneros la oportunidad de acceder a diversos bienes, servicios y privilegios que no habrían podido conseguir si los reglamentos hubiesen sido aplicados por empleados intransigentes. Los meritorios y otros empleados civiles no eran los únicos involucrados en estas prácticas, pues con mucha frecuencia los soldados y policías a cargo de la custodia de las cárceles y hasta las autoridades superiores formaban parte de estos arreglos.

La más persistente de estas formas de asociación era el tráfico ilegal de alcohol y coca dentro de las prisiones. Ambos productos eran ampliamente consumidos por la población presidiaria, aunque era más común asociar la coca con los presos indígenas. En agosto de 1870, por ejemplo, el director de la penitenciaría llegó al «triste convencimiento» de que eran los mismos empleados quienes suministraban bebidas alcohólicas a los presos[556]. Dos meritorios fueron sorprendidos en enero de 1876 introduciendo alcohol para los detenidos[557]. Hubo también casos de soldados que traficaban con coca y alcohol en la penitenciaría[558]. Varios guardias fueron sorprendidos en enero de 1927 proporcionando coca a los presos. Después de 1928, los soldados comenzaron a llevar coca y licor de contrabando a la penitenciaría y a la CCV, que, como se sabe, ocupaban edificios contiguos[559]. En junio de 1929, Antonio Llamo, un reo de la penitenciaría, fue aprehendido con dos grandes paquetes de coca que, según el informe, «no pudieron ingresar sin que los porteros lo notasen». Resultó que quien vendía coca y alcohol a los presos era el chofer del director de la prisión[560]. De hecho, la coca se vendía a veces abiertamente en la cantina u oficina de auxilios de la penitenciaría, una práctica evidentemente condonada por las autoridades aun cuando el reglamento la prohibía[561]. Los presos también consumían una bebida alcohólica llamada chicha o *fresco,* que no podría haber sido preparada y consumida sin contar con la complicidad del personal de la prisión[562]. Los empleados y guardias de los penales no solo introducían alcohol y coca sino que los consumían, a veces en compañía de reos con los cuales habían trabado amistad o establecido asociación. En abril de 1892, por ejemplo, un guardia introdujo ron y coca a la penitenciaría, abrió las celdas de un grupo de detenidos y pasó la noche bebiendo y mascando coca con ellos[563]. El 5 de noviembre de 1877, *El Comercio* se quejó de las numerosas jaranas que tenían lugar tanto dentro como fuera de la cárcel de Guadalupe. El diario sentía que debía recordar a las autoridades que «la cárcel no es lugar de diversión sino de corrección». Un soldado a cargo de vigilar la calle frente a la prisión se emborrachó tanto que perdió su rifle y terminó durmiendo en la calle. «¡Qué policía! ¡Qué policía! ¡Qué policía!», se lamentaba el periódico[564]. Un día de 1881, tres guardias de la cárcel de Guadalupe no se presentaron a trabajar y el alcaide cayó en la cuenta de que habían sido arrestados por ebriedad. Esta situación lo obligó a usar a dos presos confiables como porteros de la cárcel[565].

Las asociaciones entre los presos y el personal de la prisión involucraban muchas otras actividades además del comercio y consumo ilegal de alcohol y coca. Los empleados penales servían como intermediarios en las diversas diligencias, legales e ilegales, que los presos debían emprender, tales como las negociaciones con los contratistas externos y la redacción y entrega de documentos legales. Los presos procedentes del interior del país, que no contaban con parientes ni amistades en Lima y que en muchos casos no tenían un buen dominio de la lengua española, a menudo encontraban entre los empleados los servicios de amanuenses que necesitaban. En el lado ilegal, los

prisioneros sobornaban a las autoridades para conseguir diversos favores, entre los cuales se incluía a veces el indulto o la liberación[566]. Cuando los presos necesitaban adquirir bienes fuera del penal, utilizaban a los llamados *canasteros*, empleados que aceptaban suministrarles distintos tipos de bienes generalmente a cambio del pago de una comisión o de un favor[567]. En Guadalupe a veces se permitía a los presos salir de la cárcel por períodos breves[568]. También eran sumamente comunes los préstamos de dinero entre los presos o, con mayor frecuencia, de ellos a los empleados. El hecho de que fueran los presos quienes usualmente prestaban dinero a los empleados debe verse cono una evidencia importante de la capacidad de negociación con que ellos contaban para conseguir concesiones y favores. Pero si bien podían resultar cruciales para superar situaciones de emergencia, estas transacciones frecuentemente generaban conflictos e incluso actos de violencia entre prestamistas y prestatarios[569]. En 1892 estos tratos financieros hicieron que se investigara la costumbre que los empleados de la penitenciaría tenían de tomar prestado dinero de los presos. Según el director, «la circunstancia de convertirse un preso en acreedor del empleado quitaba a este toda autoridad sobre los primeros y le hacía indigno de la confianza en ellos depositada»[570]. Sin embargo, esta práctica jamás pudo ser abolida. Una lista entregada al director de la penitenciaría en 1925 incluía los nombres de cuatro empleados que debían un total de casi 14 libras a diversos presos. Uno de los empleados debía dinero a cuatro presos[571]. En El Frontón, el reo Martín Saniz presentó una queja contra varios empleados que le debían un total de 300 soles. Aunque se lo acusó de estar mentalmente enfermo y fue transferido posteriormente a la penitenciaría, donde se lo aisló en los calabozos subterráneos, Saniz luchó tenazmente y logró que se le devolviera el dinero adeudado. El último pago le llegó en 1935 de manos de la viuda de Adán del Río, exdirector de El Frontón y quien había tomado prestado dinero de Martín cuando este se encontraba detenido en la isla[572].

La existencia de una economía monetaria dentro de las prisiones constituye el telón de fondo de esta difundida práctica del préstamo de dinero. En todas estas instituciones había una floreciente economía subterránea que involucraba tanto a presos como a empleados del penal. Existió siempre un tráfico, imposible de detener, de productos como coca, alcohol, cigarrillos y velas, pero también de servicios sexuales y de otro tipo. Los presos también ganaban dinero con los trabajos que efectuaban en los talleres de las prisiones o para contratistas privados, como luego veremos. Y existían también diversas formas empresariales que permitían a algunos internos, por lo general aquellos que contaban con posiciones de poder y autoridad, incrementar significativamente sus ingresos. Uno de los negocios más comunes en las cárceles de Lima era la crianza de pollos, actividad que involucraba a empleados, presos, caporales e incluso a las autoridades más altas. Víctor M. Villavicencio, el connotado criminólogo y director de la escuela de la penitenciaría, por citar un ejemplo, fue partícipe de este negocio[573].

Al tomar parte en estas sociedades, los presos mejoraban sus condiciones de vida dentro de la prisión y satisfacían algunas de sus necesidades más apremiantes. Tener acceso a dinero en efectivo hacía una gran diferencia pues hacía posible establecer relaciones de clientelismo y amistad con las autoridades y guardias de la prisión. Como estos últimos y los empleados debían enfrentar unas duras condiciones de vida, así como magros salarios, abundaban las oportunidades para que los presos iniciaran estas negociaciones. Una sensación de relativo empoderamiento parece haber emanado de la participación de los presos en estos arreglos (aunque, como luego veremos, no todos se beneficiaban con ellos), lo cual contribuyó al establecimiento de jerarquías dentro de la población de los penales.

El personal de la prisión, desde las máximas autoridades hasta los meritorios, también participaban en múltiples actos ilegales que generalmente no beneficiaban a la población presidiaria pero que se sumaban a la naturaleza informal del orden carcelario. La corrupción del personal era generalizada, como lo era también, después de todo, en casi todas las ramas del Estado peruano. Los ejemplos son abundantes: fraudes en el manejo de los fondos y suministros de las prisiones[574], el uso dado por las autoridades de los penales tanto a los talleres como al trabajo de los presos para conseguir ventajas personales[575], el cobro de las autoridades a los prisioneros por la ropa y otras provisiones que supuestamente debían ser gratis[576], y el uso que estas autoridades daban a las instalaciones de las cárceles para su propia comodidad y beneficio[577].

La organización de negocios y tráficos dentro de las prisiones era usualmente tolerada por las autoridades. En Guadalupe, por ejemplo, los presos supuestamente habían ganado el derecho a instalar quioscos en el patio principal del penal, donde comerciaban diversos artículos como cigarrillos, ropa, utensilios personales y coca, «como en las ferias europeas», tal como lo describiera un reportero. Había incluso quioscos dedicados a prestar servicios legales proporcionados por los ubicuos tinterillos, y otros que funcionaban como casinos, donde los presos se entretenían jugando y apostando[578]. También se toleraban otros actos ilegales menos visibles, como ausentarse de las clases de la escuela, no cumplir con las obligaciones laborales y circular por áreas reservadas de la prisión.

El efecto más importante de todas estas prácticas fue el colapso del régimen disciplinario que supuestamente debía regir los asuntos internos de la prisión, especialmente en la penitenciaría. Las estrechas relaciones entre presos y empleados llevaron a diversas situaciones que violaban flagrantemente las normas de la prisión y

minaban el principio de autoridad. Según la Comisión Calle de 1915, «es muy poco el respeto y consideración que guardan [los presos de la penitenciaría] a los empleados»[579]. Una de las manifestaciones más importantes de ello era la práctica común de ignorar las infracciones cometidas por los presos o de no hacer cumplir las penas impuestas a algunos de ellos. En 1887 el director describió la penitenciaría como un lugar en el cual los «los presos obtenían de los empleados artículos para el fomento de sus vicios por un valor fabuloso, y estos y aquellos yacían unidos por vínculos de amistad estrecha, que impedían se llevase a efecto la disciplina consiguiente». La mayoría de los actos de indisciplina de los presos, si no todos, pasaban inadvertidos, señaló, porque los empleados no podían denunciar a quienes no solamente eran sus amigos sino también en algunos casos sus acreedores[580]. Después de un motín en El Frontón en 1921, el director anunció que al restaurarse el orden entre los reclusos sería asimismo necesario imponer disciplina a los empleados del penal, pues había observado «la mucha familiaridad que existe entre el personal y los penitenciados»[581]. En 1922, un empleado de Guadalupe fue descrito como un peligro para la estructura disciplinaria de la prisión «por estar sobornado por los presos»[582]. En febrero de 1892 las autoridades temían que los presos de Guadalupe estuviesen preparando una fuga masiva durante el Carnaval. El alcaide solicitaba fuerzas militares, pero advertía que no debían emplearse soldados que hubiesen servido en la prisión, pues «ellos tienen ya relaciones amistosas con la mayor parte de los presos, siendo esta causa suficiente para que en caso dado los ayuden en sus planes»[583]. Una carta firmada por un grupo de reos que se llamaban a sí mismos «Presos amigos del orden», denunció la mala disciplina existente en Guadalupe. La cárcel, decían, «está entregad[a] a su propia suerte» porque, entre otras cosas, el alcaide no cumplía las reglas, se vendía ron «sin descaro» y los presos estaban en posesión de armas[584].

La presencia de los caporales contribuyó a la forja de este orden consuetudinario. Se trataba de un grupo pequeño de individuos seleccionados entre la población presidiaria para ayudar a la administración en el manejo de los penales. El uso de prisioneros como caporales fue una práctica común en las cárceles peruanas, al igual que en las de otras sociedades[585]. Según un informe de la penitenciaría de 1877, por ejemplo, cuatro caporales ayudaban a la administración a manejar el hospital, la lavandería, la sanidad y la infraestructura general del edificio de la prisión. Cada uno de ellos supervisaba a un grupo de otros prisioneros que trabajaban como empleados *de facto* de la prisión[586]. Según el reglamento de la penitenciaría de 1901, el subdirector debía elegir un caporal para cada sección de cada departamento entre los presos que mostraran buena conducta, así como un caporal mayor, quien debía asegurarse no solo de que quienes estuviesen a cargo del orden y la limpieza dentro de la prisión hicieran su trabajo, sino que también reportaran cualquier incidencia que tuviera lugar dentro del penal[587]. El puesto de caporal mayor era de hecho el más prominente, poderoso y gratificante que

un preso podía ocupar dentro de la prisión. Los caporales pasaron a ser elementos cruciales en el manejo de los penales pues pertenecían tanto a la población presidiaria como a los mecanismos de autoridad y control de las cárceles. Para cumplir con sus obligaciones debían desempeñar varios roles, a veces contradictorios, que requerían la forja de redes de lealtad y asociación. Gozaban de algunos privilegios que les eran concedidos por los funcionarios de la prisión, pero estos no siempre confiaban plenamente en ellos; al mismo tiempo, podían tener amistad o sociedades con algunos presos, pero sus compañeros también los veían con recelo. Según Juan Seoane, el caporal de la penitenciaría era percibido como un superior incluso por los empleados del penal. Lo respetaban y temían, pero, previsiblemente, también lo detestaban[588]. Gracias a la posición decisiva que ocupaban, los caporales tenían el control de ciertos aspectos de la vida en la prisión, incluyendo los negocios ilegales. En la penitenciaría, un caporal mayor fue acusado de haber adquirido el control total de la entrega y distribución de comida dentro de la prisión y su comercialización ilegal en el exterior. Además, poseía más de 100 gallinas, lo que representaba un negocio sumamente rentable[589]. En otro caso, un vigilante acusó al inspector principal del panóptico de aceptar del caporal mayor un soborno de 5 soles por día, presuntamente para permitirle conducir negocios ilegales. También sostuvo que «grandes cantidades de coca» eran ingresadas por el inspector para su venta dentro de la prisión[590]. En Guadalupe, los caporales tenían al parecer el derecho de recibir visitantes sin que estos tuvieran que pasar por la inspección de rutina antes de ingresar. La esposa del caporal mayor, Francisco Espantoso, aprovechaba este privilegio para introducir licor de contrabando que luego él vendía dentro de la prisión[591].

En Guadalupe, en particular, los caporales gozaban de una gran capacidad de negociación en su relación con las autoridades, especialmente porque los funcionarios, al tener que negociar desde una posición relativamente débil, tendían a dar más poder a los presos con influencia sobre la población de la cárcel, lo que esencialmente significaba que los reos con mayor capacidad para imponerse por la fuerza (como los faites) terminaban desempeñando el papel de caporales[592]. El caso del «negro Arzola», uno de los presos más célebres de Guadalupe, ilustra este asunto. Arzola fue condenado por haber asesinado al acaudalado prestamista español Miguel de Orueta, un crimen que fue ampliamente cubierto por los medios y que le dio instantáneamente el estatus de celebridad[593]. Sentenciado a la penitenciaría, Arzola logró evitar ser transferido al panóptico y permaneció en Guadalupe, donde se convirtió en caporal. Como tal, podía desplazarse libremente por la prisión y lo hacía por lo general fuertemente armado. En una dramática carta al prefecto de Lima, el intendente describió cómo durante un enfrentamiento entre un oficial de policía y un detenido, el primero notó que Arzola merodeaba en las cercanías cuchillo en mano. Al ser notificado el alcaide, este no hizo

ningún intento por desarmarlo y solo le advirtió débilmente «que tuviera cuidado con lo que pretendía hacer»[594].

En casos como este, el caporal no era tanto un títere en manos de los funcionarios de la prisión sino, más bien, una suerte de cacique de la población presidiaria que ejercía su poder a través de un pacto con las autoridades del penal. Esto era especialmente cierto en Guadalupe, donde los mecanismos de control sobre la población presidiaria eran mucho menos estrictos que en la penitenciaría y la necesidad de contar con un caporal particularmente respetado era mucho más apremiante. Las autoridades tuvieron que aceptar el hecho de que presos como Arzola gozaban de una mayor influencia y consideraciones de lo que su condición de detenidos les habría significado. Pero incluso los presos poderosos como Arzola no podían evitar los avatares del orden consuetudinario de la prisión. Arzola reaparece en los documentos en 1915, esta vez encerrado en uno de los calabozos de Guadalupe. Seguía involucrado en el comercio dentro de la prisión y fue denunciado como jefe de un motín, pero al parecer ya no contaba con suficiente poder como para evitar ser enviado a la celda de aislamiento[595].

El orden consuetudinario no aseguraba que todos los presos se beneficiarían por igual de él, sino todo lo contrario. Este ordenamiento inevitablemente llevaba a situaciones en las que las lealtades divididas y las asociaciones podían hacer que las cosas pintaran mal para quienes se encontraban en el bando equivocado. El orden consuetudinario, de hecho, involucraba un alto grado de arbitrariedad, fundamentalmente de parte de las autoridades, pero también de los prisioneros poderosos con respecto a los que eran vulnerables. A pesar de sus debilidades, las autoridades seguían teniendo más influencia que los reos y podían así imponer, restaurar o alterar las reglas de juego con relativa facilidad. El comportamiento de un subdirector de la penitenciaría ilustra la naturaleza sumamente arbitraria del orden consuetudinario: se le acusó de revocar las penas impuestas a reclusos díscolos, presumiblemente a cambio de dinero o favores; de beber licor con otros empleados; de torturar a los presos; y de autorizar a otros a desplazarse libremente dentro de la prisión[596]. El hecho de haber sido permisivo con algunos prisioneros y brutalmente estricto con otros es algo que solo se puede explicar por su participación en alguna de las redes informales de corrupción y tráfico existentes dentro de la penitenciaría.

En última instancia, todas estas prácticas eran posibles debido a que el personal estaba dispuesto a involucrarse en ellas. Mal pagado y poco motivado, el personal de la prisión se mostraba ansioso por aprovechar las oportunidades que se le presentaban. Apenas conscientes de las ideologías de la reforma carcelaria, los regímenes penitenciarios y las terapias rehabilitadoras, les preocupaba sobre todo sobrevivir y asegurarse de que la prisión se mantuviera funcionando. Un empleado del panóptico aparece en la novela-

testimonio *Hombres y rejas* de Seoane afirmando con descarada sinceridad que «aquí no hay sino que ver que la gente no se vaya a escapar y cerrar el ojo para muchas otras cosas. ¡Para qué ocuparse más de hombres que hoy salen y mañana regresan!»[597].

Un componente importante del régimen disciplinario de las prisiones era el sistema de recompensas y castigos. En teoría, los penólogos y las autoridades de las cárceles coincidían en que los presos necesitaban algún estímulo para transformar su moral y reconocían que la brutalidad pura y simple no alcanzaría dicho objetivo. Un comportamiento adecuado, el respeto por la disciplina, el trabajo duro y la asistencia a la escuela debían ser recompensados, en tanto que la resistencia a las reglas debía ser sancionada. Por ejemplo, el reglamento original de la penitenciaría incluía recompensas tales como una carga laboral menor, más tiempo de lectura, permiso para cultivar plantas para vender, el consumo de tabaco y coca y el derecho a enviar cartas a parientes y recibir visitas. A la inversa, el mal comportamiento implicaría el cumplimiento obligatorio de servicios personales para la institución, una ración alimenticia menor, la prohibición de tener tiempo de lectura o visitas, el aislamiento en celdas subterráneas, la retención de los jornales ganados y el «baño de lluvia»[598].

La implementación del sistema de recompensas y penas era por lo general inconsistente y variaba ampliamente de una administración a otra. Naturalmente, terminó embrollado con las muchas otras interacciones que se daban entre los funcionarios de la cárcel y los presos. Las autoridades discrepaban en cuanto a la forma adecuada de usar las recompensas para estimular la lealtad de los presos. Para la mayoría de ellas, la primera prioridad era evitar motines y mantener la producción del penal, aun si ello significaba infringir las reglas internas. En 1873, por ejemplo, la Junta Inspectora reportó que los dos cigarrillos diarios asignados como recompensa al buen comportamiento en realidad se estaban dando a todos los presos, de modo tal que «el premio se convirtió en costumbre» y, por tanto, había perdido su finalidad inicial de fomentar el cumplimiento de las normas[599]. A la inversa, hubo momentos en que las recompensas se hicieron más difíciles de obtener, en un intento por obligar a los presos a hacer esfuerzos aún mayores para ganárselas[600]. Como veremos, las recompensas más comunes y atractivas eran los incentivos monetarios que los prisioneros recibían de parte de contratistas privados. En ocasiones, las «recompensas» incluían servicios y bienes a los cuales los prisioneros tenían derecho según el reglamento. Hubo el caso de un director que recompensó a los presos de buena conducta con dos vasos de vino[601].

Contradicciones similares rodeaban la aplicación de castigos. En términos generales, los prisioneros díscolos eran sometidos a penas más duras que aquellas incluidas en el reglamento. Movidos por la exasperación y los sentimientos prejuiciosos hacia la población carcelaria, los funcionarios tendían a recurrir a la violencia y la crueldad al

tratar con presos insubordinados. Las penas se hacían más urgentes y rigurosas cuando las fugas, los motines y las revueltas desafiaban abiertamente la disciplina de la prisión, y las más recurrentes eran los azotes y el encierro prolongado en celdas subterráneas de aislamiento, sin aire ni luz, y en ocasiones aun sin cama o frazadas. Juan Bautista Mariscal, el director de la penitenciaría en 1867, admitió haber ordenado que se azotara a los presos que habían estado involucrados en un motín. Al acusársele de crueldad, Mariscal defendió sus actos con un cínico razonamiento: si, a pesar de estar legalmente prohibidos, se usaban los azotes en el ejército, en el hogar y en la escuela, ¿por qué no podía usarlos él para castigar «a los obcecados que se infamaron por sus propias manos y por los crímenes cometidos?»[602].

Aunque el infame baño de lluvia sería oficialmente abolido en 1904, la barra, la pena corporal más común, sobreviviría hasta bien entrado el siglo XX. En una lista de castigos aplicados en la penitenciaría en 1906-1907, las más frecuentes fueron el confinamiento solitario (incluyendo el de un preso que lo padeció durante 151 días y otros dos que estaban en esa situación de modo «permanente»), la barra y el *subterráneo*, nombre que designaba a las celdas de aislamiento en los sótanos[603]. Un inspector de la penitenciaría fue citado diciendo que «al criminal hay que tratarlo como tal», justificando así la aplicación de penas brutales[604]. Un examen de las medidas disciplinarias aplicadas a los presos de la penitenciaría en 1918 muestra la gama de ofensas y castigos. Las ofensas más comunes eran la insolencia, el robo, las peleas, la posesión de coca, la sodomía, los insultos a la autoridad y la desobediencia, en tanto que las penas más comunes eran la barra, el confinamiento subterráneo o en la celda de aislamiento y el *pentágono*, esto es, el encierro en una celda de aislamiento cuya forma semejaba esa figura[605]. Como vimos en el capítulo 4, aparte de estas penas también se aplicaban cotidianamente formas ilegales de castigo que iban desde el aislamiento y la privación de comida hasta los castigos corporales. Lo que debe subrayarse es que la inconsistencia y la arbitrariedad en el uso de los castigos por lo general reflejaban el estado del orden consuetudinario: está claro, por ejemplo, que hubo presos que cometían la misma infracción pero las autoridades reaccionaban de manera distinta frente a ellas.

Para los presos, el relajamiento de la disciplina y la falta de cumplimiento del reglamento asociados con el orden consuetudinario, constituían una situación de doble filo de la cual intentaban sacar ventaja aun si eso significaba literalmente pisotear a otros reos. Los presos, al igual que las autoridades, empleados y guardias, aprendían qué era permisible y qué no; se daban cuenta de que infringir las leyes no era imposible y no siempre era castigado; sabían que podían sacar partido de la situación existente; y sobre todo entendían que, al hacerlo, la prisión sería un lugar mucho más tolerable para algunos y quizás incluso para todos. Para las autoridades, de otro lado, era evidente que

sin estas prácticas informales la cárcel habría sido un lugar imposible de administrar e intolerable para vivir. Se dieron cuenta de que al permitir a los presos involucrarse en una serie de operaciones ilegales estarían menos dispuestos a rebelarse, escapar o desafiar de otras maneras la autoridad suprema del personal de la prisión. Es igualmente obvio que la necesidad de esta tolerancia era inversamente proporcional a la capacidad que el penal tenía de alimentar, vestir y cubrir las necesidades de los prisioneros: cuanto más satisfechos estaban, tanto menos dispuesta estaba la administración del penal a tolerar las prácticas informales dentro de la prisión. De este modo, el orden consuetudinario ayudó a mantener el orden carcelario, entendido este no como un régimen disciplinario establecido para redimir, rehabilitar y asegurar la laboriosidad sino, de manera más pragmática, como la ausencia de cualquier gran estallido de violencia y descontento.

El trabajo en prisión y el orden consuetudinario

Un componente importante de la rutina diaria en la penitenciaría, y en menor medida en otras prisiones, era el trabajo de los presos. Aunque en términos doctrinales se la consideraba una herramienta moralizadora decisiva, en la práctica se convirtió no solo en una fuente de ingresos para distintos sectores de la comunidad presidiaria, incluyendo funcionarios, contratistas privados y presos, sino también en un componente central de las negociaciones entre las autoridades y los reclusos, así como un espacio de conflicto en torno a elementos clave de la administración de los penales. Esta sección, basada en el caso de la penitenciaría (por ser el mejor documentado), resaltará la naturaleza contenciosa del trabajo en la prisión y las formas en que este reforzaba o subvertía el orden consuetudinario de las cárceles.

Cuando el trabajo dentro de la penitenciaría fue instituido originalmente en 1862, los prisioneros podían elegir trabajar en los talleres de zapatería, talabartería, hojalatería, carpintería o herrería[606]. Cada taller fue colocado bajo la dirección de un maestro contratado por la penitenciaría, quien ganaría un salario y recibiría un porcentaje de las ventas. Los intereses privados, junto con el rendimiento insatisfactorio de los talleres de la prisión, llevaron a cambios graduales en las normas que regían el trabajo en la cárcel. En febrero de 1865 se dio la administración de todos los talleres a un contratista privado a cambio de un porcentaje de las ventas[607], pero no logró elevar su producción, de modo que para comienzos de 1867 se colocaron avisos en los diarios de Lima para subastar su administración. Mientras tanto, la penitenciaría autorizó a los artesanos de Lima a contratar el trabajo de los prisioneros como un medio para contrarrestar la ociosidad y generar rentas para la institución, estableciendo en la práctica un sistema de concesiones[608]. Este arreglo fue interrumpido después del violento motín y conato de fuga que ocurrió en diciembre de 1867, a raíz del cual las autoridades del penal

confinaron a los presos a sus celdas de modo permanente, lo que virtualmente paralizó la producción[609]. Según un informe, para comienzos de 1868 la mayoría de los prisioneros estaban ociosos.

La solución proyectada era una mezcla de empresa privada y patronazgo estatal. Los contratistas privados asumirían el manejo de los talleres de la prisión: debían suministrar materiales y herramientas y pagar una cuota al Estado a cambio del uso de la mano de obra reclusa y un estipendio al preso-trabajador. Se esperaba que el Estado hiciera sus pedidos a estos talleres, sobre todo en el caso de suministros para las fuerzas armadas. El Código Penal de 1863 había dictaminado que las ganancias de los presos debían dividirse en tres partes iguales: una para compensar a la prisión por el mantenimiento del preso, otra para pagar la reparación civil a las víctimas de los delitos y una tercera para abrir una cuenta de ahorros que los prisioneros podían usar una vez obtenida su liberación[610]. El nuevo sistema que se implementó alteraba las estipulaciones del Código Penal y permitía que los reclusos dividieran sus ingresos en cuatro partes, de modo tal que una cuarta parte de sus ganancias, los llamados «vales de cuartas partes», les eran entregados en dinero en efectivo para comprar bienes «lícitos»[611]. El director Tomás Lama explicó la racionalidad que yacía detrás de este arreglo: «el trabajo es sin duda el elemento más eficaz para moralizar al hombre, pero para serlo necesita tener el estímulo de la utilidad que de[be] traer consigo asegurando su porvenir y librándolo de la miseria origen casi siempre del oprobio y del crimen»[612].

El defecto más importante de este modelo fue la incapacidad de los administradores de la prisión para convencer a los burócratas estatales de que se abstuvieran de hacer sus pedidos a empresarios privados y usaran más bien los talleres de la penitenciaría. Lama propuso usar la muy publicitada Exposición Industrial de 1869, organizada por el alcalde de Lima, Manuel Pardo, para mostrar los productos de los presos y demostrar que los talleres de la penitenciaría podían producir todo lo que el Estado necesitaba. Para su decepción, ni una sola autoridad gubernamental visitó la exhibición del trabajo de los presos[613]. En las siguientes décadas, la renuencia del Estado a convertirse en el principal comprador (o el único, como algunos exigían) de artículos producidos con el trabajo de los presos, sería considerada un factor fundamental en el fracaso de la conversión de la penitenciaría en una institución autosuficiente[614]. El Estado sí hizo pedidos a los talleres de la prisión, pero nunca en los montos requeridos para asegurar su rentabilidad.

Aunque ciertamente era bienvenida por los presos, contratistas y algunas autoridades, la práctica de estimular a los reos con adelantos monetarios no gozaba de la aprobación general. La cuestión principal era el conflicto entre el trabajo rentable y la disciplina carcelaria. Algunos observadores externos sostenían que poner dinero en manos de los

presos como un medio de estimular la productividad era generar una cadena casi imparable de corrupción –intercambios monetarios, préstamos, juego, contrabando, sobornos– que chocaba con los fines disciplinarios del régimen penal. En 1873, el presidente Pardo permitió el sistema de contratos pero decidió prohibir «la corruptela» de dar a los prisioneros sus vales de cuartas partes y ordenó el estricto cumplimiento del Código Penal[615]. Sin embargo, hay evidencias de que, a pesar de esta prohibición, los vales siguieron siendo repartidos a los presos. Durante los siguientes 20 años, los reos que trabajaban lograron conseguir algún tipo de compensación monetaria. El hecho de que se diera prioridad a la producción lo demuestra la práctica común de retirar a los presos incapacitados de la penitenciaría y trasladar a ella penitenciados aptos para el trabajo que se hallaban en otras prisiones[616]. Los presos que se acercaban al final de sus sentencias pero que gozaban de buena salud y eran competentes, eran retenidos en el panóptico en lugar de enviarlos a Guadalupe, pues «es conveniente utilizar sus servicios hasta el último», según explicó el director[617]. Los prisioneros estaban autorizados a trabajar incluso durante los feriados y en turno de noche en períodos de gran demanda, como sucedió durante la Guerra del Pacífico, cuando artículos bélicos eran fabricados en los talleres de la penitenciaría, o en cuanta ocasión los contratistas lo consideraran necesario[618].

Los incentivos monetarios pasaron a ser la norma, y para los presos, una suerte de derecho adquirido. Además, recibían otras recompensas de contratistas ansiosos por estimular su productividad; después de todo, la mano de obra presidiaria era más barata y tal vez hasta más confiable que la externa. La avidez de los contratistas por usar el trabajo de los presos también produjo abusos. En noviembre de 1878, cuando un congresista visitó la penitenciaría y se quejó de la excesiva carga laboral de los prisioneros, se le dijo que el contratista les pagaba por unidad y solo aquellos que terminaban rápidamente sus tareas podían tener buenos ingresos, lo que los obligaba a trabajar hasta quedar exhaustos. Sin embargo, según el director, los presos supuestamente «tienen libertad para trabajar según sus fuerzas y sin que se les obligue a permanecer en los talleres más tiempo del señalado por el Reglamento»[619]. En junio de 1881, cuando se intentó eliminar los incentivos monetarios, el director rechazó la idea por los graves disturbios que, según él, dicha medida provocaría[620]. Acostumbrados a recibir parte de sus ganancias como pago en dinero en efectivo, los reclusos no estaban dispuestos a tolerar que esta práctica se eliminase; en lugar de ello, los incentivos fueron reinstaurados plena y legalmente. Para diciembre de 1883 se volvió a convocar una subasta pública para asignar los talleres a contratistas privados. Cada contratista debía pagar al Estado una cuota por cada preso que empleara y dar una recompensa a cada recluso. Además, el contratista estaba obligado a entregarles dos juegos de uniformes, zapatos, camisas y ropa interior[621]. En 1890, el director sugirió que este sistema efectivamente había prevenido tumultos y motines, pues los presos estaban más

contentos con él y sus incentivos monetarios que con el sistema anterior de administración directa[622].

Obviamente quien más se beneficiaba con este sistema era el contratista privado, usualmente abusando de los presos. Hubo numerosas quejas contra la explotación de los prisioneros, en especial cuando los jornales acumulados no eran pagados en el momento de su liberación. La frustración de los expresidiarios con los salarios impagos la ilustra el caso de uno supuestamente insano mentalmente que, según *El Comercio*, vivía en un parque público frente a la penitenciaría. «El tema de su locura» era que después de 15 años de encarcelamiento aún no había recibido el pago de sus jornales[623]. En 1892, Ricardo Heredia, presidente de la Sociedad de Patronato, criticó los abusos de los contratistas, afirmando que «explota el interés privado su condición desgraciada» al no pagarles sus jornales[624]. La Sociedad de Patronato inició acciones legales contra aquellos contratistas que no entregaban a los presos su remuneración, uniforme y comidas. Se los explotaba, decía Heredia, porque se los consideraba «muertos civilmente»[625]. De otro lado, las deplorables condiciones en la penitenciaría obligaban a algunos reclusos a buscar cualquier medio que estuviera a su alcance para mejorar su nivel de vida. Ellos aprovechaban la ocasión para ganar algo de dinero, lo cual además les permitía ayudar a su familia. Las autoridades penales reclamaban el crédito por la aceptación de las reglas laborales de parte de los presos: «Por lo general», dijo el director de la penitenciaría en 1896, «los presos del Panóptico, no son refractarios al trabajo, y puedo, por el contrario, afirmar que lo reclaman con frecuencia, estimulados, también, por la paternal deferencia con que la Dirección distingue a los trabajadores y de buena conducta, cuanto por la pequeña gratificación que semanalmente reciben del contratista los que están ocupados en los talleres, aparte de la pequeña cantidad que podría quedarles para formar su caja de ahorros»[626].

El manejo de dinero por parte de los presos, sin importar el monto en cuestión, incrementaba su capacidad para hacer trueques y llevar a cabo negociaciones con sus compañeros y con los guardias de la prisión. Como ya vimos, el dinero era usado para diversos fines, entre ellos la compra de artículos y servicios ilícitos como alcohol, coca y sexo. El día de paga, reportaba un periodista, la mayoría de los presos se dirigían a la cantina, los indígenas para comprar coca y los limeños, cigarrillos[627]. También se podía usar ese dinero para pagar artículos de primera necesidad como alimentos, artículos personales y hasta servicios legales. Para algunos observadores y administradores, el relajamiento de la disciplina que este sistema conllevaba era inaceptable. Se culpó al «aciago sistema de contratas» de haber relajado la disciplina y producido una desviación de la verdadera finalidad de la reforma penitenciaria[628]. Todos los esfuerzos efectuados para reformar al delincuente, dijo el director de la Junta Inspectora en 1890, «se embotan contra la muralla de bronce que el interés y el egoísmo del contratista ha

levantado entre los presos y la posibilidad de su reforma». El sistema, agregó, generaba una extensa corrupción, impedía la aplicación del sistema de premios y castigos, permitía el contacto entre los presos y el exterior y no lograba garantizar que los contratistas privados cumplieran con los términos de sus contratos[629]. Según el director en 1892, el contratista «busca en los reos instrumentos de trabajo, factores que sirvan a sus fines utilitarios, importándole poco que se reformen o no, que salgan más o menos perversos de lo que entraron al establecimiento, que aprendan bien o mal un oficio, que sean más tarde buenos o malos ciudadanos; todo esto le es indiferente»[630].

Como esta y otras afirmaciones similares dejan en claro, la cuestión ya no era la supuesta renuencia de los presos a trabajar, es decir, la vieja idea de que los delincuentes eran innatamente reacios al trabajo. En los hechos, la cuestión pasó a ser el efecto corruptor del dinero. Los presos habían demostrado claramente que con un sistema de incentivos (que, dadas sus condiciones de vida, ciertamente necesitaban para satisfacer una serie de necesidades primarias) sí podían responder a las demandas laborales en forma positiva; después de todo, y como vimos en el capítulo 4, la mayoría de ellos eran en realidad trabajadores. Pero, en los grandes planes de los expertos penales, los presos debían ser trabajadores obedientes y sumisos, no activos negociadores y consumidores. Se suponía que el proyecto rehabilitador de la penitenciaría debía inculcar en ellos un aprecio por el trabajo y el dinero, pero los expertos en la prisión comenzaron a censurar el sistema al darse cuenta de que el dinero daba a los presos un control parcial sobre sus condiciones de vida dentro de la cárcel, incrementaba su capacidad de negociar una serie de arreglos internos con los empleados penales y les permitía además subvertir las reglas de disciplina. Como vimos en el capítulo 4, lo que promovió las críticas al sistema de contratos y del régimen penitenciario en general, generando el reclamo casi consensual de un régimen penal más riguroso, fue precisamente la creciente capacidad de negociación y autonomía de los reclusos. Sin embargo, desde el punto de vista de las autoridades de la cárcel, estas mismas características eran por lo general bienvenidas: el trabajo de los presos resolvía una serie de situaciones potencialmente explosivas, de modo que sacrificaron toda expectativa, real o no, de cumplir con el régimen penal y prefirieron seguir con el arreglo acostumbrado de darles incentivos.

Sin embargo, el sistema de contratos fue eliminado en 1896 bajo presión externa, cuando la Junta Económica de la penitenciaría tomó a su cargo la administración de los talleres. En dos años, la producción y la demanda de mano de obra de parte de los talleres, así como la calidad y los pedidos de sus productos, habían disminuido[631]. Los presos parecieron haber sido afectados en forma negativa por el nuevo sistema: sus ahorros habían sido eliminados y apenas si recibían «una insignificante gratificación», a resultas de lo cual «el preso pierde su entusiasmo por el trabajo»[632]. El reglamento de 1901

sancionó el nuevo sistema. Aún se estipulaba que los presos recibirían un estipendio además de sus ahorros, pero era sumamente improbable que estuvieran satisfechos con él puesto que dependía de las ventas[633]. Para 1903, 48 presos no trabajaban en absoluto y apenas 45 estaban ocupados durante todo el año. Alrededor del 20 por ciento de ellos eran reportados como ociosos en cualquier momento dado. El director intentó explicar la situación argumentando que los presos-trabajadores no contaban con los mismos incentivos que los trabajadores externos: «considerando el trabajo como pena, no consagran a él ni su voluntad ni sus aptitudes. El trabajo penitenciario, por el hecho de ser impuesto y de no ser para los reos medio indispensable para la satisfacción de necesidades inmediatas, es considerado como un sufrimiento, consecuencia del delito». Sin embargo, no lograba percibir que era la falta de incentivos lo que había convertido el trabajo en la prisión en una suerte de sufrimiento, algo que sí era evidente para el ministro de Justicia, quien admitió que los reos mostraban poco interés por mejorar el rendimiento porque no tenían una participación en las rentas. El ministro exigió que se recompensara a los prisioneros en proporción a su trabajo[634]. En mayo de dicho año, el ministro de Justicia ordenó que se pagara a los presos por pieza, lo que las autoridades esperaban generase un incremento tanto en la productividad y ganancias de los presos como en las del Estado[635].

Los años 1905 y 1906 efectivamente generaron buenos ingresos a las arcas de la prisión, fundamentalmente porque el Estado colocó numerosos pedidos de artículos para los colegios y la policía, pero la disminución en la cantidad de dichos pedidos volvió a poner la contabilidad de los talleres en rojo en 1907[636]. La administración directa, con el Estado como patrón, era sumamente errática. Para 1911 los talleres estaban casi paralizados y la mitad de la población presidiaria estaba desempleada[637]. El retorno al sistema de contratos parecía inevitable. Los talleres de la prisión comenzaron a ser transferidos a contratistas privados sin necesidad de cambiar la reglamentación. En junio de 1911, el taller de impresión y encuadernado fue arrendado a Manuel Aduvire, quien debía pagar una renta mensual, suministrar todos los materiales, firmar contratos sin la intervención de la Junta Administradora, pagar un jornal diario a los trabajadores y cobrar todas las ganancias[638]. En 1914 se firmó un contrato de cinco años con la empresa Manufacturing Company para que administrara un taller eléctrico de costura, y en junio de 1915 se dio el manejo de todos los talleres a Luis E. Olazábal y Carlos Otero, dos contratistas privados. Las ganancias generadas por la producción de la prisión habrían de dividirse entre los contratistas (50 por ciento), los presos (30 por ciento) y el Estado (20 por ciento)[639].

En 1915, la Comisión Calle efectuó un exhaustivo examen de la penitenciaría, incluyendo los talleres. Algunos estaban paralizados y otros funcionaban sin regularidad; solo la panadería operaba ininterrumpidamente. Los contratos verbales se

habían vuelto costumbre, lo que hacía que fuera sumamente difícil evaluar el rendimiento económico de la mano de obra presidiaria. Libre de toda participación de las autoridades de la prisión, el taller de zapatería, uno de los pocos que seguían siendo rentables, abastecía de zapatos a empresas privadas, muchas de ellas propiedad de inmigrantes de origen italiano como Onetto, Canessa y Bevestrello. Confirmando la acostumbrada hostilidad que los expertos en prisiones tenían hacia el orden consuetudinario, la Comisión favoreció la administración directa, pero exigió un compromiso más claro de parte del Estado para que empleara los talleres de la penitenciaría para satisfacer la mayor parte de sus necesidades. La oportunidad para que el Estado volviera a intervenir y mejorara el sistema de administración directa llegó en noviembre de 1921, cuando dos organizaciones obreras iniciaron una campaña en contra de la competencia desleal del trabajo recluso que, pensaban, había provocado el alza en las tasas de desempleo. El Gobierno respondió suspendiendo temporalmente la venta de productos de la prisión y limitando su producción a la manufactura de bienes requeridos por el Gobierno central. Asimismo, estipuló que todas las ramas de la administración pública colocaran sus pedidos exclusivamente con los talleres de la penitenciaría, salvo aquellas cuya naturaleza hicieran que esto fuera imposible[640]. Sin embargo, tanto las quejas como la solución eran en realidad gestos políticos. La búsqueda de culpables en medio de una severa caída del empleo urbano encontró un blanco potencial en el trabajo carcelario[641]. Parecería que el Gobierno de Leguía estaba intentando desviar la atención de las causas reales del desempleo y, en efecto, el sistema de contratos privados y la producción comercial se mantuvieron a pesar de los decretos.

En marzo de 1925 los talleres de la penitenciaría fueron nuevamente puestos bajo administración directa, pero ahora se permitía a los presos elegir su propia ocupación y ganar un jornal fijo. En conformidad con el Código Penal de 1924, la distribución de los ingresos debía incluir un pequeño monto de dinero en efectivo, pero solo para los prisioneros de buen comportamiento[642]. El pragmatismo había triunfado y trajo consigo el reconocimiento de que los incentivos monetarios eran la mejor forma de hacer que los presos trabajaran, lo que los administradores de la prisión siempre habían sabido. El trabajo en el penal efectivamente se convirtió en un medio «terapéutico», aunque no en el sentido en que lo imaginaron los reformadores decimonónicos. Dado que estaba claro que a los presos les interesaba el trabajo en la prisión, al hacer la entrega de dinero en efectivo dependiente de su comportamiento, las autoridades estaban intentando conseguir un mayor acatamiento de las normas de la prisión. Al mismo tiempo, la expansión de los servicios y de la burocracia estatal que se estaba produciendo en esos años parecía asegurar a los talleres de la penitenciaría una demanda constante para sus productos[643]. Aunque en 1926 el nuevo sistema aún no arrojaba buenos resultados –según el director, apenas el 40 por ciento de los reclusos estaban empleados– el trabajo de los prisioneros fue mejorando gradualmente su rendimiento económico[644]. El

pragmatismo fue aún más lejos: los presos comenzaron a trabajar íntegramente por cuenta propia en la sombrerería. Ellos compraban los materiales y vendían sus productos sin intervención alguna de las autoridades. Las ganancias iban directamente a ellos, «como debería ser»[645]. En la documentación interna se encuentran numerosos pedidos, sobre todo de carpetas de colegio y papelería, así como otros materiales impresos para las agencias estatales. En 1927, por ejemplo, hubo una orden de 1.200 carpetas[646]. La demanda de trabajo en la prisión era tal que el 1 de octubre de 1927 el director ordenó que «a partir de la fecha, no quede un solo recluso sin ocupación»[647].

La penitenciaría estaba convirtiéndose en una suerte de complejo industrial. Un total de 11 talleres estaban en funcionamiento. La producción destinada para el consumo privado también se expandió, sobre todo la confección de calzado. Una nueva fábrica mecanizada de zapatos, inaugurada en la penitenciaría por el presidente Leguía en 1922, incrementó la productividad dramáticamente[648]. Con sus 64 máquinas fue considerada la mejor fábrica de zapatos del país. Para 1929 la penitenciaría producía aproximadamente 100 pares de calzado al día, lo que hacía que su fabricación fuera la principal fuente de ingresos para el penal. Según el director, de administrarse bien la fábrica de zapatos, ella podría ser «la salvación de la actual situación de la penitenciaría»[649]. La combinación de demanda estatal, mejores maquinarias e incentivos para los presos-trabajadores produjo una bonanza relativa en la situación financiera del panóptico. En marzo de 1929, 35 presos de El Frontón –10 alfareros, 10 carpinteros y 15 zapateros– fueron transferidos a la penitenciaría para aliviar la «falta de brazos» que existía en sus talleres[650]. Sin embargo, el colapso económico internacional de 1929 y sus efectos políticos y económicos en el Perú pusieron fin a estos tiempos de bonanza. Hacia 1930, algunos memorándums confidenciales alertaban a las autoridades de la falta de medios financieros para mantener en funcionamiento la penitenciaría y otras prisiones. Dada la dramática caída en el precio del cobre, el algodón y el azúcar –las principales exportaciones peruanas– y la caída resultante en las rentas estatales, el ministro de Hacienda ordenó al director general de prisiones, en agosto de 1930, que se observara una estricta austeridad en los gastos de la prisión en los siguientes meses. En octubre las noticias fueron peores: el presupuesto solo cubriría «los servicios de haberes y los de carácter absolutamente indispensable»[651]. Un año más tarde, los talleres de la penitenciaría estaban casi paralizados, los presos estaban por lo general ociosos y eran muy pocos los pedidos que se recibían de particulares y casi ninguno del Estado[652].

Como este examen ha mostrado, el trabajo en la prisión siempre fue un componente central en su funcionamiento y en esa medida quedó embrollado con las vicisitudes de la vida cotidiana y las negociaciones de poder dentro de los penales. Al igual que con otros tipos de transacciones entre los reclusos y los funcionarios de la prisión, el trabajo estaba sujeto a intensas negociaciones en las cuales diversos actores, entre ellos los

prisioneros, las autoridades de los penales y los contratistas privados, se esforzaban por conseguir ventajas. Aunque su capacidad de negociación era, como siempre, vulnerable y dependiente de numerosos otros factores, los presos demostraron su capacidad para «manipular el sistema» y trabajar para reducirlo a su «mínima desventaja»[653]. Ganar un jornal en efectivo y participar en la economía de la prisión incrementaba la capacidad de maniobra de los presos en sus negociaciones con otros prisioneros y con el personal de la cárcel, lo que les permitía tener una participación mayor en la conformación del orden consuetudinario. Sin embargo, su agencia no quedaba limitada a su capacidad para intervenir en la economía monetaria de la prisión, beneficiarse con las oportunidades de trabajo o participar en multitud de transacciones con sus compañeros reclusos y las autoridades. Como veremos en el capítulo 7, también construyeron activamente subculturas carcelarias semiautónomas.

Capítulo 7

Subculturas carcelarias y condiciones de vida Para la mayoría de los seres humanos vivir en una prisión es una experiencia traumática. Además del hecho obvio de que los presos están privados de su libertad y se los mantiene confinados dentro de las paredes de un pabellón, el encarcelamiento usualmente impone constreñimientos radicales sobre los aspectos más íntimos y ordinarios de la vida humana. Al menos potencialmente, estas facetas de la vida de los presos están sujetas a observación e intromisión, no solo por parte del personal de la cárcel sino también de los demás reos. La vida dentro del penal exige a los prisioneros un proceso de adaptación mental, conductual y física a su nuevo entorno. Dado que ellos rara vez están dispuestos a abandonar toda medida de privacidad, autonomía y volición cuando ingresan a la cárcel, necesitan crear una serie de mecanismos, tanto individuales como colectivos, que les permitan hacer frente al entorno de la prisión. Las comunidades de presos desarrollan así patrones singulares de comunicación, interacción y coexistencia que, en la medida en que se desarrollan dentro de un medio (real o potencialmente) hostil, necesariamente adoptan una naturaleza clandestina y subrepticia aunque sumamente adaptable. El

resultado es el surgimiento de lo que los estudiosos denominan «subculturas carcelarias»[654]. **Aunque estas subculturas son claramente un producto de la vida dentro de la prisión, ellas siguen teniendo vínculos fuertes y visibles con el mundo exterior. Como ha señalado la historiadora Patricia O'Brien, los presos no abandonan su arsenal de actitudes y prácticas en el momento de ingresar a prisión, pero al mismo tiempo tienen que acomodarlas y adaptarlas a sus nuevas circunstancias.**

Las subculturas carcelarias comprenden algunos elementos que se encuentran consistentemente en instituciones penales de todo el mundo. Entre ellos figuran el uso de tatuajes, el recurso a la jerga, ciertos patrones distintivos de conducta sexual y un culto a la violencia y el coraje usualmente asociado con nociones dominantes de la virilidad. El sociólogo Don Sabo y sus colaboradores describieron la cárcel como un mundo «ultramasculino» en el cual la «dominación intermasculina», esto es, la imposición de una jerarquía de poder entre los presos varones, estructura su vida cotidiana. Aunque las percepciones y autodefiniciones de qué significa ser un hombre son siempre disputadas, los autores señalan la existencia de una «masculinidad hegemónica» que típicamente reconoce la violencia, la agresividad sexual y la valentía como formas de comportamiento auténticamente varoniles. Este patrón queda confirmado en el caso de las prisiones limeñas, con las excepciones y especificidades de las circunstancias locales[655].

Los efectos que estas prácticas tienen sobre la comunidad carcelaria en general son siempre complejos y ambiguos. Ellas pueden ayudar a forjar una identidad colectiva basada en una comprensión común de ciertas reglas y formas de comportamiento, pero también pueden crear o reforzar patrones de conflicto y jerarquías de poder entre los presos. Las subculturas carcelarias, como muestro más adelante, se encuentran inextricablemente ligadas a la existencia de jerarquías y lealtades divididas dentro de la población penal, y se podría decir incluso que dependen de ellas. El sentido de comunidad que los presos logran forjar siempre está configurado por la naturaleza conflictiva de la mayoría de las interacciones que tienen lugar dentro de ese tipo de colectividad. Este capítulo pasa revista a diversas manifestaciones de las subculturas carcelarias de Lima y sus conexiones con el orden consuetudinario analizado en el capítulo anterior.

La búsqueda de autoexpresión e identidad

Entre los indicadores de identidad más comunes entre los presos figuran el uso de tatuajes y el desarrollo de una jerga particular. Ambos están relacionados con la necesidad que tienen de crear modos propios de identificación grupal, mecanismos distintivos de comunicación entre ellos que buscan desafiar el control y la vigilancia, y formas singulares de autoestima individual y colectiva. Desde el surgimiento de la criminología positivista el uso de tatuajes ha sido siempre señalado como un componente importante de las subculturas carcelarias[656]. Para un criminólogo peruano, se los puede considerar no solo como «signos de identificación ideal» sino también, y ciertamente de mucha más importancia, como «indicio[s] de ciertas tendencias, exponente[s] del predominio de ciertas funciones síquicas [...] [y] una cierta orientación en la búsqueda sicológica del médico forense»[657]. Más recientemente, los tatuajes han sido leídos como una suerte de práctica social subversiva, en la medida en que permiten a los presos desafiar abiertamente los intentos de las autoridades y el Estado para controlar su mente y su cuerpo. Según O'Brien, «en contraste con el herrado como una marca de infamia y un medio de ostracismo impuesto por el Estado, el tatuaje era una forma de identificación autoimpuesta. Es probable que haya constituido una reacción a la institución y su poder»[658]. Los tatuajes pueden entonces ser considerados como un elemento importante en la búsqueda de formas de expresión autónomas de parte de los presos, con las cuales contrapesar la intromisión abrumadora del sistema carcelario en sus vidas.

Las evidencias documentales sobre los tatuajes en las prisiones limeñas son, sin embargo, sumamente escasas. El psiquiatra Hermilio Valdizán escribió un breve informe cuantitativo sobre su uso entre los presos[659]. Valdizán revisó una muestra de 620 personas registradas por la oficina antropométrica de la intendencia entre 1892 y 1901 y solamente encontró 18 de ellas con tatuajes, una proporción algo pequeña que podría deberse al hecho de que la mayoría de las personas documentadas en la intendencia eran sospechosos que no habían estado en la cárcel, que era el lugar donde la mayoría de los delincuentes obtenían sus tatuajes. Una segunda muestra, que incluye un número no especificado de personas registradas entre 1903 y 1908, identificó 82 que tenían tatuajes. Los temas representados en ellos pertenecían a diversas categorías: románticos (26), ocupacionales (14), religiosos (4) y patrióticos (4), en tanto que 14 reproducían las iniciales de una persona. El resto tenían otros tipos de inscripciones. Valdizán pensaba que a los tatuajes de Lima les faltaba originalidad, aunque sí le pareció interesante el hecho de que un ratero tuviera la inscripción «Viva Piérola» en uno de sus brazos. Intentó también explicar el hecho de que en su muestra la mayoría de los criminales tatuados fueran de origen indígena: «Podría explicarse, talvez, por el culto que nuestro elemento aborigen presta al símbolo en sus manifestaciones menos silenciosas, en aquellas que hablan al espíritu con tonos más intensivos». Valdizán pensaba que su «devoción» hacia signos tales como iniciales, estrellas, anclas y águilas podría estar

relacionada con «el delirante entusiasmo que provocan en ellos los colores vivos de las telas y los objetos»[660]. Marino Alegre y Pacheco, un discípulo de Valdizán, llevó a cabo un estudio más exhaustivo de los tatuajes de la población de la penitenciaría de Lima. En su muestra encontró una distribución de temas muy parecida a la de su maestro: religiosos (9), románticos (14), ocupacionales (5), patrióticos (6) e iniciales (15). Trece tenían otros tipos de emblemas[661]. Algunos presos tenían más de uno y en algún caso hasta cinco en su cuerpo. La mayoría habían sido hechos en una prisión (17 de los 23 que dieron dicha información) y 5 en una institución militar como el ejército o la marina[662]. Alegre y Pacheco consideraba que Guadalupe, junto con las prisiones de las ciudades provinciales de Piura, Trujillo e Ica, eran «verdaderos focos de tatuaje»[663]. Una de sus conclusiones fue que la mayoría de los presos a quienes entrevistó lamentaban haber sido tatuados. Según la versión de Alegre y Pacheco, la explicación más frecuente ofrecida por los prisioneros sobre el por qué habían decidido tatuarse era «la imitación»[664].

Los tatuajes no parecen haber gozado de una amplia popularidad entre la población presidiaria de Lima en este período, de modo que su importancia como una señal de identidad criminal era probablemente secundaria. Además, la escasez de fuentes y la falta de atención seria a este tema por parte de los criminólogos y otros observadores de la población carcelaria –lo que podría reflejar la importancia relativamente modesta que los tatuajes tenían en la vida de los presos– nos impide ofrecer una reconstrucción más exhaustiva de esta práctica. El uso de la jerga era mucho más común. La jerga criminal es tanto un medio para ocultar información como un vehículo para dar forma a un tipo peculiar de identidad grupal. Sus características comprenden no solo un dialecto rico y original, sino también el recurso a las expresiones de doble sentido, la agilidad mental y una creatividad inagotable en la subversión de las formas y el contenido de la cultura oficial y letrada. Para los criminólogos positivistas, el uso de la jerga criminal era una señal del retraso mental y el atavismo de la población presidiaria. Como tal, se convirtió en un tema de estudio recurrente en distintas partes del mundo. Más allá de breves menciones en reportes sobre la vida en la prisión y unos cuantos glosarios incluidos en descripciones del mismo tema, los criminólogos peruanos no lograron incorporar este asunto a su agenda de estudio[665]. Los informes periodísticos sí advirtieron la importancia que la jerga tenía para la población delincuente de las prisiones limeñas. En noviembre de 1919, un reportero de *El Comercio* que visitó Guadalupe e hizo una crónica sobre la vida en la prisión, consideró que la jerga era una forma de expresión que «parece acercarse al lenguaje de los pueblos primitivos». El uso de expresiones onomatopéyicas, por ejemplo, y el hecho de que el lenguaje criminal confiriese «vida» a objetos inanimados al mismo tiempo que «animaliza» los actos humanos, fueron considerados evidencias de primitivismo. Aunque el informe resaltó la riqueza y la creatividad de la jerga –contabilizando, por ejemplo, 72 sinónimos para la palabra «beber» y 32 para

«dinero»–, consideró a pesar de todo que era «absolutamente pobre» e incapaz de expresar verbalmente sentimientos o conceptos elevados[666]. Según otro observador, el jurista Pedro José Rada, «La fría ironía, la burla desvergonzada y ligera, y el epigrama burdo, constituyen el fondo y forma de su caló peculiar». Rada situaba los orígenes de la jerga en la necesidad de evitar la represión policial, en la práctica tradicional entre personas pertenecientes «al mismo oficio o actividad» de contar con un lenguaje común y, sobre todo, en el «atavismo». A través de la jerga criminal y su naturaleza supuestamente onomatopéyica, decía, los «los malhechores revelan sus instintos salvajes»[667].

Estas interpretaciones tendían a perder de vista una dimensión importante de la jerga criminal: para sus practicantes, se trataba de una forma asertiva de manejar un lenguaje propio y al mismo tiempo ridiculizar y subvertir la conducta y la cultura supuestamente «decentes». También permitía a los miembros de la comunidad delictiva que se hallaban dentro y fuera de la prisión forjar elementos de una cultura e identidad comunes. Uno de los aspectos más importantes de la jerga criminal era, de hecho, su papel en la conexión del mundo del penal con los entornos urbanos externos, en especial los de las clases bajas de Lima. Los términos y expresiones inventados dentro de las prisiones se abrían camino hasta llegar al habla común de algunos sectores del mundo no criminal, lo que a su vez hacía necesario que los delincuentes constantemente renovaran su arsenal verbal para mantener cierto grado de secretismo e identidad grupal. La jerga, además, al igual que otros artefactos culturales compartidos, ayudaba a fortalecer los vínculos de amistad e intimidad entre los presos. De hecho, numerosas expresiones consideradas propias del bajo mundo criminal aún existen en el habla común y algunas han alcanzado un uso oficial o cuasioficial: jato (casa), causa (amigo), carreta (amigo), mochila (denominaba inicialmente el atado con productos robados), deschavarse (hablar o confesar), bobo (reloj) y choro (ladrón)[668]. Pero muchas otras se han perdido –al menos hasta donde tengo noticia– como es el caso de relucindo (soldado), estrilar (protestar), aurimarse (asustarse) y chascarro (mentira).

El consumo de coca fue otro aspecto importante de la vida cotidiana dentro de la prisión, en especial entre los presos indígenas. Su mascado era y sigue siendo un elemento central de la cultura andina. Con frecuencia la coca ha sido imbuida con significados sagrados y durante siglos ha estado asociada a rituales religiosos y propiciatorios[669]. La hoja de coca es un estimulante natural que incrementa la capacidad de la persona para efectuar un trabajo duro, la ayuda a soportar extensos períodos de fatiga y alimentación deficiente y reduce los efectos adversos de diversas enfermedades. Debido en parte a su estrecha relación con la cultura indígena, el mascado de coca era y sigue siendo presentado por médicos, criminólogos e higienistas como un vicio terrible

y degenerativo. Los retratos negativos de la población indígena usualmente señalan el consumo de coca como uno de los factores responsables de su supuesta postración.

Dentro de las cárceles limeñas la coca pasó a ser un componente fundamental de la vida cotidiana tanto para los presos indígenas como para los no indígenas. Según el graduado en medicina Lorenzo Esparza, todos los presos indígenas de la penitenciaría la consumían y al menos la mitad de los blancos, negros, mestizos y chinos también lo hacían[670]. El médico César Valdez calculaba que cada mes se consumían 400 libras de coca en la penitenciaría y que había presos que consumían hasta una libra diaria. Aunque los expertos y las autoridades penales lo consideraban un vicio peligroso y corruptor, por lo general lo toleraban y hasta lo promovían, lo que según Valdez explicaba los «niveles alarmantes» que había alcanzado en la penitenciaría[671]. Como vimos, una extensa red informal de contrabando de coca existía dentro de las prisiones. Las autoridades siempre intentaban asegurarse de que hubiese una provisión generosa de ella, ya que su escasez podía perturbar el funcionamiento de las cárceles. Según un reportero, en los días de paga, los presos indígenas se dirigían raudos a la cantina de la prisión a comprar coca, «un estimulante, un olvido. De noche, en la soledad de sus celdas, la "chacchan" con cariño y deleite»[672]. A un preso se le permitía recorrer cada departamento ofreciendo coca en venta a cada prisionero[673]. Hubo casos en los cuales la coca no solo fue repartida legalmente, sino que incluso fue usada por las autoridades de la prisión como premio al buen comportamiento[674].

Así, en el contexto de la vida en la prisión, la coca llegó a desempeñar varios papeles al mismo tiempo. Para muchos reclusos, su mascado era tanto una forma de preservar sus tradiciones culturales como un medio para intentar encontrar algún alivio al régimen por lo demás abrumador de la prisión. Valdez pensaba que «la ociosidad, el hambre, el ejemplo pernicioso [y] el hábito adquirido en la chácara o mina» eran las razones principales de su consumo extendido[675]. El preso político Juan Seoane pintaba al mascado de coca en la soledad de la celda como uno de los pocos placeres que la vida en la prisión ofrecía a muchos reclusos. Para las autoridades, la indulgencia y la tolerancia hacia la hoja parece haber sido una estrategia calculada para disminuir los riesgos de violencia y conmociones dentro de los penales, en tanto que para los empleados, algunos presos y hasta algunas de las autoridades superiores, la coca pasó a ser una fuente de ingresos y un componente importante de la distribución del poder dentro de la prisión.

Uno de los elementos más recurrentes dentro de las críticas que se hacían al estado de disciplina y moralidad en las cárceles de Lima era la práctica supuestamente extendida de la homosexualidad entre los presos. Según Julio Altmann Smythe, autor de uno de los escasos estudios sobre el llamado «problema sexual» en las prisiones limeñas, «el

número de invertidos es considerable»[676]. César Valdez encontró que la cifra era realmente alarmante[677]. Un preso entrevistado por Altmann Smythe sostuvo que el número de homosexuales era mayor en El Frontón, Guadalupe y la CCV que en la penitenciaría: en aquellas prisiones, decía, abundaban «de manera increíble»[678]. Para otros, como Gabriel Seminario Helguero, el problema de la sexualidad estaba en la raíz de todos los vicios de la vida en la cárcel[679]. Numerosas fuentes tienden a confirmar la imagen de una extendida práctica de relaciones homosexuales, pero resulta imposible evaluar cuán común era y cómo cambió con el paso del tiempo. Su impacto sobre la vida en la cárcel es, sin embargo, innegable, y la mayoría de las fuentes tienden a corroborarlo. Lo que parece estar claro es que la homosexualidad en las prisiones comprendía una gama de situaciones y prácticas que fueron configuradas crucialmente por las tensiones, conflictos y formas de acomodamiento típicas de una institución de confinamiento, pero que, una vez más, reflejaban los valores, los supuestos y las prácticas existentes en la sociedad. Alcanzar una sólida comprensión del comportamiento sexual dentro de la prisión es una empresa difícil, en especial dada la naturaleza de las fuentes, producidas casi siempre por observadores hostiles a las prácticas sexuales de los presos. Pablo Piccato insistió en que debía prestarse más atención a las prácticas sexuales que a identidades de género supuestamente fijas y sugirió que una mejor contextualización de dichas prácticas ayudará a los investigadores a decodificar sus significados[680]. Para el historiador, el desafío es documentar estas prácticas y leerlas desde la perspectiva de los presos mismos.

La diversidad de situaciones que la categoría de homosexualidad comprendía fue advertida por los observadores contemporáneos, aunque lo hicieron enmarcándolas dentro de la muy conocida dicotomía de papeles «activos» versus «pasivos»[681]. Según Valdez, por ejemplo, había cuatro categorías de homosexuales en la penitenciaría de Lima. En primer lugar, estaban los «ocasionales de función masculina», que se pensaba eran heterosexuales en su vida fuera de la prisión y que reasumirían dicha condición una vez liberados. En segundo lugar, estaban los «ocasionales indistintamente de función masculina y femenina», que se comportaban como «activos» o «pasivos» dependiendo de su poder relativo con respecto a otros reclusos. Si se enfrentaban a una persona más poderosa, esto es, supuestamente varonil, se verían forzados a asumir el papel de «hembras» en la relación, pero tomarían el rol «activo» si se topaban con un preso más vulnerable. El tercer tipo era el de los «invertidos feminiformes», que según Valdez eran los únicos personajes de la cárcel auténticamente homosexuales y debían su «inversión» a factores puramente individuales. Por último, Valdez menciona a las «prostitutas», homosexuales que habían adquirido su «vicio» en el ejército, la marina o la escuela correccional y que vendían sus servicios sexuales dentro de la prisión[682]. Gabriel Seminario Helguero, cuyo análisis se basó en sus observaciones de la población de la CCV, formuló una tipología similar: los homosexuales «activos» que tenían

«queridos», esto es, un homosexual «pasivo» con quien habían formado una relación estable; los «activos ocasionales», aquellos que participaban en relaciones homosexuales solo para satisfacer una necesidad sin ningún compromiso de largo plazo; los «pasivos», aquellos que tenían un amante poderoso y se comportaban como una «esposa»; los «pederastas pasivos que cobran veinte centavos», esto es, homosexuales «femeninos» dedicados a la prostitución; y, por último, los «cambiaos», aquellos que adoptaban papeles tanto pasivos como activos[683].

Las relaciones homosexuales estables eran aparentemente comunes y probablemente incluso ampliamente aceptadas. Algunos testigos se refieren al genuino afecto existente entre parejas homosexuales: compartían dinero, comida y otras posesiones materiales, e intercambiaban cartas, presentes y caricias. Aunque no todos aprobarían estas relaciones, era sumamente típico que estas parejas expresaran sus sentimientos abiertamente[684]. Las parejas homosexuales, decían los testigos, se comportaban como hombre y mujer, y entre ellos se formaban «verdaderos matrimonios» que eran respetados «como los normales que conocemos en la vida», tal como declaró un preso[685]. De hecho, los matrimonios y reconciliaciones de parejas homosexuales estaban entre «los grandes acontecimientos de la vida del penal» y daban lugar a celebraciones que involucraban un fuerte consumo de licor[686]. A decir verdad, peleas, abusos y violencia también formaban parte de la experiencia cotidiana de estas parejas. Dado que dichas relaciones tendían a reproducir los códigos maritales prevalecientes que caracterizaban las relaciones heterosexuales, no podían evitar los papeles específicos asignados a cada uno de los integrantes de la pareja. Para ofrecer solo un ejemplo, los homosexuales considerados pasivos estaban supuestamente prohibidos de beber licor, pues sus amantes deseaban evitar toda circunstancia que pudiera llevar a situaciones conflictivas, y también porque la bebida era considerada un derecho viril y masculino[687].

La existencia de relaciones homosexuales relativamente estables y armoniosas no debiera ocultar el hecho de que, en numerosos casos, la intimidad homosexual era el resultado de la coerción y la violencia física. Incluso en el caso de los matrimonios, la «conquista» inicial se daba muy a menudo dentro de un contexto de coerción y de relaciones desiguales de poder. Era muy común el empleo de la brutalidad y la violencia para forzar a un preso a que participara en prácticas homosexuales contra su voluntad. Unos cuantos ejemplos ilustrarán este punto. Un convicto de Lambayeque que ingresó a la penitenciaría a los 21 años de edad, fue violado por otros reclusos y obligado a vivir como homosexual dentro de la prisión. Siete años más tarde, estaba decidido a cambiar su destino, pero un preso lo había amenazado con hacerle daño si no cedía a sus requerimientos sexuales. La víctima solicitaba ser trasladada a El Frontón[688]. Otro preso acusó a un recluso de intentar forzarlo a practicar actos homosexuales, algo que él resistió firmemente, a consecuencia de lo cual había recibido

amenazas de muerte. «En resguardo de mi dignidad varonil» solicitó que uno de los dos, él o su acosador, fuera trasladado a El Frontón[689]. En la isla, un preso hirió gravemente a otro y arrojó su cuerpo a un abismo después de que este último no cumpliera un supuesto acuerdo previo para tener relaciones sexuales[690]. En Guadalupe, Juan Marín apuñaló repetidas veces a Santos Romero, otro recluso con quien compartía una habitación junto con otros dos presos, al rehusarse Romero a tener relaciones sexuales[691]. Existe documentación sobre numerosos casos como estos, pero las autoridades penales no se sentían obligadas a actuar a pesar de las denuncias. En diciembre de 1911, cuando Manuel Chumpitaz hirió a otro preso con un cuchillo por sus repetidos pedidos para tener relaciones sexuales, fue sentenciado a 50 días en aislamiento, pero no se hizo ninguna averiguación sobre la existencia de relaciones sexuales o el uso de cuchillos dentro de la prisión. Ambas prácticas eran evidentemente aceptadas, resignadamente, como componentes inevitables de la vida diaria de los presos[692].

La iniciación de un nuevo recluso a la homosexualidad podía ser una experiencia traumática, tal como la describe Seminario Helguero. Al ingresar a la prisión, los detenidos nuevos e inexpertos estaban usualmente asustados y hasta aterrorizados, una circunstancia aprovechada por los veteranos, por lo general matones, para acercárseles, ofrecerles protección y asegurarse de que nadie más les pusiera las manos encima. Gradualmente se ganaban su confianza y lo introducían al consumo de alcohol y coca. Una vez que la víctima había desarrollado una adicción a estas sustancias, dice el informe, llegaba a depender de su protector para conseguir dinero y provisiones con que satisfacer su nuevo vicio; en un momento dado, nos dice Seminario Helguero, aceptaba las propuestas de sexo como un medio para conseguir alcohol o coca. A la larga, terminará «casado» con el matón y luego «convivirá con cualquiera por veinte centavos, para terminar en ejecutor de actos sexuales más repugnantes aún»[693]. El comercio del sexo dentro de la prisión era sumamente frecuente y no solo los presos poderosos, sino también los empleados del penal, estaban involucrados en su control. Un observador comparó Guadalupe con un burdel, dada la extensa práctica de la prostitución homosexual[694].

Como lo muestran algunos de estos ejemplos, las relaciones homosexuales en las prisiones de Lima ofrecían a los presos la posibilidad de construir relaciones afectivas y satisfacer sus necesidades sexuales. Los reclusos tenían necesidad de desarrollar relaciones de afecto, cuidado y confianza mutua en medio de un entorno por lo general brutal e inhumano; las relaciones homosexuales les ofrecían una forma de obtener esto. Como Patricia O'Brien enfatiza, «[l]a expresión sexual era un factor crucial en la subcultura carcelaria y era un medio a través del cual el prisionero se adaptaba y acomodaba a los rigores y a la deshumanización de la vida en la prisión»[695]. Pero las

relaciones homosexuales, al igual que otras interacciones entre los reclusos, estaban frecuentemente construidas sobre prácticas jerárquicas y abusivas: en numerosos casos, lo que las sostenía era el comercio, el chantaje o la coerción pura y simple. La homosexualidad en cuanto tal estaba indudablemente conectada con la dinámica del conflicto, la disputa y el acomodamiento que caracterizaba la vida dentro de la prisión.

Según la mayoría de los testimonios, las prácticas sexuales tales como la homosexualidad no eran realmente motivo de gran preocupación para las autoridades de la prisión[696]. Resulta pertinente sostener que la tolerancia hacia la homosexualidad en la prisión era un elemento clave del orden consuetudinario. Al aceptarla como un componente inevitable de la vida carcelaria, las autoridades buscaban aminorar las tensiones existentes entre los presos y la administración y transferir parte de ellas a los reclusos. Los prisioneros poderosos como los faites y caporales ejercían un mayor control sobre el comportamiento homosexual en la prisión, pero también desempeñaban papeles cruciales en la conservación del orden dentro de la cárcel. Por añadidura, los intereses económicos también yacían detrás de la tolerancia que las autoridades tenían con respecto a las prácticas homosexuales. Hubo, claro está, casos en los que se tomaron medidas como la transferencia de un miembro de la pareja a otro penal, pero la mayoría de las veces la homosexualidad era aceptada como un componente inevitable y rutinario de la vida en la prisión, tal vez incluso como una fuente de estabilidad para segmentos importantes de su población. Aquí la actitud de las autoridades carcelarias chocaba nuevamente con la postura de los criminólogos y expertos penales, quienes consideraban que la extensa práctica de las relaciones homosexuales constituía una ruptura escandalosa de la disciplina del penal.

Como lo muestran los ejemplos del comportamiento sexual, el consumo de coca y el uso de tatuajes y jerga, el surgimiento de subculturas carcelarias fue un proceso ambiguo y contradictorio. Aunque estos comportamientos ciertamente reflejaban los esfuerzos de los presos por crear un mundo propio y tenían el potencial para forjar relaciones horizontales entre ellos, también reforzaban valores sociales y culturales que incluían dosis importantes de coerción, abuso y violencia. La solidaridad y el conflicto, la armonía y el antagonismo, coexistían lado a lado en el mundo de la prisión. Las subculturas carcelarias no podían evadir el hecho de que se habían desarrollado dentro de una estructura opresiva, a la cual usualmente se enfrentaban recurriendo a sus propios mecanismos (perversos) de poder y control: coerción, violencia y engaño. Las subculturas de la prisión simultáneamente subvertían y reproducían el *statu quo*.

Un mundo violento

Una de las características más omnipresentes de la vida cotidiana en las cárceles de Lima era el ejercicio abrumador de la violencia, ciertamente en la aplicación de castigos y en la crueldad mostrada por los funcionarios penales hacia los presos, pero también, y tal vez más comúnmente, en las relaciones interpersonales entre reos. Me he referido antes al continuo uso de la tortura y el castigo corporal en el trato que se daba a estos, pero el temor que los reclusos tenían a las agresiones provenientes de sus pares era a veces mayor que su miedo a la mano fuerte de la autoridad. ¿Qué lugar cupo a la violencia interpersonal en las interacciones cotidianas entre los presos y en la conformación de las subculturas carcelarias?

Ya se han mencionado algunos casos de violencia interpersonal, en particular las horrendas prácticas asociadas con la explotación sexual de presos vulnerables. Sin embargo, la violencia dentro de la población presidiaria tenía muchos otros componentes. En ocasiones, era una forma rutinaria de hacer frente a situaciones aparentemente triviales pero rebosantes de tensión. Unos cuantos ejemplos bastarán. Un preso fue apuñalado y muerto durante una pelea que estalló en un partido de fútbol[697]. Otro penitenciado mató al caporal del taller de talabartería con un cuchillo. El perpetrador fue enviado a una celda de aislamiento, donde supuestamente se suicidó[698]. Dos presos de Guadalupe que trabajaban en el taller de zapatería repentinamente comenzaron a pelear. Varias heridas de cuchillo enviaron a uno de ellos al hospital[699]. En octubre de 1924 cuatro presos de la penitenciaría fueron heridos después de involucrarse en una pelea a cuchillazos[700]. Un día de septiembre de 1920, durante el almuerzo, un preso hirió a otro «sin que al parecer mediara provocación alguna»[701]. Un recluso exigió que el inspector de la penitenciaría interviniera luego de que fuese herido por otro preso. Había el riesgo, dijo, de que fuera atacado nuevamente o de que él asesinara a su atacante[702]. Cuando Rafael Sosa, un prisionero de Guadalupe que trabajaba como portero, se rio de alguien, fue recriminado por Manuel Orué, otro preso, a lo que el primero respondió apuñalándolo con un cuchillo. En su declaración, Sosa sostuvo que

eran buenos amigos y que la herida fue infligida «jugando». Orué falleció unos días más tarde[703].

Estos ejemplos –y hay muchos más– demuestran el grado en que se usó la violencia al tratar con todo tipo de situaciones, entre ellas algunas relativamente banales como la discusión en medio de un partido de fútbol[704]. Estos incidentes triviales también eran, sin embargo, ocasiones en las que emergían los sentimientos más profundos de ira y frustración, revelando así el clima abrumadoramente violento del mundo de la cárcel.

Por lo tanto, la violencia no era irracional: era la manifestación concreta de un entorno en el cual los presos confirmaban lo que habían experimentado afuera, en la sociedad en general, esto es, el uso continuo de la violencia física contra otros seres humanos a fin de conseguir obediencia, sujeción, venganza o consentimiento. Los presos tenían suficientes razones para estar enojados, frustrados, celosos y rencorosos e hicieron frente a estas situaciones de muchas formas, incluyendo prominentemente el uso de la violencia física. Aunque las cárceles no eran únicamente una extensión de la sociedad libre, sí eran su espejo, y no solo de modo metafórico. El autoritarismo y la violencia eran componentes centrales del clima cultural y social de Lima; las prisiones eran un microcosmos de la sociedad en general.

La violencia entre los presos desempeñaba muchos papeles distintos, uno de los cuales era el de fijar fronteras y jerarquías de poder dentro de la comunidad carcelaria. Cuanto más agresivo fuera el preso, tanto más respetado y temido era, y con ello podía ejercer cuotas mayores de autoridad y poder. Este es un ejemplo de lo que James Scott ha denominado la «dominación dentro de la dominación», un ejemplo de la cual es el caso de presos que impusieron «una tiranía tan brutal y explotadora como cualquiera que los guardias pudieran concebir»[705]. Según un testigo, en la prisión de Guadalupe, «allí se impone el valiente. Aquel que no quiere regalar o prestar dinero o un objeto cualquiera al valiente, es irremisiblemente golpeado y maltratado en la forma más cruel y canalla que pueda imaginarse». Los presos recién llegados, escribió el reportero, debían hacerse respetar desde el comienzo, pues de lo contrario terminarían siendo víctimas de los matones[706]. Este era, en efecto, un elemento principal en la distribución del poder dentro de la prisión: los recién llegados eran siempre más vulnerables y frágiles que los habitantes veteranos de las cárceles limeñas[707]. Estos últimos eran quienes por lo general fijaban el tono de las relaciones entre los reclusos. Dado el hecho evidente de que sabían cómo funcionaba realmente la prisión y se encontraban en posición de controlar algunos aspectos cruciales del orden interno consuetudinario, ellos podían aprovecharse de los recién llegados, usualmente a través del uso de la violencia abierta o subrepticia. El abuso y la coerción tendían a ir en una sola dirección: los prisioneros experimentados contra los novatos. El resultado era un mundo extremadamente jerárquico, en el cual los presos más agresivos y experimentados ejercían importantes cuotas de poder y consideración.

Estrechamente relacionada con esta cuestión se encuentra otra dimensión más de las relaciones conflictivas entre prisioneros. Las afiliaciones regionales y étnicas tuvieron un papel importante, aunque generalmente difícil de documentar, en la configuración de la vida en la prisión. Si bien las cárceles peruanas, a diferencia de las de otras partes del mundo, no implementaron pabellones y regímenes penales diferentes para los distintos grupos étnicos y raciales, las divisiones de este tipo, así como las geográficas,

sí existían y, lo que es más significativo, eran usualmente impulsadas por los mismos presos[708]. Las divisiones entre criollos y serranos eran una permanente fuente de fricción en la población de las cárceles limeñas. Las diferencias en lenguaje y costumbres, así como las nociones profundamente arraigadas sobre la superioridad racial y regional de los criollos, usualmente los mantenían separados, aunque esta no era, ni mucho menos, una división insalvable[709]. Los criollos veían a los serranos como seres inferiores y los trataban como tales, repitiendo así los postulados de las doctrinas racistas y las prácticas sociales jerárquicas de la sociedad peruana. En la cultura de las prisiones limeñas, los serranos, en particular aquellos llegados a la penitenciaría directamente de sus provincias andinas y con escaso conocimiento del bajo mundo criminal, eran las víctimas potenciales del maltrato y el abuso de parte de las autoridades y de los reclusos criollos. Los presos indígenas parecen haber ocupado las posiciones más vulnerables dentro de la comunidad presidiaria de las cárceles limeñas. Ellos debían hacer frente a numerosos obstáculos que los limeños y costeños no tenían. Un preso que escribió al ministro de Justicia para quejarse del comportamiento del caporal de la penitenciaría, dijo que la mayoría de las víctimas de los abusos eran los «serranitos», a quienes se maltrataba en especial porque aceptaban resignadamente los latigazos que el caporal daba a todos los prisioneros[710]. Además, los reclusos indígenas parecen haber enfrentado más problemas que los criollos al tramitar y conseguir beneficios penales tales como el indulto y la libertad condicional. «[E]l indio», escribió Lorenzo Esparza, «siempre sale cumpliendo estrictamente el período señalado por las cortes, si es que su vida no es tronchada por la tuberculosis»[711]. Pero la situación vulnerable en que se hallaban los presos indígenas recién llegados no era irreversible y (como veremos en el capítulo 8) muchos de ellos pronto aprendieron a manipular el sistema en provecho propio. No estoy sugiriendo que hubo una jerarquía claramente marcada, con los criollos como el grupo dominante y los serranos como subordinados; ello implicaría que estos últimos aceptaban su destino resignadamente. Los retratos del acatamiento serrano como el que hemos citado arriba fueron indudablemente configurados por las nociones comúnmente aceptadas sobre la actitud de la población indígena hacia sus superiores. El entorno de la prisión se hacía eco de las divisiones y tensiones existentes en el mundo externo y, dentro de dicho entorno, a los serranos usualmente se les atribuía una posición inferior, aunque eso no significaba una aceptación pasiva o resignada de su condición.

Pero las diferencias en percepciones, comportamiento y gustos tendieron visiblemente a erigir barreras entre criollos y serranos. Un episodio llamativo revela el alcance de las divisiones étnicas dentro de la población carcelaria. En la penitenciaría de Lima había dos zonas de recreación, conocidas como la Pampa del Tahuantinsuyo y la Pampa de los Criollos respectivamente, que eran usadas sobre todo para jugar fútbol. Cada una de ellas era usada casi exclusivamente por los presos de cada uno de los dos grupos

principales, indígenas y criollos o costeños. Esta distribución del espacio presumiblemente surgió de un acuerdo alcanzado por ambos grupos de presos y las autoridades. En 1929, la administración del penal propuso levantar nuevas aulas para la escuela de la prisión en la Pampa del Tahuantinsuyo, lo que habría forzado a ambos grupos a compartir la otra pampa. Una vez enterados de la propuesta, los presos enviaron una carta al ministro quejándose de que la reducción del área disponible para los deportes afectaría negativamente a todos ellos. Es imposible saber cuáles eran los antecedentes étnicos de los reclusos que promovían la petición, pero parece plausible asumir que fueron los criollos. El argumento implícito era que deseaban conservar la separación étnica de los campos de recreo. En su informe, el director de la prisión admitió que había serias rivalidades entre ambos grupos de presos y sostuvo que era necesario superar semejante división obligándolos a compartir el espacio físico e intentar llevarse bien entre ellos. «Hace tiempo que en la penitenciaría florece el prejuicio étnico», prosiguió. «Algunos delincuentes temibles, por sus antecedentes y su capacidad intrínseca para el delito, exhiben una superioridad que radica en el pigmento de la piel o en el hecho accidental de haber nacido en tal o cual ciudad de la costa». Insistió en que costeños y serranos, indios y blancos, debían jugar en el mismo campo, pues «en un país democrático no se pueden propiciar odiosidades, edificadas sobre caracteres raciales». «La superioridad», continuó, «no nace de los signos morfológicos, sino de la virtud, del talento o de la capacidad sobresaliente para el trabajo. Sin embargo, su aparente espíritu democrático y tolerante se desvaneció muy pronto, pues se opuso vigorosamente al derecho de los reclusos a manifestar su opinión sobre este o cualquier otro asunto: «no se da el caso de tolerar que los penados opinen, discutan y se opongan a los proyectos de carácter técnico, concebido[s] por las autoridades superiores. De este modo, ya no es preciso, entonces, personal dirigente de las prisiones. Que los reclusos se gobiernen por sí solos [...] que no se confunda el tratamiento humano, con la sensiblería, incompatible con reclusos que por algo son delincuentes». Los presos, empero, sí expresaron su opinión: enviaron otra declaración colectiva a las autoridades de la prisión, reafirmando su oposición a la construcción de las aulas y sosteniendo que la salud y la recreación eran más importantes que la educación. Resulta bastante revelador que usaran un argumento racial, pero uno que no se refería explícitamente a las rivalidades étnicas entre los reclusos: según ellos, el ejercicio físico puede ayudar a crear una «raza vigorosa» como las que existen en Inglaterra, Alemania y los Estados unidos, que producen «hombres fuertes, realistas, y emprendedores». La falta de cualquier mención explícita de las rivalidades étnicas entre criollos y serranos como justificación para conservar ambas pampas demuestra que los reos eran conscientes de que semejante argumento no habría sido aceptado, pero sí sabían que los argumentos raciales tenían eco entre los funcionarios públicos, de modo que intentaron convencerlos de que, en última instancia, conservar las dos pampas ayudaría a mejorar su raza (es decir, la de los criollos). El mensaje implícito era que mantener separados a

los serranos promovería dicha mejora al evitar la contaminación. La «raza vigorosa» que ellos (y sus destinatarios) deben haber tenido en mente no era definitivamente la «raza indígena»[712].

Las jerarquías étnicas también son visibles en la supremacía, muy común pero no del todo incuestionada, de los faites negros en el interior de la comunidad carcelaria. Los tipos de supuestos acerca de los roles, jerarquías y valores que sustentaban el prestigio de los faites también funcionaban para sustentar los estereotipos y prácticas que asignaban a los negros ciertos puestos de mando dentro del bajo mundo criminal. Las interpretaciones raciales de las jerarquías sociales dentro de las prisiones tendieron a duplicar aquellas que prevalecían en el mundo externo, pero con algunos ajustes inevitables: dados el lugar central que el coraje tenía en la fijación de las fronteras de poder dentro de las cárceles y la reputación de los negros como personajes valientes y arrojados, los delincuentes negros, en especial los faites, terminaron por lo general siendo considerados superiores a los serranos e incluso a los mestizos, como vimos en el capítulo 5.

No obstante la escasez de fuentes que permitan documentar el impacto que las divisiones étnicas tuvieron en la vida cotidiana de las prisiones de Lima, resulta claro que las percepciones y estereotipos raciales impregnaron las relaciones entre los distintos grupos étnicos y en algunos casos exacerbaron las tensiones entre distintos segmentos de la población presidiaria. Al igual que en el caso de la violencia interpersonal, las divisiones étnicas eran reproducidas no necesariamente a través de la imposición despótica de las autoridades carcelarias sino en gran medida en virtud de las propias estrategias cotidianas que los presos tenían para hacer frente y sobrevivir al régimen de la prisión.

Alimentación, salud y muerte en las prisiones

Las condiciones de vida de los presos de las cárceles limeñas eran por lo general deficientes. Las celdas y corredores de la penitenciaría, por ejemplo, fueron descritos repetidamente como «verdaderos pantanos» y «focos de infección»[713]. Pero estas condiciones probablemente no eran mucho peores que las de las clases bajas y trabajadoras. Por ejemplo, en un exhaustivo estudio sobre la tuberculosis en Lima, el médico Rómulo Eyzaguirre describió las prisiones como lugares de contagio de dicha enfermedad y que eran tan peligrosas como las casas de vecindad, los cuarteles del ejército y los hospitales[714]. Numerosos informes de diferentes períodos subrayan la mala salud y pésimas condiciones sanitarias de las cárceles limeñas. A comienzos del siglo XX, los médicos y estudiantes de medicina comenzaron a prestar atención a la salud de

los presos como parte de su preocupación global con la higiene social. La «patología» de las poblaciones presidiarias era un tema recurrente en las tesis de grado[715].

La enfermedad más común entre los presos de la penitenciaría en cualquier momento dado era, en efecto, la tuberculosis. Aunque muchos presos supuestamente ingresaban a ella ya infectados, las condiciones dentro de la penitenciaría eran propicias para el contagio. No solo las malas condiciones sanitarias sino también la propia falta de libertad fueron mencionadas como factores que favorecían la difusión de la tuberculosis[716]. En 1905-1906, por ejemplo, 216 presos visitaron el hospital del panóptico. Setenta y siete de ellos –más del 30 por ciento– sufrían problemas respiratorios[717]. Según Seminario Helguero, el 25 por ciento de todas las visitas a la enfermería de la CCV eran asimismo causadas por problemas respiratorios[718]. En el período entre junio de 1910 y mayo de 1911, 18 presos murieron en la penitenciaría, 8 de ellos víctimas de tuberculosis[719]. Según otro estudio, esta enfermedad resultaba galopante porque los presos tenían antecedentes sumamente insalubres, estaban expuestos a rutinas laborales agotadoras, se debilitaban en la prisión debido a sus vicios, estaban mal alimentados y además quedaban expuestos al contagio al usar las mismas camas, ropas y utensilios que habían usado antes presos infectados. Las estadísticas para los años 1904-1913 muestran que de los 109 presos fallecidos dentro de la penitenciaría, 72 de ellos, o sea el 66 por ciento, perecieron víctimas de la tuberculosis[720]. En el caso de los presos indígenas, se pensaba que el clima frío de Lima, y sobre todo la humedad y el frío del edificio del panóptico, los condenaban a enfermarse, cuando no a morir[721].

Según Valdez, las rutinas laborales, las condiciones ambientales, el régimen carcelario y los hábitos de los presos tanto antes como durante su encierro, en especial el alcoholismo, el consumo de coca y la masturbación, se combinaban para producir condiciones sumamente insalubres entre ellos. El estado rudimentario de los servicios de salud del penal empeoraba las cosas, puesto que las instalaciones médicas dentro de todas las prisiones eran deficientes, por decir lo menos. En algunos casos los presos enfermos debían yacer sobre el piso por falta de camas. En la CCV, escribió Seminario Helguero, los consultorios dentales compartían el mismo espacio que el baño[722]. El llamado hospital de la penitenciaría era, según Valdez, un «foco de contagio»[723]. Las cosas no eran mejores en El Frontón; de hecho, el servicio médico solamente estaba disponible una vez a la semana y a veces ni siquiera eso.

La nutrición inadecuada estaba asociada con las malas condiciones de salud. En términos generales, la comida de los presos era deficiente, aun cuando algunos informes sugieren que en la penitenciaría de Lima hubo períodos en los cuales era bastante aceptable[724]. El suministro de alimentos en esa prisión fue inicialmente responsabilidad de la administración, pero más tarde fue asignada a los contratistas de los talleres o a

concesionarios privados que la mayor parte del tiempo no lograban alimentar satisfactoriamente a los presos[725]. En marzo de 1872, para citar solo un ejemplo, luego de sucesivas quejas de parte de los reclusos, el médico de la penitenciaría confirmó que la comida era generalmente magra y que la carne era «de la peor clase»[726]. En 1870, un grupo de presos se quejó de la calidad del pan y la cantidad de comida que recibían ante Paz Soldán, quien estaba visitando el panóptico. Luego de explicarles que él ya no estaba a cargo de la administración de la prisión, Paz Soldán les advirtió que los reclusos no iban a la penitenciaría «a comer mejor que en sus casas». Esto enfureció a los reos y provocó un motín. Dos de ellos fueron enviados a confinamiento solitario mientras que el resto continuó protestando ruidosamente, lo que obligó a los guardias a disparar sus armas y a pedir apoyo militar externo. Dos presos murieron durante el incidente[727]. En 1914, Valdez comparó la ración estipulada por el reglamento con la que realmente se servía a los reclusos, concluyendo que las comidas jamás incluían la cantidad prescrita de carne, frejoles y otros componentes de la dieta de los reclusos. En 1930, Pablo Chueca, el nuevo director de la penitenciaría, encontró que la comida «no es escas[a], pero sí de mala calidad»[728]. Por excepción, un visitante de la penitenciaría dijo en 1919 haber encontrado que la comida no solo era buena sino también sabrosa. El día de su visita los presos iban a recibir supuestamente frejoles y «grandes trozos de carne»[729].

La situación no era distinta en otras prisiones. En Guadalupe la alimentación de los presos fue responsabilidad de la municipalidad de Lima durante la mayor parte del período que transcurre entre 1850 y 1935. En diversos momentos hubo quejas acerca de la calidad y la cantidad de la comida allí servida. En agosto de 1869, los presos de Guadalupe enviaron una petición al alcalde de Lima solicitando una taza adicional de té en su ración, pues no se les estaba dando nada que comer o beber, ni siquiera té, hasta las 11 a. m., cuando se les servía el almuerzo. En la tarde tenían la cena a las 4 p. m. y luego no recibían nada hasta el día siguiente. Tanto el almuerzo como la cena parecen haber sido relativamente aceptables, pero se quejaban por tener que pasar tantas horas sin ingerir nada. El inspector de prisiones encontró que la petición tenía mérito y aparentemente aceptó el pedido hecho por los presos[730]. Pero las cosas usualmente eran menos aceptables. En octubre de 1883, por ejemplo, el contador de Guadalupe le escribió a Rufino Torrico, alcalde de Lima, declinando toda responsabilidad por «cualquier invasión que pudieran efectuar los presos, por falta de alimentación»[731]. Al mes siguiente, el inspector municipal de prisiones encontró que la comida allí era deplorable: dos onzas de carne en una sopa aguada por la mañana y un pequeño plato de arroz con frejoles por la tarde, aparte de un pedazo de pan en cada comida[732]. En 1885, un juez de la Suprema Corte describió la comida de Guadalupe como «un pedazo de piltrafa que no serviría ni para los perros»[733]. Un motín estalló en octubre de 1931 en la CCV cuando los prisioneros se quejaron de la deficiente comida que se les servía[734].

Figura 7
Presos de El Frontón trabajando en las canteras



De Colonia Penal «El Frontón», *Memoria presentada por el director Sr. Manuel Hermilio Higueras al Ministro de Justicia, Instrucción y Culto. 1922* (Lima: Litografía e Imprenta T. Scheuch, 1923).

Como todas estas evidencias sugieren, las condiciones de vida dentro de las prisiones de Lima distaban mucho de ser aceptables. Los prisioneros a menudo se encontraban privados de vestimenta, comida y condiciones sanitarias adecuadas, una situación que se debía tanto a los problemas económicos como a la persistente indiferencia de las autoridades hacia las condiciones de vida de las cárceles. La actitud de Paz Soldán durante la protesta de los presos resulta sumamente reveladora: en la mente de los administradores de las cárceles funcionaba una suerte de «principio de menor elegibilidad». Ellos tendían a pensar que los delincuentes habían sido enviados a prisión a expiar sus ofensas y que por lo tanto no deberían aspirar a recibir buen trato, o por lo menos uno mejor que lo que experimentaban en el mundo exterior. De lo contrario, se estaría enviando el mensaje equivocado a los posibles infractores[735]. Las carencias en el suministro de comida, ropa y atención médica hacían que los reclusos tuvieran mayor necesidad de usar cualquier recurso que tuvieran a la mano para contrarrestar los efectos negativos de la negligencia y la indiferencia.

Y sin embargo, a pesar de todas las privaciones que los presos debían soportar, para algunos de ellos las prisiones limeñas parecen haber sido un lugar de residencia bastante aceptable. Esto no es irónico ni tampoco es un fenómeno exclusivamente peruano[736]. Las cárceles de Lima, y la penitenciaría en particular, ofrecían a algunos individuos un mejor nivel de vida que aquel que podían conseguir fuera de ellas. Como mínimo encontraban allí un lugar donde vivir y una forma de ganar algo de dinero y de obtener comida. Aunque esto no debe confundirse con la aceptación de ciertas visiones idealizadas de las condiciones de vida en las prisiones de Lima, la evidencia muestra que hubo presos que preferían vivir allí que en el mundo externo. En 1890, por ejemplo, se reportó que un recluso chino que «la pasaba tan bien» escribió una carta a un amigo que trabajaba como peón en una hacienda en las afueras de Lima. Su deseo era que su amigo ingresara a la penitenciaría y gozara de sus comodidades, para lo cual le sugería

que matase al hacendado para que, una vez condenado, se le uniera en la prisión. De haberse llevado a cabo, el asesinato habría tenido también, inevitablemente, un sabor a venganza. Las horrendas condiciones de vida que los culíes chinos soportaban en algunas haciendas de la costa peruana dan verosimilitud a este relato. Para un peón chino sujeto a la dura explotación y el trato inhumano en una hacienda limeña, vivir en la penitenciaría habría representado una mejora. El autor que reportó el caso lo usó para demostrar que para muchos presos estar detenidos en el panóptico era una «ganancia» porque allí podían gozar de «comodidades» con las que no contaban en la sociedad libre[737]. En 1893 se reportó un caso similar. Dos presos detenidos en Casasmatas se rehusaron a ser liberados, alegando que estaban mejor dentro que afuera. «El suceso no es raro para nosotros», comentó *El Diario Judicial*, puesto que, al no imponerse el trabajo obligatorio, «las prisiones [...] son para la generalidad de los delincuentes una especie de vacaciones en el oficio»[738]. Según un reportero, algunos presos de Guadalupe se sentían apenados cuando tenían que dejar la cárcel[739]. Hubo también el caso notable de una persona cuyo «trabajo» era vivir en Guadalupe cumpliendo las sentencias de otras personas. Cobraba una libra por día, una suma que al parecer le permitía tener «una vida oriental» dentro de la cárcel y con suficiente dinero para satisfacer todos sus «muy caros» caprichos[740]. Seminario Helguero reconstruyó el diálogo entre un nuevo preso de la CCV y sus compañeros: «"No te preocupes, Yarlequé", le dice en tono burlesco Medio Cohete, "aquí se pasa buena vida: se chupa, se juega y se ... Los vigilantes son unos desgraciados, nos quieren explotar, pero ... somos machos y nos montamos sobre ellos. ¿Has traído chato?"»[741].

Además, los administradores de las prisiones, en especial los de comienzos del siglo XX, se daban cuenta de la importancia de ofrecer a los presos momentos de esparcimiento, no importa cuán irónico o hipócrita esto pueda haber sido visto desde el punto de vista de los mismos reclusos. Las festividades religiosas, que con frecuencia incluían procesiones, baile, música y hasta comidas especiales, producían algo de alivio a los prisioneros. Pascua, Navidad, el día de la Virgen del Carmen y muchas otras celebraciones religiosas eran ocasiones durante las cuales los reos tenían un descanso de la rutina diaria del penal[742]. Los preparativos para estos eventos los mantenían ocupados por largos períodos y muestran la disposición y la capacidad de los presos para llevar a cabo empresas colectivas, usualmente en coordinación con las autoridades penales. Hacia comienzos del siglo XX, el fútbol y, en menor medida, el boxeo también se habían convertido en distracciones bastante populares entre los presos, sobre todo en la penitenciaría y El Frontón. Se organizaron campeonatos, a veces por los mismos presos y en otras ocasiones por las autoridades, y grupos de reclusos formaron varios clubes de fútbol. Para sostenerlos hacían campañas para recolectar fondos y, de paso, usaban estas organizaciones para intentar establecer relaciones de clientelismo con las autoridades de los penales y con patronos externos: por ejemplo, escogían padrinos

para sus equipos entre autoridades y otros personajes socialmente poderosos y cursaban invitaciones a personalidades prominentes para que asistieran a sus campeonatos. Posteriormente, en la década de 1920 y siguiendo las recomendaciones de algunos reformadores penales, se permitió a los presos escuchar la radio, ver películas y asistir a conciertos de música[743]. En 1921, de hecho, se creó una orquesta en la penitenciaría, que, pensaban las autoridades, tendría una influencia beneficiosa sobre los reos[744]. Las festividades importantes, como Fiestas Patrias, también se celebraban dentro del penal cuando las finanzas del Estado así lo permitían[745]. Organizaciones y personajes filantrópicos contribuyeron también a dar cierto alivio espiritual y material a los reclusos, sobre todo en la década de 1920. Eventos tales como la «Navidad del preso», por ejemplo, eran recibidos con gratitud por los prisioneros: recibían presentes tales como cigarrillos, panetones o refrescos y participaban en campeonatos deportivos y veladas musicales[746]. Todas estas iniciativas buscaban fomentar la obediencia y acatamiento de las normas entre los presos, pues el acceso a esas formas de distracción muy a menudo dependía de la buena conducta de los reclusos. Algunas de estas actividades fueron presenciadas por las más altas autoridades del Gobierno, entre ellas el presidente de la República y sus ministros, y eran usadas tanto por la administración del penal como por los reclusos para exhibir sus propias estrategias políticas: la primera para vender la imagen de un clima armonioso dentro de la cárcel, y los segundos para intentar construir relaciones de clientelaje con las autoridades del Gobierno y de la prisión (véase el capítulo 8). Algunos incluso vieron estas actividades como una forma de disminuir los impulsos sexuales y aliviar la angustia que la privación sexual causaba en los reclusos[747].

A pesar de los ocasionales períodos de alivio, la mayoría de los presos experimentaron, durante su estadía en las cárceles de Lima, privación, sufrimiento, alimentación insuficiente y un ambiente abrumadoramente insalubre. En 1926, un grupo de reclusos escribió una carta al director general de prisiones en la que denunciaban las condiciones de vida sumamente adversas que reinaban dentro de la cárcel: «nosotros según el fallo de los Tribunales, hemos sido sentenciados a la pena de prisión y sus accesorias, pero de ninguna manera a penas contra nuestra vida y salud». El hecho de que hubiesen cometido un delito, añadían, «no autoriza a nadie, ni al Estado», a incrementar la pena que les había sido impuesta[748]. Esta carta, escrita y remitida colectivamente para denunciar las condiciones de vida de los presos, revela una dimensión más de la relación entre ellos y las autoridades de la prisión: la confrontación y el desafío.

Capítulo 8

Más allá del orden consuetudinario La existencia de un orden consuetudinario (véase el capítulo 6) no impedía el surgimiento,

entre los presos y el personal de la prisión, de formas de interacción más inclinadas a la confrontación. De un lado, no todos se beneficiaban con dicho orden, o al menos no todo el tiempo ni en la misma medida. Siempre había razones para que algunos reclusos estuvieran descontentos con el estado de cosas, incluyendo –como vimos en el capítulo 7– las deficiencias en la comida y el cuidado de la salud. De otro lado, siempre estaba presente la tentación o la necesidad, para los funcionarios de la prisión, de recurrir a la violencia y el castigo corporal para imponer ciertas reglas o para asegurarse de que los presos no adquirieran demasiada capacidad de maniobra en la negociación de las reglas internas. Numerosas situaciones podían ser resueltas únicamente a través del uso de la violencia: por el lado de las autoridades de la prisión, el uso del castigo corporal; por el lado de los reclusos, el recurso a fugas, motines y otras formas de confrontación.

Los desafíos de los presos contra el orden de la prisión –tanto el ordenamiento estrictamente legal como el consuetudinario que organizaba la vida cotidiana– adoptaron múltiples formas, entre ellas el suicidio, la insubordinación individual, las fugas y los motines. A lo largo del período estudiado se desarrollaron también modos de protesta menos visibles pero igualmente efectivos, tales como las denuncias verbales y escritas. Algunos de estos actos eran reacciones al abuso, violencia y sufrimiento extremos. Otros revelan un esfuerzo más consciente por resistir la imposición de reglas y normas percibidas como injustas o abusivas. Y otros más fueron el resultado de violaciones al orden consuetudinario cometidas por autoridades y empleados. Aunque la mayoría de estos actos no trascendían de los muros de la prisión, algunos de ellos rompieron el aislamiento y tuvieron eco en el exterior, o por lo menos llegaron a ciertos objetivos externos, ampliando así la esfera de disputa en torno a las reglas de la prisión. Escribir una carta a una autoridad pública o conversar con un periodista podía hacer que las voces de los presos resonaran entre un público más amplio. Hacia finales de la década de 1920 y comienzos de la de 1930, los presos comenzaron a discutir, abierta aunque no siempre exitosamente, las reglas de juego dentro de la prisión e intentaron tener una participación más decisiva en la formulación de las normas. Una influencia decisiva en este desarrollo fue la presencia de presos políticos y los vínculos siempre contenciosos que establecieron con los presos comunes.

Protesta y resistencia

Las fugas de la prisión eran la forma más obvia de protestar contra el orden carcelario, aunque no la más común. Las fugas fueron bastante escasas durante los 85 años que cubre este estudio y tendieron a disminuir con el paso del tiempo, a medida que la seguridad de los penales se hacía más efectiva. En términos generales, escapar era una tarea mucho más difícil para los presos de la penitenciaría o El Frontón que para los de Guadalupe. La penitenciaría de Lima, con sus muros altos y su imponente estructura arquitectónica, presentaba un serio obstáculo para los presos que deseaban fugar. Aún así, los intentos fueron numerosos, aunque no siempre exitosos. Evidencias fragmentarias indican una caída visible en las fugas de la penitenciaría a lo largo del tiempo. La primera ocurrió apenas unas semanas después de su inauguración: el 15 de septiembre de 1862 el preso Francisco Retroux fugó, aparentemente con ayuda de un empleado francés a cargo del sistema de gas de la prisión. Fue recapturado dos semanas más tarde en el pueblo de Huaura, al norte de Lima[749]. Otro preso de la penitenciaría logró escapar en febrero de 1863: Francisco Risco, quien simulaba estar loco y había sido transferido al apartamento del médico de la prisión[750]. Hubo dos fugas más en julio de 1867, dos en noviembre de 1868 y dos en agosto de 1870[751]. Durante los ocho años entre 1871 y 1879, un total de 24 presos escaparon de la penitenciaría, un promedio de tres fugitivos al año[752]. Esta era, en realidad, una suma elevada, considerando el tipo de prisión que era la penitenciaría de Lima. Cada fuga o intento de fuga del panóptico tenía un impacto sobre el mundo externo y hubo ocasiones en las cuales el pánico parecía haberse propagado por Lima debido a la fuga de los presos.

Una de las fugas de la penitenciaría más publicitadas fue la de Manuel Peña Chacaliaza en 1876, el mismo que fue objeto de un estudio criminológico de Paulino Fuentes Castro (véase el capítulo 2). Chacaliaza, como se le conocía, había estado detenido en la penitenciaría menos de dos años cuando logró fugar. Planeó su escape con otro preso, un tal Hidalgo, durante las conversaciones que tenían en el patio de la prisión. Hidalgo trabajaba en el taller de zapatería, donde vio una escalera que podía servir para sus fines. Chacaliaza e Hidalgo fugaron primero de sus celdas luego de cincelar pacientemente el cemento y retirar varios ladrillos empleando un cincel que habían robado de la zapatería. A Chacaliaza le tomó cuatro o cinco horas completar la tarea. Luego se encontraron en el taller, llevaron la escalera al muro de la prisión, subieron a la cima y de allí descendieron lo suficiente, con ayuda de sábanas, para dar un salto hacia el piso externo. De todas maneras, quedaron «muy maltratados». Después se habrían dirigido caminando hacia el puerto del Callao[753]. Aunque corrió el rumor de que Chacaliaza se había cortado los talones para escapar del cepo que se le había colocado, esta versión jamás fue confirmada[754]. El director de la penitenciaría atribuyó la fuga a

«defectos de construcción de muy difícil remedio» y renunció a su cargo, una decisión que revela la seriedad de esta ruptura de la seguridad de la prisión[755].

No he encontrado reportes de fugas en las tres décadas posteriores a 1879, aunque esto se debe muy probablemente a los vacíos en la documentación. La siguiente fuga que aparece en las fuentes documentales fue también bastante espectacular e involucró a tres presos políticos encarcelados en la penitenciaría por el Gobierno de Leguía en 1910. Amadeo de Piérola, Enrique Llosa y Orestes Ferro, líderes prominentes de la oposición, habían sido apresados junto con docenas de integrantes del Partido Demócrata luego del complot de mayo de 1909 contra Leguía. En enero de 1910 los empleados de la penitenciaría descubrieron numerosas limas de metal, cuchillos y otros instrumentos en la habitación de Piérola (que no estaba confinado en una celda), herramientas cuya finalidad obvia era facilitar su fuga[756]. Poco después, Piérola, junto con Llosa y Ferro, logró huir por un agujero en una de las paredes de su habitación. Según el informe oficial posteriormente emitido, el agujero había sido hecho desde el exterior. Luego pasaron a una de las habitaciones del apartamento del director y desde allí saltaron a la calle con ayuda de sábanas. De inmediato se despertaron las sospechas de complicidad de parte de las autoridades de la prisión al tiempo que la oposición celebraba la exitosa fuga[757]. Otras más tuvieron lugar en marzo de 1912 y noviembre de 1915, cuando cinco presos huyeron del panóptico[758]. Tras la conversión de una parte de la penitenciaría en la CCV, las fugas se hicieron aparentemente algo más fáciles. La documentación registra varias fugas de la CCV a comienzos de la década de 1930: siete presos escaparon en apenas cinco meses, de agosto a diciembre de 1934, y uno de ellos, Enrique «Monito» Vinces, lo hizo cuatro veces[759].

En Guadalupe las fugas eran tanto más frecuentes cuanto menos escandalosas para la opinión pública. En 1893, el grupo anónimo «Presos amigos del orden» atribuyó las numerosas evasiones e intentos de fuga que tenían lugar en Guadalupe al relajo de la disciplina y el estado de abandono de la prisión[760]. A diferencia de las fugas de la penitenciaría, varios escapes de Guadalupe involucraban a grupos numerosos de presos. Veintidós reclusos escaparon el 27 de agosto de 1884, por ejemplo[761]; dos meses más tarde, el 14 de octubre, otros siete presos huyeron con la ayuda de un caporal que desafortunadamente no pudo aprovechar la oportunidad de salir por el túnel «a causa de su considerable corpulencia»[762]; tres presos fugaron de Guadalupe el 27 de enero de 1890, esta vez deslizándose por los barrotes de una ventana en el taller de zapatería[763]. En febrero de 1892, un prisionero que estaba a cargo del manejo de la planta eléctrica de Guadalupe, y que además era guardia del calabozo, puestos para los cuales había sido seleccionado por su buena conducta, escapó de la cárcel solo para ser recapturado poco

después[764]. En general, las tentativas de fuga en Guadalupe fueron mucho más numerosas que en la penitenciaría[765].

A la inversa, las fugas de El Frontón fueron mucho más difíciles y escasas debido a la considerable distancia existente entre la isla y la costa, así como a las turbulentas aguas del mar. Aun así, hubo presos que lograron fugarse. El 23 de febrero de 1925, tres presos militares huyeron en una chalana usada para transportar comida[766]. En febrero de 1927, Domingo Castañeda, a quien se describió como un «antiguo y avezado ladrón», pudo concretar su fuga. Primero se escondió durante dos días en los cerros de la isla y luego nadó hacia el Callao cuando estuvo seguro de que ya nadie lo estaba buscando[767]. El 27 de mayo de 1930, dos presos intentaron huir de la isla en una chalana que construyeron «de a pocos, los sábados en la tarde». Habían planeado la fuga para que coincidiera con las horas de visita de los domingos. Cuando ya estaban en el agua fueron avistados por otros presos, quienes notificaron a los guardias al no saber si se estaban escapando o ahogando. Los fugitivos fueron capturados con ayuda de la motonave que transportaba a los visitantes. Olazábal, uno de los frustrados fugitivos y que había sido sentenciado a 25 años de internamiento, dijo a las autoridades que iba a volver a intentarlo, pues consideraba que su sentencia era totalmente injusta y, por tanto, creía tener derecho a ejecutar su plan de fuga. Poco después fue transferido a la penitenciaría[768]. En su descripción de la vida como preso en El Frontón, el escritor aprista Julio Garrido Malaver sugirió que, aunque numerosos presos intentaron huir, «muy pocos alcanzaron la orilla»[769].

Motines y asonadas fueron también episodios excepcionales en la historia de las prisiones limeñas. La mayoría de ellos eran espontáneos, y aunque algunos tenían el objetivo específico de promover una fuga masiva, más frecuente era que carecieran de objetivos claros. Ambos estallaban en momentos de extrema tensión y eran manifestaciones de frustración e ira acumuladas de parte de los presos. El consumo de alcohol también estaba detrás de algunos motines. En la mayoría de los casos había personas que actuaban, si no como líderes, por lo menos como instigadores o promotores. Aunque en ocasiones algunos presos lograban escapar, la mayoría de las veces los motines eran controlados violentamente y los presos sufrían severas represalias de parte de las autoridades del penal.

Las fuentes indican que en la penitenciaría los motines fueron comunes en los primeros días de la prisión, pero que se fueron haciendo bastante raros con el paso del tiempo. En Guadalupe parecen haber sido aún menos frecuentes. No queda claro cuál era la situación en El Frontón, ya que la información que fluía desde la isla era menos abundante que para las restantes prisiones. Sin embargo, es posible identificar un patrón: motines y asonadas eran menos frecuentes en aquellas prisiones y bajo aquellas

administraciones que más cercanamente condonaban el orden consuetudinario. El hecho de que los motines y asonadas hayan sido en general escasos podría interpretarse como una señal de que el orden consuetudinario predominó durante la mayor parte del período estudiado. Otros factores también contribuyeron a la relativamente baja incidencia de los motines en las prisiones: los múltiples cismas que dividían a la población presidiaria, la presencia constante de soplones y el temor a una dura represalia de parte de las autoridades.

El 31 de octubre de 1864, por ejemplo, estalló un motín entre los presos que trabajaban en el taller de zapatería de la penitenciaría. Encabezados por tres reclusos armados con cuchillos, los insurgentes tomaron como rehenes a varios empleados y exigieron ser transferidos a Guadalupe, argumentando que ellos no habían sido condenados al panóptico. Los amotinados fueron finalmente sometidos con la ayuda de tropas de un cuartel del ejército cercano[770]. En 1867 estallaron dos grandes motines en la penitenciaría. En marzo de dicho año, 23 presos se rebelaron, tomaron rehenes y fueron finalmente sometidos solo con la ayuda de fuerzas armadas externas[771]. En diciembre estalló un levantamiento aún más serio. Ochenta presos intentaron al parecer escalar el muro para escapar. Lo que vino a continuación fue un combate entre reclusos y guardias en el que los primeros usaban piedras y utensilios para atacar a los segundos. El director ordenó a las tropas que dispararan. Las fuerzas armadas externas llegaron para ayudar y los presos finalmente se rindieron. Al final hubo 2 muertos y 16 heridos, dos de ellos de gravedad[772]. Dos semanas más tarde, indudablemente aún bajo la impresión causada por el episodio de diciembre, el nuevo director reportó que otra fuga estaba siendo planeada, la cual incluía prender fuego a partes del edificio. El director actuó rápidamente para evitarlo, ordenando la reclusión continua de todos los presos en sus celdas salvo aquellos que trabajaban en la cocina[773]. Varios otros motines fueron abortados gracias a las oportunas advertencias de los soplones[774]. En febrero de 1868 el director de la penitenciaría visitó los talleres y reportó haber notado un «grave descontento» y una mirada «amenazante» entre los presos, lo que para él revelaba que «su única pretensión es proporcionarse de cualesquiera modo y por cualquiera costa su fuga»[775]. En numerosas ocasiones, las autoridades de la prisión descubrieron armas y utensilios en manos de los presos, instrumentos que podrían haberse usado en los motines planeados. El 9 de diciembre de 1866 se abortó un motín que incluía una fuga masiva. Una exhaustiva inspección subsiguiente puso en evidencia la existencia de agujeros en 10 celdas, y en casi todas ellas se hallaron herramientas robadas de los talleres[776].

Sin embargo, luego de esta serie inicial de motines, no he hallado información referida a incidentes similares en la penitenciaría hasta finales de la década de 1920 y el siguiente decenio, como luego veremos. La frecuencia de los motines parece haber disminuido

hacia finales de la década de 1860, al establecerse el sistema de contratistas privados y los incentivos monetarios a los presos-trabajadores. Esto podría sugerir que dicho sistema sí funcionó para la administración del penal, por lo menos en términos de evitar grandes perturbaciones del orden carcelario.

En Guadalupe los motines fueron al parecer menos frecuentes. Un violento estallido, usualmente conocido como «la gran sublevación», ocurrió el 18 de enero de 1881, coincidiendo con el desorden y la confusión que acompañaron a la ocupación chilena de Lima[777]. La sobrepoblación, el consumo de alcohol y los intereses privados de algunos presos estuvieron detrás de otro motín ocurrido en Guadalupe el 28 de julio de 1915. Ese día, un caporal se dirigió a abrir la puerta del calabozo donde más de 100 reclusos habían pasado la noche juntos. La multitud, supuestamente liderada por Apolinario Arzola, repentinamente lo asaltó. Los presos dirigieron entonces su ira contra la cantina de la prisión, exigiendo su saqueo y destrucción. La mayoría de ellos estaban supuestamente ebrios y «furiosos», «como locos». Se calmaron cuando el médico del penal llegó y aparentemente convenció a Arzola de que depusiera sus acciones. Versiones posteriores situaron el origen del motín en «ciertos negocios de víveres» que Arzola tenía con la tienda de la prisión[778]. Aunque la información es parca, este caso podría demostrar que los motines a veces estallaban cuando los presos y las autoridades chocaban en torno a algún aspecto del orden consuetudinario como el control del tráfico de comida dentro de la cárcel.

La información sobre motines en El Frontón es escasa. En una ocasión, en marzo de 1921, el director decidió imponer el mismo reglamento que el de la penitenciaría de Lima debido a «la indisciplina reinante» entre los presos, una medida que hubiera generado una seria perturbación en la vida diaria de los reclusos. La respuesta de estos fue sumamente radical y unánime: se congregaron en una de las barracas y se rehusaron a trabajar. Según el director, él logró convencerlos de que cedieran, pero los jefes del motín fueron puestos en confinamiento solitario, lo que enfureció a los reos y motivó una ruidosa protesta. El motín fue finalmente sofocado con el uso de armas de fuego y la aplicación «[d]el castigo a que se han hecho acreedores»[779].

El descontento y la frustración también se reflejaban en diversas formas de protesta individual. Una de ellas era el suicidio, si bien este se producía en raras ocasiones. Apenas tres de ellos quedaron registrados en la documentación consultada para todas las prisiones de Lima durante el período estudiado, y en los tres casos la víctima fue un chino[780]. De hecho, poco después de la inauguración de la penitenciaría, el director pidió al ministro de Justicia que no enviara convictos chinos a ella debido a que «por sus creencias religiosas y su educación se suicidan con facilidad por pequeño que sea el contratiempo que sufren». De hecho, el director se rehusó a admitir al primer convicto

chino enviado al panóptico[781]. Los suicidios cometidos por personas de nacionalidad china no eran raros en Lima. Según Augusto Ruiz Zevallos, de un total de 121 suicidios ocurridos en Lima entre 1904 y 1919, 79 (65 por ciento) fueron cometidos por chinos[782]. Los actos de protesta individual más comunes involucraban el uso de violencia contra guardias y autoridades, generalmente sin demasiada premeditación ni otro objetivo claro que expresar su rabia y descontento. Estas situaciones usualmente terminaban con el preso sometido a severo castigo, si es que no estaba ya muerto. En julio de 1874 un recluso de la penitenciaría atacó a algunos empleados con un cuchillo y se atrincheró en su celda, amenazando con resistir hasta la muerte. Incitó además a otros presos a que siguieran su ejemplo, pero no logró su objetivo. Finalmente tuvo que ceder apenas dos días después[783]. Otro recluso atacó al inspector con un cuchillo y luego a los empleados que intentaban calmarlo. Los guardias le dispararon y le dieron muerte[784]. Años más tarde, otro preso de la penitenciaría insultó a un guardia, por lo cual fue confinado en su celda; posteriormente, al efectuarse un examen de sus pertenencias, atacó al caporal mayor e hirió a otro preso con un cuchillo[785]. Abel Silva, un detenido chileno en la penitenciaría, hirió al inspector con un cuchillo y fue muerto a tiros por los guardias. Durante el enfrentamiento se le oyó decir «quiero morir pero matando»[786]. Muchas situaciones similares probablemente quedaron sin registrar, al igual que el castigo subsiguiente aplicado por los empleados de la prisión. Algunos presos prefirieron dar salida a su frustración después de dejar la cárcel. Uno de nombre Manuel Contreras fue liberado de la penitenciaría en 1875, después de 12 años de encarcelamiento. En su primera noche en libertad se embriagó y caminó a casa de Camilo Martínez, el director del panóptico, pero no lo encontró. Dijo entonces a los miembros de la familia Martínez que lo mataría y que habría de «beberle la sangre al referido Martínez y a cuatro empleados más»[787]. Años más tarde, en febrero de 1900, fue asesinado el alcaide de Guadalupe, don Víctor Germán Pastor. El principal sospechoso era Manuel Barrientos, quien había sido liberado de Guadalupe cuatro meses antes, «lo que hace comprender», decía el informe, «que el móvil del crimen ha sido venganza»[788]. Aunque es imposible corroborarla, esta versión resulta verosímil en la medida en que decenas de presos a menudo consideraban que las autoridades de las prisiones eran abusivas e injustas.

Los presos particularmente problemáticos y recalcitrantes, como aquellos involucrados en estos actos exaltados, eran a menudo descritos y tratados como si estuvieran locos. La cuestión de la condición mental de los presos era, en efecto, sumamente controvertida. Como admitiese un funcionario penal, «no hay cuestión más difícil ni más delicada que la apreciación del verdadero estado mental» de los reclusos[789]. Ruiz Zevallos ha demostrado que, en este período, diagnosticar a una persona como mentalmente insana era, con frecuencia, un procedimiento arbitrario debido a motivaciones personales, políticas o familiares. La condición de enfermedad mental era atribuida a una persona cada vez que se comportaba en formas que se apartaban de las

normas establecidas. En palabras de Ruiz Zevallos, «era pasible de secuestro todo aquel que estuviera en contra del orden lógico, aquel cuya conducta o pensamientos manifestaran discordancia con la racionalidad». Personas con «conducta o ideas raras» (espiritistas como Carlos Paz Soldán o feministas como Mercedes Cabello de Carbonera) eran enviadas al manicomio y tratadas como si estuvieran locos[790]. Dentro de las prisiones de Lima, según las fuentes consultadas, las autoridades empleaban el argumento de la locura como un medio para librarse de presos intransigentes y peligrosos[791]. El caso de Leonardo Gómez, un soldado negro apresado en Guadalupe, nos sirve para ilustrar esta situación. Un día de febrero de 1904, mientras se le tenía confinado en un calabozo, Gómez pidió al caporal permiso para hablar con el alcaide. El caporal respondió golpeándolo. Leonardo atacó al caporal algún tiempo después de este suceso, en un momento de distracción, lo cual generó un informe médico en el que se afirmaba que tenía «síntomas de locura». Los médicos posteriormente opinaron que su locura era permanente y se le trasladó al manicomio. Leonardo logró escapar del sanatorio –un acto que, según el juez, demostraba que no estaba loco y que había fingido «siguiendo un plan preconcebido»–, pero fue recapturado. Se le envió de regreso a Guadalupe, pero en septiembre de 1905 las autoridades ordenaron que se le volviera a trasladar al manicomio, donde los funcionarios ahora se rehusaban a admitirlo dado su «carácter peligroso». Nuevos informes médicos lo describieron como alcohólico e hijo de padres alcohólicos, epiléptico y con un desarrollo orgánico asimétrico. La conclusión fue que tenía «accesos impulsivos e involuntarios, lo que hace de él un individuo peligroso para los que lo rodean» y que era «incurable». El juez ordenó que se le internara en el manicomio, pero nuevamente se le negó el ingreso[792].

La asociación excesivamente fácil entre un comportamiento no conformista y la locura que este y otros casos muestran, revela las manipulaciones a que recurrían las autoridades de las prisiones cuando se trataba de la disciplina en la prisión. En 1891 se propuso construir celdas especiales para «enajenados furiosos», una categoría que se usaba simplemente para referirse a presos obstinados y recalcitrantes[793]. En lugar de tratar con estos prisioneros, las autoridades de las cárceles preferían etiquetarlos como locos y pasar el problema a los psiquiatras y a las autoridades del manicomio[794]. Al mismo tiempo, llamarlos locos era una forma de desacreditar cualquier afirmación hecha por estos presos díscolos. Las acusaciones de abuso físico o económico –como en el caso de Martín Saniz examinado en el capítulo 6– fueron convertidas en discusiones acerca de la salud mental del reo.

Esta diversidad de respuestas al orden carcelario de parte de los reclusos sugiere algunas observaciones. Las estrategias que buscaban abiertamente la confrontación, como los motines y las fugas, fueron, en términos generales, sucesos poco comunes en la historia de las prisiones de Lima. En Guadalupe, las fugas eran al parecer más

frecuentes que en otras cárceles, una consecuencia de la seguridad algo relajada. Los motines, también generalmente escasos, resultaban ser sumamente infructuosos, lo que podría explicar por qué los presos preferían no participar en ellos y concentrarse, más bien, en las formas cotidianas de acomodamiento y adaptación frente a la vida en la cárcel. La ausencia de grandes estallidos de violencia es atribuible no al acatamiento o a la sumisión de la población presidiaria sino a la implementación relativamente exitosa del orden consuetudinario y a otras formas de enfrentar la experiencia de la prisión.

Colaboradores y «presos tranquilos»

Como vimos, el orden consuetudinario de la prisión no constituía una situación ideal en la que tanto presos como autoridades acataban plenamente sus reglas. Había amplio espacio para situaciones conflictivas que se resolvían a través de diversos medios, entre ellos el uso de la violencia. Ni las autoridades de la prisión ni la población presidiaria consideraron jamás que un cierto *statu quo* habría de perdurar para siempre y sin perturbaciones, y las sospechas mutuas impregnaban las relaciones entre autoridades, empleados y presos. Al mismo tiempo, ninguno de estos grupos era una colectividad homogénea, y el potencial para las disensiones y los desacuerdos siempre estaba presente. Esta realidad dio lugar a la necesidad, primero, de que las autoridades buscaran la colaboración de personas específicas, extraídas de entre la población presidiaria, y, segundo, que ciertos presos tomaran parte en una relación que pudiera brindar beneficios tangibles. Siempre hubo un pequeño grupo que colaboraba con las autoridades de la prisión, a veces abiertamente y a veces de manera subrepticia. Entre ellos figuraban los ya mencionados caporales, los soplones y otros individuos que desempeñaban distintas tareas para las autoridades.

Los soplones son una presencia común en las cárceles de cualquier parte del mundo y las de Lima no fueron una excepción. Ellos desempeñaron un papel importante en la vigilancia de los presos. Al formar parte de la comunidad de reclusos y tener acceso a canales de información y organización desarrollados dentro de la población presidiaria, podían ofrecer a las autoridades información valiosa acerca del estado de ánimo de los presos y los ocasionales preparativos de fugas, motines y otras formas de protesta colectiva o individual. Las actividades de los soplones pueden detectarse en las comunicaciones intercambiadas por las autoridades, en las cuales compartían información acerca de los planes de los presos. Numerosos levantamientos e intentos de fuga fueron abortados gracias a un oportuno soplo. Dada la naturaleza de su función, vivían en una situación sumamente precaria. En 1867, por ejemplo, un soplón estaba a punto de ser liberado de la penitenciaría. Según el subdirector, había hecho «revelaciones de tal naturaleza que han impedido la fuga de todos sus demás compañeros y el derramamiento de sangre de los empleados del establecimiento». Por

ese motivo, sus compañeros lo detestaban y habían proferido serias amenazas contra su vida, por lo que se le permitió pasar sus últimos días en prisión resguardado en la oficina del director[795].

Además de los soplones, había presos que eran reclutados semioficialmente por la administración del penal para que desempeñaran una serie de tareas para las cuales no podían contratarse empleados regulares, dada la insuficiencia del presupuesto. Al usar reclusos para ocupar estos cargos, las autoridades del penal buscaban también establecer vínculos más estrechos con un segmento de la población presidiaria al que se podía cooptar ofreciéndole recompensas por cumplir con sus tareas. Para los presos así reclutados esta era una oportunidad para ganar algo de dinero, obtener privilegios y forjar una buena relación con el personal de la prisión. Los reclusos trabajaban en diversos aspectos administrativos, en puestos tales como porteros, ayudantes de cocina o limpiadores, e incluso como sirvientes personales de las autoridades de la cárcel. Desempeñar estas tareas entrañaba ciertos riesgos. Estaban bajo presión desde arriba, es decir, de parte de las autoridades de la prisión, pero también se enfrentaban al desprecio o las represalias de sus pares. Vivían, por tanto, en un precario equilibrio. Un ejemplo revelador es el del preso contratado como portero en Guadalupe porque no había dinero para emplear a una persona del exterior. El director, sin embargo, pensaba que el prisionero no cooperaba con las autoridades y prefería ponerse del lado de sus «compañeros», ya fuera por temor o por camaradería. «Nunca se consigue un hombre leal a la Alcaidía», insistió el director[796]. Pero los colaboradores no necesitaban tener una función específica en la administración de la prisión. Siempre había presos cuya actitud tendía a ser espontáneamente colaboracionista y que, por temor a represalias, por sus expectativas de recibir ciertos privilegios o por el disgusto que sentían hacia sus compañeros, ayudaban a las autoridades a conservar el orden en la prisión. En abril de 1868, estos reclusos fueron alabados por el director de la penitenciaría por «por la exactitud en el cumplimiento de sus deberes, por la moralidad y resignación con que sufren sus desgracias, por su respeto y subordinación a sus superiores [y] por su asidua contracción al trabajo», pero sobre todo por la ayuda que brindaron para derrotar a la insurrección de los presos ocurrida en diciembre de 1867[797].

De otro lado, había un segmento de la población presidiaria que no estaba involucrado en una colaboración abierta pero tampoco compartía con el resto de la población los riesgos y los sobresaltos tanto del orden consuetudinario como de las prácticas asociadas con la subcultura carcelaria. Estos eran los llamados «presos tranquilos». Se los describe como aquellos que jamás participaban en las actividades que las autoridades más temían, como las peleas y los motines, o que la mayoría de los presos practicaban con o sin el consentimiento de las autoridades, como el consumo de coca y las relaciones sexuales. Eran presos que muy probablemente se consideraban a sí

mismos demasiado decentes como para vivir la vida de un delincuente o ser tratados como tales. Para poder vivir en una sección separada ciertamente necesitaban dinero o contactos, pues este era un privilegio reservado a los presos influyentes. En Guadalupe, por ejemplo, una sección especial estaba reservada para los «tranquilos, la gente de confianza», quienes, con ayuda de las autoridades, se protegían de los amenazantes rateros y faites. Según un reportero, estos reclusos no eran realmente criminales pese a que habían cometido delitos; eran simplemente «víctimas del destino» cegadas por las pasiones: «la ira, el amor, la ambición, el poderío». «Sus rostros», concluyó contundentemente el reportero, «no inspiran temor ni desconfianza». En la sección de los tranquilos, añadió el director de Guadalupe, no había ni violencia ni vicios[798]. En la penitenciaría, el preso n.º 41 fue descrito en 1868 como uno de estos reclusos: «la resignación con que ha sufrido su desgracia y la conducta intachable que ha observado le han granjeado el aprecio y confianza de sus jefes y es respetado de sus compañeros. Su contracción al trabajo ha sido tan constante que no ha faltado jamás a las labores que ha sido destinado»[799]. Según varios testimonios, algunos penitenciados confinados en Guadalupe se unían a las filas de los tranquilos para así evitar ser transferidos a la penitenciaría como represalia a su mal comportamiento[800]. Esta estrategia era bastante diferente de la del grueso de la población presidiaria. Los tranquilos intentaban mantenerse alejados de problemas no necesariamente desafiando el orden consuetudinario –después de todo, ellos también buscaban arreglos especiales– sino manteniéndose a cierta distancia de la «genuina» población criminal de las prisiones. Es difícil no ver en estas actitudes los ecos de las diferencias existentes entre delincuentes y trabajadores examinadas en el capítulo 2. Aunque eran delincuentes en el sentido legal del término, ni ellos ni los demás los consideraban miembros de la clase criminal.

El hecho de que algunos presos aceptaran puestos como empleados *de facto* de la prisión no necesariamente significaba que estuviesen satisfechos con el *statu quo* o que hubiesen aceptado sumisamente su lugar dentro del penal. El buen comportamiento y el acatamiento no siempre eran señales de conformidad. Eran, por encima de todo, estrategias para obtener cierta compensación de las autoridades de la prisión en forma de privilegios inmediatos e incluso el indulto o la libertad condicional. El preso Reynaldo Agüero es un buen ejemplo de esto. Agüero era muy conocido por su actitud respetuosa hacia las autoridades de la prisión y por sus discursos algo floridos durante las ceremonias oficiales, a varias de las cuales asistió el presidente de la República. Su «discurso público»[801] fue claramente articulado en un discurso del 6 de enero de 1932: «Si el infortunio nos ha conducido a este lugar, donde permanecemos vedados de nuestra libertad, busquemos conformidad, resignación y paz en el espíritu, que adueñándonos de estas grandes virtudes, seremos felices en cualquier situación, lo que sin ellas [seremos] completamente desgraciados aún entre los más grandes halagos de

la tierra». Más adelante solicitó el indulto presidencial y ciertamente se aseguró de que todos sus discursos fueran incluidos en su expediente[802].

Si dicha estrategia tuvo éxito o no –en el caso de Reynaldo Agüero o en cualquier otro caso parecido– es algo que no puede documentarse fácilmente. Al igual que en muchos otros casos de luchas de poder subalternas, el acatamiento era evidentemente una estrategia para sobrevivir y con el tiempo dejar la prisión, no una señal de conformidad ideológica. Esto queda demostrado aún más con los numerosos casos de colaboradores que finalmente resultaron involucrados en diversas formas de resistencia abierta. Un preso de la CCV, por ejemplo, fue nombrado corneta de la prisión por su buena conducta. Como tal, gozaba de bastante libertad para recorrer la prisión en todo momento. Un día escapó simplemente saliendo por la puerta principal. Los guardias de la prisión no lo detuvieron porque no sabían (o al menos dijeron no saber) que era un recluso[803]. Un caporal de la penitenciaría provocó un escándalo un día de marzo de 1925 al maltratar en estado de ebriedad a otro preso, insultar a un guardia y a unos cuantos funcionarios de la prisión, destruir algunos artículos e intentar ingresar al observatorio de la prisión. Luego convocó a los demás reclusos para que se amotinaran, aunque solamente siete se unieron a la protesta. Posteriormente fueron reducidos con la ayuda de otros presos[804]. Siete reclusos huyeron de Guadalupe en octubre de 1884 gracias a la ayuda de uno de los caporales. Después del incidente, el alcaide informó que «lejos de secundarnos en nuestras miras [los caporales] se tornan, en casos como el presente, naturalmente en aliados cómplices o encubridores de los demás detenidos»[805]. A decir verdad, esta ambigüedad con respecto a los caporales fue una característica casi permanente del orden carcelario. Las autoridades los necesitaban, pero no podían confiar plenamente en ellos. Los presos colaboradores hacían todo lo posible para ganarse su confianza mostrando una conducta sumisa, pero evidentemente tenían su propia agenda, la cual podía llevar a situaciones conflictivas.

Los presos y la defensa de sus derechos

Las formas proactivas que los presos ponían en práctica para hacer frente al entorno carcelario no estuvieron limitadas a negociaciones y confrontaciones con funcionarios de la prisión. También se esforzaron activamente por involucrar a agentes externos en sus esfuerzos por mejorar su situación. Aunque en principio las comunicaciones entre los reclusos y el mundo externo estaban severamente limitadas, los reos pudieron aprovechar las numerosas oportunidades existentes para intentar abrir esos canales de comunicación. Escribir y enviar cartas de contrabando fue una de las tácticas más comunes usadas por los presos de las cárceles de Lima, al igual que en las de otras sociedades[806]. Los reclusos siempre han intentado comunicarse con el mundo externo en busca de ayuda, comprensión, amor y apoyo, pero también para expresar quejas,

acusaciones, demandas y pedidos. En el caso de las cárceles de Lima, sobre todo en la década de 1920, los prisioneros escribieron numerosas cartas a las autoridades políticas y judiciales solicitando o exigiendo que se prestara atención a su situación. Los presos analfabetos se dieron cuenta, quizás por vez primera, de la importancia de la palabra escrita y buscaron ayuda para transmitir sus sentimientos a través del papel y la tinta. No obstante ciertas ambigüedades inevitables, una tendencia clara se desprende del estudio de un grupo de cartas halladas en el archivo del Ministerio de Justicia: hacia finales de la década de 1920, su naturaleza y contenido empezó a reflejar postulados políticos y doctrinarios de reciente adquisición, lo cual marcó un doble giro. En primer lugar, hubo un cambio de una actitud estrictamente individualista a otra colectiva en la búsqueda de los objetivos de los presos. Hacia finales de la década de 1920, numerosas cartas firmadas por colectivos de prisioneros comenzaron a llegar a las autoridades y a otras personas fuera de los penales, un hecho que claramente revela tanto una nueva conciencia de la importancia de la acción colectiva como el surgimiento de nuevos mecanismos para poner en movimiento sus iniciativas. En segundo lugar, hubo un cambio de un tono sumiso y deferente a otro más asertivo y de denuncia, revelando así la apropiación, por parte de los presos, de algunas de las herramientas retóricas usadas por los criminólogos y los expertos penales en su empeño por implementar regímenes disciplinarios modernos dentro de las cárceles[807].

Al explicar este cambio, debemos tener en cuenta por lo menos dos factores concurrentes. En primer lugar, la proliferación de organizaciones y personas, entre ellas filántropos, profesionales, criminólogos, médicos, penólogos y periodistas, que desde la década de 1890 habían comenzado a diseminar, entre otras ideas, los principios de la reforma penal no solo fuera de los muros de las cárceles sino también dentro de ellas. Aunque no estuvo diseñado para que los presos tomaran conciencia de sus derechos, sino más bien para convencerlos de la valía del trabajo y la obediencia, el discurso de estas personas desde fuera de la prisión parece haber alertado a la población presidiaria de la naturaleza potencialmente subversiva de la retórica de la reforma penal, en especial cuando se la contrastaba con las sórdidas realidades de las cárceles limeñas.

En la década de 1890, luego de la introducción de la criminología positivista en el Perú, las prisiones habían pasado a ser el centro de atención de varios grupos de personas externas a ellas en una dimensión jamás conocida en períodos anteriores. Los criminólogos, penólogos y médicos comenzaron a recorrer las cárceles de Lima en busca de pistas que los ayudaran a entender la naturaleza del delito y las características de la población criminal. Los periodistas comenzaron a explorar y describir las condiciones de vida dentro de los penales y las peculiaridades de la población carcelaria, explotando así el apetito voyerista de una población urbana ansiosa de descubrir los misterios de la vida en la cárcel. Los filántropos crearon sociedades humanitarias y de patronato que

empezaron a visitar las cárceles limeñas para dar consuelo y alivio a los presos. Personas como Ángela Ramos iniciaron enérgicas campañas de socorro para los reclusos, visitándolos y organizando eventos tales como la Navidad del Preso. La más tradicional de todas estas intervenciones era la acostumbrada (y casi siempre meramente protocolar) «visita de cárcel» que las autoridades públicas debían realizar cada semana a fin de evaluar las condiciones de las cárceles y asegurarse de que los reclusos fueran tratados como lo mandaba la ley. En la década de 1920, además, y siguiendo los dictados de la criminología científica, las autoridades organizaron charlas dentro de las prisiones para adoctrinar a los reos en cuestiones tales como la higiene, la disciplina, la laboriosidad y, de modo más general, en las ideas que subyacían a los esfuerzos por implementar la reforma penal. Aunque los expertos naturalmente deseaban que los presos internalizaran las reglas de comportamiento apropiado como la obediencia, el trabajo riguroso y la abstinencia sexual, los reclusos parecen haber prestado atención a la naturaleza potencialmente subversiva de algunos de los postulados de las ideologías de la reforma carcelaria: tratamiento humanitario, hábitat saludable y eliminación de los castigos corporales[808].

En segundo lugar, estos desplazamientos muestran que algunos de los cambios más profundos que se estaban produciendo en la sociedad peruana resonaban en el interior de los muros de la prisión. En un momento en que sectores cada vez más amplios de la población comenzaban a organizarse en partidos políticos, sindicatos obreros y otras organizaciones civiles, los presos de las cárceles de Lima también comenzaron a organizarse a sí mismos y a defender sus demandas a través de acciones colectivas antes que individuales. La presencia en las cárceles de un gran número de presos políticos durante la fase final del Gobierno de Leguía sin duda contribuyó a los esfuerzos de los presos por organizarse y acometer acciones colectivas. Aunque la relación entre los delincuentes comunes y los presos políticos era usualmente distante y difícil, como vimos en el capítulo 5, las conversaciones e interacciones entre ellos sí se dieron, y los detenidos políticos ayudaron a los presos comunes a desarrollar o consolidar una conciencia política mucho más independiente y asertiva. La búsqueda de formas de colaboración entre ambos grupos se vio influida por el compromiso doctrinario progresista y radical que los presos políticos tenían con las clases populares y la justicia social. Su condición de víctimas de la represión estatal los estimuló a buscar aquellos asuntos que afectaban a ambos grupos, no obstante el aborrecimiento que sentían por los delincuentes comunes. De esa manera, resultaron involucrados en actos de protesta encaminados a mejorar las condiciones dentro de las cárceles. De otro lado, dada su experiencia dentro de los penales y, sobre todo, la forma en que las cosas realmente funcionaban, los presos comunes resultaron ser extremadamente útiles cuando los presos políticos necesitaban conseguir ciertos artículos como alimentos, cigarrillos y periódicos o circular información secreta[809]. Según el veterano líder aprista

Nicanor Mujica, eran principalmente los presos indígenas los que ayudaban a los presos apristas a transportar a escondidas cartas y documentos[810]. No obstante los riesgos involucrados, los presos comunes cooperaban por amistad, interés monetario, la búsqueda de establecer relaciones de clientelismo con los políticos (los delincuentes comunes se daban cuenta de que estos tenían importantes conexiones y podrían incluso convertirse algún día en autoridades estatales) e incluso por lealtad política[811]. Los presos políticos veían en los delincuentes comunes no solo a posibles colaboradores sino también una fuente potencial de clientela política. De este modo, intentaron adoctrinarlos e involucrarlos en el activismo político. En noviembre de 1932, por ejemplo, se reportó que los reclusos apristas de la CCV estaban «inculcando [...] doctrinas disociadoras entre el elemento carcelario»[812]. En junio de 1934 el director de la penitenciaría informó que los presos apristas «persisten en su propósito delictuoso de soliviantar el espíritu de los penados comunes, para producir desórdenes en el penal [...] Son incansables en requerir a los comunes, para adherirlos a su ideología y conseguir de ellos que contribuyan con su óbolo común, para el sostenimiento de lo que ellos llaman su Comité Ejecutivo Nacional». Según el director, el jefe de ese «movimiento disociador» era Juan Seoane[813].

A pesar de las diferencias radicales de estatus, cultura y condiciones legales que separaban a ambos tipos de reclusos, surgieron ciertas formas de cooperación entre ellos, algunas colectivas y bien organizadas. En agosto de 1930, por ejemplo, un motín que estalló en la penitenciaría fue dirigido por los presos políticos y secundado por los delincuentes comunes, armados con cuchillos, palos y piedras. Los refuerzos militares externos ayudaron a las autoridades a sofocarlo, pero no antes de que un guardia perdiese la vida[814]. Los abusos cometidos contra los presos comunes a veces generaban la solidaridad de los presos políticos. En 1934, Pantera Negra, un preso que osó desafiar a las autoridades de El Frontón abriendo su propio negocio de coca, fue brutalmente torturado. Los dos grupos de presos iniciaron una ruidosa protesta gritando y golpeando ollas; las autoridades se vieron obligadas a suspender el castigo[815]. En octubre de 1935 el director de la penitenciaría decidió suspender la práctica común de permitir a los reos enviar a casa parte de su ración alimenticia, sobre todo el pan. Los reclusos respondieron con una huelga que paralizó los talleres del panóptico. Recibieron el respaldo de los presos políticos, una medida que el director condenó porque, según él, «se quiere dar un aspecto político con el objeto de trastornar absolutamente la disciplina del penal». Cuatro de los líderes de los presos comunes fueron enviados a El Frontón en represalia. El director informó posteriormente que esta cuestión había sido resuelta, pero sin decir cuál había sido su decisión[816].

Los presos políticos llevaban a la prisión su propio bagaje cultural e ideológico, incluyendo la que probablemente era el arma más poderosa que tenían para cuestionar

la legitimidad de su encarcelamiento: una posición principista en defensa de sus *derechos*. Aunque también aprendieron cómo evitar las confrontaciones extremas que casi con toda seguridad provocaban severas represalias[817], los presos políticos usualmente mostraban fortaleza y decisión en defensa de sus derechos legales y constitucionales. Este discurso de defensa de sus derechos no era exclusivo de los presos políticos radicales, pues aquellos que pertenecían a los grupos sociales de élite y a los partidos políticos conservadores también usaron la defensa de los derechos políticos y la constitución de modo bastante vehemente cuando protestaban por su encarcelamiento. Sin embargo, y como luego veremos, este lenguaje no comenzó a afectar las formas de organización y la retórica empleada por los presos comunes antes de finales de la década de 1920. Esta defensa principista fue planteada antes, durante y después del encarcelamiento mismo, y aunque no todos los casos están registrados, el discurso de los derechos se desprende de numerosas fuentes. Cartas enviadas a los periódicos, manifiestos, alegatos judiciales y testimonios muestran que los presos políticos emplearon incansablemente todos los medios posibles para denunciar la arbitrariedad y la injusticia de su encarcelamiento. Su pertenencia a organizaciones relativamente sólidas y el hecho de que formaran parte de las clases educadas y tuvieran importantes conexiones sociales (con abogados, por ejemplo) definitivamente ayudaron a ser escuchados a pesar de los esfuerzos represivos del Gobierno. El caso de José Carlos Mariátegui es revelador. Durante la persecución que sufriera en 1927 escribió una carta desde el hospital, que fue publicada en el diario *La Prensa*, en la cual negaba enérgicamente estar involucrado en un «complot comunista», al tiempo que asumía la plena responsabilidad por sus ideas y publicaciones, que «conforme a la ley» no estaban «sujetas al contralor y menos a la función de la policía ni de los tribunales». «Tengo, pues, algún derecho a que se me escuche», añadió[818]. Luego de un segundo incidente con la policía en 1929, durante el cual fue mantenido bajo arresto domiciliario y se confiscó la mayor parte de su archivo personal, Mariátegui escribió una carta al mismísimo director de la policía exigiendo el retorno de esas valiosas pertenencias[819]. El caso del encarcelamiento y juicio de Haya de la Torre en 1932-1933 generó una enérgica campaña legal y política. Además de denunciar la naturaleza ilegal de su detención, las condiciones intolerables en las cuales se le tenía en el panóptico y la naturaleza arbitraria del interrogatorio al cual estaba sujeto, sus abogados lo presentaron además como un paladín de la justicia social y la encarnación de las aspiraciones de los ciudadanos peruanos: «En este juicio está interesada así, no solamente la acción de la justicia y el Estado como ejecutor de ella, sino miles de ciudadanos que aguardan ansiosamente la resolución del tribunal»[820]. Presos y perseguidos políticos como Mariátegui y Haya de la Torre podían llevar a su enfrentamiento con el Estado todo un arsenal de argumentos legales, políticos y morales cuyos ecos habrían de reverberar por todo el cuerpo social, incluyendo, inevitablemente, a esas otras víctimas de la arbitrariedad estatal: los presos comunes.

Además de los dos casos arriba citados, que involucraron a los dos ideólogos más importantes del siglo XX peruano, numerosos otros episodios ilustran las formas en que los presos políticos defendían firmemente sus derechos. Como era de esperar, esta defensa incluía el rechazo explícito de toda sugerencia de que ellos fueran delincuentes. En agosto de 1927, por ejemplo, Silvestre Sánchez envió una carta al prefecto, protestando por sus 75 días de detención y alegando que no era homicida ni ladrón. Se hallaba detenido «solo por el hecho de haber hablado sencillamente de la organización obrera». Exigía también mejor alimentación para su compañero de celda, que al parecer era un preso común con mala salud. Sánchez inició una huelga de hambre y unos cuantos días más tarde fue liberado[821]. En abril de 1930 el director de El Frontón reportó que los presos militares encarcelados por razones políticas se resistían a dicha clasificación, exigían comida especial y se rehusaban a trabajar. Ni siquiera asistían a las ceremonias de jura de la bandera nacional. En otras palabras, se rehusaban a ser tratados como criminales comunes[822]. En febrero de 1932 los presos apristas protestaron por la falta de luz eléctrica en sus celdas y exigieron ser transferidos a otra sección del penal donde, según ellos, debían estar los detenidos políticos[823]. Jorge García Mendizábal, un preso político que estaba prohibido de recibir visitas, se dirigió al director en estos términos: «no acepto se ensañe cobardemente conmigo quitándome derecho a mis visitas, descargando en esa forma, contra mí, una venganza poco honorífica [...] Ud. es un director de penal, y yo un penado social que no tiene otro delito, casualmente, que de luchar contra la injusticia a favor del bienestar social». Reveladoramente, advierte al director que «no quiero presentarme ante Ud. hipócritamente manifestando falsas sumisiones que no siento»[824]. Los familiares y correligionarios de los presos políticos también hicieron su parte, elevando sus voces en defensa de sus derechos. En diciembre de 1933 cientos de familiares de los presos apristas, especialmente madres, dirigieron una petición al presidente solicitando el indulto para «aquellos ciudadanos que aún sufren el peso de injustas condenas, decretadas por Cortes Marciales que, sin el más elemental criterio de justicia, solo condenaron cumpliendo consignas impuestas en horas de ofuscación i de venganzas políticas»[825]. En mayo de 1936 la madre del prisionero aprista Pedro Muñiz envió una carta censurando a las autoridades de la prisión y luego se plantó frente a la penitenciaría protestando ruidosamente porque, decía ella, a su hijo lo estaban matando de hambre[826].

Todas estas intervenciones tuvieron importantes efectos sobre la población carcelaria que, en mi opinión, se reflejaron en el contenido y la naturaleza cambiantes de las cartas que redactaban. La circulación de criminólogos, filántropos, periodistas, autoridades y presos políticos dentro de los penales no solo hizo que el aislamiento de los reclusos fuera virtualmente imposible, sino que además les permitió estar mejor informados tanto acerca de los desarrollos políticos como de los debates públicos sobre las doctrinas

y las prácticas penales. Ambas cosas se reflejaron en las cartas que escribían a periódicos, autoridades y otras personas del exterior.

Numerosas cartas fueron dirigidas a las autoridades de las prisiones y del Estado. La mayoría de ellas, en especial las que enviaban presos individuales, apelaban a la compasión y al humanitarismo de las autoridades describiendo la miserable existencia del preso, la actitud sumisa con la que hacía frente a su encarcelamiento y sus promesas de futura regeneración y arrepentimiento. Un buen ejemplo de ello es la carta escrita por el recluso Manuel Cáceres al coronel César Landázuri, director general de prisiones, en 1924: «Yo soy mi buen Señor, uno de aquellos desgraciados que lejos de la maldad, y más bien arrastrado por esa fuerza fatal del destino cometí un error del cual me hallo sinceramente arrepentido [...] hacen 12 años 11 meses que lloro el error de mi inexperiencia, y experimentando los rigores de la prisión». Había sido sentenciado a 20 años de reclusión en la penitenciaría de Lima. El juez, alegaba, no tuvo en cuenta su joven edad, buenos antecedentes y el estado de ebriedad en que se encontraba en el momento del crimen. Cáceres pedía a Landázuri «con mis lágrimas sinceras» que solicitara a sus amigos en el Gobierno que se le indultara con motivo del aniversario de la Batalla de Ayacucho: «Mis gratitudes serán imperecederas para Ud., mis servicios personales estarán a sus órdenes, si de otro modo más digno no pudiera corresponderle». Poco después se informó a Manuel que efectivamente estaba incluido en la lista de reclusos indultados, pero luego de muchos meses y varias cartas descubrió que nueve otros presos ya habían dejado la penitenciaría en tanto que él seguía esperando. Escribió entonces otra carta que firmó del siguiente modo: «Un sepultado en vida y que vislumbra su resurrección os saluda y os bendice»[827].

Este tono impregnaba numerosas cartas personales dirigidas a las autoridades estatales. Otro preso que solicitó ser trasladado de El Frontón a la penitenciaría se describió a sí mismo como un «desgraciado» y una «víctima del infortunio» hundido en «este piélago de lágrimas». De concederse su pedido, decía, esperaría pacientemente en el panóptico «sin mayores sufrimientos morales que más amargan mi existencia hasta que se produzca mi ansiada libertad»[828]. En 1930, otro preso se dirigió a su «padrino», el ministro de Justicia José Ángel Escalante: «Espero todo bien i todo su apoyo para salir cuanto antes de esta prisión injustificada. Ud. sabe bien querido y respetado padrino [...] que no he cometido un delito, sino que soy víctima de la audacia de una mujer de malos antecedentes, ayudada por un sargento de policía». En este caso el detenido pedía al ministro que intercediera ante el juez y algún amigo abogado para que su caso fuera revisado[829].

Los presos indígenas usaban su adscripción étnica para reforzar ese tono de deferencia y sufrimiento que se consideraba eficaz para conseguir ayuda. Matías Suma, un preso

indígena, escribió al director general de prisiones solicitando libertad condicional: «Su indiscutible superioridad facilitará, un sólido apoyo a los indígenas infelices que nos encontramos en esta prisión, talvez muchos de nosotros, por causas ajenas o injustas»[830]. Mariano Condori, otro indígena que acababa de ser liberado pero carecía de dinero para retornar a su pueblo en Azángaro, Puno, envió una carta al arzobispo de Lima en la que se presentaba a sí mismo como un «humilde indígena vago» y explicaba cómo «mi condición de indígena y la mala situación en que me encuentro me obligan a recurrir a su alta autoridad, para que vele por un pobre que no tiene la culpa de su situación actual». Declaraba además no dominar el idioma español, lo cual hacía que su situación fuera aún más difícil[831]. Estas y otras cartas similares revelan la dimensión en que un tópico común de la retórica indigenista fue usado por los mismos indios para promover sus pedidos: el de la «miserable raza indígena» que, víctima de los abusos y la explotación de los hacendados, autoridades, sacerdotes y otros grupos no indígenas, estaba necesitada de protección y guía. Los presos indígenas, con la probable asesoría y consejo de intermediarios[832], intentaron así obtener alguna ventaja del «indigenismo oficial» del régimen de Leguía[833].

Otros reclusos buscaban subrayar su honestidad y laboriosidad para transmitir una imagen positiva a las autoridades. Dicha estrategia implicaba un deseo de parte de algunos presos de desligarse del «mundo del delito», una actitud consistente con el retrato que presenté en el capítulo 2 de unas clases trabajadoras cada vez más distantes de, y hasta antagónicas con, las clases criminales. Muchos individuos que estrictamente hablando habían cometido un delito, creían que su condición social, cultural y laboral los distinguía de la «verdadera» población criminal. De ahí que ser tratado como un delincuente común, o ser obligado a asociarse con ellos, era una terrible fuente de vergüenza y estigma. Abel León, por ejemplo, no obstante admitir que había cometido un delito sexual, sostuvo que «no soy un asesino ni un criminal vulgar [...] soy un artesano honrado, laborioso, y de antecedentes muy dignos, que con mi trabajo cuotidiano sostenía a mis tiernos hijos, a quienes he dejado con mi prisión en la orfandad más despiadada». León solicitó el indulto, pero este le fue denegado[834]. El preso Isaac Maita y Castillo de hecho mezcló el autorretrato de una persona honesta y diligente con el discurso más omnipresente de la resignación y la sumisión. Maita escribió al presidente Leguía una carta solicitando el indulto. Había sido condenado por homicidio a 12 años en la penitenciaría –un crimen que alegaba no haber cometido– y durante tres años había padecido sufrimientos «como artesano nacional de resignación cristiana» y como hombre «formal, honrado y trabajador sin vicios». Su carta empleó además otro elemento de las estrategias de los presos: la apelación al clientelismo político como forma de dirigirse a las autoridades estatales. Además de subrayar que era un «artesano nacional, sastre, profesor de confección y cortador sobre medida», Maita quiso asegurarse de que el presidente supiera que él era miembro de un club

político leguiísta. Prometía ser un «artesano modelo», pero juraba estar «íntimamente ligado a su muy noble y patriótica labor». Terminaba su carta «implor[ando] una vez más su reconocida benevolencia y filantropía»[835].

Existen fuertes resonancias entre estas distintas formas de dirigirse a las autoridades públicas. Los presos evidentemente preferían aparecer como víctimas resignadas antes que como quejosos, y en lugar de defender sus derechos elegían pedir misericordia, una táctica considerada más idónea puesto que muchas de estas cartas solicitaban el indulto o la libertad condicional. También subrayaban la lealtad, ya fuera la fidelidad personal a un dirigente político u otra más impersonal a los principios de laboriosidad, obediencia y cumplimiento de las leyes; ellos sabían obviamente que las autoridades esperaban que se adhirieran a dichos principios, al menos formalmente. Dado que estas misivas fueron escritas para solicitar aquello que los presos presentaban como dádivas (y las autoridades ciertamente las consideraban así), probablemente hubiera sido imprudente de su parte emplear un lenguaje agresivo y sedicioso. Al leer estas cartas podemos recordar que ellas usualmente revelan aquello que James Scott ha llamado el «discurso público» que el subordinado emplea para transmitir mensajes «en estrecha conformidad con la forma en que el grupo dominante desearía que las cosas fueran»[836].

Mayta no fue excepcional en su apelación a la lealtad política. Este hecho no debería sorprendernos en el contexto de la cultura política peruana durante este período. La naturaleza paternalista y clientelista de dicha cultura ha sido enfatizada por numerosos historiadores. El segundo régimen de Leguía (1919-1930) reforzó esas características con sus métodos fuertemente personalistas y la abrumadora presencia de la adulación como una vía para el ascenso social y político[837]. En efecto, el paternalismo y las relaciones políticas y sociales verticales eran omnipresentes en múltiples formas de interacción y organización social: partidos políticos, sindicatos, relaciones laborales en fábricas y haciendas, educación, estructura familiar y muchas más. Los presos desarrollaron también estrategias de acomodamiento que evidentemente seguían las pautas del clientelismo. Organizaban clubes deportivos, por ejemplo, y nombraban padrinos a las autoridades de la prisión; o escribían poemas, discursos y canciones que interpretaban en ceremonias patrióticas o religiosas. En febrero de 1928, por citar un caso, los presos de Guadalupe organizaron una recepción por el cumpleaños del presidente Leguía. «Reconociendo la autoridad de la ley», dijo el representante de los reclusos, «obedecemos sus mandatos, y desde nuestras celdas, aplaudimos al representante del pueblo peruano [...] Con talento son manejadas hoy las riendas del Estado [...] ¡O señor Leguía!, con perseverancia poco común, y poseedor de una energía a toda prueba, llega ya a la meta de sus patrióticas aspiraciones [...] Él tiene un arma: el carácter. Un escudo: la patria»[838].

Unos cuantos ejemplos ilustrarán las formas en que el clientelismo fue usado en las cartas de los presos. Una misiva firmada por 90 reclusos fue enviada al presidente Leguía en junio de 1929 para felicitarlo por la solución que había alcanzado en la disputa vigente con Chile en torno a los territorios de Tacna y Arica. Luego de las felicitaciones, los presos manifestaron «nuestros más fervientes deseos porque la Divina Providencia le prolongue indefinidamente su inapreciable existencia, a fin de que la Patria pueda aprovechar de sus iniciativas en pro del verdadero progreso y engrandecimiento nacional»[839]. Otra carta colectiva, firmada por 140 presos de la penitenciaría de Lima y que fuera enviada el presidente en mayo de 1930, le expresaba su solidaridad luego de que este sobreviviera a un intento de asesinato: «hacemos el más fervoroso voto porque sigáis al frente de la dirección del Estado i hacemos, así mismo, la protesta de nuestra más leal adhesión a vuestra persona, condenando los atentados que quieran suprimirla»[840]. Después de que Leguía fuera derrocado en agosto de 1930 (y, de hecho, enviado como preso político a la isla San Lorenzo y luego a la penitenciaría), los presos empezaron a enviar cartas similares a las nuevas autoridades del Gobierno. Los presos de la CCV dirigieron una carta al nuevo ministro de Gobierno en la cual manifestaban su regocijo por la recuperación de las «libertades ciudadanas» luego de 11 años de opresión. Culpaban al régimen leguiísta tanto por sus condenas, las cuales eran atribuidas a la corrupción imperante entre los jueces, como por su condición dentro de la prisión, donde eran víctimas de abusos, injusticias y la corrupción generalizada. Los reclusos exigían la formación de una comisión que examinara sus casos[841]. Poco después, una carta colectiva con más de 100 firmas fue enviada al presidente Sánchez Cerro pidiendo que se reconsideraran sus condenas. Los firmantes alegaban que sus confesiones habían sido extraídas con torturas, pero al mismo tiempo se cuidaban de proclamar su remordimiento por las ofensas cometidas[842]. Otro grupo de presos escribió lo siguiente al ministro de Justicia: «¿por qué en esta hora de emancipación social por la que atraviesa el Perú, gracias a la valiente cruzada del bravo militar Luis M. Sánchez Cerro, no se ha pensado en devolver a sus desolados hogares a un buen número de padres de familia, detenidos por delitos de menor cuantía, a los que el antiguo régimen había recluido casi a perpetuidad?». El fenecido Gobierno, agregaban, había sustraído «un buen número de ciudadanos dispuestos a colaborar, bien sea con el arado o con el martillo, símbolo férreo del obrero, y al engrandecimiento de la misma». Los presos solicitaban que se les permitiera unirse con todos los peruanos en el «grito de libertad» promovido por el presidente Sánchez Cerro[843].

No está claro si las autoridades estatales se sentían conmovidas por estas cartas. Dada la falta de iniciativas serias de su parte para mejorar el estado general de las prisiones y las condiciones de vida de los presos, probablemente podemos inferir que dicha estrategia no era particularmente exitosa. Después de todo, ¿qué recibirían a cambio las autoridades o los líderes políticos, más allá de la gratitud de los presos? Resulta

sumamente dudoso, dado el *ethos* político y cultural de la sociedad peruana en este período, que las actitudes paternalistas hacia los prisioneros pudieran haber constituido un activo importante en el capital político de los dirigentes militares o civiles. Según Ángela Ramos, muchas personas se abstenían de intervenir a favor de los presos porque eran «incapaces de darse la menor molestia si no les redunda en algún provecho»[844]. De este modo, a pesar de los esfuerzos efectuados por personas como la misma Ramos, ni la opinión pública ni los funcionarios estatales se sintieron motivados a hacer algo para cambiar la deplorable situación de las cárceles y los presos. Una sociedad autoritaria como la peruana, donde la exclusión política, social y racial de la mayor parte de la población estaba siendo reforzada durante el período de modernización conducido por Leguía, no era un lugar propicio para el desarrollo de un amplio respaldo a la causa de los presos, con lo cual los dirigentes políticos no se sentían obligados a responder a las demandas de los prisioneros.

Pero también se escribieron cartas acusatorias mucho más agresivas en las cuales la postura sumisa y clientelista arriba examinada no estaba presente. En abril de 1929, por ejemplo, tres presos dirigieron una carta a Bernardino León y León, director general de prisiones, denunciando la tortura de presos en la penitenciaría[845]. Otra carta a León y León fue firmada por un gran número de reclusos de la CCV: «nosotros obedecemos las reglas de disciplina; pero los señores empleados, no obstante de castigarnos con subterráneos y celdas establecidas, ahora de una manera arbitraria y abusiva han comenzado por flagelar». Un preso, añadían, estaba atado de pies y manos, desnudo y se le golpeaba con un palo, y con seguridad «los gritos lamentables de dicho compañero se habrán oído hasta la calle». La carta exigía sanciones para los empleados abusivos. León y León la leyó, fue a la prisión y verificó las huellas de la tortura, pero se le dio una explicación: el preso había agredido seriamente a un guardia. Aparentemente no se tomó ninguna otra medida[846].

Los reclusos también enviaban cartas a los periódicos, aunque al parecer solo en situaciones desesperadas debido a las inevitables represalias que las denuncias públicas generaban entre los funcionarios de la cárcel. Los diarios, de otro lado, no siempre eran receptivos a las protestas de los presos. En agosto de 1915, *El Comercio* publicó la carta de un preso de Guadalupe que había pasado ocho meses en la cárcel únicamente porque un policía lo había acusado de insolencia[847]. En septiembre de 1929, cuando un reportero y un fotógrafo de *El Tiempo* visitaron El Frontón, los presos aprovecharon la ocasión para entregarles cartas dirigidas tanto al director del diario como al presidente de la República, pero las autoridades las confiscaron[848]. En noviembre de 1930, un preso cuya carta había sido publicada en el diario *La Libertad* fue castigado con seis días de confinamiento solitario[849]. En julio de 1929, *La Prensa* publicó algunas noticias enviadas por los presos de la penitenciaría con la ayuda de un empleado, quien fue suspendido

por un día al revelarse su colaboración[850]. En mayo de 1931 un recluso escribió a *La Prensa* acusando a los guardias de estar traficando con alcohol, coca y comida. En represalia fue transferido a El Frontón por ser, según el director, «un sujeto indisciplinado e incorregible»[851]. Incluso la amenaza de publicar una carta podía ser riesgosa: un preso envió una nota escrita en deficiente español al inspector de la penitenciaría advirtiéndole que de no suspenderse el castigo que se le había impuesto enviaría una carta a los medios, «hasiendo ver los ausos que se cometen aqui con los reos y hasiendo ber que Ud. es un palo blanco que aqui no manda nada». El nombre de este recluso apareció poco después en una lista de presos del panóptico trasladados a El Frontón[852].

Como ya se ha visto, las continuas visitas y actividades organizadas dentro de las prisiones de Lima, tanto por particulares como por funcionarios estatales, para discutir la reforma del sistema carcelario, fueron haciendo cada vez más evidentes ante los ojos de los presos las flagrantes contradicciones entre el discurso y la realidad en lo que respecta al tratamiento que se les daba. Estas contradicciones fueron luego subrayadas en sus comunicaciones con autoridades tales como el director general de prisiones o el ministro de Justicia. En consecuencia, la inflexión sumisa y clientelista ya no era la única forma de negociar las condiciones de vida dentro de las prisiones con las autoridades superiores. Los presos comenzaron a apropiarse de algunos de los postulados fundamentales de los reformadores penales para así promover sus propios objetivos. Esta apropiación fue, inevitablemente, bastante selectiva. Al igual que en otros casos en los que sectores subalternos subvierten discursos hegemónicos y opresivos, los reclusos pusieron la retórica de la reforma carcelaria de cabeza y comenzaron a transmitir la noción de que si los reformadores y las autoridades hubiesen dedicado más esfuerzos a poner en práctica lo que predicaban, las condiciones de trabajo y de vida dentro de los penales habrían sido bastante diferentes: de hecho, habrían sido más humanitarias.

Unos cuantos ejemplos ilustrarán este proceso. En una carta colectiva dirigida en enero de 1926 al director general de prisiones y firmada por numerosos presos de la penitenciaría, los reclusos denunciaban, luego de la casi inevitable confesión de su resignación, el hecho de que «no existe aquí verdadera *disciplina* considerada en la acepción noble de la palabra». Lo que predominaba era la maldad: «vivimos en pugna entre jefes, empleados y los presos. Para estar tranquilos y gozar de ciertos beneficios y privilegios, hay que pertenecer al grupo maleante de los "soplones"». Los presos exigían a las nuevas autoridades que erradicaran todos los males «desde su raíz», pues de lo contrario «todo *sistema moderno* que se quiera implementar saldrá contaminado de las hierbas malas»[853]. Otra carta colectiva de los presos de El Frontón al presidente Leguía transmitía su gratitud por un proyecto referido a un nuevo reglamento de libertad condicional: semejante ley, decían, «hará cambiar la faz insondable de la

desdicha en que estamos abismados haciéndonos surgir en un ambiente de *readaptación* y acercándonos al *medio social* del que la desgracia nos arrancó»[854]. En una de las numerosas cartas colectivas redactadas después del triunfo de Sánchez Cerro, los reclusos se quejaban del trato inhumano que recibían en la prisión. Semejante abuso, sostenían, «lejos de tender a nuestra *readaptación* al medio social del que jamás debimos salir, nos amarga y nos llena de odio el corazón»[855]. Términos tales como *disciplina*, *sistema moderno*, *readaptación* y *medio social* figuraban de manera destacada en la ideología de la reforma penal en el Perú y en otras sociedades. El uso por parte de los presos de estos enunciados en sus cartas y otras comunicaciones revela el grado en que estaban informados de dichas propuestas y debates; más aún, las utilizaron selectivamente, sin cuestionar todo el espectro de reformas propuestas –algo que hubiera anulado cualquier posibilidad de ser escuchados– y más bien subrayando las contradicciones entre la retórica y la práctica de reformadores y autoridades.

Los presos, por lo tanto, dejaron muy en claro que la forma en que se les trataba no solamente los afectaba como personas y los hacía sufrir, sino que además desmentía todo el proyecto en el que se había embarcado el Gobierno, a saber, la implementación de regímenes penales modernos y científicos que consumaran la transformación o la readaptación de los delincuentes en ciudadanos honestos e industriosos. El abismo que separaba la retórica de la realidad era obvio a ojos de los presos, pero ellos eligieron selectivamente aquellos aspectos del programa reformador que encajaban con su propia agenda. El énfasis que los reformadores ponían en la readaptación a través del trato humanitario, una infraestructura adecuada y, sobre todo, la erradicación de los abusos y las torturas físicas, resultó particularmente atractivo para ellos.

Los presos, en consecuencia, dieron forma a su propio programa de «reforma penal». Me refiero a la formulación, no siempre explícita o sistemática, de un plan comprehensivo sobre cómo debían funcionar las prisiones, algo que siempre había sido una prerrogativa exclusiva de los expertos penales. Se trataba, en efecto, de un gran salto para los reclusos: ellos (o por lo menos algunos de ellos) dejaron atrás tanto la inflexión sumisa tradicionalmente usada en sus solicitudes como los recursos clientelistas de la lealtad política como un medio de alcanzar sus objetivos, pasando más bien a articular su propia plataforma de reforma penal. Este programa apareció de forma fragmentaria en numerosas cartas y, de modo mucho más sistemático, en una carta colectiva firmada en diciembre de 1931 y que significativamente también exigía, entre otras cosas, la remoción de su puesto de director de la escuela del panóptico de Víctor M. Villavicencio, uno de los más prominentes expertos penales de la época. Era como si este hubiese llegado a personificar las incongruencias de la retórica oficial de la reforma penal, razón por la cual los prisioneros deseaban librarse de él al mismo tiempo que esbozaban su propia y distinta agenda reformista[856]. La plataforma presentada en

esta carta era sumamente extensa. Pedían justicia en el cálculo de sus jornales, un punto que había sido planteado una y otra vez por los penólogos desde por lo menos la década de 1860; la eliminación de toda restricción a las visitas; la reglamentación de los procedimientos de la libertad condicional, en especial en lo que respecta a las infracciones y penas que debían ser tomadas en cuenta en la evaluación del Tribunal de Conducta; el suministro de comida, ropa y medicinas apropiadas; la concesión de una mayor libertad para trabajar por cuenta propia, como una suerte de trabajadores libres, para así poder alimentar a sus familias; la eliminación de toda restricción a la venta de bienes manufacturados por ellos; y la contratación de personal femenino para que hagan la inspección a las visitantes mujeres[857].

Algunas de estas propuestas afectaban uno de los aspectos más cruciales de la organización de la vida en la prisión –y en particular en la penitenciaría–, a saber, la organización del trabajo penal. El pedido de justicia en la asignación de sus jornales, junto con la propuesta de que se les diera una mayor libertad para trabajar por cuenta propia y vender irrestrictamente los productos de dicho trabajo –zapatos, muebles, artesanías–, buscaba ofrecer a los presos un mayor grado de control sobre su propio tiempo, trabajo y dinero, minando la explotación que usualmente sufrían a manos de los contratistas privados y los administradores de la prisión. Los restantes puntos de la agenda son reformas humanitarias fundamentales que habrían mejorado dramáticamente sus condiciones de vida: comida, ropa y medicina adecuadas, que eran conspicua y consistentemente deficientes en las prisiones limeñas.

Este fue el plan más ambicioso de reforma carcelaria jamás propuesto por la misma población presidiaria; era casi tan exhaustivo como aquellos diseñados por penólogos y criminólogos a finales de la década de 1920. Aunque los presos, previsiblemente, no consiguieron lo que habían pedido, una plataforma tan ambiciosa era tanto la culminación de un período de creciente conciencia y madurez organizativa e ideológica, como una base para futuras acciones colectivas.

Conclusiones Una serie única de acuarelas pintadas por un preso de El Frontón en 1932 nos ofrece la rara oportunidad de captar la experiencia de la prisión tal como fue percibida por un miembro de la comunidad carcelaria. El artista se llamó Julio Alberto Godínez, quien fuera enviado al Frontón bajo la acusación aparentemente falsa de haber participado en la insurrección aprista de Trujillo de 1932[858]**. Godínez presenta, con una mirada repleta de ironía y sarcasmo, una serie de caricaturas que muestran diversas escenas**

de la vida cotidiana en la isla penal. A diferencia de los retratos de la vida en la cárcel presentados en novelas, poemas, testimonios y pinturas, que tienden a enfatizar el sufrimiento, la crueldad y el dolor, las representaciones de Godínez invitan al espectador de modo nada ambiguo a la risa, aun cuando algunas de las escenas no sean particularmente agradables. Una de ellas, por ejemplo (figura 8), muestra a un grupo de presos gozando de una jarana con guitarra, baile y bebidas, una celebración que sería inconcebible en una institución penal militarizada y opresiva pero que tenía lugar en El Frontón, así como en otras cárceles limeñas, con relativa frecuencia. De hecho, en la imagen la prisión se asemeja a un callejón de cualquiera de los barrios populares de Lima. Otro grupo de imágenes muestra algunos personajes que a estas alturas nos resultarán reconocibles: un par de faites, un «inofensivo haragán» y Valdez, un preso de antecedentes supuestamente decentes y «ahora un miserable harapo, una víctima más de esa alta sociedad» a la cual pertenecía, retratado aquí como mentalmente insano, enfermo y abandonado. Hay también un grupo de caricaturas que ofrecen una mirada sarcástica sobre los presos políticos. «Ocasional Fraternidad» (figura 9) muestra a un preso aprista y otro comunista abrazando a un soldado (al parecer también un prisionero) mientras que un preso común está solo y los observa a cierta distancia. La leyenda de Godínez es bastante reveladora: «El soldado, irónicamente en estos lares, abraza fraternalmente a los ciudadanos de la Patria. Pero la hoz y el martillo y la estrella PAP no abrazan a la Patria...!». El autor parece estar sugiriendo que los delincuentes comunes también formaban parte de la patria, pero que los presos políticos (los «ciudadanos») y los soldados no los consideraban así, una crítica fuerte y directa a la frecuente falta de solidaridad

entre ambos tipos de presos. En otra imagen, un preso, al parecer el mismo Godínez, se muestra completamente indiferente a la actitud militante tanto de apristas como de comunistas (que significativamente marchan en columnas separadas) en tanto que un preso común que lleva una botella de licor y libros parece haberse apropiado de su retórica y postura política y estar presidiendo la marcha. En imágenes sucesivas aparecen otros elementos: presos comunes que se ríen de un vehemente orador aprista y parodian el saludo de ese partido; un preso común que adopta el lenguaje del preso político mientras sirve la ración; y el «confortablemente duro e higiénico dormitorio» de los presos políticos donde las ratas también encuentran algo de comodidad. Fueron también retratados algunos caracteres individuales como Cutipa, un ratero negro, y Zapata, un asesino múltiple, «único caso que ha ocupado detenidamente a criminólogos peruanos». Por último, Godínez presenta otras tres escenas sumamente reveladoras: una de ellas muestra a un guardia (Saca Ronchas) como un oficial ebrio y abusivo que impone su autoridad en forma brutal; la segunda se refiere a las relaciones homosexuales como «volcánicos idilios» que con frecuencia resultan en «lances de honor» entre «depravados galanes»; y la tercera (figura 10) muestra a un preso orinando a espaldas de un guardia dormido, una escena que muestra que la «eficiente vigilancia» y las «manifestaciones de respeto» hacia los guardias, es decir, los principios de orden y disciplina en la prisión, han quedado completamente erosionados.

Figura 8
Una jarana en El Frontón



Autor: J. A. Godínez. Reimpreso con permiso de la viuda del artista, Lilia Rengifo de Godínez, y sus hijos Alberto y Luis Godínez.

Figura 9



Ocasional fraternidad

Autor: J. A. Godínez. Reimpreso con permiso de la viuda del artista, Lilia Rengifo de Godínez, y sus hijos Alberto y Luis Godínez.

Figura 10
Eficiente vigilancia



Autor: J. A. Godínez. Reimpreso con permiso de la viuda del artista, Lilia Rengifo de Godínez, y sus hijos Alberto y Luis Godínez.

Los dibujos de Godínez ilustran las vicisitudes del orden consuetudinario en El Frontón, un orden en el cual una mezcla de despotismo y corrupción, lenidad y abusos, arbitrariedad y sufrimiento regía el mundo en el cual vivían los reclusos. El surgimiento de este orden, en parte debido a las acciones de los mismos presos, fue una de las características más visibles de las cárceles de Lima. Ese «otro» orden tuvo su origen en múltiples factores y desempeñó distintas funciones. Por un lado, ayudó a los reclusos a superar algunos de los elementos más opresivos de las instituciones penales, pero, al mismo tiempo, perpetuó la arbitrariedad y la corrupción. El resultado fue un entorno que en última instancia ayudó a conservar y reforzar la naturaleza excluyente y autoritaria de la sociedad peruana pero que, al mismo tiempo, reveló la porosidad y las ambigüedades de los mecanismos de control social impuestos por el Estado.

Las cárceles de todo el mundo gozan de la reputación, nunca desmentida, de ser lugares sórdidos donde se perpetúa el sufrimiento humano. Los estudios sobre la historia y funcionamiento de las prisiones tienden a confirmar esta imagen. «Lo único peor era la muerte», «tumbas de los vivos» o «peor que la esclavitud»: estas son algunas de las etiquetas con que las cárceles han sido presentadas en la bibliografía académica[859]. Imágenes similares surgen del examen del funcionamiento de las prisiones de Lima entre 1850 y 1935. Pero confirmar esto añade poco a nuestra comprensión de la historia de las instituciones de confinamiento. Las cárceles merecen estudiarse porque, entre otras cosas, ellas desvelan los valores y las obsesiones de una sociedad, las formas en que el poder y la dominación se ejercen y se cuestionan, las conexiones entre los mandatos legales y los valores culturales y, por último, la relación entre políticas estatales y los ciudadanos comunes y corrientes. Mi reconstrucción de la historia de las

prisiones de Lima a lo largo de 85 años de cambios políticos y sociales permitió revisitar una serie de cuestiones relacionadas con el papel que las instituciones penales tienen en la conservación del orden social y político. Desde el punto de vista de los supuestos objetivos del encarcelamiento y la reforma penal, la imagen dominante es la del fracaso. El Estado peruano no logró implementar lo que había sido propuesto y adoptado oficialmente desde mediados del siglo XIX como la solución necesaria, científica, humanitaria y racional al problema del delito y el desorden social: la erección de instituciones modernas de confinamiento que permitirían alcanzar el objetivo de transformar a los delincuentes en ciudadanos honestos, industriosos y respetuosos de la ley. Se suponía que dicha transformación sería llevada a cabo por un régimen de trabajo riguroso y metódico, unas reglas estrictas de silencio y obediencia, la combinación de recompensas y castigos, el trato humanitario, la persuasión moral y la adecuación de la pena a la individualidad del infractor. Lo cierto es que ese programa de «redención» del delincuente no fracasó: en realidad jamás fue implementado. Mejor dicho: se lo pervirtió desde el primer momento. Lo que debe explicarse, entonces, no es el fracaso de las prisiones en transformar a los criminales sino el del Estado en transformar las prisiones implementando lo que los códigos, los reglamentos de las cárceles y las doctrinas penales dictaminaban. Aunque no hay ninguna necesidad de lamentar dicho fracaso, sí vale la pena explorar las causas de ese desenlace.

Este libro ha identificado por lo menos tres elementos que ayudan a explicar la realidad de las prisiones de Lima en el período estudiado: en primer lugar, la incapacidad del Estado peruano para hacer frente a los desafíos administrativos que implicaba la implementación de un programa exhaustivo y global de reforma carcelaria, defectos que iban desde la insuficiencia fiscal a la corrupción y de la falta de personal adecuado a una infraestructura defectuosa; segundo, las diversas estrategias empleadas por los presos para desafiar la imposición de formas de control y disciplina más rígidas en las cárceles y para crear formas proactivas de negociación y resistencia; tercero, y tal vez lo más importante, la naturaleza autoritaria y excluyente del proceso de modernización y la omnipresencia de formas tradicionales de dominación social. El período entre las décadas de 1850 y 1930 comprendió una serie de cambios dramáticos en la sociedad peruana que usualmente son agrupados bajo el nombre de modernización. Este no fue ciertamente un proceso fluido y continuo, pues afectó a algunas regiones geográficas, sectores económicos, grupos sociales y áreas de las relaciones entre Estado y sociedad más que a otras. El nacimiento del Perú moderno fue un proceso que reforzó diversas formas de marginación social, étnica, de género y regional. Estos no eran simplemente los residuos de épocas pasadas sino, por el contrario, componentes centrales del proceso de modernización. De este modo, la persistente exclusión de una gran mayoría de la población del ejercicio de los derechos civiles y la participación política constituye el

telón de fondo del régimen oligárquico que condujo al Perú al siglo XX y a las primeras etapas de la modernización capitalista.

Es en este contexto de una cultura política excluyente y del reforzamiento de prácticas sociales autoritarias que debemos situar la historia de las prisiones de Lima. Las propuestas para la erección de una red de instituciones modernas que reemplazaran a las cárceles viejas, ineficientes e inhumanas, lanzadas ya en la década de 1850, siguieron apareciendo (con un entusiasmo aparentemente decreciente) en las décadas posteriores a la inauguración de la penitenciaría en 1862 y recibieron un nuevo impulso en la década de 1920 bajo impulsos doctrinarios distintos. Pero, más allá del modelo específico propuesto en el plan penal –el modelo congregado de reclusión penitenciaria, el régimen más rígido de Filadelfia o el llamado sistema progresivo empleado en el Reformatorio de Elmira–, estas propuestas implicaban que los delincuentes podían ser reformados, que debían ser sometidos a un tratamiento de rehabilitación diseñado por expertos científicos y que el Estado y la sociedad debían verlos con compasión y humanitarismo, no con odio y aborrecimiento.

Estos tres elementos están en las antípodas de la estructura social y cultural dominante de la sociedad peruana durante ese período. Las imágenes de los criminales estuvieron dominadas por la noción de que eran personas que no merecían ni compasión alguna ni un trato humanitario (para no hablar de sus derechos civiles) sino un severo castigo o, cuando mucho, la indiferencia. En este contexto, exigir, como lo hacían las doctrinas penales, que se invirtiera capital económico y político en la rehabilitación de los delincuentes tenía inevitablemente que generar eclecticismo y apatía. Después de todo, la mayoría de los grupos subordinados, incluyendo a menores de edad, trabajadores, mujeres, empleadas domésticas y estudiantes, eran tratados con fuertes dosis de violencia y despotismo.

La falta de correspondencia entre la teoría y la práctica penales se relaciona también con un rasgo prominente de la historia intelectual peruana. Como Carl Herbold correctamente señalase, los debates intelectuales durante el período aquí examinado se caracterizaron por ser de naturaleza visiblemente retórica y formalista. La discusión de las políticas sociales se llevaba a cabo, por lo general, con muy poca consideración por la aplicabilidad o el carácter práctico de las ideas debatidas[860]. Muchas propuestas se veían bien sobre el papel, pero su implementación careció de consistencia. En el caso de la criminología y la penología científicas, la distancia entre la teoría y la práctica era bastante marcada. «A las abstracciones jurídicas debe suceder el laboratorio, la investigación en cárceles y seminarios. Solo en esa forma puede avanzar la ciencia criminal peruana», sentenciaba Víctor M. Villavicencio en 1930[861]. Las investigaciones

guiadas por la llamada «ciencia del criminal» tendían a ser defectuosas, convirtiendo el debate doctrinario sobre el delito y el castigo en un ejercicio generalmente vacuo[862].

No fueron la ciencia y el humanitarismo los que guiaron la aplicación del castigo en general y del encarcelamiento en particular, sino una serie de imágenes y representaciones del delito que explicaban las conductas ilegales como si fueran el resultado de la degeneración moral de los malhechores. Esta construcción política y cultural de las clases delictivas habría de configurar no solo el trato que recibían en prisión sino también el mismísimo encuentro inicial entre ellas y el brazo de la ley: el arresto y el encarcelamiento de personas (usualmente pertenecientes a las clases populares) sospechosas de ser delincuentes. La policía, una de las instituciones centrales de las sociedades modernas, tuvo un papel crucial en el diseño de las fronteras moral, cultural y política de Lima en este período. La policía fue uno de los brazos más visibles del Estado y probablemente el que más se inmiscuía en la vida de los ciudadanos ordinarios. El uso difundido del castigo corporal, la arbitrariedad de los patrones de arresto y el desdén por los derechos más elementales de quienes caían bajo su esfera de acción, revelan todos ellos el persistente papel de la policía como una institución generadora de injusticia y desigualdad. Previsiblemente, las nociones desplegadas por la policía respecto al tratamiento «adecuado» para los delincuentes fueron compartidas por otras instituciones estatales, sobre todo por las cárceles, como vimos en capítulos anteriores.

Pese a todo, los presos no fueron víctimas pasivas de su destino. Ellos respondieron de múltiples formas: se fugaban y amotinaban; mostraban un acatamiento estratégico de las reglas de la prisión; recurrían a diversas formas de protesta individual y colectiva; empleaban relaciones de patrón/cliente, así como formas más afirmativas para expresar sus demandas; construyeron una rica y compleja subcultura carcelaria; y participaron activamente en lo que he llamado el orden consuetudinario dentro de la prisión. Los presos aprovecharon la implementación defectuosa de las políticas penales para construir una serie de arreglos informales e ilegales que les permitieron escapar a algunos de los aspectos más opresivos de la vida en la prisión y conservar cierto grado de autonomía dentro de la estructura opresiva general del penal. Este orden fue frágil y de doble filo, no redujo la vulnerabilidad esencial de los presos, no incluía a todos ellos ni tampoco a toda la administración de la prisión, no beneficiaba (o perjudicaba) a todos por igual y a menudo fomentaba divisiones internas y exacerbaba los antagonismos entre los reclusos. El orden consuetudinario no eliminó la corrupción, la explotación, el castigo corporal y las penurias de la vida carcelaria. Al mismo tiempo, y de modo aún más importante, fortaleció el orden institucional general de la prisión, que de otro modo habría quedado expuesto a niveles más altos de tensión. Pero dada la permanente posición subordinada en que tenían que operar los reclusos, la construcción de ese

orden refleja su habilidad para evadir las reglas, incrementar su capacidad de negociación y superar los intermitentes esfuerzos hechos por imponer regímenes penales más rígidos. Sin embargo, su éxito en adaptarse al orden consuetudinario –que les permitía, por ejemplo, complementar su dieta, acumular dinero, mantener el contacto con el mundo externo y generar sociedades y relaciones humanas dentro de la prisión– influyó en cierta medida en las respuestas que las autoridades estatales dieron a las realidades y necesidades de las prisiones. En virtud de los niveles relativamente moderados de abierto desafío mostrados por la población de las cárceles limeñas, el Gobierno no se vio obligado a invertir montos significativos de capital financiero y político en mejorar la situación de los presos y las prisiones.

La presencia de presos políticos subraya las contradicciones y las ambigüedades del accionar de los reclusos. Ellos llevaron consigo un arsenal de armas políticas e ideológicas –sobre todo en las décadas de 1920 y 1930– que ayudaron a configurar las estrategias que los presos comunes desarrollaron contra las autoridades estatales, incluyendo la acción colectiva, los motines y otras formas de protesta. Los presos políticos emplearon, de forma mucho más decidida, un lenguaje de derechos que definitivamente tuvo un impacto sobre las relaciones entre autoridades y reclusos. Pero esto rara vez se plasmó en un compromiso por mejorar las prisiones o defender los derechos de los reos una vez que los presos políticos dejaban la prisión y, en no pocos casos, se convertían en importantes autoridades estatales. Cuando escribían sobre su experiencia en la prisión, lo hacían para resaltar su experiencia personal y denunciar sus propias condiciones de encarcelamiento, y si bien incluían a los presos comunes en su narrativa, por lo general lo hacían en un tono distante y desdeñoso, cuando no racista. Como hemos visto a lo largo de este libro, los reclusos eran tratados por la policía y por el sistema de justicia criminal como ciudadanos de segunda clase, eran privados de sus derechos elementales y se los forzaba a soportar condiciones usualmente subhumanas en las prisiones de Lima. Las experiencias a veces terribles, de esas que cambian la vida, que los presos políticos enfrentaron, no generaron en ellos una preocupación seria en torno a la situación carcelaria y los delincuentes comunes con quienes se topaban y trababan amistad y a quienes, a veces, ayudaban, buscaban como clientes políticos y, desafortunadamente, también, por lo general, aborrecían.

Aunque la implementación de los regímenes penales modernos fue, en el mejor de los casos, fragmentaria y contradictoria, las prisiones existentes desempeñaron a pesar de todo una serie de funciones que las hicieron indispensables para el Estado. Lo más obvio era que las cárceles servían para retirar de circulación a personas supuestamente peligrosas e indeseables y someterlas a un castigo. En cuanto tal, las autoridades esperaban que el encarcelamiento sirviera como un disuasivo para los posibles delincuentes. Las prisiones también servían como una suerte de alivio psicológico para

quienes veían su vida amenazada por las olas delictivas (reales o imaginadas). Un aspecto más utilitario de la cárcel concierne a los beneficios que los empresarios privados y el Estado obtenían de la explotación de la mano de obra presidiaria: contratistas privados que manejaban los talleres de la penitenciaría, tiendas elegantes que vendían zapatos fabricados por los presos de Guadalupe y el uso que el Estado hacía de la mano de obra barata en la construcción de carreteras son algunos ejemplos de las múltiples formas en que las prisiones fueron usadas como fuentes de ganancias.

La cárcel, en el Perú como en otros países, refleja el paisaje social y humano de la sociedad que las cobija. Los penales de Lima congregaban, como quizás ninguna otra institución social excepto el ejército, a personas provenientes de casi todo el país y de antecedentes sociales y raciales sumamente diversos. También reproducían los patrones sociales y culturales existentes: las jerarquías basadas en el género, la clase y el estatus racial fueron reforzadas y ampliadas dentro del mundo de la prisión. Las nociones de la superioridad de los criollos sobre los serranos y la exhibición de formas particulares de entender la hombría entre los faites, por ejemplo, resonaban tanto dentro como fuera de ella. Las cárceles reflejaron los conflictos, las tensiones y las miserias que afligían a la sociedad peruana, pero también ayudaron a darle forma. Ellas revelan la naturaleza excluyente de la sociedad y la marginación de los grupos subalternos impuesta y reforzada por el Estado. Las prisiones de Lima no produjeron ciudadanos honestos; peor aún, ni siquiera lo intentaron. En lugar de ello, sometieron a los presos a una marginación aún mayor, dejando tras de sí un legado de desprecio y exclusión que lamentablemente todavía perdura.

Lista de Tablas Lista de tablas

Tabla 3.1 Arrestos policiales en Lima, 1890-1927 102

Tabla 3.2 Arrestos en Lima por ocupaciones, 1892-1921 117

Tabla 3.3 Arrestos en Lima por tipo de ofensas, 1892-1927 119

Tabla 3.4 Destino final de las personas arrestadas, 1877-1921 122

Tabla 5.1 Número de presos ingresados anualmente a la cárcel de Guadalupe, 1870-1889 161

Tabla 5.2 Presos en la penitenciaría de Lima. Distribución racial 163

Tabla 5.3 Presos en la penitenciaría de Lima. Distribución racial (porcentajes) 164

Tabla 5.4 Presos en la cárcel de Guadalupe, 1870-1915. Composición racial 164

Tabla 5.5 Presos en la penitenciaría de Lima. Ocupaciones 165

Tabla 5.6 Presos en la Cárcel de Guadalupe, 1870-1915. Ocupaciones 165

Tabla 5.7 Presos en la penitenciaría de Lima. Edades 166

Tabla 5.8 Presos en la cárcel de Guadalupe, 1870-1915. Edades 166

Tabla 5.9 Presos en la penitenciaría de Lima, 1862-1890. Delitos 167

Tabla 5.10 Presos en la isla penal de El Frontón, 1922. Delitos 168

Tabla 5.11 Presos en la penitenciaría de Lima. Origen regional (lugar de la sentencia) 168

Referencias Los documentos de archivo y las fuentes hemerográficas están citados en las notas al pie de página. Aquí se incluye la lista de memorias y las referencias de libros, folletos y tesis citadas en el libro.

1.Memorias

1.1Del ministro de Justicia 1872 *Memoria que debió presentar el Ministro de Estado en el despacho de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia D. Melchor T. García al Congreso Nacional de 1872*. Lima: Imprenta de la Sociedad, 1872.

1890 *Memoria que presenta el Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia al Congreso Ordinario de 1890*. Lima: Imprenta de Torres Aguirre, 1890.

1891 *Memoria que presenta el Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia al Congreso Ordinario de 1891*. Lima: Imprenta de El Diario, 1891.

1892 *Memoria presentada por el Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia al Congreso Ordinario de 1892*. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1892.

1894 *Memoria presentada por el Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia al Congreso Ordinario de 1894*. Lima: Imprenta El Rímac, 1894.

1896 *Memoria presentada por el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción al Congreso Ordinario de 1896*. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1896.

1897 *Memoria presentada por el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción al Congreso Ordinario de 1897*. Lima: Imprenta La Industria, 1897.

1900 *Memoria que presenta el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción al Congreso Ordinario de 1900*. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1900.

1901 *Memoria que presenta el Ministro de Justicia, Instrucción y Culto al Congreso Ordinario de 1901*. Lima: Imprenta del Estado, 1901.

1902 *Memoria que presenta el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción al Congreso Ordinario de 1902*. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1902.

1903 *Memoria que presenta el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción al Congreso Ordinario de 1903*. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1903.

1904 *Memoria que presenta el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción al Congreso Ordinario de 1904*. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1904.

1905 *Memoria presentada por el Ministro de Justicia, Instrucción y Culto Dr. D. Jorge Polar al Congreso Ordinario de 1905*. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1905.

1906 *Memoria presentada por el Ministro de Justicia, Instrucción y Culto Dr. D. Jorge Polar al Congreso Ordinario de 1906*. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1906.

1907 *Memoria presentada por el Ministro de Justicia, Instrucción y Culto Dr. Carlos A. Washburn al Congreso Ordinario de 1907*. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1907.

1908 *Memoria presentada por el Ministro de Justicia, Instrucción y Culto Dr. D. Carlos A. Washburn al Congreso Ordinario de 1908*, vol. 1, Justicia. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1908.

1909 *Memoria presentada por el Ministro de Justicia, Instrucción y Culto Dr. D. Carlos A. Washburn al Congreso Ordinario de 1909*. Lima: La Oficina Nacional, 1910.

1910 *Memoria presentada por el Ministro de Justicia, Instrucción y Culto Sr. Dr. D. Antonio Flores al Congreso Ordinario de 1910*, vol. 1, Justicia. Lima: Tipografía La Revista, 1910.

1915 *Memoria presentada por el Ministro de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia Dr. Don Plácido Jiménez al Congreso Ordinario de 1915*. Lima: Imprenta del Estado, 1915.

1916 *Memoria que el Ministro de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia Dr. D. Wenceslao Valera presenta al Congreso Ordinario de 1916*, 2 vols. Lima: Empresa Tipográfica Lártiga, 1916.

1918 *Memoria que el Ministro de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia presenta al Congreso Ordinario de 1918*. Lima: Oficina Tipográfica La Opinión Nacional, 1918.

1921 *Memoria que el Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia Dr. D. Óscar C. Barrón presenta al Congreso Ordinario de 1921*. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1921.

1927 *Memoria que el Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia Dr. Pedro Olivera presenta al Congreso Ordinario de 1927*. Lima: Casa Editora La Opinión Nacional, 1928.

1929 *Memoria que el Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia Dr. J. Matías León presenta al Congreso Ordinario de 1929*. Lima: Imprenta Larrabure & Ramírez, 1929.

1.2Del ministro de Gobierno 1860 *Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno, Obras Públicas y Policía presenta al Congreso Ordinario de 1860*. Lima: Tip. de J. Montoya, 1860.

1862 *Memoria que el Ministro de Gobierno, Policía y Obras Públicas presenta al Congreso Nacional de 1862*. Lima: Imp. de la Época, 1862.

1867 *Memoria que el Secretario de Estado en el despacho de Gobierno, Policía y Obras Públicas presenta al Congreso Constituyente de 1867*. Lima: Imp. del Estado, 1867.

1905 *Memoria del Ministro de Gobierno, Policía, Correos y Telégrafos, 1905*. Lima: Imp. del Estado, 1905.

1907 *Memoria del Ministro de Gobierno, Policía, Correos y Telégrafos, 1907*. Lima: Imp. de El Lucero, 1907.

1913 *Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía presenta al Congreso Ordinario de 1913*. Lima: Of. Tip. de La Opinión Nacional, 1913.

1916 *Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía presenta al Congreso Ordinario de 1916*. Lima: Imp. del Estado, 1916.

1920 *Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía Dr. Germán Leguía y Martínez presenta al Congreso Ordinario de 1920*. Lima: Imp. del Estado, 1920.

1923 *Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía Dr. Pedro José Rada y Gamio presenta al Congreso Ordinario de 1923*. Lima: Imp. del Estado, 1923.

1.3Del director de la penitenciaría de Lima 1868 «Memoria que presenta el director de la penitenciaría al Ministro del Ramo», 21 de julio de 1868. AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, ff. 246-258.

1876 «Memoria del director de la penitenciaría de Lima». AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.2, ff. 405-423.

1890 «Memoria presentada por el Presidente de la Junta Inspectora del Panóptico, Dr. D. Augusto S. Albarracín al Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia», en Memoria, Justicia, 1890.

1891 «Memoria que presenta el Señor Coronel D. José Rosendo Samanez, Director de la Penitenciaría», en Memoria, Justicia, 1891.

1892 «Memoria que presenta el Coronel Don José R. Samanez, Director de la Penitenciaría», en Memoria, Justicia, 1892.

1896 «Memoria que presenta el Señor Dr. Dn. Juan José Calle, Director de la Penitenciaría», en Memoria, Justicia, 1896.

1897 «Memoria que presenta el Director de la Penitenciaría Sr. Manuel Panizo y Zárate», en Memoria, Justicia, 1897.

1900 «Memoria que presenta el director del Panóptico de Lima, D. Manuel Panizo y Zárate al Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción», en Memoria, Justicia, 1900.

1901 «Memoria del director de la penitenciaría de Lima». AGN, MJ, 3.20.3.3.1.7.1, ff. 303-08, 31 de mayo de 1901.

1903 «Memoria del Director del Panóptico, don Manuel Panizo y Zárate», en Memoria, Justicia, 1903.

1905 «Memoria que el director de la Penitenciaría de Lima presenta al señor Ministro de Justicia», en Memoria, Justicia, 1905.

1906 «Memoria que el Director del Panóptico eleva al Ministerio de Justicia», en Memoria, Justicia, 1906.

1907 «Memoria presentada por el Director del Panóptico de Lima, Coronel D. Pedro Portillo, al Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto», en Memoria, Justicia, 1907.

1908 «Memoria presentada por el Director del Panóptico de Lima Coronel Pedro Portillo, al Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto en el año de 1908», en Memoria, Justicia, 1908.

1909 «Memoria del director de la penitenciaría», en Memoria, Justicia, 1909.

1916 «Memoria que el Director de la Penitenciaría, señor Don Ramón Irigoyen, presenta al señor Ministro de Justicia», en Memoria, Justicia, 1916.

1921 «Memoria presentada por el Director de la Penitenciaría de Lima, Señor Hermilio Higueras, al Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto», en Memoria, Justicia, 1921.

1925 *Memoria presentada por el director de la Penitenciaría de Lima Sr. Hermilio Higueras al Ministerio de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia*. Lima: Talleres Tipográficos de la Penitenciaría, 1925.

1926 *Memoria presentada por el director de la Penitenciaría Central de Lima Sr. Jesús A. Larco, al Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto*. Lima: Talleres Gráficos de la Penitenciaría, 1927.

1927 «Memoria del director de la penitenciaría», en Memoria, Justicia, 1927.

1.4Del prefecto y subprefecto de Lima 1892 «Memoria del Subprefecto e Intendente de Policía de Lima», en *Memoria del Prefecto del Departamento de Lima Sr. D. Pedro José Zavala*. Lima: Imp. del Estado, 1892.

1893 *Memoria del Prefecto del Departamento de Lima Coronel Pedro E. Muñiz*. Lima: Imp. del Universo, 1893.

1895 *Memoria del Subprefecto e Intendente de Policía de Lima, Sr. Coronel Gonzalo Tirado*. Lima: Imp. del Estado, 1895.

1925 *Memoria que presenta al Supremo Gobierno el Prefecto de Lima Coronel César Zorrilla Luján. Años 1924-25.* Lima: Imp. Enrique Rávago Velarde, 1925.

1.5De otras autoridades 1888 Concejo Provincial del Callao, *Memoria del alcalde Wenceslao Venegas (1887).* Lima: Imprenta de Gómez y Ledesma, 1888.

1896 «Memoria leída por el Pdte. de la Ilustrísima Corte Superior de Lima, el día de la apertura del nuevo año judicial», en Memoria, Justicia, 1896.

1897 «Memoria leída por el Presidente de la Ilustrísima Corte Superior de Lima en la ceremonia de apertura del año judicial de 1897», en Memoria, Justicia, 1897.

1905 «Memoria del Presidente de la Corte Superior de Lima, 1905», en Memoria, Justicia, 1905.

1907 «Memoria leída por el Presidente de la Ilustrísima Corte Superior Señor Doctor don Manuel A. Puente Arnao, en la apertura del año judicial de 1907», *El Derecho*, XII, 1907.

1918 «Memoria del Presidente de la Corte Superior de Lima en la apertura del año judicial de 1918», en Memoria, Justicia, 1918.

1922 *Colonia Penal El Frontón. Memoria presentada por el Director, Sr. Manuel Hermilio Higueras al Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto, 1922*. Lima: Litografía e Imprenta T. Scheuch, 1923.

1928 *Memoria del Director General de la Guardia Civil y Policía General, Pedro P. Martínez correspondiente al año 1927 y primer semestre de 1928*. Lima: Talleres Gráficos de La Revista, 1928.

2.Referencias bibliográficas

Aguirre, Carlos. «Violencia, castigo y control social. Esclavos y panaderías en Lima, siglo XIX», *Pasado y Presente*, 1, 1, 1988, 27-37.

—«Disciplina, castigo y control social. Conductas sociales y mecanismos punitivos, Lima, 1821-1868». Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, 1990.

—«Patrones, esclavos, y sirvientes domésticos en Lima, 1800-1860», en Pilar Gonzalbo y Cecilia Rabell, eds. *Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica*. México: El Colegio de México, 1996, 401-422.

—«The Lima Penitentiary and the Modernization of Criminal Justice in Nineteenth-Century Peru», en Ricardo Salvatore y Carlos Aguirre, eds. *The Birth of the Penitentiary in Latin America*, 44-77.

—«Delito, raza y cultura: el desarrollo de la criminología en el Perú (1890-1930)», *Diálogos en Historia*, 2, 2000, 179-206.

—«Disputed Views of Incarceration in Lima, 1890-1930: The Prisoners' Agenda for Prison Reform», en Ricardo Salvatore, Carlos Aguirre y Gilbert Joseph, eds. *Crime and Punishment in Latin America. Law and Society since Colonial Times*. Durham: Duke University Press, 2001, 342-368.

—«Mujeres delincuentes, prácticas penales, y servidumbre doméstica en Lima, 1862-1930», en Scarlett O'Phelan *et al.*, comps. *Familia y vida cotidiana en América Latina, siglos XVIII-XX*. Lima: IFEA *Instituto Riva Agüero* Pontificia Universidad Católica, 2003, 203-226.

Alegre y Pacheco, Marino C. *Los delincuentes tatuados de la penitenciaría nacional*. Lima: Tipografía y encuadernación de la penitenciaría, 1917.

Alegría, Ciro. «Duelo de caballeros», en *Relatos*. Madrid: Alianza Editorial, 1983, 279-292.

Alexander, Alberto. *Los problemas urbanos de Lima y su futuro*. Lima: s. p. i., 1927.

Aljovín, Cristóbal. *Caudillos y constituciones. Perú: 1821-1845*. Lima: Fondo de Cultura Económica / Instituto Riva Agüero, 2000.

Altmann Smythe, Julio. *El problema sexual en los establecimientos penales*. Lima: Sanmartí y Cía., 1931.

—«Eugenesia y criminalidad», *Higiene Social*, 1, 1, 1933.

—«La esterilización en la lucha contra el delito», *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*, 1, 1934.

—*Reseña histórica de la evolución del derecho penal, con conclusiones sobre la futura política criminal del Perú*. Lima: Sanmartí y Cía., 1944.

Arnold, David. «The Colonial Prison. Power, Knowledge and Penology in Nineteenth-Century India», *Subaltern Studies*, 8, 1994, 148-187.

Arona, Juan de (Pedro Paz Soldán y Unanue). *La inmigración en el Perú*. Lima: Imprenta Universo, 1891.

Arrús, Óscar. *Las razas china e india en el Perú. Disertación leída en la biblioteca científico-literaria del Callao*. Callao: Imprenta del Callao, 1906.

Avendaño, Leonidas. «La reforma de la legislación penal», *La Crónica Médica*, XLI, 1924.

Balbín, Eduardo Ismael. «El matrimonio y la eugenesia», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Medicina, 1929.

Bambarén, Carlos. *Sobre organización y fines del Instituto de Criminología*. Lima: Imprenta Enrique Lulli, 1945.

Barreda, Felipe. «La asistencia pública y el pauperismo», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Ciencias Políticas y Administrativas, s. f. [c. 1905-1908].

Barros, Óscar César. «Aptitud de nuestra raza para el trabajo», tesis doctoral, Universidad de San Marcos, Ciencias Políticas y Administrativas, 1899.

Bailey, Victor. «The Fabrication of Deviance: "Dangerous Classes" and "Criminal Classes" in Victorian England», en John Rule y Robert Malcolmson, eds. *Protest and Survival. Essays for E. P. Thompson*. Nueva York: The New Press, 1993, 221-256.

Barbagelata, José y Juan Bromley. *Desarrollo urbano de Lima: apuntes históricos*. Lima: Imprenta Lumen, 1945.

Barrows, Susanna. *Distorting Mirrors: Visions of the Crowd in late Nineteenth-Century France*. New Haven: Yale University Press, 1981.

Basadre, Jorge. *La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú*. Lima: Imprenta A. J. Rivas Berrio, 1929.

—*La vida y la historia. Ensayos sobre personas, lugares y problemas*. Lima: Banco Industrial del Perú, 1975.

—*Historia de la República del Perú*, 7.ª ed. Lima: Editorial Universitaria, 1983, 11 vols.

Bertillon, Alphonse de. *Instructions for Taking Descriptions for the Identification of Criminals and Others by the Means of Anthropometric Indications*. Chicago: American Bertillon Prison Bureau, 1889.

Bierne, Piers. *Inventing Criminology. Essays on the Rise of «Homo Criminalis»*. Albany: SUNY Press, 1993.

Blanchard, Peter. *The Origins of the Peruvian Labor Movement, 1883-1919*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1982.

Boies, Henry M. *The Science of Penology. The Defense of Society Against Crime*. Nueva York y Londres: G. P. Putnam's Sons, 1901.

Boisset, Felipe M. *El problema racial en el Perú (o el peligro de la raza amarilla)*. Lima: Empresa Tipográfica Unión, 1919.

Bonilla, Heraclio. «Peru and Bolivia from Independence to the War of the Pacific», en Leslie Bethell, ed. *The Cambridge History of Latin America*, vol. 3. Nueva York: Cambridge University Press, 1985, 539-582.

—*Guano y burguesía en el Perú*, 3.ª ed. Quito: Flacso, 1994.

Buffington, Robert. *Criminal and Citizen in Modern Mexico*. Lincoln: University of Nebraska Press, 2000.

Buntman, Fran Lisa. *Robben Island and Prisoner Resistance to Apartheid.* Nueva York: Cambridge University Press, 2003.

Burga, Manuel y Alberto Flores Galindo. *Apogeo y crisis de la República Aristocrática*. Lima: Editora Rikchay Perú, 1979.

Calderón, Julián. «La defensa social, ¿justifica la pena de muerte?», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Derecho, 1899.

—*Realidad del tipo criminal*. Lima: Imprenta Comercial de H. La Rosa, 1904.

Calle, Juan José, ed. *Código Penal. Ley No. 4868*. Lima: Librería e Imprenta Gil, 1924.

Calle, Juan José *et al.* «Informe que la Comisión encargada de examinar el estado administrativo y técnico de la penitenciaría de Lima, ha presentado al Ministerio de Justicia», *Revista del Foro* VII, 1920, 341-382; y VIII, 1921,149-162, 215-231.

Capelo, Joaquín. *Sociología de Lima*, 4 vols. Lima: Imprenta Masías, 1895-1902.

Carrefiello, Susan B. *The Tombs of the Living: Prisons and Prison Reform in Liberal Italy*. Nueva York: P. Lang, 1998.

Carrera, Eudocio. *El gran Dr. Copaiba. Protomédico de la Lima jaranera*. Lima: Sanmartí y Cía., 1943.

Casanova, Juan Norberto. *Ensayo sobre la industria algodonera en el Perú*. Lima: Imprenta de José Masías, 1849.

Castañeda y Álvarez, A. «El alcoholismo en Lima bajo el punto de vista médico-social», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Medicina, 1897.

Castillo, Luciano. «Una institución que debe desaparecer definitivamente de los sistemas penales actuales: la pena de muerte», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Derecho, 1927.

Castro Fernandini, Alberto. *Breve estudio sobre el delito de rebelión en el Perú y de sus sistemas penales*. Lima: Imprenta del Centro Editorial, 1916.

Cedano, Carlos A. «Estudios sobre la criminalidad», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Derecho, 1901.

Centeno, Miguel Ángel. *Blood and Debt. War and the Nation-State in Latin America*. University Park: Penn State University Press, 2002.

Cerna, José M. «El problema carcelario en el Perú», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Derecho, 1923.

Chavarría, Jesús. *José Carlos Mariátegui and the Rise of Modern Peru, 1890-1930*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1979.

Chávez, Gerardo. «Evoluciones del régimen penitenciario», *Anales de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima*, XXV, 1898, 75-106.

Chevalier, François. «Official Indigenismo in Peru», en Magnus Morner, ed. *Race and Class in Latin America*. Nueva York: Columbia University Press, 1977, 184-196.

Chiaramonti, Gabriella. «Buscando el ciudadano "virtuoso". El censo peruano de 1876 en el proyecto político de Manuel Pardo», en Marcello Carmagnani, comp. *Constitucionalismo y orden liberal. América Latina, 1850-1920*. Turín: Otto Editore, 2000, 9-50.

Cisneros, Carlos B. *Provincia de Lima. Monografía del Departamento de Lima*. Lima: Carlos Fabbri, 1911.

Clavero, José. *El tesoro del Perú*. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1896.

Clemmer, Donald. *The Prison Community*. Boston: Christopher Publishing House, 1940.

Cole, Simon. *Suspect Identities. A History of Fingerprinting and Criminal Identification*. Cambridge: Harvard University Press, 2001.

Concejo Provincial de Lima. *Reglamento de la guardia urbana y demás disposiciones relativas a gobierno local*. Lima: Imprenta del Comercio, 1879.

Connell, R. W. *Masculinities*. Berkeley: University of California Press, 1995.

Contreras, Carlos y Marcos Cueto. *Historia del Perú contemporáneo*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 1999.

Copello, Juan y Luis Petriconi. *Estudio sobre la independencia económica del Perú*. Lima: Imprenta El Nacional, 1876.

Córdova y Urrutia, José María. *Estadística histórica, geográfica, industrial y comercial de los pueblos que componen las provincias del departamento de Lima*. Lima: Imprenta de Instrucción Primaria, 1839.

Cosamalón, Jesús. *Indios detrás de la muralla*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999.

Cossío del Pomar, Felipe. *Víctor Raúl Haya de la Torre. El indoamericano*. Lima: Editorial Nuevo Día, 1946.

Cox, Carlos Manuel, ed. *Cartas de Haya de la Torre a los prisioneros apristas*. Lima: Editorial Nuevo Día, 1946.

Cueto, Marcos. *Excelencia científica en la periferia. Actividades científicas e investigación biomédica en el Perú, 1890-1950*. Lima: Grade/Concytec, 1989.

—*El regreso de las epidemias. Salud y sociedad en el Perú del siglo XIX*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1997.

Dávalos y Lissón, Pedro. *La primera centuria*. Lima: Librería e Imprenta Gil, 1919-1926.

Davies, Thomas. *Indian Integration in Peru. A Half Century of Experience, 1900-1948*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1974.

Davis, Angela. «Masked Racism. Reflections on the Prison Industrial Complex», *ColorLines*, 1, 2, 1998, 11-13.

De la Cadena, Marisol. *Indigenous Mestizos. The Politics of Race and Culture in Cuzco, Peru, 1919-1991*. Durham: Duke University Press, 2000.

De la Lama, M. A. *Constitución del Perú. Leyes, decretos, resoluciones y reglamentos generales arreglados y anotados por M. A. de la Lama*. Tomo 2, años 1874 a 1876. Lima: Benito Gil Editor, 1877.

De las Casas, Alfonso. *La delincuencia infantil ante el concepto de la medicina legal*. Lima: Imprenta del Centro Editorial, 1913.

De las Casas, Luis Felipe. *El sectario*. Lima: Ital Perú, 1981.

Del Águila, Alicia. *Callejones y mansiones. Espacios de opinión pública y redes sociales y políticas en la Lima del 900*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997.

Del Prado, Jorge. *En los años cumbres de Mariátegui*. Lima: Ediciones Unidad, 1983.

Delfín, M. J., «Asilos para bebedores», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Medicina, 1909.

Diez Canseco, José. «Kilómetro 83» [1930], en *Estampas mulatas*. Lima: Editorial Universo, 1973, 103-155.

Dikötter, Frank. *Crime, Punishment and the Prison in Modern China*. Nueva York: Columbia University Press, 2002.

Driver, Felix. «Discipline without Frontiers? Representations of the Mettray Reformatory Colony in Britain, 1840-1880», *Journal of Historical Sociology*, 3, 3, septiembre, 1990.

Elías, Domingo y J. M. Rodríguez. *Inmigración de chinos. Ventajas que proporcionan al país*. Lima: Imp. de José Masías, 1851.

Encinas, José Antonio. «Causas de la criminalidad indígena en el Perú. Ensayo de psicología criminal», *Revista Universitaria*, XIV, 1, 1919, 192-268.

—*Contribución a una legislación tutelar indígena.* Lima: Casa Editora E. K. Villarán, 1920.

—*La educación de nuestros hijos*. Santiago: Editorial Ercilla, 1938.

Esparza, Lorenzo. «Contribución al estudio de la tuberculosis en el presidio», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Medicina, 1919.

Espejo Palma, Ernesto. *Necesidad de crear en el Perú el patronato de ex-carcelados como medio de evitar en los delincuentes la reincidencia en el delito*. Lima: Empresa Tipográfica Unión, 1918.

Espinosa, Juan. *Diccionario para el pueblo: republicano, democrático, moral, político y filosófico*. Lima: Imprenta del Pueblo, 1855.

Eyzaguirre, Rómulo. «La tuberculosis pulmonar en Lima. Tratamiento higiénico-sanitario», *Anales de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima*, XXV, 1898, 149-256.

Flores Galindo, Alberto. *Aristocracia y plebe. Lima, 1760-1830*. Lima: Mosca Azul Editores, 1984.

—«República sin ciudadanos», en *Buscando un Inca. Identidad y utopía en los Andes*, 4.ª ed. Lima: Editorial Horizonte, 1994, 257-285.

—*La tradición autoritaria. Violencia y democracia en el Perú*. Lima: Aprodeh/SUR, 1999.

Fonseca Ariza, Juan. *Misioneros y civilizadores. Protestantismo y modernización en el Perú (1915-1930)*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002.

Forment, Carlos. *Democracy in Latin America, 1760-1900. Vol. 1: Civic Selfhood and Public Life in Mexico and Peru.* Chicago: University of Chicago Press, 2003.

Foro Peruano. *Proceso criminal seguido contra Lorenzo Machiavello por los delitos de triple homicidio y homicidio frustrado*. Lima: Imprenta del Estado, 1888.

Fosalba, Rafael. «La herencia como principal factor etiológico de la anormalidad mental y de ciertas degeneraciones y formas de criminalidad y su prevención eugénica, mediante la esterilización genital por la vasectomía de Sharp, de los legalmente declarados como incapaces», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Medicina, 1928.

Foucault, Michel. *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión* [orig. 1975]. Buenos Aires: Siglo XXI, 2008.

—«About the Concept of the "Dangerous Individual" in Nineteenth-Century Legal Psychiatry», en James D. Faubion, ed. *Power*, vol. 3 de Essential Works of Foucault, 1954-1984. Nueva York: The New Press, 2000, 176-200.

Fraser, Nancy. «From Discipline to Flexibilization? Rereading Foucault in the Shadow of Civilization», *Constellations*, 10, 2, 2003, 160-171.

Fuentes, Manuel Atanasio. *Estadística General de Lima*. Lima: Tipografía Nacional de M. N. Corpancho, 1858.

—*Aletazos del Murciélago,* 2.ª ed., vol. 1. París: Imprenta de A. D. Laine y J. Havard, 1866.

—*Lima. Apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres*. París: Librería de Firmin Didot hermanos, hijos y Co., 1867.

—*Estadística de la penitenciaría, cárcel y lugares de detención de la provincia de Lima en 1877*. Lima: Imprenta del Estado, 1878.

Fuentes, Manuel Atanasio, ed. *Códigos penal y de enjuiciamientos en materia criminal*. Lima: Imprenta del Estado, 1880.

Fuentes, Manuel Atanasio y M. A. de la Lama. *Diccionario de jurisprudencia y de legislación peruana. Parte criminal*. Lima: Imprenta del Estado, 1877.

Fuentes Castro, Paulino. *Criminología peruana. Rojas y Cañas condenado a muerte*. Lima: Imprenta del Estado, 1894.

Fuentes Castro, Paulino, comp. *Anales Judiciales del Perú. Tomo VI, 1894-1898*. Lima: Imp. Americana, 1930.

Gagliano, Joseph. *Coca Prohibition in Peru. The Historical Debates*. Tucson: University of Arizona Press, 1994.

Gálvez, José. *Una Lima que se va* [1921]. Lima: Editorial PTCM, 1947.

Gamarra, Abelardo. «¡La cárcel de la capital!», en *Cien años de vida perdularia*. Lima: Tip. Abancay, 1921, 193-195.

Gandolfo, José Benjamín. *El problema de la vagancia en el Perú*. Lima: Librería Escolar e Imprenta de E. Moreno, 1900.

García Jordán, Pilar. «Reflexiones sobre el darwinismo social. Inmigración y colonización, mitos de los grupos modernizadores peruanos (1821-1919)», *Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos*, 21, 2, 1992, 961-975.

García Yrigoyen, Alberto. «Sistemas penitenciarios», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Derecho, 1887.

Garland, David. «The Criminal and his Science. A Critical Account of the Formation of Criminology at the End of the Nineteenth Century», *The British Journal of Criminology*, 25, 2, 1985, 109-137.

—*Punishment and Modern Society. A Study in Social Theory*. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

—«Of Crimes and Criminals: The Development of Criminology in Britain», en Mike Maguire *et al.*, eds., *The Oxford Handbook of Criminology*. Oxford: Clarendon Press, 1994, 17-68.

Garrido Malaver, Julio. *El Frontón*. Lima: Editorial Universo, 1977.

Gastón, Alfredo. *Compilación de las vistas fiscales que en materia judicial y administrativa se han expedido en el Perú, desde el año 1840 hasta 1871 por los Doctores D. José Gregorio Paz Soldán y D. Manuel Toribio Ureta*. Lima: Imprenta del Estado, 1873.

Gatrell, V. A. C. «Crime, Authority, and the Policeman-State», en *The Cambridge Social History of Britain, 1750-1950*, vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 243-310.

Gibson, Mary. *Born to Crime. Cesare Lombroso and the Origins of Biological Criminology*. Westport, CT: Praeger, 2002.

Giesecke, Margarita. *Masas urbanas y rebelión en la historia. Golpe de Estado, Lima 1872*. Lima: Cedhip, 1978.

Gilbert, Dennis. *La oligarquía peruana. Historia de tres familias*. Lima: Editorial Horizonte, 1982.

González Prada, Manuel. *Nuestros Indios* [1904]. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1983.

—*Horas de lucha*. Lima: Tip. El Progreso Literario, 1908.

—*Bajo el oprobio*. París: Tipografía de Louis Bellenad et fils, 1933.

—*Sobre el militarismo (antología). Bajo el oprobio*. Lima: Editorial Horizonte, 1978.

González Vigil, Francisco de Paula. *Opúsculo sobre la pena de muerte*. Lima: Tipografía Nacional, 1862.

Gootenberg, Paul. «Artisans and Merchants. The Making of an Open Economy, Lima, 1830-1860», tesis de maestría, Oxford, St. Anthony's School, 1981.

—«Beleaguered Liberals: The Failed First Generation of Free Traders in Peru», en Joseph Love y Nils Jacobsen, eds. *Guiding the Invisible Hand: Economic Liberalism and the State in Latin American History*. Nueva York: Praeger, 1988, 63-97.

—*Between Silver and Guano. Commercial Policy and the State in Postindependence Peru*. Princeton: Princeton University Press, 1989.

—«Carneros y Chuño: Price Levels in Nineteenth-Century Peru», *Hispanic American Historical Review*, 70, 1, 1990, 1-56.

—«Population and Ethnicity in Early Republican Peru: Some Revisions», *Latin American Research Review*, 26, 3, 1991, 109-157.

—*Imagining Development. Economic Ideas in Peru's «Fictitious Prosperity» of Guano, 1848-1880*. Berkeley: University of California Press, 1993.

Gould, Stephen J. *The Mismeasure of Man*. Nueva York: W. W. Norton & Company, 1981.

Graña, Francisco. *La población del Perú a través de su historia.* Lima: Tipografía del Centro Editorial, 1916.

Graña, Ladislao. «Factores sociales de la delincuencia en el Perú», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Derecho, 1899.

Hague, Juan Luis. *La caracterización del delincuente. Estudio técnico-jurídico*. Lima: s. p. i., 1932.

Haya de la Torre, Víctor Raúl. *Por la emancipación de América Latina*. Buenos Aires: Gleizer, 1927.

Herbold, Carl. «Developments in the Peruvian Administrative System, 1919-1939: Modern and Traditional Qualities of Government under Authoritarian Regimes», tesis doctoral, Yale University, 1973.

Herrera, Bartolomé. *El opúsculo sobre la pena de muerte por Francisco de Paula González Vigil es incontestable*. Lima: Imprenta de José Masías, 1862.

Hirsch, Adam. *The Rise of the Penitentiary. Prisons and Punishment in Early America*. New Haven: Yale University Press, 1992.

Hobsbawm Eric. «Peasants and Politics», *Journal of Peasant Studies*, 1, 1, 1973, 3-22.

Horne, Janet R. *A Social Laboratory for Modern France. The Musée Social & The Rise of the Welfare State*. Durham: Duke University Press, 2002.

Hurtado Pozo, José. *La ley «importada». Recepción del derecho penal en el Perú*. Lima: Cedys, 1979.

Iberico, Mariano. *Elementos psicológicos del delito*. Lima: Sanmartí y Cía., 1918.

Ignatieff, Michael. *A Just Measure of Pain. The Penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850*. Nueva York: Penguin Books, 1978.

Jacobsen, Nils. *Mirages of Transition. The Peruvian Altiplano, 1780-1930*. Berkeley: University of California Press, 1993.

—«Civilization and Its Barbarism: The Inevitability of Juan Bustamante's Failure», en Judith Ewell y William Beezley, eds. *The Human Tradition in Latin America. The Nineteenth Century*. Wilmington: Scholarly Resources, 1989, 82-102.

Jacobsen, Nils y Alejandro Diez Hurtado. «Montoneras, la comuna de Chalaco y la revolución de Piérola: la sierra piurana entre el clientelismo y la sociedad civil, 1868-1895», en Antonio Escobar O. y Romana Falcón, eds. *Los ejes de la disputa. Movimientos sociales y actores colectivos en América Latina, siglo XIX*. Madrid/Fráncfort: Ahila/Iberoamericana, 2002, 57-132.

James, Joy, ed. *Imprisoned Intellectuals. America's Political Prisoners Write on Life, Liberation, and Rebellion*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2003.

Jiménez, Plácido. «La sociedad y el delito», tesis doctoral, Universidad de San Marcos, *Anales de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima*, XXV, 1898, 107-354.

Jiménez de Asúa, Luis. *Derecho penal en la República del Perú*. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1926.

—«Elmore y Chocano: el crimen de Lima», en *Política. Figuras. Paisajes*. Madrid: Historia Nueva, 1927, 173-183.

Kapsoli, Wilfredo. *Las luchas obreras en el Perú, 1900-1919*. Lima: Editorial Delva, 1976.

Klaiber, Jeffrey. «Los cholos y los rotos: actitudes raciales durante la Guerra del Pacífico», *Histórica*, II, 1, 1978, 27-37.

Klaren, Peter. *Modernization, Dislocation, and Aprismo. Origins of the Peruvian Aprista Party, 1870-1932*. Austin: University of Texas Press, 1973.

—«The Origins of Modern Peru, 1880-1930», en Leslie Bethell, ed. *The Cambridge History of Latin America*, vol. V. Nueva York: Cambridge University Press, 1986, 587-640.

—*Peru. Society and Nationhood in the Andes*. Nueva York: Oxford University Press, 2000.

Lacassagne, Alexandre. *Les tatouages, étude anthropologique et médico-légale*. París: Baillière, 1881.

Lama, Tomás. *Refutación del informe de la comisión inspectora de la Penitenciaría publicado en agosto de 1873*. Lima: Imprenta de El Nacional, 1874.

Landaeta, J. F. *Legislación sobre delincuencia alcohólica*, tesis doctoral, Universidad de San Marcos, Facultad de Derecho. Lima: Tip. El Neutral, 1919.

Laso, Francisco. *Aguinaldo para las señoras del Perú y otros ensayos, 1854-1869*, Natalia Majluf, ed. Lima: IFEA / Museo de Arte de Lima, 2003.

León, Carlos Aurelio. *Nuestras cárceles*. Lima: Librería e Imprenta Gil, 1920.

León García, Enrique. *Las razas en Lima. Estudio demográfico*, tesis doctoral, Universidad de San Marcos, Facultad de Medicina. Lima: Sanmartí y Cía., 1909.

León y León, Bernardino. «La libertad y la responsabilidad en el derecho penal contemporáneo», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Derecho, 1907.

—«El problema sexual en las prisiones», *Revista del Foro*, 21, 1934, 65-81.

Lequanda, Ignacio de. «Discurso sobre el destino que debe darse a la gente vaga que tiene Lima», *Mercurio Peruano*, X, 1794, 103-08, 111-117, 119-125, 127-132.

Lisson, Carlos. *Breves apuntes sobre la sociología del Perú en 1886*. Lima: Imprenta Gil, 1887.

Lombroso, Cesare. *L'Uomo delinquente. Studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie*. Milán, 1876.

—«The Savage Origins of Tattooing», *Popular Science Monthly*, abril, 1896, 793-803.

López, Silesio. *El Dios mortal. Estado, sociedad y política en el Perú del siglo XX*. Lima: Instituto Democracia y Socialismo, 1991.

López-Rey Arrojo, Manuel. *Introducción al estudio de la criminología*. Buenos Aires: Librería y Editorial El Ateneo, 1945.

Lorente, Sebastián. *Pensamientos sobre el Perú* [1855]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1967.

Loza, José Manuel. *Inviolabilidad de la vida humana, o discurso sobre la pena de muerte*. Lima: Imprenta de Félix Moreno, 1851.

Lozada Benavente, Elías. «La policía judicial científica», tesis doctoral, Universidad de San Marcos, 1920.

Majluf, Natalia. *Escultura y espacio público. Lima, 1850-1879*. Lima: IEP, 1994.

Mallon, Florencia. *The Defense of Community in Peru's Central Highlands*. Princeton: Princeton University Press, 1983.

—*Campesino y nación. La construcción de México y Perú poscoloniales*. México: Ciesas, El Colegio de San Luis y El Colegio de Michoacán, 2003.

Mannarelli, Maria Emma. *Limpias y modernas. Género, higiene y cultura en la Lima del novecientos*. Lima: Ediciones Flora Tristán, 1999.

Manrique, Nelson. *Yawar Mayu: sociedades terratenientes serranas, 1879-1910*. Lima: IFEA/Desco, 1988.

Mariátegui, José Carlos. «Cómo mató Wilmann a "Tirifilo". Conversando con el victimario en el Hospital Dos de Mayo», *La Prensa*, 6 de mayo de 1915.

—*Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Lima: Biblioteca Amauta, 1928.

—*Correspondencia. 1915-1930*. Lima: Biblioteca Amauta, 1984.

Marquina Ríos, Hugo. «Cincuenta casas de vecindad en la Avenida Francisco Pizarro», en Carlos Enrique Paz Soldán, ed. *Lima y sus suburbios*. Lima: Universidad Nacional de San Marcos, 1957, 76-91.

McConville, Sean. *English Local Prisons, 1860-1900. Next Only to Death*. Nueva York: Routledge, 1995.

McEvoy, Carmen. *Un proyecto nacional en el siglo XIX. Manuel Pardo y su visión del Perú*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1994.

—*Forjando la nación. Ensayos de historia republicana*. Lima: Universidad Católica / University of the South, 1999.

Medina, Pío Máximo. *El tipo criminal*. Lima: Imprenta de San Pedro, 1907.

—*Causas del estacionarismo de la raza indígena y el remedio eficaz para su regeneración*. Lima: Imprenta La Industria, 1906.

Melossi, Dario. «The Cultural Embeddedness of Social Control: Reflections on the comparison of Italian and North-American cultures concerning punishment», *Theoretical Criminology*, 5, 4, 2001, 403-24.

Melossi, Dario y Massimo Pavarini. *The Prison and the Factory. Origins of the Penitentiary System*. Totowa, NJ: Barnes and Noble Books, 1981.

Méndez, Cecilia. «Importaciones de lujo y clases populares. Un motín limeño», *Cielo Abierto*, 29, 1984, 11-14.

—«Penalidad y muerte en el Perú», *Márgenes*, 1, 1987, 182-191.

—«República sin indios: La comunidad imaginada del Perú», en Henrique Urbano, ed., *Tradición y modernidad en los Andes*. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas, 1992, 15-41.

—*Incas sí, indios no. Apuntes para el estudio del nacionalismo criollo en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1995.

Mendoza, René. *En las prisiones peruanas*. Santiago de Chile: Imprenta y Encuadernación Moderna, 1921.

Mendoza, Walter y Óscar Martínez. «Las ideas eugenésicas en la creación del Instituto de Medicina Social», *Anales de la Facultad de Medicina*, 60, 1, 1999, 55-60.

Meranze, Michael. *Laboratories of Virtue. Punishment, Revolution, and Authority in Philadelphia, 1760-1835*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996.

Merino Arana, Rómulo. *Historia policial del Perú en la República*. Lima: Imprenta del Departamento de Prensa y Publicaciones de la Guardia Civil, 1966.

Middendorf, E. W. *Perú. Observaciones y estudios del país y sus habitantes durante una permanencia de 25 años*, 3 vols. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1973.

Miller, Laura. «La mujer obrera en Lima, 1900-1930», en Miller *et al. Lima obrera, 1900-1930*, vol. II. Lima: Ediciones El Virrey, 1987, 11-152.

Miller, Rory. «The Coastal Elite and Peruvian Politics, 1895-1919», *Journal of Latin American Studies*, 14, 1982, 97-120.

Miró Quesada, Óscar. «El caso del asesino Montes. Ensayo de criminología aplicada», *Revista Universitaria*, 2.º trimestre, 1916, 165-299.

—*Breves apuntes de mesología criminal peruana*. Lima: s. p. i., 1922.

Moczydlowski, Pawel. *The Hidden Life of Polish Prisons*. Bloomington: Indiana University Press, 1992.

Monsalve, Martín. «Elecciones, violencia y dominación racial en Lima a mediados del siglo XIX: Las elecciones de 1850 y 1855», ponencia presentada en el Taller de Historia Peruana, Universidad de Oxford, marzo de 2002.

Morris, Norval. *Maconochie's Gentlemen: The Story of Norfolk Island & the Roots of Modern Prison Reform*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Muccielli, Laurent, ed. *Histoire de la criminologie française*. París: Editions L'Harmattan, 1994.

Muñoz, Fanni. *Diversiones públicas en Lima, 1890-1920. La experiencia de la modernidad*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2001.

Nugent, David. «Building the State, Making the Nation: The Bases and Limits of State Centralization in "Modern" Peru», *American Anthropologist*, 96, 2, 1994, 333-369.

O'Brien, Patricia. *The Promise of Punishment. Prisons in Nineteenth-Century France*. Princeton: Princeton University Press, 1982.

Oliart, Patricia. «Poniendo a cada quien en su lugar: estereotipos raciales y sexuales en la Lima del siglo XIX», en Panfichi y Portocarrero, eds. *Mundos interiores*, 261-288.

Oshinsky, David M. «*Worse than Slavery*». *Parchman Farm and the Ordeal of Jim Crow Justice*. Nueva York: The Free Press, 1996.

Oviedo, Juan. *Colección de leyes, decretos y órdenes publicadas en el Perú desde el año 1821 hasta el 31 de diciembre de 1859*. Lima: F. Bailly, 1861-1872.

Palma, Clemente. *El porvenir de las razas en el Perú*. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1897.

Panfichi, Aldo. «Urbanización temprana de Lima, 1535-1900», en Panfichi y Portocarrero, eds. *Mundos interiores*, 15-42.

Panfichi, Aldo y Felipe Portocarrero, eds. *Mundos interiores: Lima 1850-1950*. Lima: Universidad del Pacífico, 1995.

Pardo, Manuel. «Algo sobre el código penal. Vagancia», *La Revista de Lima*, IV, 1861.

Pareja, Piedad. *Anarquismo y sindicalismo en el Perú*. Lima: Ediciones Rikchay Peru, 1978.

Parker, David. «Los pobres de la clase media: estilo de vida, consumo e identidad en una ciudad tradicional», en Panfichi y Portocarrero, eds. *Mundos interiores*, 161-186.

—«Civilizing the City of Kings: Hygiene and Housing in Lima, Peru», en Ronn Pineo y James A. Baer, eds. *Cities of Hope. People, Protests, and Progress in Urbanizing Latin America, 1870-1930*. Boulder: Westview Press, 1998, 153-178.

—*The Idea of the Middle Class. White-Collar Workers and Peruvian Society, 1900-1950*. University Park: Penn State University Press, 1998.

Partido Aprista Peruano. *El proceso Haya de la Torre. Documentos para la historia del ajusticiamiento de un pueblo*. Guayaquil: Imprenta La Reforma, 1933.

Patriarca, Silvana. *Numbers and Nationhood. Writing Statistics in Nineteenth-Century Italy*. Nueva York: Cambridge University Press, 1996.

Paz Soldán, Carlos Enrique. «La reforma del régimen penitenciario en el Perú y el libertador Ramón Castilla», en *Medio siglo de magisterio hipocrático*. Lima: Biblioteca de Cultura Sanitaria, 1964.

Paz Soldán, Mariano Felipe. *Examen de las penitenciarías de los Estados Unidos*. Nueva York: Imprenta de S. W. Benedict, 1853.

—«Reglamento de la penitenciaría de Lima», en Fuentes y De la Lama, *Diccionario de Jurisprudencia*, 525-547.

Peñaloza, Augusto. *Prevención eugénica de la criminalidad en el Perú*. Lima: Imprenta La Voce d'Italia, 1916.

Peralta, Víctor. «El mito del ciudadano armado. La "semana magna" y las elecciones de 1844 en Lima», en Hilda Sábato, ed. *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina*. México: El Colegio de México / Fondo de Cultura Económica, 1999, 231-252.

Pérez Guadalupe, José Luis. *Faites y atorrantes. Una etnografía del penal de Lurigancho*. Lima: Centro de Investigaciones Teológicas, 1994.

Perrot, Michelle. «Delinquency and the Penitentiary System in Nineteenth-Century France», en Robert Forster y Orest Ranum, eds. *Deviants and the Abandoned in French Society: Selections from the Annales, Economies, Societies, Civilisations*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978, 213-245.

Pesce, Luis. *Indígenas e inmigrantes en el Perú*. Lima: Imprenta de La Opinión Nacional, 1906.

Piccato, Pablo. «Mexico City Criminals. Between Social Engineering and Popular Culture», ponencia presentada en el congreso de la Conferencia de Historia de América Latina (CLAH), Atlanta, enero de 1996.

—«Interpretations of Sexuality in Mexico City's Prisons. A Critical Version of Roumagnac», en Robert McKee Irwin, Edward J. McCaughan, y Michelle Rocío Nasser, eds. *The Famous 41. Sexuality and Social Control in Mexico City, 1901*. Nueva York: Palgrave, 2003, 251-266.

Pick, Daniel. *Faces of Degeneration: A European Disorder, c. 1848-c.1918*. Nueva York: Cambridge University Press, 1989.

Pike, Fredrick. *The Modern History of Peru*. Nueva York: Praeger, 1967.

Pineda Iglesias, Gonzalo. «¿Se justifica la pena capital en el nuevo campo del positivismo?», *Anales de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima*, XXVI (1899), 65-86.

Pisciotta, Alexander. *Benevolent Repression. Social Control and the American Reformatory-Prison Movement*. Nueva York y Londres: New York University Press, 1994.

Planas, Pedro. *La república autocrática*. Lima: Fundación Friedrich Ebert, 1994.

—*El 900. Balance y recuperación. I. Aproximaciones al 900*. Lima: Citdec, 1994.

Polar, Jorge. «Aptitudes políticas de nuestra raza», *Anales de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima*, XXVII, 1900.

Poole, Deborah. «Ciencia, peligrosidad y represión en la criminología indigenista peruana», en Carlos Aguirre y Charles Walker, eds. *Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú, siglos XVIII-XX*. Lima: Instituto de Apoyo Agrario, 1990, 335-367.

—*Vision, Race, and Modernity. A Visual Economy of the Andean Image World*. Princeton: Princeton University Press, 1997.

Poole, Deborah, ed. *Unruly Order. Violence, Power, and Cultural Identity in the High Provinces of Southern Peru*. Boulder: Westview Press, 1994.

Portal, Ismael. *Del pasado limeño*. Lima: Librería e Imprenta Gil, 1932.

Portella, Juan Antonio. «La higiene en las casas de vecindad. Necesidad de construir casas higiénicas para obreros», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Medicina, 1903.

Portocarrero, Gonzalo. *Racismo y mestizaje*. Lima: Sur, 1994.

—«El fundamento invisible: función y lugar de las ideas racistas en la República Aristocrática», en Panfichi y Portocarrero, eds. *Mundos interiores*, 219-260, 1995.

Pradier-Foderé, Paul. *Compendio del Curso de Derecho Administrativo profesado en la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de Lima por el Sr. Pradier-Foderé, fundador y decano de la Facultad*, traducido por Manuel A. Fuentes, 2.ª ed. Lima: Imprenta del Estado, 1878.

Prado, Javier. *El método positivo en el derecho penal*. Lima: Benito Gil Editor, 1890.

Prado Ugarteche, Mariano I. *El tipo criminal*. Lima: Librería escolar e imprenta de E. Moreno, 1900.

Puga, Nicolás. «Sistemas penitenciarios», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Ciencias Políticas y Administrativas, 1899.

Quintanilla, Aparicio. *La pena de muerte es injusta y debe abolirse de nuestra legislación*. Lima: Imprenta comercial de Horacio La Rosa, 1906.

Quiroz, Alfonso. *La deuda defraudada. Consolidación de 1850 y dominio económico en el Perú*. Lima: Instituto Nacional de Cultura, 1987.

Quirós, Mariano Santos de. *Colección de leyes, decretos y órdenes publicadas en el Perú desde su independencia en el año de 1821 hasta el 31 de diciembre de 1830*. Lima: Imprenta de José Masías, 1831.

Rada, Pedro José. *Apuntes sobre el estudio del derecho en el Perú*. Arequipa: Imprenta de la Bolsa, 1894.

Ragas, José. «Ciudadanía, cultura política y representación en el Perú: la campaña electoral de 1850», tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003.

Ramón, Gabriel. *La muralla y los callejones. Intervención urbana y proyecto politico en Lima durante la segunda mitad del siglo XIX*. Lima: Sidea/PromPerú, 1999.

Ramos, Ángela. *Una vida sin tregua*, Vol. I. Lima: Concytec, 1990.

Ramos, Carlos M. «El delito, ¿es o no hereditario?», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Derecho, 1900.

Redfield, Peter. *Space in the Tropics. From Convicts to Rockets in French Guiana*. Berkeley: University of California Press, 2000.

Renneville, Marc. «La réception de Lombroso en France (1880-1900)», en Laurent Mucchielli, ed. *Histoire de la criminologie française*. París: L'Harmattan, 1995, 107-135.

Revollé, Lizardo. *Exposición que sobre el estado y necesidades de la policía presenta a la Subprefectura e Intendencia el Comisario del Cuartel 2o. de esta capital.* Lima: Imprenta de El Lucero, 1908.

Revoredo, Alejandro. «Deficiencias de nuestra legislación penal», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Derecho, 1919.

Reynoso, Jorge y César Galup. «La arquitectura carcelaria y las cárceles en el Perú», tesis de bachiller, Programa Académico de Arquitectura, Universidad Nacional Federico Villarreal, 1970.

Rodríguez, Abraham. *Reflexiones antropológicas relativas al hombre universal, al americano y al peruano*. Lima: Imprenta de El Nacional, 1897.

—«Estudios criminológicos. Primera parte. Los caracteres del hombre criminal», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Medicina, 1899.

Rodríguez, Julia. «Encoding the Criminal: Criminology and the Science of "Social Defense" in Modernizing Argentina (1880-1921)», tesis doctoral, Universidad de Columbia, 1999.

Rodríguez Pastor, Humberto. *Hijos del celeste imperio en el Perú, 1850-1900*. Lima: Instituto de Apoyo Agrario, 1989.

—«La calle del Capón, el callejón Otayza y el barrio chino», en Panfichi y Portocarrero, eds. *Mundos interiores*, 397-430.

Rothman, David. *The Discovery of the Asylum. Social Order and Disorder in the New Republic*. Boston: Little, Brown and Company, 1971.

—*Conscience and Convenience. The Asylum and its Alternatives in Progressive America*. Boston y Toronto: Little, Brown and Company, 1980.

Ruggiero, Kristin. «Fingerprinting and the Argentine Plan for Universal Identification in the late Nineteenth and Early Twentieth Centuries», en Jane Caplan y John Torpey, eds. *Documenting Individual Identity. The Development of State Practices in the Modern World*. Princeton: Princeton University Press, 2001, 184-196.

Ruiz Zevallos, Augusto. *Psiquiatras y locos. Entre la modernización contra los Andes y el nuevo proyecto de modernidad. Peru: 1850-1930*. Lima: Instituto Pasado y Presente, 1995.

—*La multitud, las subsistencias y el trabajo. Lima, 1890-1920*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001.

Rusche, Georg y Otto Kirchheimer. *Punishment and Social Structure*. Nueva York: Columbia University Press, 1939.

Sabo, Don *et al.* «Gender and the Politics of Punishment», en Sabo *et al.*, eds., *Prison Masculinities*. Filadelfia: Temple University Press, 2001, 3-18.

Salazar, Jorge *et al. Historia de la noticia. Un siglo de homicidios a sangre y tinta*, Vol. 1. Lima: Universidad de San Martín de Porres, 1996.

Salomón, Alberto. «El factor económico como base de los fenómenos sociales. Proyecciones sociales del delito», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Derecho, 1899.

Salvatore, Ricardo. «Criminology, Prison Reform, and the Buenos Aires Working Class», *Journal of Interdisciplinary History*, 23, 2, 1992, 279-299.

—«Positivist Criminology and State Formation in Modern Argentina, 1890-1940», en Peter Becker y Richard F. Wetzell, eds. *Criminals and their Scientists. The History of Criminology in International Perspective*. Nueva York: Cambridge University Press, 2006.

Salvatore, Ricardo y Carlos Aguirre, eds. *The Birth of the Penitentiary in Latin America*. Austin: University of Texas Press, 1996.

Sanborn, Cynthia. «Los obreros textiles de Lima: redes sociales y organización laboral, 1900-1930», en Panfichi y Portocarrero, eds. *Mundos interiores*, 187-218.

Sánchez, Luis Alberto. *Valdelomar o la* «*Belle Epoque*», 3.ª ed. Lima: Inpropesa, 1987.

Scott, James C. *Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press, 1990.

Seminario Helguero, Gabriel. *Cárcel*. Lima: Editorial Rímac, 1935.

—*Los presos*. Lima: Editorial Lumen, 1937.

—*Notas para la reforma del régimen de prisiones en el Perú*. Lima: Talleres Gráficos de la Penitenciaría, 1945.

Seoane, Juan. *Hombres y rejas*. Santiago de Chile: Editorial Ercilla, 1937.

Silva Santisteban, José. *Breves reflexiones sobre los sucesos ocurridos en Lima y el Callao con motivo de la importación de artefactos*. Lima: José Sánchez, 1859.

Solano, Susana. *El estado peligroso. Algunas de sus formas clínicas no delictivas*. Lima: Universidad de San Marcos, 1937.

—*El indígena y la ley penal*, 2.ª ed. Lima: Librería e Imprenta Miranda, 1950.

Solf y Muro, Alfredo. «Penalidad de la reincidencia», *Anales de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima*, XXV, 1898, 51-74.

Solís, Abelardo. *Once años*. Lima: Talleres Gráficos Sanmartí y Cía., 1934.

Spierenburg, Pieter. *The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolution of Repression, from a Pre-Industrial Metropolis to the European Experience*. Nueva York: Cambridge University Press, 1984.

Stein, Steve. «Cultura popular y política popular en los comienzos del siglo XX en Lima», en Stein, ed. *Lima obrera*, 53-83.

—*Populism in Peru. The Emergence of the Masses and the Politics of Social Control*. Madison: University of Wisconsin Press, 1980.

Stein, Steve, ed. *Lima obrera, 1900-1930*, Vol. 1. Lima: Ediciones El Virrey, 1986.

Stepan, Nancy. «*The Hour of Eugenics*»: *Race, Gender, and Nation in Latin America*. Ithaca: Cornell University Press, 1991.

Stoddard, O. F. *Manual científico de temperancia*. Lima: Imprenta Americana, 1923.

Sulmont, Denis. *El movimiento obrero en el Perú*. Lima: Tarea, 1975.

Távara, Santiago. *Abolición de la esclavitud en el Perú*. Lima: Imprenta de J. M. Monterola, 1855.

Taylor, Lewis. *Bandits and Politics in Peru. Landlord and Peasant Violence in Hualgayoc, 1900-1930*. Cambridge: Center of Latin American Studies, 1986.

Tejada, Luis. *La cuestión del pan. El anarcosindicalismo en el Perú*. Lima: INC, 1987.

—«Malambo», en Panfichi y Portocarrero, eds. *Mundos interiores*, 145-160.

Tejerina, Luis. *De la pena capital en el Perú*. Lima: Imprenta de El Comercio, 1861.

Thurner, Mark. «"*Republicanos*" and "*la Comunidad de Peruanos*": Unimagined Political Communities in PostColonial Andean Peru», *Journal of Latin American Studies*, 27, 1995, 291-318.

—*From Two Republics to One Divided: Contradictions of Postcolonial Nationmaking in Andean Peru*. Durham: Duke University Press, 1997.

Tizón y Bueno, Ricardo. *El plano de Lima. Apuntaciones históricas y estadísticas*. Lima: Imprenta del Centro Editorial, 1916.

Torrejón, Luis. «Lima, 1912: el caso de un motín popular urbano», en Panfichi y Portocarrero, eds. *Mundos interiores*, 315-342.

Torres de Vidaurre, José. *Romancero criollo*, 3.ª ed. Lima: Lib. e Imp. de D. Miranda, 194.

Valdez, César. «La patología de los delincuentes en el panóptico de Lima», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Medicina, 1914.

Valdizán, Hermilio. «La delincuencia en el Perú. Ensayo de criminología nacional», *La Crónica Médica*, XXII, 1910.

—«El tatuaje entre nuestros criminales», *La Crónica Médica*, XXII, 1910, 95-96, 108-112.

Valladares Ayarza, Carlos. «La pena de muerte», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Derecho, 1946.

Varela y Orbegoso, Luis J. *La criminología de Garofalo*. Lima: Librería Escolar e Imprenta de E. Romero, 1900.

Vargas Prada, Luis. «El servicio de identificación en el Perú», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Medicina, 1916.

Velasco, Alcibíades. «Sistemas penitenciarios», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Derecho, 1890.

Villavicencio, Víctor M. *La reforma penitenciaria en el Perú*. Lima: Imprenta A. J. Rivas Berrio, 1927.

—*Algunos aspectos de nuestra sociología criminal*. Lima: s. p. i., 1930.

—*Defensas criminales y otros ensayos*. Lima: Librería y Editorial Peruana, 1933.

Wacquant, Loïc. «From Slavery to Mass Incarceration. Rethinking the "Race Question" in the US», *New Left Review*, 13, 2002, 41-60.

Wade, Peter. *Race and Ethnicity in Latin America*. Londres: Pluto Press, 1997.

Waite, Robert G. «From Penitentiary to Reformatory: Alexander Maconochie, Walter Crofton, Zebulon Brockway, and the Road to Prison Reform-New South Wales, Ireland, and Elmira, New York, 1840-70», *Criminal Justice History*, 11, 1991, 85-106.

Walker, Charles. «Voces discordantes. Discursos alternativos sobre el indio a fines de la colonia», en Walker, ed. *Entre la retórica y la insurgencia. Las ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo XVIII*. Cusco: Centro Las Casas, 1996, 89-112.

—«The Patriotic Society: Discussions and Omissions about Indians in the Peruvian War of Independence», *The Americas*, 55, 2, octubre, 1998, 275-298.

Wiener, Martin J. *Reconstructing the Criminal. Culture, Law, and Policy in England, 1830-1914*. Nueva York: Cambridge University Press, 1990.

Wright, Gordon. *Between the Guillotine and Liberty. Two Centuries of the Crime Problem in France*. Nueva York: Oxford University Press, 1983.

Xammar, Luis Fabio. «*El Murciélago» en la literatura peruana*. Lima: Librería e Imprenta Gil, 1945.

Zamora Torres, Víctor. «El delito y sus causas», tesis de bachiller, Universidad de San Marcos, Facultad de Derecho, 1916.

Zapata Cesti, Víctor. *Historia de la policía del Perú*: *preincanato, incanato, conquista, virreinato, república*. Lima: s. p. i., 1949.

Zedner, Lucia. *Women, Crime, and Custody in Victorian England*. Oxford: Clarendon Press, 1991.

Zinoman, Peter. *The Colonial Bastille. A History of Imprisonment in Vietnam, 1862-1940.* Berkeley: University of California Press, 2001.

Este libro se imprimió bajo el sistema digital por demanda de
ALEPH IMPRESIONES S. R .L.
Jr. Risso 580 Lince
Teléfono 634 7500
Junio 2019, Lima - Perú

---

[1] Citado en León y León, «El problema sexual», 71; el énfasis es mío.

[2] Chavarría, *José Carlos Mariátegui*; Klarén, «The Origins of Modern Peru»; Pike, *The Modern History of Peru*.

[3] Véanse Basadre, *Historia de la República del Perú,* vols. VIII y IX; Burga y Flores Galindo, *Apogeo y crisis*; Gilbert, *La oligarquía peruana*; Klarén, «The Origins of Modern Peru»; Miller, «The Coastal Elite»; Nugent, «Building the State, Making the Nation»; Mallon, *Campesino y nación*.

[4] Sobre el gamonalismo véase Burga y Flores Galindo, *Apogeo y crisi*s, 104-113. Véanse también varios ensayos en Poole, ed., *Unruly Order*; Manrique, *Yawar mayu*; y Jacobsen, *Mirages of Transition.*

[5] López, «El Estado oligárquico en el Perú» y «Crisis, formas, y reformas del Estado», ambos incluidos en López, *El Dios mortal.*

[6] Según una comisión del Senado peruano en 1895, «El hombre que no sabe leer y escribir, no es ni puede ser un ciudadano en las sociedades modernas». Citado en Mallon, *Campesino y nación*, 508.

[7] Mallon, *Campesino y nación*; Thurner, «"*Republicanos*"».

[8] Mallon, *Campesino y nación*, 561.

[9] Burga y Flores Galindo, *Apogeo y crisis*; Klarén, «Origins of Modern Peru»; Pike, *The Modern History of Peru*.

[10] Taylor, *Bandits and Politics in Peru*; Burga y Flores Galindo, *Apogeo y crisis*, 140-144.

[11] Mallon, *The Defense of Community*; Klarén, *Modernization, Dislocation, and Aprismo*; Jacobsen, *Mirages of Transition*.

[12] Burga y Flores Galindo, *Apogeo y crisis*, 146.

[13] Véase en particular Herbold, «Developments». Tomando prestados los términos usados por el sociólogo Miguel Ángel Centeno para referirse al Estado en América Latina, podemos calificar al Estado peruano como «sumamente despótico pero infraestructuralmente débil». Centeno, *Blood and Debt*, 10.

[14] Klarén, «The Origins of Modern Peru», 614.

[15] Para un examen de los cambios urbanos en Lima, véanse Barbagelata y Bromley, *Desarrollo urbano de Lima*; y Ramón, *La muralla y los callejones.*

[16] Blanchard, *The Origins of the Peruvian Labor Movement*, 8; Pareja, *Anarquismo y sindicalismo*, 31.

[17] Pareja, *Anarquismo y sindicalismo*, 30; Parker, *The Idea of the Middle Class*.

[18] La bibliografía sobre este tema es abundante. Véanse, entre otros, Tejada, *La cuestión del pan*; Pareja, *Anarquismo y sindicalismo*; Sulmont, *El movimiento obrero en el Perú*; Kapsoli, *Las luchas obreras en el Perú*; Blanchard, *The Origins of the Peruvian Labor Movement*; Sanborn, «Los obreros textiles de Lima».

[19] Entre otros valiosos estudios sobre la vida urbana, la cultura popular y la socialización en Lima, véanse Muñoz, *Diversiones públicas en Lima*; Del Águila, *Callejones y mansiones*; Ramón, *La muralla y los callejones*; y varios artículos en Panfichi y Portocarrero, eds., *Mundos interiores*.

[20] Flores Galindo, *La tradición autoritaria*.

[21] Véase Stein, «Cultura popular y política popular». Sobre las mujeres y las sirvientas domésticas, véase Miller, «La mujer obrera en Lima»; sobre los colegios, consúltese Encinas, *La educación de nuestros hijos*. Según Francisco García Calderón, las escuelas eran «pequeños cuarteles» (citado en Stein, «Cultura popular», 61). Con respecto al autoritarismo en la familia, véase González Prada, *Bajo el oprobio.*

[22] Stein, «Cultura popular», 60, 62, 73, 77.

[23] Melossi y Pavarini, *The Prison and the Factory*; Ignatieff, *A Just Measure of Pain*.

[24] Meranze, *Laboratories of Virtue*.

[25] Spierenburg, *The Spectacle of Suffering*.

[26] Zinoman, *The Colonial Bastille*; Arnold, «The Colonial Prison»; Redfield, *Space in the Tropics*.

[27] Davis, «Masked Racism»; Wacquant, «From Slavery to Mass Incarceration».

[28] Foucault, *Vigilar y castigar*, 355. Como sostuvo Nancy Fraser, «vistos a través de sus ojos [los de Foucault], los servicios sociales pasan a ser aparatos disciplinarios, las reformas humanistas se vuelven regímenes panópticos de vigilancia, las medidas de salud pública se convierten en usos del bio-poder y las prácticas terapéuticas terminan siendo vehículos de sujeción». Fraser, «From Discipline», 160.

[29] James, *Imprisoned Intellectuals*; Buntman, *Robben Island*.

[30] Gatrell, «Crime, Authority, and the Policeman-State».

[31] Garland, *Punishment and Modern Society*, 193-203.

[32] Melossi, «The Cultural Embeddedness», 407.

[33] Garland, *Punishment and Modern Society*, 195.

[34] Tomo la expresión de Barrows, *Distorting Mirrors.*

[35] Sobre este punto, véase en particular Wiener, *Reconstructing the Criminal.*

[36] Perrot, «Delinquency and the Penitentiary System», 217.

[37] En lo que respecta a la fortaleza de las prácticas democráticas, véase en especial Forment, *Democracy in Latin America*; sobre la tradiciones autoritarias, véase Flores Galindo, *La tradición autoritaria*.

[38] Para un breve examen del encarcelamiento femenino durante este período, véase Aguirre, «Mujeres delincuentes».

[39] Nacido en Ecuador, Gutiérrez vivió en Lima la mayor parte de su vida profesional. El historiador Jorge Basadre lo calificó de «gran abogado». Véase Basadre, *Historia de la República*, vol. IV, 263.

[40] El delincuente casi siempre era representado como un sujeto masculino.

[41] Según Felipe Barriga, un crítico acerbo de las políticas liberales decimonónicas, un ejército de 20.000 esclavos libertos iba a invadir Lima y generar tan «espantoso sacudimiento» que a la sociedad no le quedaría otra opción que «exterminarlos». Citado por Dávalos y Lissón, *La primera centuria*, vol. IV, 107.

[42] Távara, *Abolición de la esclavitud*, 43.

[43] Fuentes, *Estadística general de Lima*, 211.

[44] Para el periódico conservador *El Heraldo,* conceder la ciudadanía plena a los exesclavos era «un insulto al buen gusto». La abolición, decía, produciría «la ociosidad completa de todos los negros y su desenfreno». *El Heraldo de Lima*, 5 y 6 de junio de 1855.

[45] Oviedo, *Colección de leyes*, vol. 4, 371-373.

[46] Oviedo, *Colección de leyes*, vol. 12, 255-257.

[47] No contamos con un estudio sistemático de la pena de muerte en el Perú colonial. Algunas referencias sobre las ejecuciones públicas aparecen en Flores Galindo, *Aristocracia y plebe*.

[48] Valladares Ayarza, «La pena de muerte».

[49] Véase Aguirre, «The Lima Penitentiary», 48.

[50] Un artículo en el periódico *El Telégrafo de Lima* sostenía que «condenar a muerte por el voto de una mayoría a cualquier reo, por culpable que sea, es un crimen [...] todos los castigos capitales son homicidios voluntarios». *El Telégrafo de Lima*, 20 de septiembre de 1833.

[51] Loza, *Inviolabilidad de la vida humana*, 24, 30. Agradezco a Charles Walker por haber compartido conmigo una fotocopia de este folleto difícil de conseguir.

[52] Según Gálvez, «la sociedad no tiene derecho a matar». Citado en Basadre, *Historia de la República*, vol. III, 333. Véase también Valladares Ayarza, «La pena de muerte», 129.

[53] Fuentes, *Estadística general de Lima*, 114.

[54] Citado en Francisco Javier Mariátegui, «La pena de muerte. El Ministerio y la Corte Suprema», *La Gaceta Judicial* (en adelante, *LGJ*), I, 108, 30 de septiembre de 1861.

[55] Silva Santisteban, *Breves reflexiones*.

[56] En torno a los motines de los artesanos, véanse Méndez, «Importaciones de lujo y clases populares»; y Gootenberg, «Artisans and Merchants».

[57] *El Comercio* (en adelante, *EC*), 15 de febrero de 1859.

[58] Citado en Basadre, *Historia de la República*, vol. III, 380.

[59] Ídem.

[60] Poco después, el Código Penal de 1863 estableció los tipos de homicidios que se castigarían con la pena de muerte. Véase Fuentes, ed., *Códigos penal y de enjuiciamientos*, 78-80 (arts. 230-241).

[61] González Vigil, *Opúsculo sobre la pena de muerte*. Bartolomé Herrera le respondió en *El opúsculo sobre la pena de muerte*.

[62] Tejerina, *De la pena capital en el Perú*.

[63] Luis E. Albertini, «Consideraciones legales y filosóficas sobre la pena de muerte», *LGJ*, I, 1, 15 de mayo de 1861; énfasis en el original. Véase también *LGJ*, I, 4, 22 de mayo de 1861 y I, 5, 23 de mayo de 1861. Para otras intervenciones en este debate, véanse Mariátegui, «La pena de muerte. El Ministerio y la Corte Suprema», *LGJ*, I, 108, 30 de septiembre de 1861; José Simeón Tejeda, «La ley que restablece la pena de muerte», *LGJ*, I, 110, 2 de octubre de 1861. Años más tarde, en 1874, el Congreso peruano debatió y volvió a rechazar la abolición de la pena capital. Véase «Documentos referentes a la abolición de la pena de muerte proyectada por el congreso», *LGJ*, II, 89, 20 de octubre de 1874, y II, 90, 21 de octubre de 1874.

[64] Monsalve, «Elecciones, violencia y dominación racial», 1-2.

[65] Ídem, 15.

[66] Con respecto a la inflación y el desempleo, consúltense Gootenberg, «Carneros y chuño»; y Quiroz, *La deuda defraudada.*

[67] Para las diferencias y similitudes entre liberales y conservadores durante el temprano período republicano, véanse Gootenberg, «Beleaguered Liberals»; y Aljovín, *Caudillos y constituciones.*

[68] «Mensaje que el Libertador Presidente de la República dirije a la legislatura de 1860», *El Peruano*, 28 de julio de 1860.

[69] Ídem.

[70] Espinosa, *Diccionario para el pueblo*, 463.

[71] Sobre la creciente atención prestada a las estadísticas por los constructores del Estado peruano, véase Ragas, «Ciudadanía, cultura política y representación», 39-43. Una importante compilación estadística fue la de Córdova y Urrutia, *Estadística histórica.*

[72] Fuentes fue probablemente el escritor más prolífico de la Lima decimonónica y uno de los juristas y periodistas más influyentes. No existe todavía una biografía completa de este personaje excepcional. Véanse algunas referencias en Gootenberg, *Imagining Development*, 64-71; y Xammar, «*El Murciélago» en la literatura peruana*. Sobre la difusión e importancia de las estadísticas en el imaginario político peruano durante las décadas de 1860 y 1870, véase Chiaramonti, «Buscando el ciudadano "virtuoso"».

[73] Fuentes, *Estadística general de Lima*. Una segunda edición «notablemente corregida» fue publicada en París en 1866 por Tip. de A. Lainé et J. Harvard. Aquí cito de la primera edición.

[74] Fuentes, *Estadística general de Lima,* 111-112.

[75] Ídem, 74.

[76] Ídem, 607, 610.

[77] Ídem, 700.

[78] Ídem, 595-96, 601, 606.

[79] Ídem, 606, nota a pie de página.

[80] Ídem, 114-115.

[81] La lista de suscriptores del libro de Fuentes constituye un verdadero directorio de la intelectualidad limeña e incluye a Gutiérrez, Mariátegui, González Vigil, Albertini, Silva Santisteban y muchos más. Véase la lista en la edición de 1858 de la *Estadística general de Lima.*

[82] En su valioso estudio sobre las estadísticas y el nacionalismo en Italia, Silvana Patriarca sostiene que «la estadística no sólo desempeñó un papel de legitimación ideológica y política, sino que también contribuyó a la creación –la "producción", por así decirlo– de la nación italiana, esto es de la misma entidad que se suponía debía describir». Patriarca, *Numbers and Nationhood*, 4.

[83] Cole, *Suspect Identities*, 14. Cole atribuye al filósofo francés Adolphe Quetelet la idea de que el delito, al igual que otros fenómenos sociales tales como el nacimiento, la muerte y el suicidio, estaba determinado por «leyes estadísticas».

[84] Gootenberg, *Imagining Development*, 71.

[85] Walker, «Voces discordantes».

[86] Wade, *Race and Ethnicity*, 31; Méndez, «Incas sí, indios no».

[87] Gootenberg, «Population and Ethnicity».

[88] Walker, «The Patriotic Society».

[89] Méndez, «República sin indios», 21.

[90] Citado en Poole, *Vision, Race, and Modernity*, 148.

[91] Véase, por ejemplo, la siguiente afirmación: «Los indios del Perú, se reputarán hoy, sin duda, libres porque no deben pagar contribución, pero, ¿consisten en tal esencion [sic] todos los efectos de la libertad verdadera? No, y mil veces no [...] ilustremos al pueblo para que sea feliz; *moralidad, saber y trabajo*; sin esto no habrá en el Perú pueblos *ilustrados, respetados y queridos*; sino pueblos *ignorantes, despreciados y maltratados*». Fuentes, *Aletazos del Murciélago*, vol. I, 22-23. Énfasis en el original.

[92] Fuentes, *Lima. Apuntes históricos*, 78. Énfasis en el original.

[93] Entre los integrantes de esta sociedad se encontraban el médico José Casimiro Ulloa, el educador liberal Sebastián Lorente, el futuro director de la penitenciaría de Lima Tomás Lama y Luis Carranza, quien luego sería una figura prominente de la Sociedad Geográfica de Lima. Véase McEvoy, *Forjando la nación*, 99.

[94] McEvoy, *Forjando la nación*, 100.

[95] Citado en Jacobsen, «Civilization and Its Barbarism», 101.

[96] Espinosa, *Diccionario para el pueblo*, 609-621; la cita en 616-617. Énfasis en el original.

[97] Francisco Laso, «Croquis sobre el carácter peruano», *La Revista de Lima*, 2, 7, 1 de octubre de 1860, reimpreso en Laso, *Aguinaldo para las señoras*, 117-126; la cita en 120.

[98] Véanse las respuestas de los hacendados a una encuesta sobre los trabajadores chinos publicada en Elías y Rodríguez, *Inmigración de chinos*.

[99] García Jordán, «Reflexiones sobre el darwinismo social».

[100] Citado en Muñoz, *Diversiones públicas*, 163.

[101] Ignacio Noboa, «Homenaje a nuestros jueces», *LGJ*, 1, 135, 7 de noviembre de 1861. Véase también José Simeón Tejeda, «Un delito de homicidio», *LGJ*, I, 134, 6 de noviembre de 1861.

[102] Lorente, «Raterías del indio», en *Pensamientos sobre el Perú*, 43.

[103] Manuel Atanasio Fuentes, «Arraigo de chinos», *LGJ*, I, 61, 24 de marzo de 1874.

[104] Véanse, por ejemplo, Casanova, *Ensayo sobre la industria algodonera*; Pardo, «Algo sobre el código penal».

[105] «Las orgías de la plebe promovidas o fomentadas, casi siempre, por los vagos, son los focos de inmoralidad y corrupción, donde se preparan los crímenes, donde los insignes criminales aleccionan en su ejecución a los menos expertos, y de donde los malhechores, concertados, parten en todas direcciones a realizar sus tenebrosos planes de iniquidad». Memoria, Gobierno, 1860, 41-42. (Cada vez que cito la Memoria de alguna autoridad pondré la palabra «Memoria» seguida del nombre del ministerio o institución y el año correspondiente. Las referencias bibliográficas completas aparecen al final del libro).

[106] Fuentes, *Estadística general de Lima, 164.*

[107] *El Trabajo*, 6, 3 de octubre de 1874.

[108] Isaac Alzamora, «La vagancia», *LGJ*, 26 de enero de 1874.

[109] *El Nacional*, 16 de marzo de 1877. Véase también Manuel A. Fuentes, «Vagancia de menores», *LGJ*, 20 de febrero de 1874.

[110] «Una caridad mal entendida», *El Nacional*, 9 de marzo de 1877.

[111] Para las preocupaciones de finales del siglo XVIII, véase Ignacio de Lequanda, «Discurso sobre el destino».

[112] Para la leva de vagos en el ejército, véase «Circular a los prefectos», ministro de Gobierno, 16 de septiembre de 1829, en Quirós, *Colección de leyes*, vol. 3, 211. El *boleto* se hizo obligatorio para los esclavos en 1825, pero en 1839 el *Reglamento de policía* extendió dicho requisito a todos los integrantes de las clases trabajadores. Véanse «Reglamento interior de las haciendas de la costa» (1825) en Quirós, *Colección de leyes*, vol. 2, 167-169; y «Reglamento de policía de Lima», 11 de noviembre de 1839, en Oviedo, *Colección de leyes*, vol. 3, 76-77, artículos 233, 238.

[113] Oviedo, *Colección de leyes*, vol. 3, 326.

[114] *EC*, 29 de octubre de 1855.

[115] Fuentes, ed., *Códigos penal y de enjuiciamiento*, 112.

[116] «Reglamento de moralidad pública y policía correccional», 12 de octubre de 1877, art. 23, en Concejo Provincial de Lima, *Reglamento de la guardia urbana*, 75.

[117] Ramón, *La muralla y los callejones, 73.* El ingeniero y urbanista Ricardo Tizón y Bueno se refiere a este período como uno de «febril actividad y brillante progreso material, pero al propio tiempo de intensa locura megalómana y de profunda inmoralidad privada y pública». Tizón y Bueno, *El plano de Lima*, 44.

[118] Para una detallada historia de la muralla de Lima, véase Ramón, *La muralla y los callejones*.

[119] Ramón, *La muralla y los callejones*, 88.

[120] Méndez, «Penalidad y muerte».

[121] Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima (en adelante, AHML), Subprefecturas, 2 de junio de 1860.

[122] Majluf, *Escultura y espacio público*, 24.

[123] Citado en Majluf, *Escultura y espacio público*, 27.

[124] Bonilla, «La crisis de 1872», en *Guano y burguesía*.

[125] Bonilla, «El problema nacional y colonial del Perú en el contexto de la Guerra del pacífico», en *Guano y burguesía*. Sobre los motines de 1872, véase Giesecke, *Masas urbanas y rebelión*.

[126] Bonilla, «El problema nacional y colonial», 257.

[127] Fuentes, *Lima. Apuntes históricos*, v.

[128] *El Diario Judicial* (en adelante, *EDJ*), 15 de abril de 1890.

[129] *EC*, 12 de septiembre de 1893. Su autor, Paul Groussac, fue un autor francés que vivía en Argentina. Véase también «La insalubridad de Lima», *EC*, 24 de mayo de 1898.

[130] Dr. Vidrieras, «La podre de Lima. La ciudad de los chinos», *EDJ*, II, 462, 1 de diciembre de 1891. El segundo artículo de esta serie fue «La podre de Lima. Las casas de los obreros», *EDJ*, II, 466, 5 de diciembre de 1891. A pesar del título, este segundo artículo no trata de las viviendas de clase obrera sino de los burdeles limeños.

[131] *EC*, 6 de marzo de 1885; «Callejón de Otaiza», *EC*, 10 de octubre de 1892; Rodríguez Pastor, «La calle del Capón».

[132] «Lo que es hoy Lima y lo que será mañana», *EC*, 3 de junio de 1898.

[133] Para un mayor desarrollo de esta tendencia que enfatiza el papel de la salud en la deficiente constitución de la población peruana, consúltese Parker, «Civilizing the City of Kings».

[134] «Criminología», un término inventado por Rafaelle Garofalo en 1885, se usa aquí como sinónimo de *antropología criminal*, la primera denominación dada a la nueva disciplina. Véase Bierne, *Inventing Criminology*, 233-238.

[135] Garland, «Of Crimes and Criminals».

[136] Garland, «The Criminal and his Science».

[137] Lombroso, *L'Uomo delinquente*. Véase también Gibson, *Born to Crime*.

[138] El término *criminal nato* («*delinquente nato*» en italiano) fue inventado por Enrico Ferri, y Lombroso no lo usó sino hasta ocho años después de la publicación original de *L'uomo delinquente*. Véase también Gibson, *Born to Crime*, 22.

[139] Véanse Stephen J. Gould, «The Ape in Some of Us: Criminal Anthropology», en *The Mismeasure of Man*, 122-145; y Daniel Pick, «Lombroso's Criminal Science», en *Faces of Degeneration*, 109-152.

[140] Citado en Gibson, *Born to Crime*, 20.

[141] Citado en Wright, *Between the Guillotine and Liberty*, 121.

[142] Renneville, «La rèception de Lombroso».

[143] Salvatore, «Criminology, Prison Reform»; Buffington, *Criminal and Citizen*; Rodríguez, «Encoding the Criminal».

[144] Presenté una versión más detallada de estos debates en mi artículo «Delito, raza y cultura».

[145] Prado, *El método positivo.*

[146] [Paulino Fuentes Castro], «Atractivos de las penas», *EDJ*, 4, 827, 22 de junio de 1893.

[147] Rodríguez, «Estudios criminológicos».

[148] Paulino Fuentes Castro, «Manuel Peña y Chacaliaza», *EDJ*, 2, 500, 18 de febrero de 1892. Sobre Chacaliaza, véase también Portal, *Del pasado limeño*, 99-100. Las fuentes se refieren a él como Chacaliaza o Chacallaza; aquí usaré la primera denominación.

[149] Paulino Fuentes Castro, «Pedro Laredo», *EDJ*, III, 537, 2 de mayo de 1892.

[150] Prado, *El método positivo*, 133.

[151] Véanse L. Barros Méndez, «La nueva escuela penal italiana», *EDJ*, I, 208, 4 de diciembre de 1890; «Discurso pronunciado por el catedrático de la Facultad de Medicina, Dr. Manuel C. Barrios en la ceremonia de apertura del año escolar de 1891», *LGJ*, vol. 1, n.º 8 y 9, 31 de marzo y 1 de abril de 1891; Andrés Meneses, «Antropología», *EDJ*, III, 625, 22 de agosto de 1892; Enrique Ego Aguirre, «Escuela antropológica», *El Derecho*, septiembre de 1898; Salomón, «El factor económico»; Prado Ugarteche, *El tipo criminal*; Cedano, «Estudios sobre la criminalidad»; Julio E. Portella, «Algunas observaciones sobre la escuela penal positiva», *EC*, 11 de noviembre de 1905; Pedro José Rada, «El derecho penal moderno», *EC*, 13 de octubre de 1905; Zamora Torres, «El delito y sus causas».

[152] «La existencia del delincuente nato, repugna a nuestra razón; creemos imposible que haya personas condenadas a ser devoradas por el antro del crimen. Pero no podemos negar, que vienen al mundo seres de perversidad ingénita. Tenemos que reconocer que "no todos los hombres son reformables por la acción penal"». Jiménez, «La sociedad y el delito», 117.

[153] Ídem, 185. «El crimen no es producto exclusivo del individuo, la sociedad también lo alienta y fecundiza». Ídem, 159.

[154] Ídem, 195.

[155] Ídem, 121.

[156] Ídem, 158-63, 221.

[157] «El indio necesitaba mayor libertad y le trajeron la esclavitud de las encomiendas, de las mitas. Necesitaba más pureza en sus ideas religiosas y sólo le brindaron prácticas y creencias que le alejaban de su antiguo

control religioso. Tal contraste produjo en el alma indígena una degeneración nerviosa que explica su actual moral; híbrida, de fuertes contrastes, que determinan un buen porcentaje de los delitos [...] Un latifundismo ilimitado consume la propiedad indígena alejándole del trabajo libre, entregándole a manos del gamonal, aherrojándole para quitarle sus tierras, sus rebaños y sus hijos». Encinas, «Causas de la criminalidad indígena», 196, 199-200.

[158] «En un ambiente de servilismo, bajo un régimen de opresión incesante, son fácilmente explicables las reacciones violentas. Y porque esas condiciones, lejos de atenuarse, se acentúan más y más, persisten y tienen marcada tendencia a crecer las cifras de la delincuencia de la raza indígena». Valdizán, «La delincuencia en el Perú», 147.

[159] Villavicencio, *Algunos aspectos*, 65. Véase también Miró Quesada, *Breves apuntes*.

[160] Encinas efectivamente emprendió estudios «antropométricos». Luego de tomar las medidas a 116 presos indígenas en la penitenciaría de Lima, concluyó enfáticamente que «el indio no es criminal nato». Encinas, «Causas de la criminalidad indígena», 261.

[161] Palma, *El porvenir de las razas*. Para afirmaciones racistas similares, véanse Clavero, *El tesoro del Perú*; y Arrús, *Las razas china e india*.

[162] Palma, *El porvenir de las razas*, 16.

[163] Ídem, 6-7.

[164] Ídem, 35.

[165] Ídem, 38.

[166] Portocarrero, «El fundamento invisible».

[167] Pike, *The Modern History*, 159. Pike menciona al sociólogo Carlos Lisson como uno de los primeros en escribir en términos «optimistas» sobre la «regeneración» del indio y en abandonar las explicaciones biológicas de la inferioridad racial. Ídem, 161.

[168] Me refiero aquí a obras sumamente influyentes como González Prada, *Nuestros indios*; Haya de la Torre, *Por la emancipación*; y Mariátegui, *Siete ensayos*.

[169] Francisco Graña admitió en 1916 que «se ha necesitado la dura experiencia, la decepción de tantos años, para comprender que no debemos confiar en la inmigración, si nosotros, por esfuerzo propio, no hacemos antes una labor preparatoria, una labor inicial que haga este suelo hospitalario para nosotros mismos y para los demás; pues entonces, sólo entonces, vendrán a prestarnos el contingente de su sangre, su inteligencia y su cultura». Graña, *La población del Perú*, 46.

[170] Villavicencio, *Algunos aspectos*, 72.

[171] La bibliografía sobre el indigenismo es enorme e imposible de resumir aquí. Véase, entre muchos otros trabajos, el provocador estudio de Marisol de la Cadena, *Indigenous Mestizos*.

[172] Cerna, «El problema carcelario».

[173] Véase Poole, «Ciencia, peligrosidad y represión». El Gobierno de Leguía también se apropió de la retórica y plataforma indigenistas en la década de 1920. En 1921 se creó una Oficina de Asuntos Indígenas y en 1924 un Patronato de la Raza Indígena para defender a los indios. Como Leguía mismo señaló, «defender al indio significa defender nuestra vida económica de la cual él es propulsor». Citado en Hurtado Pozo, *La ley «importada»*, 82.

[174] Las opiniones a favor de la inmigración blanca como un medio de «regenerar» la población peruana fueron sumamente populares hasta comienzos del siglo XX. Véanse Polar, «Aptitudes políticas de nuestra raza»; Barros, «Aptitud de nuestra raza para el trabajo»; Arona, *La inmigración en el Perú*. Véase también Boisset, *El problema racial en el Perú*. La posición alternativa, que enfatizaba la educación y la reforma moral como vías hacia la regeneración, fue ganando fuerza en las primeras décadas del siglo XX. Véanse León García, *Las razas en Lima*; Graña, *La población del Perú*; Medina, *Causas del estacionarismo*; Pesce, *Indígenas e inmigrantes*.

[175] Graña, «Factores sociales». En 1919, J. F. Landaeta sostuvo que «es el factor racial el que saliendo a flor de epidermis actúa; teniendo un noventa y nueve por ciento de influencia en la comisión de los actos delictuosos». Landaeta, *Legislación sobre delincuencia alcohólica*, vii.

[176] Villavicencio, *Defensas criminales*, 63.

[177] De la Cadena, *Indigenous Mestizos*, 2-3.

[178] Muchos autores de escritos racistas eran mestizos, lo que resultaba una desventaja evidente en sus pretensiones de convertir la pureza racial blanca en la principal o única señal de superioridad.

[179] Parker, «Civilizing the City of Kings», 153-178.

[180] Para las ideas médicas sobre la higiene y su relación con los discursos sobre el género y el cuerpo, véase el importante estudio de María Emma Mannarelli, *Limpias y modernas*.

[181] Miró Quesada, *Breves apuntes de mesología*, 99-100.

[182] Portella, «La higiene en las casas de vecindad», 40, 41.

[183] Villavicencio, *Algunos aspectos*, 40.

[184] «Una casa de vecindad en Lima. Los grandes focos de infección. "Pescante grande" y "Pescante chico"», *EC*, 13 de marzo de 1908.

[185] Cueto, *El regreso de las epidemias*, capítulos 1 y 2.

[186] Eyzaguirre, «La tuberculosis pulmonar», 151.

[187] Véase, por ejemplo, José Casimiro Ulloa, «Cuestiones médico-legales. La embriaguez erigida en crimen y castigada con la pena capital», *LGJ*, V, 109, 31 de marzo de 1861.

[188] Jiménez, «La sociedad y el delito», 274.

[189] Ídem, 282, 284.

[190] Congreso Ordinario de 1887, *Diario de los debates de la H. Cámara de Senadores*. Lima, 1887, 491.

[191] *EC*, 30 de marzo de 1902. Véanse también «Desarrollo del alcoholismo», *EC*, 1 de septiembre de 1908; y «Alcoholismo: cifras reveladoras», *EC*, 26 de septiembre de 1916.

[192] Véase la información presentada por Ruperto Algorta, secretario de la sociedad, como apéndice a Stoddard, *Manual científico*, 140. Algorta, un misionero metodista, fue una figura clave en la campaña antialcohólica, en especial entre la clase obrera. Véase Fonseca, *Misioneros y civilizadores*, 231, 249.

[193] Vicente H. Delgado sostuvo, en respuesta a esta última propuesta, que de ser aprobada irían a la cárcel 2 millones de personas porque los indios siempre estaban ebrios cuando no estaban trabajando (*EC*, 25 de abril de 1903). Resulta revelador que la entrada para el término «Alcoholismo» en el *Diccionario de la legislación criminal* de Leguía y Martínez se limite a decir, escuetamente, «V. Indígena» (48).

[194] Intervención de Francisco Graña en el Congreso Nacional Antialcohólico, *EC*, 2 de enero de 1903. Graña presentó estadísticas de la delincuencia para respaldar dicha idea. En un lapso de seis años (1895-1901), el 24,3 por ciento de todas las personas arrestadas en la intendencia de Lima estaban bajo la influencia del alcohol, en tanto que el 46,5 por ciento fueron acusados de cometer delitos en estado de ebriedad. Véase también Castañeda y Álvarez, «El alcoholismo en Lima». Según el autor, los delincuentes «degenerados» iniciaban sus carreras delictivas en las tabernas y las completaban en la penitenciaría o el manicomio.

[195] *EC*, 3 de enero de 1903.

[196] Ley 2282, 14 de octubre de 1916, y el decreto acompañante, 3 de febrero de 1917 (Archivo Digital de la Legislación Peruana; en adelante, ADLP). El ADLP está disponible en línea en http://www.leyes.congreso.gob.pe/

[197] Jiménez de Asúa, *Derecho penal*, 39-74; Calle, ed., *Código Penal, passim*.

[198] Ejemplos de la oposición a la pena de muerte entre los expertos peruanos incluyen Calderón, «La defensa social»; Pineda Iglesias, «Se justifica la pena capital»; Varela y Orbegoso, *La criminología de Garofalo*; Quintanilla, *La pena de muerte*; Castillo, «Una institución que debe desaparecer».

[199] Varios comentaristas peruanos adoptaron la noción de «defensa social». Véase León y León, «La libertad y la responsabilidad»; Memoria, Penitenciaría, 1926; Carlos Bambarén, «La función preventiva del estudio psicopatológico del criminal» (1919), reimpreso en *La Crónica Médica*, vol. 53, n.º 874, 1936, 155-159; Avendaño, «La reforma de la legislación penal», 251.

[200] Según Foucault, la idea de «peligrosidad» dio origen tanto a la antropología criminal italiana como a la teoría de la defensa social, tal como fuese desarrollada en Bélgica. Foucault, «About the Concept».

[201] En los Estados Unidos se entendió «defensa social» como la necesidad de eliminar «la clase de criminales reincidentes» enviándolos a prisión. Boies, *The Science of Penology*, 97-98.

[202] Citado en Altmann Smythe, *Reseña histórica*, 104.

[203] Calle, ed., *Código Penal*, art. 51.

[204] Avendaño, «La reforma de la legislación penal», 252.

[205] Solano, *El estado peligroso*.

[206] Solano, *El indígena y la ley penal*.

[207] Según Juan Luis Hague, por ejemplo, «si un sujeto completamente anormal desde el punto de vista psiquiátrico» era acusado de un delito menor, resultaba aconsejable averiguar las razones por las cuales se cometió una ofensa tan insignificante, pues concentrarse únicamente en el delito podía resultar engañoso en cuanto a la verdadera peligrosidad del sujeto. A la inversa, si una persona supuestamente normal era acusada de cometer un delito, era necesario considerar la posibilidad bastante real de que se tratara de una acusación errada. Hague, *La caracterización del delincuente*, 15.

[208] Jiménez de Asúa, «Elmore y Chocano», 173-174.

[209] López-Rey Arrojo, *Introducción al estudio*, 36.

[210] Calle, ed., *Código Penal*, arts. 44, 45.

[211] Esto constituyó un cambio drástico en relación con el Código Penal de 1863, según el cual «la ignorancia de la ley penal no exime de responsabilidad al delincuente» (art. 6), una postura compatible con la noción de que todos los peruanos eran iguales ante la ley. Sobre este punto, véase Hurtado Pozo, *La ley «importada»*, ٧٧-٧٨.

[212] «El Código Maúrtua y la Sociedad General de Prisiones de París», *Revista de Derecho y Ciencias Políticas*, II, 1, 1937, 84.

[213] Calle, ed.,*Código Penal*, arts. 44, 45.

[214] Poole, «Ciencia, peligrosidad y represión», 354. Véase también Hurtado Pozo, *La ley «importada»*, 69.

[215] Hurtado Pozo compara los preceptos del Código Penal con las actitudes coloniales españolas referidas a los indios. Reveladoramente, el jurista Juan Bautista de Lavalle sugirió que los países con mayoría indígena como el Perú, Bolivia y Ecuador deberían aprender de la experiencia francesa en sus colonias, «particularmente con respecto a los pueblos indígenas de esas regiones». «El Código Maúrtua», 96.

[216] Cueto, *Excelencia científica*, 62-63.

[217] José Casimiro Ulloa, «Código Penal. Cuestión médico-legal», *LGJ*, V, 107, 28 de febrero de 1861. Véase también Fuentes y De la Lama, *Diccionario de jurisprudencia*, 434-436.

[218] Plácido Jiménez, por ejemplo, se refirió a la necesidad de «cauterizar» y «esterilizar» a la sociedad del delito. Jiménez, «La sociedad y el delito», 108-9.

[219] Citado en Hurtado Pozo, *La ley «importada»*, 49.

[220] La sentencia fue eventualmente conmutada por 15 años de reclusión en la penitenciaría. *El Diario Judicial* ofreció una amplia cobertura de este caso entre el 9 y el 21 de noviembre de 1890. Véase también Foro Peruano, *Proceso criminal*.

[221] Citado en Fuentes Castro, *Criminología peruana*, 70. Énfasis en el original.

[222] Fuentes Castro, comp., *Anales Judiciales*, vol. VI, 7-12, la cita en 10.

[223] Fuentes Castro, *Criminología peruana*, 105.

[224] «La enorme mayoría de los juristas peruanos no han sido conquistados totalmente por la noción del estado peligroso». Altmann Smythe, *Reseña histórica*, 109.

[225] Hermilio Valdizán, «Peritaje. Un imbécil criminal», *Revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas*, 1, 3, 1918, 166-176, las citas en 176.

[226] Carlos Bambarén y Luis Vargas Prada, «Alcoholismo y delincuencia», *Boletín de Criminología* (en adelante, *BC*), I, 1927, 97-100; Carlos Bambarén y Luis Espejo, «Perversión psicosexual y delincuencia», *BC*, I, 1927, 270-273; Carlos Bambarén y Luis Vargas Prada, «Epilepsia y delincuencia», *BC*, I, 1927, 558-565; Carlos Bambarén y Luis Vargas Prada, «Observaciones de clínica criminológica», *BC*, III, 1930, 207-235; Víctor M. Villavicencio, «El caso de un delincuente pederasta», *BC*, III, 1930, 235-250; José Max Arnillas Arana, «Las constituciones psicopáticas en su relación con la delincuencia», *BC*, IV, 1931, 22-45; Bambarén, *Casos de clínica criminológica*.

[227] Entre ellos figuraban los futuros criminólogos Julio Altmann Smythe, Susana Solano, Juan Hague y Carlos Herrera Martínez.

[228] Balbín, «El matrimonio y la eugenesia», 22.

[229] Stepan, «*The Hour of Eugenics*», 16-17.

[230] Peñaloza, *Prevención eugénica.*

[231] Fosalba, «La herencia como principal factor».

[232] Mendoza y Martínez, «Las ideas eugenésicas». En la década de 1930, Carlos Enrique Paz Soldán fundó el Instituto de Medicina Social y en 1939 organizó la Primera Jornada Peruana sobre Eugenesia.

[233] Stepan, «*The Hour of Eugenics*», 178-182.

[234] Iberico, *Elementos psicológicos.*

[235] Cueto, *Excelencia científica*, 58. Otro lamento sobre esta deficiencia se encuentra en Memoria, Penitenciaría, 1908.

[236] «Informe de Honorio Delgado en torno a la escuela penitenciaria de vigilantes», 14 de noviembre de 1930, Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Ministerio de Justicia (en adelante, MJ), 3.20.3.1.11.2.

[237] La idea inicial del *Boletín* provino del psiquiatra Honorio Delgado, quien lo consideraba un «órgano indispensable para crear la conciencia criminológica en los magistrados de justicia de la República». Delgado incluso sugirió el nombre, que fue el que finalmente se adoptó. Delgado al Inspector General de Prisiones, 28 de marzo de 1926 (AGN, MJ, 3.20.3.1.7.1).

[238] En Francia, por ejemplo, la cuestión social fue entendida como el resultado del empleo irregular, una pobreza alarmante, la criminalidad y las enfermedades. Horne, *A Social Laboratory*, 18.

[239] Barreda, «La asistencia pública», 22-25.

[240] Revoredo, «Deficiencias de nuestra legislación».

[241] Gandolfo, *El problema de la vagancia.*

[242] Bailey, «The Fabrication of Deviance», 222.

[243] Ídem, 230, 254.

[244] Con respecto al nacimiento de la clase obrera en Lima y sus formas de organización y cultura, consúltense en especial Tejada, *La cuestión del pan*; Blanchard, *The Origins*; y Stein, ed., *Lima obrera*.

[245] Esta categoría comprendía a todos aquellos que vivían en las márgenes de la sociedad legal: vagos, ebrios habituales, mendigos, rateros, alcahuetes, jugadores y otros. Joaquín Capelo los llamó los «parásitos» de la ciudad. Capelo, *Sociología de Lima*, vol. II, 141-147.

[246] Sobre este punto, véase Tejada, *La cuestión del pan*, *passim*.

[247] Parker, «Civilizing the City of Kings», 168.

[248] Parker, «Los pobres de la clase media», 169.

[249] Panfichi, «Urbanización temprana de Lima», 39.

[250] Véanse, por ejemplo, los numerosos episodios de violencia obrera ocurridos en 1912 en contra de burdeles y otros espacios donde tenían lugar actividades consideradas criminales. Torrejón, «Lima, 1912».

[251] Citado en Torrejón, «Lima, 1912», 329.

[252] Véase Tejada, «Malambo». Para mayores detalles sobre faites y rateros, véase el capítulo 5, *infra*.

[253] Para el caso de Argentina, véase sobre todo Salvatore, «Criminology, Prison Reform».

[254] Merino Arana, *Historia policial*, 7.

[255] Para información sobre los serenos en la Lima del siglo XVIII, véase Cosamalón, *Indios detrás de la muralla*, 207-210.

[256] «Reglamento provisional de serenos», 10 de septiembre de 1834 (ADLP).

[257] Véase, por ejemplo, Peralta, «El mito del ciudadano armado», donde se menciona el intento de Domingo Elías de construir un movimiento político liberal sobre la base de la conversión de la Guardia Nacional en una suerte de milicia civil.

[258] Zapata Cesti, *Historia de la policía*, 44.

[259] Memoria, Gobierno, 1867, 56.

[260] McEvoy, *Un proyecto nacional*, 109. Años más tarde, el periódico *El Nacional* defendió a los miembros de la Guardia Nacional civilista de la acusación de ser «instrumentos inconscientes de un poder bastardo». Para *El Nacional*, ella estaba conformada por hombres honestos y diligentes, capitalistas y obreros, «salidos de los talleres, de los escritorios, de las oficinas públicas y particulares» y que gozaban del respaldo de la ciudadanía. «Todos tienen su profesión a la que se dedican cuando no están acuartelados». «Guardias Nacionales», editorial, *El Nacional*, 25 de mayo de 1877.

[261] Concejo Provincial de Lima, *Reglamento de la guardia urbana*.

[262] Sin embargo, debido a los desacuerdos entre el Gobierno y los hacendados, la implementación de este último fue suspendida indefinidamente. Zapata Cesti, *Historia de la policía*, 56.

[263] «Reglamento de Policía Correccional», art. 29, en Concejo Provincial de Lima, 76.

[264] *La Patria*, 23 de mayo de 1877; «Lo que es hoy la Guardia Nacional», editorial, *La Patria*, 24 de mayo de 1877.

[265] Middendorf, *Perú. Observaciones*, vol. I, 267.

[266] Hacia octubre de 1889 funcionaban ocho de estas comisarías rurales con 10 hombres asignados a cada una, además del comisario y de un oficial. «Servicio rural de los valles de la capital de Lima», 15 de octubre de 1889, Biblioteca Nacional, D11500.

[267] «Documentos sobre las quejas de los comisarios por la falta de fuerza para el cumplimiento del servicio rural», 18 de febrero de 1889, Biblioteca Nacional, D11540.

[268] Véanse varios ejemplos en AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 3.1.

[269] Decreto del 13 de julio de 1886, ADLP.

[270] *Ley y reglamentos de la guardia nacional de la república* (Lima: Imprenta de J. Francisco Solís, 1888), 3-8.

[271] 31 de agosto de 1899 (ADLP).

[272] Memoria, Subprefecto, 1892. Véase también Memoria, Prefecto, 1893.

[273] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.6, 8 de agosto de 1891; 16.5, 22 de julio de 1891. El censo arrojó una población total de 107.114 habitantes para la ciudad de Lima. Memoria, Prefecto, 1893.

[274] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.6, 9 de octubre de 1891. Avendaño renunció en 1895 por razones políticas. Véase Vargas Prada, «El servicio de identificación», 1.

[275] Memoria, Subprefecto, 1895. Véase también Valdizán, «La delincuencia en el Perú», 126. El sistema Bertillon fue creado en Francia por Alphonse de Bertillon a finales de la década de 1870. Su éxito se debió a la creencia de que «es sumamente improbable que entre miles de sujetos se encuentren dos que muestren aproximadamente las mismas cifras para el diámetro de la cabeza, el mismo pie, dedo, etc.». Véase Bertillon, *Instructions for Taking Descriptions*; la cita proviene de la introducción escrita por Gallus Muller, alcaide de la Penitenciaría Estatal de Illinois, 6-7. El sistema Bertillon fue empleado en Lima hasta abril de 1915. Entre 1892 y dicho año, se midió a un total de 8.541 personas. Lozada Benavente, «La policía judicial científica», 44-45.

[276] Memoria, Subprefecto, 1895, 46. Hubo casos de personas que solicitaron que se destruyera su registro antropométrico. Véase AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.10, 30 de diciembre de 1895.

[277] Zapata Cesti, *Historia de la policía*, 69.

[278] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.6, 11 de julio de 1892.

[279] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 3.3, 4 de mayo de 1894.

[280] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.7, 20 de octubre de 1892.

[281] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 3.3, 5 de septiembre de 1891; 5 de marzo de 1891; 15 de febrero de 1892; Leg. 3.1, 1 de febrero de 1886.

[282] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.10, 16 de julio de 1894.

[283] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 3.3, 8 de enero de 1892.

[284] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.10, 2 de agosto de 1895.

[285] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.10, 7 de mayo de 1895.

[286] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.10, 8 de julio de 1894.

[287] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.10, 8 de octubre de 1895.

[288] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.10, 12 de febrero de 1895.

[289] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.10, 10 de junio de 1895. Para casos adicionales de rivalidad entre el ejército y la policía, véase AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.30, 9 de mayo de 1916.

[290] Zapata Cesti, *Historia de la policía*, 72.

[291] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.12, 14 de agosto de 1900.

[292] Memoria, Gobierno, 1907, xxxi.

[293] Memoria, Gobierno, 1905, xx.

[294] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.20, 7 de octubre de 1907.

[295] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.20, 10 de enero de 1908. Véanse también Serie 3.9, Leg. 16.20, 10 de enero de 1908; Serie 3.9, Leg. 16.25, 20 de octubre de 1911; AGN Ministerio del Interior, Prefecturas, Paquete 140, 1911, 23 de diciembre de 1911.

[296] Revollé, *Exposición que sobre el estado*, 42.

[297] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, 16.10, 19 de julio de 1895.

[298] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.12, 7 de mayo de 1900.

[299] Véase en *EC*, 9 de junio de 1912, una descripción detallada de este sistema y las expectativas que despertó en el Perú como elemento auxiliar en la lucha contra el crimen y el anarquismo.

[300] Sobre este punto, véanse sobre todo Rodríguez, «Encoding the Criminal», cap. 4; Cole, *Suspect Identities*, 127-34; y Ruggiero, «Fingerprinting».

[301] Zapata Cesti, *Historia de la policía*, 195. Véanse también Calle *et al.*, «Informe», 378; y Memoria, Justicia, 1916.

[302] AGN, Ministerio del Interior, Prefecturas, Leg. 173, 1915, 10 de mayo de 1915.

[303] Lozada Benavente, «La policía judicial científica», 46.

[304] Zapata Cesti, *Historia de la policía*, 86.

[305] Memoria, Gobierno, 1913, 41-42.

[306] *La Prensa*, 22 de febrero de 1913.

[307] «Reglamento para el ingreso en las gendarmerías o guardias civiles de la República», en Memoria, Gobierno, 1916, 96-97.

[308] Vargas Prada, «El servicio de identificación», 4-10.

[309] Memoria, Gobierno, 1920, xxvii.

[310] En 1896, una misión militar francesa similar fue llevada al Perú para que reorganizara y profesionalizara al ejército. Basadre, *Historia de la República*, vol. VII, 416.

[311] Basadre, *Historia de la República*, vol. IX, 414.

[312] El decreto que creaba la academia de policía había sido dado el 7 de agosto de 1919. Zapata Cesti, *Historia de la policía*, 94-96.

[313] Véanse los detalles en Memoria, Gobierno, 1923.

[314] Memoria, Gobierno, 1923, 185. El primer director del cuerpo fue Rufino Martínez, quien se ganaría la fama de torturador.

[315] Memoria, Gobierno, 1916, xvi. Véase también AGN, Ministerio del Interior, Prefecturas, Lima, Paquete 148, 1917, 20 de diciembre de 1916.

[316] Memoria, Gobierno, 1923, 390.

[317] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 2.24, 7 de junio de 1919.

[318] Véase Salazar *et al.*, *Historia de la noticia*, 55.

[319] Zapata Cesti, *Historia de la policía*, 89.

[320] Ídem, 195-199.

[321] Solís, *Once años*, 51-59.

[322] *EC*, 24 de mayo de 1891.

[323] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.20, 10 de enero de 1908.

[324] «Memoria del Inspector de Cárceles», *LGJ*, III, 11, 15 de enero de 1875.

[325] AGN, RPJ, Causas criminales, Leg. 626, «Criminal de oficio contra Ramón Gonzales, Lizardo Detam, Manuel Escurra, Manuel Molina, Teodoro Jiménez, y Tomás Aliaga por homicidio», 22 de septiembre de 1896.

[326] AGN, Prefecturas, Leg. 183, 25 de noviembre de 1916. Véase también Carrera Vergara, *El gran Dr. Copaiba*, 277. El autor transcribe unos versos populares sobre la carretilla: «La carretilla, mamá, de la Intendencia *tiene el inconveniente, mamá, de la vergüenza [...]* Ay, suba usted en carretilla y ya verá *que lo lleva jalando un cachaco* y no siente la bomba, mareo ni ná [...]».

[327] «Crónica: Las comisarías de la policía», *EC*, 22 de abril de 1898; véase también un informe de la comisaría del 3.er cuartel sobre el estado descuidado del calabozo. AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 3.3, 11 de noviembre de 1892. Para una pavorosa descripción de los calabozos, véase también «Esa no es policía», *El Tiempo*, 17 de junio de 1905.

[328] Los cambios en la altura de la barra hacían que algunas veces solo la cabeza reposara sobre el suelo y otras también el torso. Existen descripciones de esta práctica en Valdez, «La patología»; Esparza, «Contribución al estudio», 35; y Villavicencio, *La reforma penitenciaria*, 89. El jefe de la estación de policía del distrito de Ate advirtió que colocar la barra a cierta altura podría causar la muerte del prisionero por daño cerebral. AGN, Prefecturas, Leg. 16.12, 31 de diciembre de 1902.

[329] AGN, RPJ, Causas criminales, Leg. 601, «Causa criminal contra Isidoro Torres y Cruz Vargas por robo», 29 de enero de 1895.

[330] Para una descripción, véase Garrido Malaver, *El Frontón*, 105.

[331] AGN, RPJ, Causas criminales, Leg. 630, «Criminal de oficio contra Marcos Cobián por robo», 17 de noviembre de 1896.

[332] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.25, 19 de agosto de 1912.

[333] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.30, 25 de enero de 1916. Ambos casos de tortura fueron confirmados por las autoridades.

[334] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.5.1, 28 de agosto de 1930.

[335] J. M. Jiménez, «De la flajelación y resistencia a los mandatos judiciales», *EDJ*, I, 43, 12 de mayo de 1890.

[336] *EC*, 26 de agosto de 1890. El diario *El País* denunció, en febrero de 1890, «la flagelación de una joven decente» en la comisaría del distrito de Barranco, denuncia que el comisario encontró «grave» y que hizo que el prefecto se sintiera «alarmado». AGN, Prefecturas, Serie 3.9, Leg. 16.12, 21 de febrero de 1900.

[337] «Expediente sobre los sucesos promovidos a raíz de la denuncia formulada por el periódico "La Opinión Nacional" de abusos cometidos por la policía de la ciudad de Lima», 20 de abril de 1896, Biblioteca Nacional, D5754.

[338] González Prada, *Horas de lucha*, 212. Véase también «La policía», en *Bajo el oprobio*, 33-35, 79.

[339] Legislatura Ordinaria de 1915, *Diario de los debates de la H. Cámara de Diputados* (Lima: Tip. de la Prensa, 1915), 474.

[340] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.10, 19 de enero de 1895.

[341] *EC*, 30 de marzo de 1902. Énfasis en el original.

[342] González Prada, *Sobre el militarismo*, 35.

[343] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.30, 23 de enero de 1916; subrayado mío.

[344] AGN, Archivo Intermedio, Expedientes criminales, Leg. 5, «Criminal de oficio contra José Fernández (a) Chuzaso, por robo», 8 de febrero de 1915. Otro abogado, al defender a su cliente de una denuncia similar basada en el parte policial, dijo que de creerse todas las declaraciones hechas por los agentes de policía ellos se convertirían en verdaderos jueces. AGN, RPJ, Causas criminales, Leg. 637, «Criminal de oficio contra Amador Illescas y otros por robo», 22 de mayo de 1897.

[345] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 3.4, 18 de enero de 1906.

[346] *EC*, 25 de agosto de 1901.

[347] El informe, titulado «Estado actual de las cárceles y presidios en el Perú», fue publicado en Paz Soldán, *Examen de las penitenciarías*, 89-104.

[348] Paz Soldán, «Estado actual», 101.

[349] Fuentes, *Estadística general de Lima*, 205-208.

[350] Fuentes, *Estadística general de Lima*, 213.

[351] Se puede leer una descripción de Casasmatas en Memoria, Concejo Provincial del Callao, 24. Véase también «La cárcel del Callao», *LGJ*, IV, 60, 15 de septiembre de 1875.

[352] Aguirre, «Violencia, castigo y control social».

[353] Aguirre, «Disciplina, castigo y control social».

[354] Ignatieff, *A Just Measure of Pain*, 93-113.

[355] Hirsch, *The Rise of the Penitentiary*.

[356] Rothman, *The Discovery of the Asylum*, 81.

[357] Paz Soldán, *Examen de las penitenciarías*, 121-134.

[358] García Yrigoyen, «Sistemas penitenciarios», 6.

[359] Paz Soldán, «La reforma del régimen penitenciario», 11. Véase también Memoria, Gobierno, 1862.

[360] En su informe final, Paz Soldán la consideró «uno de los mejores edificios de Sudamérica». El informe está incluido en Memoria, Gobierno, 1862, documento 26. Para el viajero alemán E. W. Middendorf, la penitenciaría era «el más grande, sólido y mejor construido de la ciudad». Middendorf, *Perú*, vol. I, 296.

[361] Flores Galindo, *La tradición autoritaria*, 42.

[362] Hirsch, *The Rise of the Penitentiary*, 14-15.

[363] El reglamento estipulaba que los presos debían ser llamados solamente por el número de su celda. Esta práctica fue objeto de crítica por parte de los mismos prisioneros y de los reformadores. Fue abolida legalmente recién en la década de 1920.

[364] Fuentes y De la Lama, *Diccionario*, 523.

[365] «Reglamento interno de la Penitenciaría de Lima», en Fuentes y De la Lama, *Diccionario*, 527-547, arts. 323-340.

[366] Middendorf, *Perú*, vol. I, 297.

[367] Véanse varias propuestas infructuosas de clasificación y separación de los presos en Memoria, Penitenciaría, 1870; Memoria, Penitenciaría, 1877, 405-423; Memoria, Penitenciaría, 1891; Memoria, Penitenciaría, 1910.

[368] La penitenciaría tuvo un pequeño número de reclusas hasta 1881. Ellas ocupaban una sección en uno de los departamentos y estaban bajo la autoridad de una matrona. Ese año fueron trasladadas a Guadalupe y, más tarde, en 1891, a la cárcel de mujeres de Santo Tomás.

[369] Memoria, Penitenciaría, 1906.

[370] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.1, f. 569, 29 de diciembre de 1866.

[371] La junta fue creada para supervisar el funcionamiento de la prisión e implementar los cambios que creía necesarios. Se le atribuyó también el derecho de nombrar al personal de la cárcel y redactar nuevos reglamentos de la penitenciaría y otros penales. Véase *El Peruano*, 16 de febrero de 1870 (decreto del 31 de enero de 1870). El informe fue publicado en *El Comercio* en agosto de 1873.

[372] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.3, f. 403 (25 de julio de 1873), f. 408 (26 de julio de 1873) y ff. 421-422 (7 de agosto de 1873).

[373] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.1.2, 1 de marzo de 1881.

[374] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.1.2, 27 de febrero de 1888, f. 120.

[375] Memoria, Penitenciaría, 1890.

[376] Pradier-Foderé, *Compendio del curso*, 323-24.

[377] Fuentes y De la Lama, *Diccionario*, 509.

[378] García Yrigoyen, «Sistemas penitenciarios», 20. Véase también Puga, «Sistemas penitenciarios», 20.

[379] Velasco, «Sistemas penitenciarios», 5, 21.

[380] «Reglamento de la Penitenciaría», en Memoria, Justicia, 1901.

[381] Driver, «Discipline without Frontiers?».

[382] Véase sobre todo Morris, *Maconochie's Gentlemen*.

[383] Para un resumen de la filosofía que sustenta el sistema progresivo, véase Waite, «From Penitentiary to Reformatory». Según Waite, la tercera etapa era crucial: «Estaba diseñada para filtrar prisioneros, para identificar aquellos que estaban reformados y podían funcionar en la sociedad por cuenta propia». Ídem, 95.

[384] Citado en Waite, «From Penitentiary to Reformatory», 95.

[385] Citado en Rothman, *Conscience and Convenience*, 32.

[386] Pradier-Foderé, *Compendio del curso*, 324; Manuel Umeres, «Sistemas carcelarios», *EDJ*, I, 202, 27 de noviembre de 1890; Gerardo Chávez, «Evoluciones del régimen penitenciario»; Leonidas Avendaño, «Ejecución de las penas en caso de enfermedad sobreviniente», *El Derecho*, X, 1904-1905, 2. Véanse también Óscar Miró Quesada, «La reforma de nuestros códigos penales y el Congreso Penitenciario de Washington», *EC*, 28 de julio de 1915; Fermín Carrión Matos, «Algunos aspectos de la reforma penitenciaria en el Perú», *BC*, II, 3, 1929, 378-389.

[387] Elías Lozada Benavente, «Algo sobre represión», *Revista Universitaria*, XIII, 1920, 461-513, la cita en 487. Aunque el prestigio internacional del Reformatorio de Elmira era enorme, algunos estudios revisionistas han mostrado que no era la prisión modelo que sus autoridades pretendían y que la brutalidad y la coerción siguieron siendo componentes centrales en el tratamiento de los presos. Véase Pisciotta, *Benevolent Repression*.

[388] Calle *et al.*, «Informe».

[389] Herbold, «Developments».

[390] AGN, MJ, 3.20.3.1.1.1, Ministerio de Justicia, Dirección General de Prisiones, Resoluciones Supremas (1921-1926).

[391] Véase Calle ed., *Código Penal*, arts. del 10 al 18.

[392] Salvatore, «Positivist Criminology».

[393] El decreto, firmado el 13 de febrero de 1929, fue publicado en *BC*, II, 1, 1929, 85-87. En su estudio sobre la reforma penitenciaria publicado en 1927, Víctor Modesto Villavicencio se quejó de que «en nuestras cárceles, reina la ignorancia más absoluta sobre la verdadera personalidad del delincuente. Es imposible tener una noción precisa de los caracteres de su peligrosidad. Lo vemos diariamente, pero jamás podemos penetrarlo». Villavicencio, *La reforma penitenciaria*, 31.

[394] Carlos Bambarén, «La función preventiva del estudio psicopatológico del criminal» [1919], reimpreso en *La Crónica Médica*, 53, 1936, n.º 874, 155-159, la cita en 158. En 1926, Bambarén pasó cinco meses en Buenos Aires tomando cursos en criminología y medicina legal con el Dr. Nerio Rojas, lapso en el cual se familiarizó bastante con el funcionamiento del Instituto de Criminología argentino.

[395] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.42, Ministerio de Justicia, «Correspondencia recibida», 12 de febrero de 1927.

[396] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.45, f. 613, 14 de octubre de 1930 y 11 de noviembre de 1930; DGP, «Instrucciones para los médicos de prisiones en el momento de expedir el certificado sobre el "estado peligroso"» (mecanografiado, s. f.).

[397] DGP, «Instrucciones».

[398] Bambarén, *Sobre organización y fines*, 1.

[399] Seminario Helguero, *Notas para la reforma*; Bambarén, *Sobre organización y fines*, 1.

[400] Véase la entrevista con Bernardino León y León en *BC*, II, 1, 1929, 1-6, y varias normas legislativas publicadas en cada número del *Boletín*. El 14 de enero de 1929 se emitió un «Reglamento de clasificación de conducta de los presos». Antes de la creación del tribunal, la evaluación de los prisioneros elegibles para la libertad condicional era conducida por el Consejo Local de Patronato. AGN, MJ, 3.20.3.1.4.1.

[401] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.4, 7 de diciembre de 1931. La suma de las cifras parciales no calza con el total de reos evaluados.

[402] Calle, ed., *Código Penal*, art. 135.

[403] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.4, 7 de diciembre de 1931.

[404] «Calificación correspondiente al 10 de julio de 1935».

[405] Véase *BC*, I, 2, 127-28.

[406] Véase AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.42, f. 207 (8 de junio de 1927) y f. 225 (22 de junio de 1927).

[407] Fue establecido por Resolución del 4 de junio de 1927 y comenzó a operar a finales de 1928. AGN, MJ, 3.20.3.1.7.0.

[408] «La cárcel de Guadalupe», *EC*, 2 de junio de 1901.

[409] No he logrado determinar las fechas precisas para el cierre o la reapertura de Guadalupe. Según Carlos Aurelio León, quien visitó la prisión en 1920 y tuvo acceso a sus archivos, el documento más antiguo que encontró estaba fechado en 1856. León, *Nuestras cárceles*, 9. Sin embargo, ni Paz Soldán ni Fuentes la incluyeron en sus exámenes de las prisiones de Lima en 1853 y 1859 respectivamente. Paz Soldán, *Examen de las penitenciarías*; y Fuentes, *Estadística general*.

[410] «Reglamento de la cárcel de Guadalupe», 3 de julio de 1879 (ADLP).

[411] «Una visita a la cárcel de Lima», *EDJ*, 21 de junio de 1890. Ricardo Heredia, presidente de la Sociedad de Patronato, quedó «horrorizado» al comprobar que un centenar de presos de Guadalupe, «de todas condiciones», permanecían encerrados dentro de una celda de aislamiento sin camas, ventilación ni piso durante 12 horas al día. «Cárcel de Guadalupe», *LGJ*, II, II, 461, 16 de noviembre de 1892.

[412] *EDJ*, 3, 536, 30 de abril de 1892.

[413] «Cárcel de Guadalupe», *LGJ*, II, II, 456, 10 de noviembre de 1892.

[414] Véanse, por ejemplo, las cartas de César Canevaro, alcalde de Lima, al Ministro de Justicia en *EC*, 26 de junio de 1889; y del presidente de la Corte Suprema al ministro de Justicia en *EDJ*, II, 431, 26 de octubre de 1891.

[415] Podemos encontrar descripciones adicionales de Guadalupe en Álvarez, «Visitas de cárcel», *EC*, 21 de marzo de 1893; *El Nacional*, 14 de junio de 1898; Memoria, Corte Superior de Lima, 1905, 1907; Abelardo Gamarra, «¡La cárcel de la capital!», en *Cien años de vida perdularia*, 193-195; «Dos horas en la cárcel de Guadalupe. Una visita al local», *EC*, 9 de noviembre de 1919; *Variedades*, XIX, 786, 24 de marzo de 1923; León, *Nuestras cárceles*; Cerna, «El problema carcelario en el Perú»; Ángela Ramos, «Visitando la Cárcel de Guadalupe. Un antro de vergüenza y de dolor», *La Crónica*, 8 de noviembre de 1927.

[416] «Nueva cárcel», *EDJ*, IV, 821, 15 de junio de 1893.

[417] Memoria, Justicia, 1905, 705.

[418] Reynoso y Galup, «La arquitectura carcelaria», 52; *BC*, II, 1, enero-abril de 1929, 171. Una nueva prisión estaba siendo construida para reemplazar a Guadalupe, pero tardaría unos cuantos años en ser concluida. Adyacente a la sexta comisaría, se la conocería como «El Sexto» y sus primeros huéspedes fueron presos políticos. Víctor Modesto Villavicencio, «La cárcel nueva», *BC*, I, 4, enero de 1928, 209. La novela de José María Arguedas, *El Sexto*, ofrece un retrato dramático de esa prisión.

[419] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.5.1, 12 de mayo de 1931. Un estudio de la población de la CCV efectuado en 1935 mostró que el 52,5 por ciento de los detenidos eran reincidentes y el 10 por ciento de ellos tenían más de una sentencia de prisión. Seminario Helguero, *Cárcel*, 31.

[420] Fermín Carrión Matos, «Régimen penal y condiciones materiales de la cárcel departamental de varones de Lima», *BC*, IV, 1, 1931, 150-154.

[421] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.5.1, 9 de septiembre de 1930; «Informe presentado a la Inspección General de Prisiones por el Director de la Cárcel Central de Varones», 12 de abril de 1933, AGN, MJ, 3.20.3.1.12.5.2; Seminario Helguero, *Cárcel*, *passim*; véase también una descripción de las aterradoras condiciones de la prisión efectuada por dos médicos de la Dirección General de Salubridad Pública en AGN, MJ, 3.20.3.1.7.2, 15 de septiembre de 1932.

[422] AGN, MJ, 3.20.3.1.7.2, 24 de octubre de 1931.

[423] No he podido precisar la fecha exacta en que El Frontón empezó a funcionar. Según el historiador Jorge Basadre, ocurrió durante el segundo gobierno del presidente José Pardo (1916-1919). Basadre, *Historia de la República*, vol. IX, 193. En 1919, Lorenzo Esparza se refirió a El Frontón como una prisión que «acaba de inaugurarse». Esparza, «Contribución al estudio», 26.

[424] Memoria, El Frontón, 1922, 7.

[425] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.2.3, 14 de julio de 1930.

[426] Memoria, El Frontón, 1922, 5.

[427] Ibíd.

[428] Memoria, El Frontón, 1922, 14-15.

[429] Véase, por ejemplo, «En la colonia penal de "El Frontón"», *El Tiempo*, 16 de febrero de 1919.

[430] Ramos, *Una vida sin tregua*, 129, 130.

[431] AGN, MJ, 3.20.3.1.7.2, 15 de septiembre de 1932.

[432] Mendoza, *En las prisiones peruanas*, 129.

[433] El dirigente aprista Luis Felipe de las Casas, quien estuvo preso en El Frontón en la década de 1940, lo presentó como un «enclave o territorio independiente» administrado por tres autoridades que eran «los amos, soberanos y monarcas absolutos». De las Casas, *El sectario*, 91.

[434] Recién en 1928 se clausuró el cementerio y las autopsias se hicieron obligatorias.

[435] Villavicencio, *La reforma penitenciaria*, 89.

[436] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.2.1, 16 de junio de 1924.

[437] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.6, 5 de enero de 1937.

[438] Garrido Malaver, *El Frontón*, 107.

[439] Garrido Malaver, *El Frontón*, 107-109.

[440] Garrido Malaver, *El Frontón*, 111-112. Estas descripciones fueron confirmadas por los testimonios de Armando Villanueva del Campo (entrevista personal) y Nicanor Mujica (comunicación escrita). Véanse también Cossío del Pomar, *Víctor Raúl Haya de la Torre*, 94-96; y De las Casas, *El sectario*, 98-101.

[441] Villavicencio, *La reforma penitenciaria*, 89-90.

[442] Ramos, *Una vida sin tregua*, 121. Mayúsculas en el original.

[443] Bernardino León y León, «El reciente mensaje presidencial en el ramo de prisiones», *BC*, II, 3, 1929, 370-378, la cita en 374.

[444] La Comisión Calle había recomendado en 1915 que la administración de la penitenciaría fuera entregada a una institución religiosa, pero dicha propuesta cayó en el olvido. La comisión citó a Tocqueville, para quien «ningún poder humano es comparable a la religión para operar la reforma de los criminales». Calle *et al.*, «Informe», 226.

[445] La documentación de estas negociaciones se encuentra en AGN, MJ, 3.20.3.1.7.1.

[446] Decreto del 5 de marzo de 1868, AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, ff. 240-241. Los críticos de esta práctica la consideraban «una perturbación completa de nuestro sistema penal». Mariano Álvarez, «Visitas de cárcel», *Revista Peruana*, 1, 1879, 124-132, la cita en 129. Véanse también Memoria, Penitenciaría, 1902; «Penitenciados», *El Derecho*, V, mayo de 1894, 18; AGN, MJ, 3.20.3.3.1.7.2, f. 106, 25 de octubre de 1904.

[447] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.1.2, 13 de septiembre de 1904 y 3.20.3.3.1.1.2, 3 de noviembre de 1917; AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.61, 14 de agosto de 1920.

[448] El informe de Graña y Valdizán jamás fue publicado, pero los datos que contenía fueron usados por criminólogos como Óscar Miró Quesada y Víctor M. Villavicencio.

[449] Entre 1881 y 1885, el número promedio de presos ingresados fue de 267 por año, significativamente menor que el promedio anual de 672 nuevos reclusos entre 1870 y 1880.

[450] «Memoria del inspector de Cárceles», *LGJ*, III, 7, 10 de enero de 1875.

[451] «Dos horas en la Cárcel de Guadalupe. Una visita al local», *EC*, 9 de noviembre de 1919.

[452] Véase, por ejemplo, «Relación de rematados y penitenciados existentes en la Cárcel Central de Guadalupe (Lima)», 3 de julio de 1925, en AGN, MJ, 3.20.3.1.12.4.1.

[453] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.2.3, 26 de diciembre de 1929.

[454] Memoria, El Frontón, 1922.

[455] Fuentes, *Estadística de la penitenciaría*, 19.

[456] Se necesitan más estudios de este proceso de expansión y consolidación del sistema judicial a nivel nacional. Para referencias sobre la expansión del Estado y el retroceso de los gamonales, véanse Taylor, *Bandits and Politics*; y Burga y Flores Galindo, *Apogeo y crisis*.

[457] Véase «Resumen estadístico de la existencia de condenados a penas privativas de la libertad, en los establecimientos penales de la República, en 31 de diciembre de 1930», en *BC*, IV, 1, 1931.

[458] Alegre y Pacheco, *Los delincuentes tatuados*, 39-88.

[459] Ídem, 46.

[460] Ídem, 53.

[461] Ídem, 80.

[462] Memoria, Penitenciaría, 1909.

[463] Para más detalles, véanse los capítulos 2 y 8.

[464] Para más detalles, véase *supra*, capítulo 2.

[465] Fuentes Castro, *Criminología peruana*; «Crónica. Horrible crimen», *EC*, 17 de agosto de 1893.

[466] Miró Quesada, «El caso del asesino Montes».

[467] AGN, Archivo Intermedio, Expedientes Criminales, «Criminal de oficio contra Pablo Bambarén por homicidio», 7 de marzo de 1911.

[468] AGN, RPJ, Causas Criminales, Leg. 627, «Causa criminal contra Melchor Bustamante por homicidio», 7 de octubre de 1896.

[469] AGN, Archivo Intermedio, Expedientes Criminales, «Criminal de oficio contra Ambrosio Flores por homicidio», 3 de junio de 1914.

[470] AGN, Archivo Intermedio, Expedientes Criminales, «Criminal de oficio contra el asiático Acam por homicidio», 9 de octubre de 1900.

[471] AGN, RPJ, Causas Criminales, Leg. 290, «Criminal de oficio contra Pedro Reyes por el homicidio de Manuel Cárdenas en la hacienda de Punchauca», 23 de septiembre de 1869.

[472] AGN, RPJ, Causas Criminales, Leg. 290, «Criminal de oficio contra Pedro Pablo García por homicidio de Cipriano Tenorio», 23 de septiembre de 1869.

[473] AGN, Archivo Intermedio, Expedientes Criminales, «Criminal de oficio contra Pablo Alemán por homicidio», 26 de octubre de 1901.

[474] Archivo del Congreso, Expedientes de indulto, Leg. 8, Cuaderno 1, documento 12, «Expediente. Ricardo Carmona sobre indulto». 7 de agosto de 1909.

[475] Ídem, documento 15, «Expediente de Aurelio Cueto sobre indulto», 23 de agosto de 1909.

[476] Ídem, documento 25, «Expediente de Saturnino Fuentes sobre indulto», 14 de octubre de 1909.

[477] «Rateros», *LGJ*, II, II, 433, 13 de octubre de 1892. Véase también «Crónica. Los rateros», *EC*, 28 de mayo de 1886.

[478] Ángela Ramos, «Una ojeada a las cárceles. La congestión de presos en la cárcel central», *La Crónica*, 10 de octubre de 1929. Reimpreso en Ramos, *Una vida sin tregua*, 225-228, la cita en 226.

[479] Gálvez, *Una Lima que se va*, 88.

[480] AGN, RPJ, Causas Criminales, Leg. 640, «Causa criminal contra Rómulo Calonge (a) Marcolfa por robo», 14 de julio de 1897.

[481] AGN, RPJ, Causas Criminales, Leg. 660, «Criminal de oficio contra Aurelio Pinto por robo», 3 de diciembre de 1898.

[482] AGN, RPJ, Causas Criminales, Leg. 662, «Causa criminal contra Julián La Rosa por robo», 25 de enero de 1899.

[483] AGN, Archivo Intermedio, Expedientes criminales, «Criminal de oficio contra Andrés Farfán por robo», 6 de agosto de 1902.

[484] AGN, Archivo Intermedio, Expedientes criminales, «Criminal de oficio contra Pedro Aguirre Villar (a) Chivatito por robo», 12 de marzo de 1915.

[485] Fuentes, ed., *Códigos penal y de enjuiciamientos*, 102 (art. 130).

[486] «Dos horas en la Cárcel de Guadalupe. Una visita al local», *EC*, 9 de noviembre de 1919.

[487] Gálvez, *Una Lima que se va*, 53, 63.

[488] José Diez Canseco, «Kilómetro 83», en *Estampas mulatas*, 108. Chivato y Tintoreros eran nombres de calles; Descalzos es el nombre de un paseo en el distrito del Rímac, cerca de la zona de Malambo; el Tajamar era un lugar cerca del río que tenía la reputación de estar infestado de criminales; Abajo el Puente es una denominación coloquial para el distrito del Rímac.

[489] Citado en Tejada, *La cuestión del pan*, 143.

[490] Luis Alberto Sánchez, crítico literario y miembro del Partido Aprista, se refirió a un soplón que fue atacado por una turba enfurecida como un «negro trágico, bravo, muy valiente, que no lloraba ni suplicaba ante la multitud. Este, sin duda alguna era un redomado criminal, pero era un noble tipo de braveza. ¡No he visto ni veré un hombre más valiente!». Sánchez, *Valdelomar o la «Belle Époque»*, 92.

[491] El nombre «Malambo» fue tomado de ciertos árboles «antifebriles» plantados por los colonos españoles para combatir a los mosquitos. Para este y otros detalles de la historia de Malambo, véase Marquina Ríos, «Cincuenta casas de vecindad».

[492] Tejada, «Malambo».

[493] Para un estudio fascinante de los faites contemporáneos, véase Pérez Guadalupe, *Faites y atorrantes*.

[494] «Duelo de caballeros», *EC*, 3 de mayo de 1915; Alegría, «Duelo de caballeros». El relato fue escrito en 1953 y se publicó originalmente en 1961.

[495] «Duelo de caballeros», *EC*, 3 de mayo de 1915.

[496] Ídem.

[497] Ídem.

[498] Alegría, «Duelo de caballeros», 284-285.

[499] «Duelo de caballeros», *EC*, 3 de mayo de 1915.

[500] Alegría, «Duelo de caballeros», 292.

[501] Véase, por ejemplo, «La muerte de Tirifilo», en Torres de Vidaurre, *Romancero criollo*, 63-68; y «Muerte de Tirifilo», *El cancionero de Lima*, 99 (s. f.).

[502] José Carlos Mariátegui, «Cómo mató Wilmann [sic] a "Tirifilo". Conversando con el victimario en el Hospital Dos de Mayo», *La Prensa*, 6 de mayo de 1915.

[503] Carita tendría una extensa vida delictiva y carcelaria. Pasó 15 años detenido, entre 1924 y 1939, en El Frontón y en la penitenciaría. Participó activamente en eventos deportivos y culturales (por ejemplo, escribió una canción para Ángela Ramos) y se afanó en buscar su libertad condicional usando contactos políticos. AGN, MJ, 3.20.3.1.12.4.1, 8 y 14 de agosto de 1925; 3.20.3.3.1.4.72, 5 de enero de 1929; 3.20.3.3.1.5.22, «Calificación correspondiente al 10 de julio de 1935»; 3.20.3.1.12.1.6, 5 de julio de 1936; 3.20.3.1.7.4, 18 de diciembre de 1936; Ramos, *Una vida sin tregua*, 160, 168-169.

[504] Alegría, «Duelo de caballeros», 292.

[505] Ley 4891, ADLP, reimpresa también como apéndice del Código Penal de 1924. Véase Calle, ed., *Código Penal*, 325-328. La ley de vagancia fue finalmente abolida en 1986.

[506] Ramos, *Una vida sin tregua*, 117.

[507] Memoria, Guardia Civil, 1928, 147.

[508] Ramos, *Una vida sin tregua*, 112.

[509] Ídem, 96-103. Un parlamentario leguiísta ratificó la veracidad de esta denuncia. Ídem, 113-116.

[510] Pedro Planas se refirió a «la condición de esclavitud» en que dicha ley colocó al indígena. Planas, *La república autocrática*, 32. Según Ángela Ramos, «esta famosa ley [...] es de una felonía horrible, pues reduce al hombre a la condición de esclavo, de bestia humana». Ramos, *Una vida sin tregua*, 41.

[511] Ley 4113, 11 de mayo de 1920, ADLP. Según Basadre, ella «sólo afectó al indio». Basadre, *Historia de la República*, vol. IX, 391. La conscripción vial fue considerada una especie de «mita republicana», en alusión a esa forma de trabajo coercitivo empleada en el Perú colonial. Véase también Davies, *Indian Integration in Peru*, 82-86.

[512] Memoria, Prefecto, 1925, 19.

[513] Pedro Barrantes Castro, «Primeros efectos de la ley de vagancia», *BC*, I, 3, 1927-28, 161. Según la *Memoria* del general Martínez, en 1927 se evaluaron 516 sospechosos, 230 de los cuales fueron condenados, 284 liberados y 2 enviados al manicomio. Memoria, Guardia Civil, 1928, 144.

[514] Barrantes Castro, «Primeros efectos», 162-64.

[515] Ramos, *Una vida sin tregua*, 94.

[516] Ídem.

[517] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.2.1, 15 de julio de 1926.

[518] Entre los numerosos trabajos que iluminan la participación de los grupos subalternos en las luchas políticas durante este período, véanse Mallon, *Campesino y nación*; Thurner, *From Two Republics*; y Jacobsen y Diez Hurtado, «Montoneras, la comuna de Chalaco».

[519] Véase, por ejemplo, la cobertura de los presos políticos durante el primer gobierno de Leguía (1908-1912) a través de reportajes, fotografías y entrevistas publicados en diarios y revistas de Lima, sobre todo *Variedades*.

[520] Véase sobre todo Blanchard, *The Origins*, *passim*.

[521] Entre ellos, Juan Durand, Luis Pardo y Barreda, Alejandro Revoredo, Luis Fernán Cisneros, Javier Prado, Víctor Andrés Belaunde y otros. Basadre, *Historia de la República*, vol. IX, 257, 258, 269.

[522] Para detalles sórdidos de los métodos represivos de Leguía, consúltese, entre otros, Solís, *Once años*, 51-59. El autor estima que el número de víctimas de la represión leguiísta alcanzó varios miles.

[523] Basadre, *Historia de la República*, vol. IX, 261.

[524] Solís, *Once años*, 54.

[525] Basadre, *Historia de la República*, vol. X, 46.

[526] Cossío del Pomar, *Víctor Raúl*, 97-99. Después de declararse en huelga de hambre, Haya fue exiliado a México. Solo retornaría al Perú en 1931, luego de la caída de Leguía.

[527] Basadre, *Historia de la República*, vol. IX, 300.

[528] Del Prado, *En los años cumbres*, 85-86.

[529] Melgar y Seoane pasaron 10 años en prisión antes de ser indultados. El segundo, hermano del destacado dirigente aprista Manuel Seoane, escribió su novela testimonial *Hombres y rejas* mientras se encontraba en prisión. La novela ofrece una reconstrucción conmovedora de la vida en el panóptico.

[530] Véase Castro Fernandini, *Breve estudio*.

[531] 21 de marzo de 1859, ADLP.

[532] El Código Penal de 1924 ordenó posteriormente que los presos políticos ocuparan instalaciones especiales, separados de otros delincuentes, y los obligó a trabajar (art. 18).

[533] Valdez, «La patología de los delincuentes», 6.

[534] *Variedades*, VI, 104, 26 de febrero de 1910, 252.

[535] Seoane, *Hombres y rejas*, 136.

[536] Seoane, *Hombres y rejas*, 22. Luego agregó: «¡Qué cambio tan violento de vida en unas horas!». Ídem. 23.

[537] Por ejemplo, tanto los delincuentes comunes como el director de la penitenciaría se dirigían a Juan Seoane llamándolo «doctor». Seoane, *Hombres y rejas*, 209. El chileno René Mendoza, acusado de espionaje, pasó cierto tiempo en El Frontón y admitió que a pesar de su nacionalidad fue bien tratado en la isla tanto por las autoridades como por los soldados. De hecho, lo llamaban «señor». Mendoza, *En las prisiones peruanas*.

[538] En 1900, por ejemplo, se permitió a Belisario Barriga, un preso político en Guadalupe, tener licor en su habitación, escribir y publicar artículos, enviar correspondencia privada y hasta contactarse con las personas que deseaba. AGN, Ministerio del Interior, Prefecturas, Paquete 68, 1900.

[539] José de la Riva-Agüero, distinguido miembro de una familia aristocrática y prestigioso historiador y político, fue enviado a la intendencia en 1911, luego de que escribiera un artículo en defensa de los participantes en la conspiración de mayo de 1909. Tras una exitosa movilización de estudiantes y un pedido colectivo de su libertad, el Gobierno cedió y no solamente lo liberó sino que también decretó la amnistía de todos los demás presos políticos. Antes de su liberación se organizó un masivo banquete en honor de Riva-Agüero al que supuestamente asistieron 800 invitados. Una vez concluido, una gran multitud marchó hacia la penitenciaría para saludar a los presos políticos que pronto serían liberados y solicitaron al director que les permitieran ingresar para ofrecerles sus parabienes. El director aceptó. Más de 100 personas entraron y efectuaron una manifestación política dentro del panóptico durante casi una hora. Planas, *El 900. Balance y recuperación*, 126-128; véase también Planas, *La república autocrática*, 135.

[540] «En la penitenciaría», *Variedades*, IV, 14, 6 de junio de 1908, 458.

[541] Ídem, 459.

[542] Véanse, por ejemplo, *Variedades*, IV, 23, 8 de agosto de 1908, 738, e ídem, IV, 24, 15 de agosto de 1908, 773.

[543] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.44, 22 de abril de 1927.

[544] Basadre, *La vida y la historia*, 219, 222. Gracias a la intervención de diversas personas e instituciones, y después de varios meses, Basadre fue trasladado de regreso a la intendencia, donde pasó la noche. Al día siguiente fue llevado a ver al ministro de Gobierno, quien lo recibió cortésmente y lo liberó. Ídem, 223.

[545] «Informe del Dr. Dn. Carlos Alberto Izaguirre, Diputado 3º del Instituto, acerca de la situación de los presos político-sociales», 12 de junio de 1934. AGN, MJ, 3.20.3.1.11.2.

[546] De las Casas, *El sectario*, 33-41.

[547] Seoane, *Hombres y rejas*, 259.

[548] Partido Aprista Peruano, *El proceso a Haya de la Torre*, 106.

[549] Partido Aprista Peruano, *El proceso a Haya de la Torre*, 107.

[550] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.6, 5 de enero de 1937.

[551] Pisciotta, *Benevolent Repression*, 36.

[552] Véanse, por ejemplo, O'Brien, *The Promise of Punishment*; Zedner, *Women, Crime, and Custody*; Moczydlowski, *The Hidden Life*; Dikötter, *Crime, Punishment, and the Prison*.

[553] Altmann Smythe, *El problema sexual*, 48.

[554] El caso de los meritorios en el interior de la población de empleados de Lima es analizado en Parker, *The Idea of the Middle Class*, 48.

[555] Para evitar dicha situación, el director de la penitenciaría sugirió que se los pusiera en la planilla permanente. AGN, MJ, 3.20.3.3.1.7.1, ff. 340-341, 1 de octubre de 1901. Muchos años más tarde, en 1932, el director de la penitenciaría exigió que se eliminaran los meritorios porque «[su] presencia relaja la disciplina». AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.4, 2 de enero de 1932.

[556] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.3, f. 329, 17 de agosto de 1870.

[557] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.2, Memoria, Penitenciaría, 1876, 1 de enero de 1877, ff. 405-423.

[558] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.61, 17 de mayo de 1920.

[559] Para diversos ejemplos, véanse AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.42, f. 7, 22 de enero de 1927 y f. 64, 18 de febrero de 1927; AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.45, f. 677, 30 de octubre de 1930.

[560] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.2, 15 de junio de 1929.

[561] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.1, 1 de septiembre de 1925. Para mayores detalles sobre el tráfico de coca, véase el informe escrito en abril de 1936 por un administrador de taller. AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.6, 8 de abril de 1936.

[562] Véase AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.1, 5 de diciembre de 1925. La DGP envió un memorándum al director de la penitenciaría prohibiendo la introducción y el consumo de alcohol y chicha tanto por parte de presos como de empleados.

[563] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.19, 18 de abril de 1892.

[564] *EC*, 5 de noviembre de 1877.

[565] AHML, Cárceles, 31 de agosto de 1881.

[566] Para algunos ejemplos, véanse AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.2, 28 de diciembre de 1929; AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.1, 22 de octubre de 1925. Los presos de Guadalupe pagaban a algunos empleados hasta 600 soles para que los ayudaran a conseguir su libertad condicional. AHML, Cárceles, 13 de junio de 1885.

[567] Véase, por ejemplo, AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.1, 9 de octubre de 1926.

[568] Véase, por ejemplo, AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, 1 de octubre de 1872.

[569] Véase, por ejemplo, AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.4, 14 de junio de 1933.

[570] AGN, MJ, 3.20.3.3.11.2, 5 de octubre de 1892.

[571] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.1, 10 de diciembre de 1925.

[572] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.3, 13 de septiembre de 1929.

[573] Véase sobre todo AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.2, 2 de junio de 1928, y 15 de agosto de 1929.

[574] Hay numerosos informes sobre esto. En noviembre de 1883, el alcaide de Guadalupe fue sorprendido enviando a su casa 20 raciones de comida de las provisiones de la prisión en lugar de las 5 a que tenía derecho (AHML, Cárceles, 24 de noviembre de 1883). Los cocineros de Guadalupe vendían raciones de comida a presos políticos y a delincuentes comunes (AHML, Cárceles, 13 de junio de 1885). El tenedor de libros del panóptico formó una suerte de sociedad con un preso para comerciar coca, cigarrillos y hasta abarrotes que tomaban de las provisiones del penal (AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.2, 17 de octubre de 1874).

[575] En enero de 1928, por ejemplo, el director de la penitenciaría fue acusado de emplear a los presos, en complicidad con el supervisor del taller, para confeccionar muebles que él usaba en su propia casa o entregaba a sus amistades como regalo. AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.43, f. 9, 24 de enero de 1928.

[576] En 1930, el ex inspector general de la penitenciaría fue acusado de abusar de los presos al obligarlos a pagar por sus ropas y otras provisiones. Además, los alimentaba mal y estaba involucrado en el tráfico de coca dentro del penal. También cobraba una renta al administrador de la cantina de la prisión por permitirle vender coca. El inspector, asimismo, tenía gallineros dentro de la penitenciaría (AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.3, 4 de septiembre de 1930). El inspector no negó que vendía ropa a los presos, pero intentó presentarlo como un favor. Y sostuvo que «raro es el empleado o preso que no se haya acercado a mí a pedirme algún favor». AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.2, 3 de enero de 1929.

[577] Por ejemplo, el director de la penitenciaría en 1929 implementó un servicio de comida dentro de la cárcel para él y sus amigos de afuera del penal. AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.2, 17 de junio de 1929.

[578] Para una descripción de esto, véase «Cárcel de Guadalupe», *EC*, 9 de noviembre de 1919. Seminario Helguero hizo una descripción similar del «canchón», el patio central de la Cárcel de Varones. Véase Seminario Helguero, *Cárcel*, 10, 71.

[579] Calle *et al.*, «Informe», 382.

[580] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.16, ff. 238-246, 12 de febrero de 1887. Para quejas similares de infracciones no registradas y complicidad entre presos y empleados, véase AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.16, septiembre de 1880, ff. 651-660. Para casos adicionales de decadencia, corrupción y asociaciones entre empleados y presos, véanse las memorias de la penitenciaría de 1897 y 1905.

[581] AGN, MJ, 3.20.2.1.7.0, 24 de marzo de 1921.

[582] Aunque las acusaciones podrían hacernos creer que estos casos eran monitoreados y sancionados, ello solamente sucedía cuando estas situaciones amenazaban otros intereses. En esta ocasión, la acusación se hizo después de que el empleado hubiese insultado al teniente alcaide. AGN, MJ, 3.20.3.1.12.4.1, 6 de junio de 1922.

[583] AGN, Ministerio del Interior, Prefecturas, Leg. 28, 11 de febrero de 1892.

[584] *EC*, 20 de febrero de 1893.

[585] Véase, por ejemplo, Clemmer, *The Prison Community*.

[586] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.2, f. 638, 12 de diciembre de 1877.

[587] «Reglamento de la penitenciaría de Lima», en Memoria, Justicia, 1901, art. 27.

[588] Seoane, *Hombres y rejas*, 116.

[589] Enrique Galdas, preso, al Ministro de Justicia, 5 de junio de 1937. AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.6. El preso que escribió esta queja afirmó que el caporal había amenazado con enviar a El Frontón a todo aquel que osara denunciarlo.

[590] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.1, 5 de enero de 1926.

[591] AHML, Cárceles, 13 de junio de 1885.

[592] Seminario Helguero, *Cárcel*, 66-67.

[593] «Miguel de Orueta: el prestamista asesinado», *EC*, 11 de septiembre de 1910. La fortuna de Orueta fue estimada en más de un millón de soles.

[594] AGN, Prefecturas, Serie 3.9, Leg. 16.25, 22 de septiembre de 1911.

[595] Posteriormente fue trasladado a la penitenciaría, donde lo vio un reportero de *El Comercio* en 1919, quien lo describió como «un moreno alto, corpulento, sonriente y simpático». *EC*, 30 de noviembre de 1919.

[596] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.11, f. 630, 24 de junio de 1880. Después de esta denuncia el subdirector fue suspendido.

[597] Seoane, *Hombres y rejas*, 89-90.

[598] «Reglamento para la penitenciaría de Lima», en Fuentes y De la Lama, *Diccionario de jurisprudencia*, 539-540. El «baño de lluvia» era la exposición ininterrumpida del recluso a una fuerte ducha, lo que le causaba serios problemas respiratorios. Resulta revelador que en su informe sobre las prisiones de los EE. UU., Paz Soldán manifestara su horror hacia este tratamiento, al que consideraba una pena aún más horrenda que el fusilamiento de un criminal. Posteriormente, sin embargo, la adoptó para la penitenciaría de Lima como una forma de suavizar las penas de la prisión. Paz Soldán, *Examen de las penitenciarías*, 47. El reglamento de 1901 incluía premios y castigos similares, pero añadió la barra como una forma legal de castigo.

[599] Memoria, Penitenciaría, 1876. Se informó que algunos presos en realidad comenzaron a fumar solo para poder aprovechar la bonificación.

[600] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.1, f. 309, 1 de octubre de 1864.

[601] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.2, 12 de marzo de 1886.

[602] AGN, Penitenciaría, Leg. 242, 7 de marzo de 1867.

[603] «Relación de las faltas cometidas por los presos y los castigos impuestos durante el año que comprende el segundo semestre de 1906 y primero de 1907», en Memoria, Justicia, 1907. Creo que se impone hacer una advertencia sobre la exactitud de estas estadísticas: parece justo asumir, como lo haría cualquier estudioso de los regímenes carcelarios, que numerosas transgresiones, quizás incluso la mayoría de ellas, no eran ni registradas ni castigadas, usualmente debido a algún tipo de complicidad entre presos y guardias. El médico César Valdez refirió el caso de un preso que pasó dos años en confinamiento solitario, recibiendo sus alimentos a través de la barra de metal en un pedazo de papel. Valdez consideraba que las penas aplicadas en la penitenciaría eran «crueles e inhumanas». Valdez, «La patología», 36-37.

[604] Citado en Valdez, «La patología», 36.

[605] «Moralidad de los presos. Año 1918». AGN, MJ, 3.20.3.3.1.5.19. Véase también Esparza, «Contribución al estudio», 35.

[606] «Reglamento para la penitenciaría de Lima», 540. Posteriormente se instalaron talleres adicionales, incluyendo uno para la fabricación de botones y equipos para el ejército, que abrió en 1881, así como una panadería y una carrocería que estaban en pleno funcionamiento hacia 1883. Algo más tarde se añadió un taller de imprenta y encuadernación.

[607] El contrato con un tal Sr. Muratori para que administrara todos los talleres existentes y cualquiera que fuera creado posteriormente se firmó el 15 de febrero de 1865. Se le dio una ganancia del 4 por ciento de las ventas con la promesa de que posteriormente subiría al 6 por ciento. AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.2.

[608] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.2, 15 de enero de 1867.

[609] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, 17 de abril de 1868. Véase también Lama, *Refutación del informe*, 18.

[610] Fuentes, ed., *Códigos penal y de enjuiciamientos*, 33 (art. 75).

[611] Esto sucedería solo si se estimaba que el trabajo del prisionero valía más de 10 soles, el costo de mantenimiento calculado para cada preso.

[612] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, 30 de junio de 1870. Posteriormente insistió en que el trabajo penal debía ser «proporcionado a las fuerzas y capacidad del preso [y] que interese [a] su voluntad y hasta su amor propio» a fin de que sirviera al objetivo rehabilitador; de otro modo, si el trabajo era impuesto a la fuerza, sin consideración a su inteligencia e inclinaciones, solo lo desalentaría y exasperaría. Lama, *Refutación*, 22.

[613] Ídem, 19.

[614] Ídem, 11.

[615] El monto de dinero al que los presos tenían derecho debía ser entregado al director de la penitenciaría para la compra de «libros, útiles de escritorio, u otros objetos de uso lícito». Véase AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.3, 7 de agosto de 1873. Véase también De la Lama, *Constitución del Perú*, 419, 430-431.

[616] Por ejemplo, en enero de 1877 se solicitó que 46 prisioneros incapacitados fueran transferidos de la penitenciaría a Guadalupe a cambio de un número similar de presos calificados. Estos traslados obviamente no tomaban en cuenta las necesidades disciplinarias de la prisión ni el proceso de rehabilitación de los presos.

[617] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.2, 17 de enero de 1877. Más ejemplos en AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.3, 21 de noviembre de 1881.

[618] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.3, 31 de diciembre de 1880; AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.7, 22 de abril de 1884; AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.11, noviembre de 1886.

[619] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.11, 30 de noviembre de 1878.

[620] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.6, 6 de junio de 1881.

[621] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.6, 18 de diciembre de 1883. Ángel Cavassa, por ejemplo, firmó un contrato para administrar la panadería. Se ofreció a recompensar a cada prisionero «según lo merezca por su desempeño en el trabajo». Debía pagar al Estado 30 céntimos por preso, pero todo el pan manufacturado en la prisión iba al contratista. Ídem, 30 de mayo de 1884.

[622] Memoria, Penitenciaría, 1891.

[623] *EC*, 31 de julio de 1889.

[624] «El panóptico», *LGJ*, II, II, 436, 17 de octubre de 1892.

[625] *EDJ*, II, p. 961, 4 de diciembre de 1893. Véanse también *EC*, 5 de mayo de 1894, «Penitenciado»; y Chávez, «Evoluciones», 84-85, 101-102.

[626] Memoria, Penitenciaría, 1896.

[627] «Visitando el panóptico», *EC*, 30 de noviembre de 1919.

[628] «Memoria presentada por el Presidente de la Junta Inspectora del Panóptico, Dr. D. Augusto S. Albarracín, al Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia», en Memoria, Justicia 1890, 7.

[629] Memoria, Penitenciaría, 1890.

[630] Memoria, Penitenciaría, 1892.

[631] AGN, MJ, 3.3.1.7.1, 21 de noviembre de 1898. En respuesta a las críticas hechas al costo que el sistema de administración directa tenía para el Estado, el director afirmó en abril de 1900 que lo más importante era «el supremo interés de la severa disciplina de[l] panóptico», que se había relajado con el sistema de contratos. AGN, MJ, 3.20.3.3.1.7.1, abril de 1900.

[632] Memoria, Penitenciaría, 1900.

[633] Véase Calle *et al.*, «Informe», 158.

[634] Memoria, Penitenciaría, 1903, 203; Memoria, Justicia, 1903.

[635] AGN, MJ, 3.3.1.7.2, 25 de octubre de 1904; «Talleres del panóptico», en Memoria, Justicia, 1903.

[636] «Informe de P. Doly sobre el estado y las reformas del orden económico y administrativo de la penitenciaría», en Memoria, Justicia, 1909. Según el director, todavía en 1907, 350 de los 411 presos no trabajaban en los talleres. Memoria, Penitenciaría, 1907.

[637] Memoria, Penitenciaría, 1912.

[638] Véase Calle *et al.*, «Informe», 161.

[639] Memoria, Justicia, 1915.

[640] AGN, MJ, 3.20.2.9.12.0, 19 de noviembre de 1921. Las dos organizaciones fueron el Comité de Solidaridad Obrera y la Sociedad de Mosaístas del Perú. Véase *La Prensa*, 14 de noviembre de 1921. Existía un precedente desde el 21 de octubre de 1911, cuando el Gobierno ordenó que los cuadernos, libros y otros artículos de oficina del Ministerio de Justicia fueran manufacturados en la penitenciaría. Citado en Calle *et al.*, «Informe», 220.

[641] El trabajo de los presos rara vez era abordado en los debates sobre el problema laboral de Lima. Una de las pocas ocasiones en que sí ocurrió fue cuando Carlos B. Cisneros, autor de un estudio socioeconómico de Lima, afirmó en 1911 que la penitenciaría había sido indebidamente convertida en un «vasto taller industrial», lo que iba en detrimento de los artesanos «libres [y] honrados» a quienes hacía «competencia ruinosa». Cisneros sugirió que el trabajo de los presos se usara solo en obras públicas. Cisneros, *Provincia de Lima*, 227.

[642] Resolución del 28 de marzo de 1925, en AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.3; Calle, ed., *Código Penal*, art. 79.

[643] Para la burocracia estatal en expansión, véanse sobre todo Herbold, «Developments»; y Parker, *The Idea of the Middle Class*.

[644] Memoria, Penitenciaría, 1926. El director insistió en que la penitenciaría debería producir solo para el Estado y que este debía colocar sus pedidos exclusivamente en los talleres de dicha prisión.

[645] «Ayer la Junta del Patronato visitó la penitenciaría. Hay que llevar a cabo fundamentales reformas», *EC*, 19 de enero de 1926.

[646] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.6.1.

[647] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.6.1, 1 de octubre de 1927.

[648] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.1.2, 5 de febrero de 1922, f. 456.

[649] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.2, 5 de junio de 1929 y 7 de agosto de 1929.

[650] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.2, 15 de marzo de 1929.

[651] AGN, MJ, 3.20.3.1.7.1, 5 de agosto de 1930 y 15 de octubre de 1930.

[652] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.4.

[653] La expresión proviene de Hobsbawm, «Peasants and Politics», 13.

[654] Véase, por ejemplo, O'Brien, *The Promise of Punishment*, en especial el capítulo 3.

[655] Sabo *et al.*, «Gender and the Politics of Punishment». El término «masculinidades hegemónicas» fue tomado de Connell, *Masculinities.*

[656] Para estudios clásicos de los tatuajes, véanse Lombroso, «The Savage Origins of Tattooing»; y Lacassagne, *Les tatouages*.

[657] Alegre y Pacheco, *Los delincuentes tatuados*, 25.

[658] O'Brien, *The Promise of Punishment*, 81.

[659] Valdizán, «El tatuaje».

[660] Valdizán, «El tatuaje», 109.

[661] Un preso no incluido en este reporte tenía tatuada la imagen de uno de los Incas, por quienes confesaba sentir gran admiración «a causa de sus grandes hechos». Véase Altmann Smythe, *El problema sexual*, 43.

[662] Alegre y Pacheco, *Los delincuentes tatuados, passim*. Agradezco a Walter Huamaní por haberme ayudado a conseguir una copia de esta rara publicación.

[663] Ídem, 37.

[664] Alegre y Pacheco, *Los delincuentes tatuados*, 89.

[665] Aunque algunos criminólogos subrayaron su importancia para el estudio de las poblaciones criminales, no se sintieron atraídos por la investigación empírica. Véase, por ejemplo, Rada, *Apuntes sobre el estudio*, 145. Para los glosarios de la jerga criminal, véanse «Dos horas en la Cárcel de Guadalupe. Una visita al local», *EC*, 9 de noviembre de 1919; y Seminario Helguero, *Cárcel*, 75-84.

[666] «Dos horas en la Cárcel de Guadalupe. Una visita al local», *EC*, 9 de noviembre de 1919.

[667] Rada, *Apuntes sobre el estudio*, 145.

[668] Seminario Helguero, *Cárcel*, 75-81

[669] Para una reconstrucción de la historia del consumo de coca en el Perú andino, véase Gagliano, *Coca Prohibition*.

[670] Esparza, «Contribución al estudio», 38-43.

[671] Valdez, «La patología», 16.

[672] «Visitando el panóptico», *EC*, 30 de noviembre de 1919.

[673] Valdez, «La patología», 16-18.

[674] Ambos reglamentos de la penitenciaría (1863 y 1901) incluían el permiso para consumir coca en solitario como recompensa al buen comportamiento.

[675] Valdez, «La patología», 16.

[676] Altmann Smythe, *El problema sexual*, 51.

[677] Valdez, «La patología», 41.

[678] Altmann Smythe, *El problema sexual*, 42. Queda implícito que el menor impacto de la homosexualidad en la penitenciaría se relacionaba con el hecho de que los presos ocupaban celdas individuales, lo que reducía considerablemente las posibilidades de un contacto íntimo.

[679] Seminario Helguero, *Los presos*, 47.

[680] Piccato, «Interpretations of Sexuality», 262.

[681] El término *activo* se empleaba para referirse al miembro «masculino» de la pareja, quien era concebido como el que efectuaba la «penetración», en tanto que el *pasivo* se refería a la contraparte «femenina», esto es, quien era penetrado sexualmente. Huelga decir que esta categorización fue impuesta por los observadores a una realidad que era mucho más compleja. Sin embargo, esta supuesta división de papeles en las relaciones homosexuales parece haber configurado, al menos en parte, las relaciones de pareja, como veremos luego.

[682] Valdez, «La patología», 42-48.

[683] Seminario Helguero, *Cárcel*, 72-73.

[684] Altmann Smythe, *El problema sexual*, 38.

[685] Ídem, 42.

[686] Seminario Helguero, *Cárcel*, 70.

[687] Seminario Helguero, *Cárcel*, 73.

[688] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.4, 26 de abril de 1932.

[689] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.4, 3 de octubre de 1931.

[690] AGN, MJ, 3.20.2.1.7.0, 18 de abril de 1925.

[691] AGN, Archivo Intermedio, Expedientes criminales, Leg. 5, «Criminal de oficio contra Juan Marín por lesiones», 17 de febrero de 1913.

[692] AGN, Archivo Intermedio, Expedientes criminales, «Contra Manuel Chumpitaz por lesiones», 18 de diciembre de 1911.

[693] Seminario Helguero, *Cárcel*, 72.

[694] León, *Nuestras cárceles*, 11.

[695] O'Brien, *The Promise of Punishment*, 107.

[696] Altmann Smythe, *El problema sexual*, 48.

[697] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.45, 30 de mayo de 1930.

[698] La lectura del expediente, sin embargo, genera dudas sobre la veracidad del suicidio. AGN, MJ, 3.20.3.3.1.1.2, 1 de agosto de 1907.

[699] *EC*, 4 de agosto de 1894.

[700] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.4.1, 21 de noviembre de 1924.

[701] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.61, 18 de septiembre de 1920.

[702] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.2, 9 de febrero de 1929.

[703] AGN, RPJ, Causas Criminales, Leg. 659, «Seguido de oficio contra Rafael Sosa por homicidio y otros delitos», 16 de noviembre de 1878.

[704] Los presos tenían fácil acceso a cuchillos y todo tipo de instrumentos que usaban como armas para pelear o imponer su autoridad. Usualmente las robaban o las fabricaban en los talleres de la prisión. Véanse, por ejemplo, AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.2, 8 de febrero de 1868; MJ, 3.20.3.3.1.4.73, 17 de junio de 1930.

[705] Scott, *Domination and the Arts of Resistance*, 26.

[706] «Dos horas en la Cárcel de Guadalupe. Una visita al local», *EC*, 9 de noviembre de 1919.

[707] Seminario Helguero, *Cárcel*, 19.

[708] En México, por ejemplo, el régimen penitenciario incluía la raza de los presos entre los muchos criterios de clasificación. Véase Piccato, «Mexico City Criminals».

[709] Según Seminario Helguero, los presos indígenas de la Cárcel de Varones eran «callados, llevan vida retraída y por lo tanto no tienen relación con los otros presos». Seminario Helguero, *Cárcel*, 21.

[710] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.6, 5 de junio de 1937.

[711] Esparza, «Contribución», 37-38.

[712] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.2, 18 de abril de 1929.

[713] Miguel Montenegro, «Informe relativo al estado sanitario de la penitenciaría», en AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.1, f. 548, 1 de diciembre de 1866; e «Informe sobre el estado sanitario de la penitenciaría», AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.2, 31 de marzo de 1867.

[714] Eyzaguirre, «La tuberculosis pulmonar». Véase también Portella, «La higiene».

[715] Valdez, «La patología»; Esparza, «Contribución al estudio».

[716] Según el director de la penitenciaría en 1869, la tuberculosis no era causada por el clima dañino sino por la falta de aire fresco, ejercicio físico e higiene y «sobre todo por el abatimiento moral» de los presos. AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, f. 327.

[717] «Movimiento habido en el hospital de la penitenciaría de junio de 1905 a mayo de 1906 inclusive», en Memoria, Justicia, 1906.

[718] Seminario Helguero, *Cárcel, 9.*

[719] Memoria, Penitenciaría, 1911.

[720] Valdez, «La patología», 62-72. La monografía de Valdez es un retrato detallado y a ratos macabro de las condiciones de salud dentro de la penitenciaría de Lima.

[721] «Memoria que presenta el médico de la penitenciaría al Sr. Director del establecimiento», AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, 17 de julio de 1868, f. 271.

[722] Seminario Helguero, *Cárcel*, 11.

[723] Valdez, «La patología», 53. Véase también Esparza, «Contribución», 26.

[724] Véase MJ, 3.20.3.3.1.4.1, 12 de mayo de 1870, para detalles de la dieta de los presos y las interesadas afirmaciones de los administradores sobre su naturaleza nutritiva.

[725] Véase, por ejemplo, AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.6, f. 223, 23 de mayo de 1881.

[726] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.3, f. 237, 8 de marzo de 1872.

[727] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, f. 361, 31 de mayo de 1870.

[728] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.3, 20 de enero de 1930.

[729] «Visitando el panóptico», *EC*, 30 de noviembre de 1919.

[730] *EC*, 7 y 22 de agosto de 1889.

[731] AHML, Cárceles, 30 de octubre de 1883.

[732] AHML, Cárceles, 11 de noviembre de 1883.

[733] AHML, Cárceles, 12 de agosto de 1885.

[734] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.5.1, 1 de octubre de 1931.

[735] La noción de «menor elegibilidad» fue desarrollada por los sociólogos alemanes Georg Rusche y Otto Kirchheimer en su libro *Punishment and Social Structure.*

[736] Lucia Zedner se refirió a algunas prisiones inglesas como «refugios». Zedner, *Women, Crime, and Custody*, 170-171.

[737] Velasco, «Sistemas penitenciarios», 36. Las condiciones de vida de los culíes chinos en el Perú decimonónico se examinan en Rodríguez Pastor, *Hijos del celeste imperio.*

[738] «Atractivos de las penas», *EDJ*, 22 de junio de 1893, IV, 827.

[739] «Dos horas en la Cárcel de Guadalupe. Una visita al local», *EC*, 9 de noviembre de 1919.

[740] Ídem.

[741] Seminario Helguero, *Los presos*, 18. Los puntos suspensivos aparecen en el original. Chato era un tipo de bebida alcohólica.

[742] Véase, por ejemplo, AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.61, 13 de julio de 1920.

[743] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.42, f. 91, 15 de marzo de 1927.

[744] Memoria, Penitenciaría, 1921.

[745] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.42, 18 de julio de 1927; AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.2, 25 de febrero de 1929.

[746] Existe abundante información sobre esta campaña en Ramos, *Una vida sin tregua*.

[747] Altmann Smythe, *El problema sexual*, 49.

[748] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.1, 3 de enero de 1926.

[749] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.1, 15 de septiembre de 1862; 3.20.3.3.1.4.1, 28 de septiembre de 1862.

[750] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.1, 17 de febrero de 1863.

[751] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, 2 de julio de 1867, 22 de noviembre de 1868 y 8 de agosto de 1870.

[752] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.6, 18 de febrero de 1880.

[753] Véase AGN, RPJ, Causas Criminales, Leg. 352, 1877, «De oficio contra Manuel Peña Chacaliaza por fuga y José Estevan Guzman por ocultación», 13 de agosto de 1877.

[754] Paulino Fuentes Castro, «Manuel Peña y Chacaliaza», *EDJ*, II, 500, 12 de febrero de 1892.

[755] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.2, 21 de septiembre de 1876.

[756] *Variedades*, VI, 97, 8 de enero de 1910, 42.

[757] AGN, Ministerio del Interior, Prefecturas, Leg. 132, 21 de febrero de 1910. Véanse también «La evasión de los presos políticos», *EC*, 27 de febrero de 1910; «La evasión de los presos políticos», *Variedades*, VI, 104, 26 de febrero de 1910, 254-257. Para *Variedades*, «hoy nadie juzga [...] que los presos políticos se han evadido de la justicia; no; de lo que se han evadido es de la represalia». Ídem, 253.

[758] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.1.2, 28 de marzo de 1912 y 26 de noviembre de 1915.

[759] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.5.2.

[760] Carta firmada por «Los presos amigos del orden», *EC*, 20 de febrero de 1893.

[761] AGN, Prefecturas, 3.9, Leg. 3.1, 27 de agosto de 1884.

[762] AHML, Cárceles, 14 de octubre de 1884.

[763] AGN, Prefectura de Lima, Serie 3.9, Leg. 16.5, 28 de enero de 1890. Véase también *EC*, 28 de enero de 1890.

[764] *EC*, 27 de febrero de 1892.

[765] Se encuentra información sobre varios casos en AGN, Ministerio del Interior, Prefecturas, Paquete 34, 16 de febrero de 1893; AGN, MJ, 3.20.3.1.1.2.41, 4 de octubre de 1924, 21 de febrero de 1927 y 24 de abril de 1927.

[766] AGN, MJ, 3.20.2.1.7.0, 23 de febrero de 1925.

[767] Castañeda fue recapturado algunos meses más tarde en Lima después de haber robado unas gallinas. AGN, Prefecturas, Serie 3.9, Leg. 16.45, 6 de agosto de 1927.

[768] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.2.3, 27 de mayo de 1930.

[769] Garrido Malaver, *El Frontón*, 93.

[770] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, 31 de octubre y 2 de noviembre de 1864.

[771] AGN, Penitenciaría, Leg. 242, 7 de marzo de 1867.

[772] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, 7 de diciembre de 1867.

[773] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, 24 de diciembre de 1867.

[774] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, Memoria, Penitenciaría, 1868.

[775] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.2, 8 de febrero de 1868.

[776] AGN, Penitenciaría, Leg. 242, 6 de septiembre de 1866. En julio de 1867, una inspección exhaustiva de las celdas de la penitenciaría, efectuada después que dos prisioneros escaparan, dejó en claro que los presos estaban en posesión de armas (AGN, MJ, 3.20.3.3.1.1.2, 8 de julio de 1867).

[777] AHML, Cárceles, 12 de julio de 1887.

[778] «Los presos de la cárcel de Guadalupe se amotinan. Atacaron al Alcaide y los empleados. Arzola jefe de los rebeldes. Varios heridos». *EC*, 29 de julio de 1915 y 2 de agosto de 1915.

[779] AGN, MJ, 3.20.2.1.7.0, 24 de marzo de 1921.

[780] Los presos cuyo suicidio está registrado son Amey en noviembre de 1869 (AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, 4 de noviembre de 1869); José María Así en abril de 1872 (AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, 22 de abril de 1872); y José Aley en octubre de 1924 (AGN, MJ, 3.20.3.1.12.4.1, 30 de octubre de 1924). José había matado a un guardia y fue enviado al calabozo, donde supuestamente se suicidó.

[781] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, 1 de diciembre de 1862.

[782] Ruiz Zevallos, *Psiquiatras y locos*, 95.

[783] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.1.2, 9 de julio de 1874.

[784] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.1.2, 18 de julio de 1905.

[785] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.44, 24 de mayo de 1929.

[786] AGN, Ministerio del Interior, Prefecturas, Leg. 103, 24 de agosto de 1905.

[787] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.2, 20 de febrero de 1875.

[788] AGN, Prefecturas, 3.9, Leg. 16.12, 19 de febrero de 1900. Dos días más tarde fue arrestado Julio Sánchez, otro sospechoso, sobre el cual no se dan detalles. Ídem, 21 de febrero de 1900.

[789] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, ff. 422-423, 1 de febrero de 1871.

[790] Ruiz Zevallos, *Psiquiatras y locos*, 48.

[791] Véase, por ejemplo, AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, f. 321, 13 de octubre de 1869; AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.3, 13 de junio de 1870; «Informe presentado por el Inspector Principal Sr. Enrique Andía», en Memoria, Penitenciaría, 1927.

[792] AGN, Archivo Intermedio, Expedientes Criminales, «De oficio contra Leonardo Gómez por lesiones», 11 de marzo de 1904.

[793] La propuesta no tuvo éxito. *EDJ*, II, 290, 4 de mayo de 1891.

[794] Esto no equivale a negar que en las prisiones de Lima haya habido casos de personas con síntomas de desequilibrio mental que realmente necesitaban ser tratadas en instituciones especiales.

[795] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.2, 28 de abril de 1867.

[796] AHML, Cárceles, 8 de febrero de 1872.

[797] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, 21 de abril de 1868. Este no fue un caso aislado. En casi todos los demás motines los informes mencionan grupos de presos que en lugar de unirse a los rebeldes se pusieron del lado de las autoridades y ayudaron a sofocar el levantamiento.

[798] «Dos horas en la Cárcel de Guadalupe. Una visita al local», *EC*, 9 de noviembre de 1919.

[799] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.4.1, 11 de noviembre de 1868.

[800] José Félix Castro, «Las cárceles y el panóptico», *EC*, 21 de marzo de 1893.

[801] Utilizo aquí la distinción entre «discurso público» y «discurso oculto» propuesta por James Scott en su libro *Domination and the Arts of Resistance*.

[802] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.3.

[803] AGN, MJ, 3.20.3.1.1.2.51, 28 de marzo de 1931.

[804] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.1, 27 de marzo de 1925.

[805] AHML, Cárceles, 14 de octubre de 1884.

[806] Esta sección se basa en mi artículo «Disputed Views of Incarceration in Lima».

[807] No pretendo sugerir que las cartas colectivas hayan sido del todo inexistentes antes de la década de 1920. De hecho, encontré algunas escritas varias décadas antes. Un ejemplo notable es la que fue enviada al Congreso de la República en septiembre de 1870 por docenas de presos de la penitenciaría solicitando la reducción de sus condenas (Congreso de la República, Archivo Histórico, Leg. 6, 19 de septiembre de 1870). En 1892, los presos de la penitenciaría y la cárcel de Guadalupe dirigieron cartas colectivas al Congreso solicitando también una reducción en sus condenas con ocasión del cuarto centenario del «descubrimiento» de América (Congreso de la República, Archivo Histórico, Leg. 9, Memoriales, Doc. 327, 30 de septiembre de 1892; y Doc. 328, 28 de septiembre de 1892). Sugiero, sin embargo, que a finales de la década de 1920 las formas colectivas de representación se hicieron más comunes y muestran nociones políticas y doctrinarias recién adquiridas que estuvieron ausentes en períodos anteriores.

[808] Para mayores detalles sobre estas intervenciones, véase Aguirre, «Disputed Views of Incarceration».

[809] Los presos comunes, por ejemplo, transportaban de contrabando propaganda aprista entre la penitenciaría y la CCV a través el sistema de desagüe. En noviembre de 1932, el director de la CCV informó que los presos apristas estaban recibiendo comunicaciones de su jefe Haya de la Torre, quien se encontraba detenido en la vecina penitenciaría (AGN, MJ, 3.20.3.1.12.5.1). El volumen *Cartas de Haya de la Torre* (Cox, ed., 1946) incluye una muestra de las misivas escritas por el jefe aprista que fueron introducidas de contrabando en la penitenciaría y en otras prisiones.

[810] Comunicación personal escrita. Véase también Seoane, *Hombres y rejas*, 118.

[811] Seoane, *Hombres y rejas*, 22.

[812] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.5.1.

[813] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.5, 30 de junio de 1934. El director solicitó el traslado de dos o tres dirigentes apristas a El Frontón para ayudar a resolver el problema.

[814] AGN, MJ, 3.20.3.1.11.1, 12 de noviembre de 1930.

[815] De las Casas, *El sectario*, 95-97.

[816] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.5, 28 de octubre de 1935 y 5 de noviembre de 1935.

[817] Seoane llamó a la penitenciaría «este infierno en que siempre hay que fingir». Seoane, *Hombres y rejas*, 116.

[818] Mariátegui, *Correspondencia*, I, 289-90, 293-94.

[819] Mariátegui, *Correspondencia*, II, 681.

[820] Partido Aprista Peruano, *El proceso Haya de la Torre*, 67.

[821] AGN, Ministerio del Interior, Prefecturas, Leg. 16.45, 25 de agosto de 1927.

[822] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.2.3, 8 de abril de 1930.

[823] Ellos fundaban su pedido en un decreto que estipulaba que los presos políticos debían ser colocados en una sección especial de la prisión. AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.5, 20 de febrero de 1934.

[824] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.5, 30 de septiembre de 1935. No es trivial registrar el dato de que el párrafo de donde he tomado las citas aparece subrayado en rojo en el documento original y con la inscripción «OJO» al margen.

[825] AGN, MJ, 3.20.3.1.7.2, 23 de diciembre de 1933. Con todo, los solicitantes no pudieron dejar de recurrir a la retórica del clientelaje: alabaron a Benavides por sus políticas de «concordia y pacificación».

[826] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.6, 20 de mayo de 1936.

[827] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.1, 30 de diciembre de 1924.

[828] AGN, MJ, 3.20.3.1.11.1, 26 de abril de 1926.

[829] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.51, 26 de julio de 1930. Un tono similar se encuentra en una carta enviada por los presos de Guadalupe a Ángela Ramos en la cual le agradecen por todas las actividades que organizaba a favor de los reclusos. Ramos, *Una vida sin tregua*, 139-140.

[830] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.3, 11 de abril de 1930.

[831] AGN, MJ, 3.20.3.3.1.3.45, f. 10, s. f.

[832] Mi examen de las cartas de los presos revela que en muchos casos ellas parecen haber sido redactadas no por los propios reclusos sino por otras personas. Resulta difícil determinar quiénes fueron los autores: podrían haber sido parientes externos, compañeros presidiarios educados, abogados, tinterillos e incluso empleados penales pagados por los reclusos.

[833] Chevalier, «Official Indigenismo».

[834] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.1, 25 de febrero de 1925.

[835] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.1, 30 de marzo de 1927.

[836] Scott, *Domination and the Arts of Resistance*, 4.

[837] Sobre este punto, véanse Stein, ed., *Lima obrera*; Burga y Flores Galindo, *Apogeo y crisis*; y Parker, *The Idea of the Middle Class*.

[838] *La Crónic*a, 19 de febrero de 1928, reproducido en Ramos, *Una vida sin tregua*, 174-175.

[839] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.2, 12 de junio de 1929.

[840] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.3, 2 de mayo de 1930.

[841] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.5.1, 28 de agosto de 1930.

[842] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.3, 3 de noviembre de 1930.

[843] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.5.1, 20 de septiembre de 1930. Otra carta de contenido bastante similar fue enviada por los presos de la CCV al presidente Sánchez Cerro pidiéndole que visitara la prisión para así poderle informar personalmente de su «patética condición». *EC*, 9 de diciembre de 1931.

[844] Ramos, *Una vida sin tregua*, 133.

[845] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.5.1, 10 de abril de 1929.

[846] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.5.1, 22 de mayo de 1930.

[847] Véase, por ejemplo, «Carta de un preso de Guadalupe», *EC*, 12 de agosto de 1915.

[848] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.2.3, 12 de septiembre de 1929.

[849] AGN, MJ, 3.10.3.1.1.2.51, 4 de noviembre de 1930.

[850] AGN, MJ, 3.20.3.1.2.1, 9 de julio de 1929.

[851] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.5.1, 25 de mayo de 1931.

[852] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.5.1, enero de 1932.

[853] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.1, 3 de enero de 1926; énfasis mío.

[854] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.2.2, 15 de agosto de 1928; énfasis mío.

[855] AGN, MJ, 3.20.3.1.1.2.51, 9 de diciembre de 1931.

[856] Villavicencio, quien ha sido mencionado repetidas veces a lo largo de este libro, fue uno de los más conspicuos penólogos de este período. Escribió extensamente sobre diversos temas referidos al régimen penal y ocupó varios cargos en la administración carcelaria. Entre sus numerosas publicaciones, véase *La reforma penitenciaria en el Perú*. También hallé evidencias de que Villavicencio era especialmente duro con los presos, asignándoles por lo general bajas calificaciones en las evaluaciones del Tribunal de Conducta, lo cual podría explicar la animosidad que ellos sentían por él. Sobre este punto, véase AGN, MJ, 3.20.3.3.1.5.22.

[857] AGN, MJ, 3.20.3.1.12.1.4, 10 de diciembre de 1931.

[858] Pablo Macera publicó estos dibujos por primera vez en *Cielo Abierto* (Lima), 5, 15, 1981, 28-52.

[859] McConville, *English Local Prisons*; Oshinsky, *«Worse than Slavery»*; Carrefiello, *The Tombs of the Living*.

[860] Herbold, «Developments», 70-71.

[861] Villavicencio, *Algunos aspectos*, 137.

[862] Cueto, *Excelencia científica*, 58. Véase también Memoria, Penitenciaría, 1908.